



INFORME ENCUESTA CEP 2016

¿MALESTAR EN CHILE?

Ricardo González T., coordinador



CEP

Título libro: “¿Malestar en Chile?”

© Centro de Estudios Públicos

Inscripción N° 279.555

ISBN 978-956-7015-50-4

Edición de 300 ejemplares, julio de 2017

Editado por el Centro de Estudios Públicos, CEP, Monseñor Sótero Sanz 162,
Providencia, Santiago de Chile.

Derechos Reservados. Ni la totalidad ni parte alguna de este libro puede ser
reproducida sin permiso escrito del editor y el autor.

www.cepchile.cl

Diseño y diagramación: Alder Comunicaciones

Imagen de portada: Agencia Uno

Fotografías interiores: Agencia Uno, María Isabel García y Alejandro Hoppe

Impreso en: Andros Impresores, 2017

INFORME ENCUESTA CEP 2016

¿MALESTAR EN CHILE?

Ricardo González T., coordinador

CEP

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos

En 2016 se cumplieron tres décadas desde que el Centro de Estudios Públicos (CEP) comenzara a realizar estudios de opinión pública. El país empezaba a imaginar, en ese entonces, que podía dejar atrás un régimen dictatorial, donde la libertad de expresión había estado seriamente conculcada. Pero sin elecciones por un período que, en ese momento, superaba los trece años y sin el funcionamiento de un Congreso, las conexiones entre los políticos (más generalmente las élites) y la población eran muy escasas. En ese contexto, las encuestas podían ser una fuente de información muy valiosa que ayudase a la toma de decisiones, sobre todo por su capacidad de recoger las actitudes y percepciones de la población respecto del momento que se estaba viviendo y sus expectativas respecto del futuro.

La potencialidad de este instrumento fue muy bien comprendida por el entonces Director del CEP, Arturo Fontaine, quien logró apoyos financieros de fundaciones estadounidenses como el National Endowment for Democracy y el International Republican Institute para este propósito. Para llevar a cabo este proyecto, por supuesto, contó con todo el apoyo del Consejo Directivo del CEP. Especialmente relevante fue el involucramiento de los consejeros Enrique Barros y David Gallagher.

Las encuestas del CEP aportaron información imprescindible para comprender la transición desde el régimen militar a la democracia. Además, contribuyeron a mejorar la toma de decisiones de los distintos actores políticos, económicos y sociales de la época que aseguraron una transición que ha sido ampliamente celebrada en la literatura comparada. Extinguidos los aportes de las fundaciones internacionales, el Consejo del CEP se preocupó de allegar los recursos necesarios para proseguir con los estudios de opinión pública.

En estas tres décadas, la institución ha mantenido elevados estándares metodológicos y de difusión de la encuesta. Se ha hecho asesorar, para estos efectos, por expertos nacionales e internacionales. Se selecciona una muestra aleatoria de entrevistados y se les aplica, cara a cara, un cuestionario preparado por el Comité de Opinión Pública del CEP. La base de datos, el cuestionario completo y la ficha metodológica de la encuesta se publican en la página web de la institución y todos quienes quieran acceder a ella pueden hacerlo sin mayores trámites, generalmente, diez días después de difundidos sus resultados por medio de una conferencia de prensa abierta a todos los interesados.

En los últimos treinta años, el país ha cambiado significativamente. No solo se ha multiplicado por tres el ingreso per cápita de los chilenos sino que también la pobreza ha caído desde cifras superiores al 40 por ciento a algo más del seis por ciento (con igual metodología). La mortalidad infantil ha descendido en el mismo período de 23 a 7 por mil niños nacidos vivos y la población cubierta por el tratamiento de aguas servidas ha subido de poco más de un 5 a un 97 por

ciento. La desigualdad de los ingresos, en tanto, que hasta el año 2000 no parecía ceder, ha comenzado a disminuir y desde el cambio de milenio el coeficiente Gini se ha reducido en casi 0,07 puntos (de 0,58 a 0,51 aproximadamente). Por cierto, en esta dimensión aún estamos lejos de los países más avanzados, pero hay que reconocer que la política social de nuestro país no se caracteriza por realizar grandes transferencias monetarias a los hogares de menores ingresos como sí hacen esas naciones. Este hecho es fundamental a la hora de explicar la menor desigualdad que esos países registran respecto de Chile.

Ahora bien, estas transformaciones no solo han traído más bienestar sino que han significado cambios culturales y valóricos que tienen repercusiones profundas en la vida política, económica y social del país. Nuestras encuestas reflejan esos cambios, pero nos hemos detenido pocas veces a estudiarlos en profundidad. Después de tres décadas de realizar distintos estudios de opinión pública nos pareció oportuno examinarlos más detenidamente. Este Informe pretende ser el primero de una serie anual que permita analizar tales cambios desde distintas perspectivas, de forma gradual y sistemática.

El primer Informe aspira a hacerse cargo de la incomodidad en la que se desenvuelve nuestra élite. Hay poca comprensión de los fenómenos que estamos viviendo y se habla mucho del distanciamiento entre ésta y la ciudadanía. Particularmente curiosa parece ser, a ojos de los analistas, la impopularidad de los últimos dos gobiernos, mucho más prolongadas que las presenciadas desde la recuperación de la democracia. La sorpresa parece provenir del hecho de que son gobiernos que, a pesar de impulsar agendas muy distintas, obtuvieron bajos niveles de aprobación ciudadana. Esto se une a una acelerada pérdida de confianza en diversas instituciones públicas y privadas que crea una sensación de desconcierto y preocupación por el futuro.

La expresión más habitual que se utiliza para describir esta realidad es que los chilenos estarían aquejados por un malestar que sería profundo, pero también difuso. Para salir de esta situación se requeriría una agenda profunda de cambios estructurales que, en una versión más extrema, supondría una transformación del modelo de economía social de mercado que el país ha ido construyendo por más de treinta años. Es inevitable, a propósito de esta percepción, recordar el Discurso sobre la “Crisis Moral de la República” de Enrique Mac-Iver, pronunciado en el Ateneo de Santiago en agosto de 1900. En particular aquella frase con la que se iniciaba el sexto párrafo: “Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país y de la generalidad de los que lo habitan.” Claro que Mac-Iver escribía en un período donde el PIB per cápita había caído un 6,5 por ciento respecto de dos años atrás, la inflación se estaba acelerando y la tasa de empleo registraba un leve retroceso (de acuerdo a las series históricas publicadas por José Díaz, Rolf Lüders y Gert Wagner, 2016, *La República en Cifras: 1810-2010*, Santiago: Ediciones UC). El momento actual, más allá de la desaceleración económica del último tiempo, parece mucho más alentador que cuando se escribió ese conocido ensayo.

Por eso, no es casualidad que de la población emerja una mirada más bien positiva sobre sus propias vidas, como se desprende de las encuestas CEP. Los altos niveles de satisfacción con la vida personal que manifiestan los chilenos considerando todas las cosas son indicativos de esta percepción. Pero, además, su mirada del futuro es muy optimista. Así, creen que la situación de sus hijos será mejor que la de ellas. Hay, como se aprecia en este documento, otros indicadores de esa mirada auspiciosa sobre la vida propia actual y futura de los chilenos. Esta percepción no es compatible con una visión pesimista sobre el estado general de las cosas en Chile y con una demanda por un cambio paradigmático. Por supuesto, su percepción respecto de la satisfacción del resto de los chilenos es más cautelosa, pero tampoco es especialmente negativa. No se puede descartar, en todo caso, que esa percepción esté influida por los medios de comunicación que, por su naturaleza, suelen divulgar lo conflictivo y lo controversial de la vida de otros residentes del país.

El progreso del país, en los últimos treinta años, ha ido acompañado de nuevas fragilidades. Indudablemente que éstos son eventos probables más que ciertos y, por tanto, no tienen el mismo peso (si alguno) en la satisfacción alcanzada que los indicadores objetivos antes mencionados. Con todo, existe una demanda por reducir esas incertidumbres, la cual comienza a aparecer cada vez con más fuerza en los estudios de opinión pública. Hay dos dimensiones en este eje. La pública que dice relación con niveles más precisos de protección social. La forma tradicional de ampliarlos es eventualmente a través de alzas de impuestos, pero este camino no tiene particular acogida en la población. Muy concretamente, no hay voluntad de aportar con más impuestos al financiamiento de esas políticas de protección, hecho que queda en evidencia en los diversos análisis que se realizan en este documento. Es indudable que es difícil desarrollar esa red de protección sin más recursos, los que deberían provenir en una proporción significativa de las personas. Hay que recordar que en Chile la recaudación generada por el impuesto a las personas es de apenas un 1,4 por ciento del PIB. El promedio en los países de la OCDE es un 8 por ciento (la mediana está en un 6,9 por ciento). La principal razón de esta diferencia es que en nuestro país muchas personas están exentas de pagar el impuesto a la renta ya que el ingreso a partir del cual se comienza a pagar impuestos corresponde a uno que está en la parte superior de la distribución. Si ello se mantiene así, y no parece haber voluntad política de cambiar esta realidad, la tensión enunciada no parece fácil de resolver. Esto es un asunto que requiere de una reflexión profunda.

No debe descartarse que ese rechazo al pago de más impuestos esté influido por la desconfianza que se ha instalado hacia las instituciones públicas y privadas. Este es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años, pero es de larga data. Así, es muy posible que se crea que los recursos adicionales, tras una eventual alza de impuestos, serán mal utilizados. Implícita en esta visión está la idea de que la desconfianza no se puede desvincular completamente de la evaluación del funcionamiento de las instituciones. Al respecto la evidencia ofrecida en este informe es reveladora. Se han hecho reformas, en varios frentes, para mejorar su operación. Pero aún falta mucho. La incapacidad de esas reformas para, por ejemplo, evitar la captura de los servicios del Estado por parte de los partidos políticos, seguramente ayuda a explicar la

desconfianza de la ciudadanía hacia muchas instituciones públicas. De este modo, pareciera ser que la población quiere un mejor desempeño de ellas y un mayor control en el uso de los recursos públicos.

La segunda dimensión envuelve a las instituciones privadas. Éstas también están fuertemente cuestionadas. En esta percepción seguramente han influido los financiamientos irregulares de la política que han sido detectados en los últimos años y que han instalado la percepción de una influencia empresarial indebida en asuntos legislativos que, como contrapartida, tiene un perjuicio para la ciudadanía. También puede haber influido la divulgación pública de los casos de unas pocas empresas cuyos contratos contenían cláusulas consideradas abusivas por la opinión pública. La ciudadanía indudablemente espera que los contratos explícitos e implícitos que rigen las transacciones entre el público y las empresas privadas sean justos. Además, espera que estas instituciones promuevan sus intereses a través de la persuasión propia de un debate democrático y transparente y no a través de caminos prohibidos. Mientras esta percepción no esté asentada, la desconfianza seguirá instalada. Hay aquí una tarea ineludible para el mundo privado.

Pero más allá de estas consideraciones de política no cabe duda que los avances en las condiciones de vida que ha experimentado la población han traído aparejados también cambios culturales y en la forma en que los chilenos viven su cotidianeidad. De alguna manera sienten que tienen más control de sus vidas y mayor libertad para definir sus modos de vida. Junto con ello ha aumentado su escolaridad, que unido a las demás transformaciones descritas, genera un ciudadano con un espíritu más crítico y dueño de una diversidad mayor de intereses. Las clasificaciones estáticas de los distintos individuos se diluyen y sus pertenencias y grupos de referencia se vuelven más dinámicos. Ocurren cambios valóricos y el pluralismo se consolida en la sociedad. Indudablemente que ello hace más complejo hacer política, toda vez que los grados crecientes de independencia hace menos inmediata las lealtades tradicionales. Todo esto no solo afecta a la política sino que también a las iglesias, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil. Estas transformaciones junto a las antes mencionadas y otras que se están produciendo de una manera acelerada deben ser capturadas cuidadosamente y, además, estudiadas para comprender mejor la sociedad en la que estamos viviendo. Este es el principal objetivo de la serie anual que iniciamos con este Informe. Sentimos que tenemos la obligación de aprovechar la experiencia de tres décadas realizando encuestas de opinión pública, para apoyar los análisis que, desde distintas disciplinas, se realizan para comprender mejor el país en el que vivimos. En el CEP estamos conscientes de que es una tarea de largo aliento que, por cierto, no termina en este reporte, pero es un desafío que no podemos dejar de abordar. Personalmente, estoy convencido que con la colaboración de los investigadores del CEP y con los aportes y críticas de otros científicos sociales esta serie irá mejorando en el tiempo.

Harald Beyer B.
Director CEP

EQUIPO A CARGO DEL INFORME



COORDINADOR

Ricardo González T.

Ingeniero Comercial con mención en Economía y Magíster en Economía, mención Macroeconomía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Coordinador del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos.

COLABORADORES

Isabel Aninat S.

Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Derecho, Universidad de Columbia. Tiene estudios en derechos humanos en el European University Institute. Actualmente es Investigadora del Centro de Estudios Públicos.

Vittorio Corbo L.

Ingeniero Comercial con mención en Economía, Universidad de Chile. Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es Investigador Asociado Senior del Centro de Estudios Públicos, miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Monetarias y Cambiarias del FMI, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional de Chile, y del Consejo Asesor Internacional del Center for Social and Economic Research (CASE) de Varsovia, Polonia.

Bernardo Mackenna C.

Sociólogo y Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Estéfano Rubio S.

Ingeniero comercial con mención en Economía y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Diplomado en Políticas Públicas de la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Actualmente es Investigador del Centro de Estudios Públicos.

EDICIÓN

Bernardita del Solar V.

Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue editora de El Mercurio y ex directora de la revista Qué Pasa y actual responsable de Prensa y Comunicaciones del Centro de Estudios Públicos.

Andrea Herrera B.

Ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile. Actualmente es Investigadora Asistente del Centro de Estudios Públicos.

Índice

Presentación – Harald Beyer

Pág. 5

Presentación del equipo a cargo del informe


Pág. 9

Mapa de lectura del informe

Pág. 12

Agradecimientos

Pág. 193

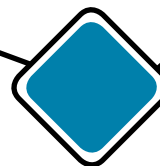
 **Resumen**
Pág. 14



Capítulo 1:
**¿De qué malestar
estamos hablando?**

*Ricardo González T.
Bernardo Mackenna C.*

Pág. 35



Capítulo 2:
**La tensión entre
individualismo y desigualdad
en el Chile actual**

*Ricardo González T.
Bernardo Mackenna C.
Estéfano Rubio S.*

Pág. 79



Capítulo 3:
**La importancia del crecimiento y
la movilidad social en Chile**

Vittorio Corbo L.
Ricardo González T.
Pág. 109



Capítulo 4:
**¿De qué hablamos cuando
hablamos de la crisis de la
democracia?**

Isabel Aninat S.
Ricardo González T.
Bernardo Mackenna C.
Pág. 139



Anexos
Pág. 180



Bibliografía
Pág. 184

MAPA DE LECTURA DEL INFORME

En diciembre de 1986 partió el trabajo de campo de la primera encuesta realizada por el Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP). Desde entonces se han realizado 78 estudios de opinión pública, a la fecha de publicación de este Informe. Todos ellos se han concebido con el objeto de conocer las preocupaciones, preferencias y necesidades de la población y proporcionar información precisa y confiable acerca del acontecer político y económico del país, especialmente en lo que se refiere a la evaluación que los chilenos realizan de la labor del Gobierno y de los principales actores de la vida nacional. De esta forma, la encuesta de opinión pública sirve de puente entre la población chilena y quienes se interesan en comprenderla, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la democracia.

Hoy, treinta años después de la primera encuesta realizada por el CEP, damos un paso adicional en este intento por comprender las preocupaciones de la población, por medio de la publicación del Informe de la Encuesta CEP. La finalidad de esta serie de publicaciones es proporcionar una mirada analítica a la información generada a partir de los estudios de opinión pública del CEP, que aporte una interpretación de las creencias, valores y actitudes de los chilenos y su eventual evolución. Por cierto, se trata de una mirada solamente. Podría haber otras a partir de la observación de las mismas cifras. Más que proveer una visión definitiva, la publicación del Informe de la Encuesta CEP busca invitar al debate de estos temas, a partir del cual podría brotar un mayor conocimiento de nuestra sociedad hoy y que, por lo mismo, contribuya a un mejor diseño de políticas públicas.

El tema central de este Informe es el malestar. Los analistas de la coyuntura nacional han elaborado diversos diagnósticos para explicar este fenómeno en Chile. Ellos surgen a partir de la observación de las movilizaciones sociales, la masiva desconfianza en las instituciones políticas, la defraudación de las altas expectativas de los chilenos en el futuro, las estafas a consumidores en varios mercados, la todavía elevada desigualdad de ingresos e incluso de la prevalencia de enfermedades mentales en nuestra población. La proliferación de diagnósticos se debe, en parte, a la propia definición de malestar —incomodidad indefinible—, lo que hace que cualquier percepción negativa pueda, eventualmente, recibir esa etiqueta. La diversidad de síntomas y prescripciones, por cierto, dificulta la definición de un marco de políticas claro que permita abordar esta sensación.

Por motivos de espacio y limitaciones del instrumento utilizado —estudios de opinión pública—, este Informe sólo cubrirá cuatro dimensiones del malestar, expuestas en cada uno de los capítulos que componen este Informe.

El Capítulo 1 aborda el malestar entendido como la baja y volátil satisfacción que los chilenos le asignan al resto del país, en contraste a la alta y estable satisfacción que declaran acerca de su vida. Este capítulo revisa la literatura nacional que busca comprender el malestar, exponiendo sus argumentos y su vínculo (si alguno) con la discusión acerca de las tensiones entre las percepciones sobre lo personal y lo colectivo. Luego, elabora un marco conceptual que permite asociar el malestar a la diferencia entre el bienestar subjetivo personal y el percibido para el colectivo y pone a prueba tales implicancias usando cifras de la encuesta CEP. El análisis está enfocado en eventuales diferencias individuales derivadas del nivel

socioeconómico y la exposición a flujos de información, y en cómo el contexto informativo al que están expuestas las personas—medido a través de reportes de incertidumbre económica— incide sobre la percepción de malestar.

El Capítulo 2 se aproxima al malestar a través de la desigualdad de acceso a servicios y sus tensiones con los principios individualistas de los chilenos. Se presenta la evolución de estos principios, representados por las preferencias por premios al esfuerzo (relativo a la igualdad de ingresos) y por el rol de los individuos en el sustento económico de ellos mismos (relativo a la responsabilidad del Estado), y de las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, como determinantes del progreso en la vida. Además, se analiza cuantitativamente las relaciones entre las percepciones de desigualdad en el acceso a servicios, con las creencias en el esfuerzo y las circunstancias y las preferencias sobre la igualdad de ingresos y el rol del Estado y se discuten las teorías del malestar, cuyo centro radica en la desigualdad, a la luz de estos resultados.

El Capítulo 3 sigue el enfoque del bienestar subjetivo para mostrar que antes que malestar, el bienestar predomina entre los chilenos. Se presentan las mejoras en las condiciones de vida de los chilenos y se discute, a la luz de la literatura internacional, cómo ellas se relacionan con el aumento de los ingresos individuales y del PIB per cápita durante los últimos treinta años. Luego, se presenta un análisis cuantitativo sobre los determinantes de la satisfacción con la vida, especialmente cómo se relaciona la movilidad intergeneracional, educacional y subjetiva, con la satisfacción por la vida en Chile. A partir de los resultados, se plantea una mirada alternativa al malestar —que dice relación con las pérdidas de satisfacción asociadas a las caídas en el ingreso—, la cual podría ser relevante en el futuro, y se presentan caminos de reforma para seguir generando ganancias adicionales de bienestar y continuar en la senda del progreso logrado.

El Capítulo 4 analiza el malestar a partir de la perspectiva política, asociada a la relativa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en Chile. Primero, se discuten los diversos diagnósticos de crisis —de la democracia, de confianza, de la representatividad o legitimidad e institucional— en el sistema político chileno y luego, se estudia críticamente la plausibilidad de tales prescripciones a partir de las cifras de opinión pública nacional y se las compara con datos de otros países. A partir del análisis, se propone un diagnóstico alternativo basado en el deterioro en el desempeño de las instituciones, producto de la corrupción y la insatisfacción con los servicios prestados por el Estado.

Los cuatro capítulos son auto-contenidos, de forma tal que pueden leerse en cualquier orden. En todo caso, se señala debidamente cuando hay ciertos elementos que se profundizan en otras partes del Informe. Para facilitar la lectura, cada capítulo cuenta con un resumen y un mapa conceptual que sintetiza las relaciones centrales expuestas en el análisis. Además, todos los capítulos tienen texto destacado cuya lectura otorga una comprensión razonable del análisis.

Por último, los capítulos presentan grados variables de contenido técnico. Quienes carezcan de conocimientos de estadística pueden remitirse a las frases destacadas, las cuales señalan los resultados más importantes del análisis cuantitativo.

RESUMEN

El 2016 fue un año de mucho pesimismo. Los indicadores de actividad económica se deterioraron un poco más que en los inmediatamente precedentes (con la excepción del empleo que se mantuvo estable, aunque algo más precarizado que antes), las investigaciones judiciales por presunta corrupción de parlamentarios y beneficios ilegítimos de funcionarios públicos siguieron apareciendo, tal como en los dos años anteriores, al igual que casos de estafas a clientes en mercados de diversa índole. Todo ello contribuyó a generar una percepción negativa del estado de las cosas en nuestro país.

Cuando se aludía al enojo, la rabia y la insatisfacción de los manifestantes, se hablaba de “malestar”. Sin embargo, éste es sólo una forma de entender el fenómeno. Como el concepto apela a una incomodidad indefinible, no hay precisión respecto de las dimensiones que involucra.

Para algunos, esta ola de pesimismo representa una crítica al modelo de desarrollo chileno seguido durante los últimos treinta años. Nada nuevo. Una tesis similar ya había surgido tras las masivas movilizaciones sociales del 2011. Entonces, parecía ser que los eventos recientes simplemente confirmaban el diagnóstico de esa época.

Se decía que tras las manifestaciones del 2011 y las posteriores había rabia. Como los llamados a protesta obedecían a los más diversos motivos, se hablaba de que el enojo era transversal. ¿Los culpables? Los sistemas económicos y políticos que parecían no responder a las demandas ciudadanas, y la desigualdad que ambos preservaban y reproducían. Esta visión sostenía que si la desigualdad no se enfrentaba, la rabia crecería de modo tal que el desborde institucional sería inevitable. Así, lo que se requería era un cambio de modelo, hacia uno que se hiciera cargo de la desigualdad en todas sus formas, y de ese modo, asegurar la gobernabilidad.

Cuando se aludía al enojo, la rabia y la insatisfacción de los manifestantes, se hablaba de “malestar”. Sin embargo, éste es sólo una forma de entender el fenómeno. Como el concepto apela a una incomodidad indefinible, no hay precisión respecto de las dimensiones que involucra. Por esa razón, en el debate público ha aparecido el “malestar” relacionado a una serie de ámbitos, a veces no relacionados entre sí, los cuales se revisan a continuación.


1. ¿CUÁL MALESTAR?

El malestar, como concepto para dar cuenta de la realidad de la sociedad chilena, surge con fuerza en 1998, con motivo de la publicación del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de ese año. En ese reporte se planteaba que el proceso de modernización en Chile, iniciado en dictadura, generó altas tasas de crecimiento, incrementos de los salarios reales y del empleo, un acentuado declive de la tasa de pobreza, inflación baja y estable, y una percepción de que la situación personal de los individuos era mejor que la de los padres. Sin embargo, este progreso coexistía con “...grados más o menos significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de las personas con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo”.

Para medir el malestar, el informe planteaba la existencia de una brecha entre la “seguridad objetiva” —aquella que las instituciones entregan a través de las políticas públicas— y la “seguridad subjetiva” —aquella que perciben los individuos—. Los datos mostraban que la seguridad objetiva había crecido —producto del progreso del país desde mediados de los 80 hasta 1997— y a pesar de eso, la inseguridad subjetiva era alta —la mayoría de las personas manifestaba mucha preocupación por acontecimientos esperados, como la vejez, y otros inesperados, como enfermedades catastróficas imprevistas—. En 2012, el mismo organismo mostraba que los chilenos se sentían más seguros. Si el malestar era inseguridad subjetiva, entonces había menos malestar en 2012 que en 1998, una clara contradicción con lo que se decía en ese momento respecto de esta sensación.



Por otro lado, en 1998, José Joaquín Brunner elaboró una mirada alternativa del malestar. El académico sostenía que “la gente desea seguir mejorando sus condiciones de vida —y de su familia— pero más rápido. Quiere ‘más de lo mismo’ pero en un menor tiempo, de manera de, así, satisfacer sus expectativas”. Así, Brunner afirmaba que lo que ocurría en Chile era “(...) un cuadro matizado y complejo de percepciones y opiniones, con reconocimiento de progresos que se corresponden con los indicadores objetivos de mejoría en las condiciones de vida de las personas; altas expectativas de mediano y corto plazo; nítida identificación de desigualdades y señalamiento claro y concordante de problemas prioritarios, los cuales tienen que ver, principalmente, con acceso a servicios esenciales y con las condiciones de vida en la esfera privada”. En esta interpretación, el malestar estaría asociado a la frustración de las altas expectativas que produce la desaceleración del progreso y a los problemas de acceso a servicios.



Quizás una de las variables más mencionadas a la hora de intentar explicar el malestar ha sido la desigualdad.

El discurso del malestar volvió con fuerza durante 2011, producto de las masivas manifestaciones sociales. En particular, el informe PNUD 2012, a través del enfoque de bienestar subjetivo, registró la existencia de una elevada y creciente satisfacción de los chilenos por la vida propia y, al mismo tiempo, insatisfacción con la sociedad también en aumento. Este malestar social se medía a través de la desconfianza de las personas en las instituciones políticas y la evaluación que ellas mismas hacían de las oportunidades que el país les entregaba en una serie de áreas. Entonces, el malestar no yacía en los individuos, más bien se reflejaba en la percepción de las instituciones políticas del país. Se discutirá esta interpretación en detalle más adelante.

Una explicación más *sui generis* involucraba la conexión del malestar con el estado de salud mental de las personas. El sociólogo Alberto Mayol postulaba que el explosivo aumento de la tasa de suicidios desde 1990 y del consumo de antidepresivos tenía relación con el malestar, ignorando que el alza de los indicadores de sintomatología depresiva se podría haber producido por la transición epidemiológica acelerada que está atravesando el país o incluso por una mejora en la capacidad de recolección de datos en este área. No obstante, una investigación revela que la asociación entre malestar social y el sufrimiento síquico es cercana a cero.

Una explicación diferente del malestar fue elaborada por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. En 2012, él sostuvo que el “descontento y la conflictividad que ha habido en el país” se explicaba por la existencia de “personas secularizadas, con mayores expectativas que sus padres” y por “una inmensa frustración: (...) Hace 30 años, ir a la universidad aseguraba una alta posición en la escala invisible del prestigio y del poder: eso hoy día ya no ocurre y entonces el acceso se experimenta como un engaño” y por “una crisis de legitimidad” en el ámbito político.

Durante el 2015, en una serie de columnas, José Joaquín Brunner sostuvo que la sociedad chilena está cruzada por tres niveles de malestar, que a menudo se confunden en la discusión pública. El primero, capturado a través de las encuestas, se expresaría a través de la baja aprobación del gobierno, la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas, las expectativas pesimistas —tanto a nivel económico como político—, las inseguridades, preocupaciones e incertidumbre de diversa naturaleza y grados variables de satisfacción e insatisfacción con la “provisión de bienestar” de las organizaciones públicas y privadas. Visto de esa forma, no parece haber una incomodidad indefinible. Muy por el contrario, los problemas estarían bien identificados. El segundo tiene que ver con la democracia, específicamente, como “(...) consecuencia de que sus ideales más altos no pueden cumplirse en plenitud”. Las expresiones de este nivel de malestar serían la apatía política, como consecuencia de un cierto déficit de representación, la abstención electoral y la desconfianza en las instituciones políticas. El tercero estaría vinculado al “(...) campo de las relaciones de producción en torno al trabajo asalariado y sus explotaciones, alienaciones y frustraciones y se proyectan hacia variadas

dimensiones de la cultura y la subjetividad de las personas, incluso la esfera más íntima del yo”, es decir, serían inherentes al proceso de modernización capitalista. De este análisis, Brunner concluía que el concepto de malestar ayuda poco a la comprensión de los procesos involucrados en la gestación y expresión de esta sensación y que una sociedad sin malestares es una utopía.

Quizás una de las variables más mencionadas a la hora de intentar explicar el malestar ha sido la desigualdad. En efecto, ya en 1998, el informe PNUD señalaba que el malestar, conceptualizado como inseguridad, se originaba en “el excesivo énfasis en la

monetarización de los riesgos, sin considerar el carácter de servicio a las personas” y “la tradicional distribución desigual de las oportunidades y su acceso incierto a ellas”. En 2011, Mayol afirmaba que “(...) las sociedades desiguales normalmente tienen mucho malestar por eso mismo y que normalmente se politizan por necesidad”. En 2013, la Presidenta Bachelet, en el contexto de la campaña electoral, sostuvo que “la enorme desigualdad en Chile es el motivo principal del enojo; un enojo que se manifiesta, además, como desconfianza en las instituciones”. Por la importancia de este tópico, se abordará separadamente a continuación.

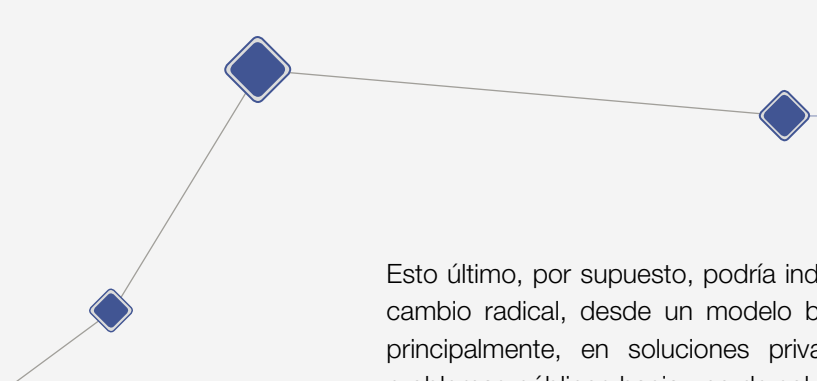
2. ¿MALESTAR CON LA DESIGUALDAD Y EL MODELO ECONÓMICO?

La desigualdad de ingresos ha caído desde 1990, sin embargo, todavía sigue siendo alta. Quizás por esa razón, en 2014, un 42 por ciento percibía que ésta había aumentado durante los últimos diez años, un 40 por ciento que se había mantenido y sólo un 15 por ciento consideraba, correctamente, que había disminuido. Parecía ser que los chilenos juzgaban los avances en este ámbito como insuficientes. Más aún, la mayoría de los chilenos percibía mucha desigualdad en el acceso a servicios como la salud y la educación de calidad, una vivienda digna o justicia eficaz, a pesar de que, en estricto rigor, la ley asegura que cualquier chileno pueda acceder a proveedores públicos o privados de tales servicios.

¿Cómo se podría haber generado tal percepción? Una posibilidad yace en la existencia de servicios de buena y mala calidad, y el acceso a los primeros se lograría a través de salarios más altos. Si la premisa fuera cierta, entonces la elevada desigualdad

La mayoría de los chilenos tiende a privilegiar los premios al esfuerzo, en desmedro de la igualdad de ingresos y a situar la responsabilidad por el sustento económico de las personas en los individuos mismos, en vez del Estado.

del ingreso podría ser el impedimento a que la mayoría de la población acceda a mejores prestaciones. A partir de lo mismo, también se podría afirmar que la demanda por acceso a mejores servicios reflejaría una preferencia por mayor igualdad de los ingresos y, al mismo tiempo, por un rol más activo del Estado, ya sea a través de la redistribución o de la provisión exclusiva de servicios.



Esto último, por supuesto, podría indicar un cambio radical, desde un modelo basado, principalmente, en soluciones privadas a problemas públicos hacia uno de soluciones estatales.

Sin embargo, las cifras no respaldan tal conjetura. De acuerdo a la evidencia acumulada desde el año 2008 por las encuestas CEP, la mayoría de los chilenos tiende a privilegiar los premios al esfuerzo, en desmedro de la igualdad de ingresos y a situar la responsabilidad por el sustento económico de las personas en los individuos mismos, en vez del Estado. Cabe destacar que, a pesar del discurso de los movimientos sociales contrarios a estos principios, los chilenos se han mantenido más cerca del polo individualista que del polo colectivista en ambos aspectos.

Por otro lado, las creencias de los chilenos sobre las causas de la pobreza y la riqueza se inclinan hacia un mayor individualismo, porque consideran que variables asociadas al esfuerzo —como la iniciativa y el trabajo duro— son las razones más importantes para explicar los resultados económicos; en desmedro de las circunstancias —provenir de una familia rica, los contactos o “pitutos” o simplemente, la suerte— y de la ayuda del Estado. Estas creencias se han mantenido estables en la población desde 1990, a pesar de que el debate político, especialmente desde 2011 en adelante, ha enfatizado a las circunstancias como razones tras el progreso de las personas.

De acuerdo a la teoría del cambio valórico del destacado cientista político Ronald Inglehart, los valores y creencias de los individuos se forman durante el período de socialización y se estabilizan en la adultez temprana. En 1990, la mayoría de los encuestados habían nacido antes de 1970, por lo tanto, crecieron bajo un modelo de desarrollo distinto del


vigente post-dictadura. En contraste, en 2015 había al menos dos generaciones de chilenos que nacieron durante o después de la dictadura y que, por lo tanto, fueron criados bajo el modelo de soluciones privadas. Lo interesante de esta precisión es que ambos grupos de personas sostienen, en promedio, las mismas creencias respecto del esfuerzo y las circunstancias tras el éxito económico y la pobreza. De esta forma, no se podría atribuir al modelo de soluciones privadas un eventual cambio de creencias que, por lo demás, no se observa en 25 años de mediciones.

Pese a que la desigualdad de ingresos es alta, lo mismo que la percepción de acceso inequitativo a los servicios, no se observa una mayor inclinación de los chilenos por la igualdad de ingresos y una atribución de más responsabilidad al Estado producto de esta situación. Ello debido a que las preferencias y creencias de los chilenos tienden a ser individualistas. Así, bajo esta perspectiva, se observa una cierta tensión entre estos principios individualistas y las dimensiones de la desigualdad antes mencionadas. Visto de esa forma, no parece haber evidencia de un malestar asociado al acceso desigual a los servicios.

Para varios analistas, la percepción de acceso desigual a los servicios se enfrenta convirtiendo al Estado en el oferente principal de servicios tales como educación y salud. Como evidencia a favor, argumentan que la población favorece la idea de que los servicios sociales (educación, pensiones, salud, y seguridad) se financien mayoritariamente a través de impuestos y no tanto por la vía de pagos directos por los usuarios. Sin embargo, sólo una minoría estaría dispuesta a pagar más impuestos para financiar estos servicios. Entonces, en este contexto, surge otra tensión: existe un deseo por más y mejores servicios, pero esperan que éstos sean financiados por otros. Buena parte de



El respaldo de los chilenos al financiamiento estatal de los derechos sociales (sin importar la institución a cargo de su provisión) contrasta con su escasa disposición a pagar impuestos adicionales para conseguirlo.



esta aparente contradicción podría vincularse a dos hechos profundamente relacionados entre sí: la desigualdad económica y la distribución del pago de impuestos. En Chile, el impuesto a la renta, tanto a nivel personal como empresarial, es pagado principalmente por las personas de más altos ingresos. En contraste, los grupos de menores ingresos suelen aportar al fisco a través de impuestos indirectos como el IVA, cuyo pago es poco notorio para la mayoría. Así, pareciera que lo financiado a través de impuestos podría ser percibido como muy barato o gratuito por la gran mayoría de la población, aunque realmente no lo sea. De cualquier modo, el respaldo de los chilenos al financiamiento estatal de los derechos sociales (sin importar la institución a cargo de su provisión) contrasta con su escasa disposición a pagar impuestos adicionales para conseguirlos.

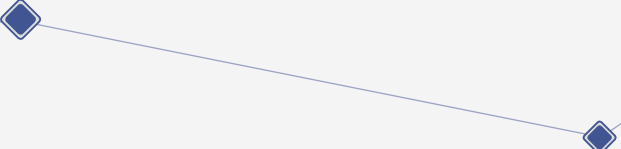
Esta desigualdad percibida en el acceso a servicios no parece ser evidencia suficiente para afirmar que existe malestar con el modelo de soluciones privadas a problemas públicos por parte de los chilenos.

Con todo, ¿existe un malestar con el actual modelo de soluciones privadas a problemas públicos? Si se piensa que este modelo es el causante de las percepciones de desigualdad en el acceso a los servicios, entonces la respuesta es no. Aunque el análisis estadístico muestra una asociación en que a mayor percepción de desigualdad en el acceso a servicios de calidad, más se

prefiere la igualdad de ingresos y se sitúa más responsabilidad en el Estado, no se observa mayor inclinación por tal igualdad de ingresos ni tampoco por un Estado más activo en cuanto al sustento económico de las personas. Por lo tanto, esta desigualdad percibida en el acceso a servicios no parece ser evidencia suficiente para afirmar que existe malestar con el modelo de soluciones privadas a problemas públicos por parte de los chilenos.

No obstante, el acceso no es el único problema. La ciudadanía evalúa bien algunos servicios públicos y privados, y expresan mucha insatisfacción hacia otros. Por ejemplo, en agosto 2015, un tercio de los chilenos declaraba su insatisfacción por la atención en Isapre, mientras que cuatro de cada diez personas afirmaba lo mismo respecto de Fonasa. Apenas un cuarto de la población decía estar descontento con la atención de las clínicas, en contraste a la atención en los consultorios y hospitales, en que seis de cada diez chilenos tenían esa percepción. En otros ámbitos, como las pensiones, la seguridad ciudadana y la administración de justicia, la insatisfacción llegaba a cerca de tres cuartos de la población. Cabe destacar que estas cifras no significan necesariamente una demanda para que el Estado se haga cargo de la prestación de estos servicios, por lo que se discutió más arriba: la ciudadanía privilegia una visión que descansa en mayor medida en los incentivos y la responsabilidad individual, por sobre la igualdad de ingresos y un rol mayor del Estado.

Este cuadro heterogéneo de evaluaciones y acceso a los servicios, más bien, sugiere el reconocimiento, por parte de los chilenos, de que existen problemas específicos asociados a las diferentes prestaciones de servicios, los cuales demandan una solución. Esta



conclusión es similar a la explicación ofrecida por Brunner en 1998, cuando afirmaba que en Chile había una “(...) nítida identificación de desigualdades y señalamiento claro y concordante de problemas prioritarios, los cuales tienen que ver, principalmente, con acceso a servicios esenciales y con las condiciones de vida en la esfera privada”.

Una mirada alternativa se obtiene si los servicios sociales se interpretan a la luz del concepto de capacidades del economista y filósofo Amartya Sen. Si los chilenos perciben que no tienen acceso igualitario a las capacidades (servicios sociales básicos), es posible que la preocupación por el acceso inequitativo a ciertos servicios se trate de una demanda por igualdad al iniciar

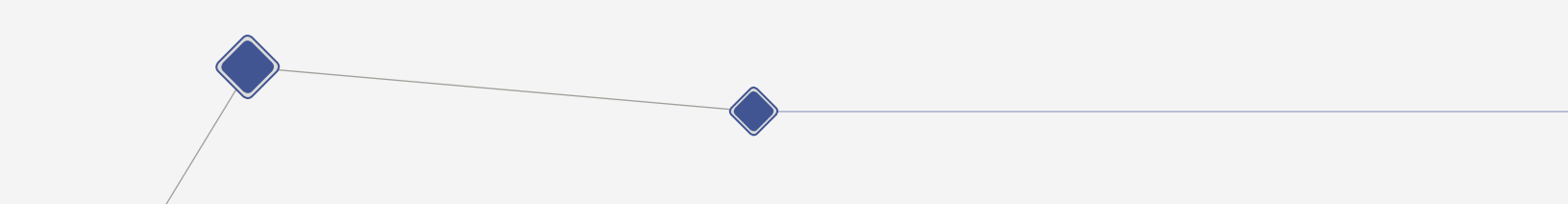
la competencia y no una por más igualdad económica.

En suma, el apoyo de los chilenos al financiamiento estatal de los servicios, en desmedro del actual escenario en el que su acceso está mediado por la capacidad de pago, es a lo sumo ambiguo. Entre la población conviven deseos por un mejor acceso a bienes y servicios, con creencias de raigambre individualista, que ponen los logros personales por sobre la redistribución estatal. Esta tensión requiere de especial atención por parte de los analistas y el público en general, en la medida en que en ella descansan los fundamentos de políticas públicas que respondan a los verdaderos intereses de la ciudadanía.

3. ¿MALESTAR Y CRISIS EN EL SISTEMA POLÍTICO?

Los observadores de la coyuntura nacional afirman que el malestar sería evidente cuando nos referimos al sistema político. Esta sensación se expresaría a través de la insatisfacción creciente —aunque todavía no mayoritaria— por el funcionamiento de la democracia, la escasa identificación de los ciudadanos con los partidos políticos, bajos niveles de confianza en las instituciones políticas, la declinante participación electoral —presente desde el retorno a la democracia y acentuada por la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario— y un supuesto deseo mayoritario de participar activamente en la toma de decisiones públicas, que la institucionalidad actual no ha podido acomodar. A partir de estos síntomas se han elaborado diagnósticos que hablan de crisis política, de la democracia, de confianza, de legitimidad y de las instituciones en nuestro país. A continuación, se revisarán tales argumentos.

¿Existe una crisis de la democracia en Chile? Pese a que la evaluación del funcionamiento de la democracia es crecientemente negativa en nuestro país —las percepciones positivas han declinado constantemente, llegando a diez por ciento en noviembre de 2015, al mismo tiempo que las negativas han alcanzado un 32 por ciento en la misma fecha, es decir, el triple de las positivas—, casi la totalidad de los chilenos respalda los principios de la democracia como forma de gobierno. Esta discrepancia entre adhesión a los principios y percepción de desempeño podría haber surgido por: (1) los grandes avances en cobertura educacional en los últimos treinta años, lo que podría haber elevado las exigencias al funcionamiento de la democracia; (2) por cierta incapacidad de las autoridades y de las políticas públicas de cumplir con las mayores expectativas; y (3) por el tono negativo de la cobertura de los medios de comunicación masivos de los temas públicos.



Pese a que la evaluación del funcionamiento de la democracia es crecientemente negativa en nuestro país, casi la totalidad de los chilenos respalda los principios de la democracia como forma de gobierno.

Un tema que se escucha a menudo en el debate público es que los problemas que se observan en la clase política se deben a una forma de hacer política que no calza con lo que esperan los ciudadanos hoy. Dicho de otra forma, habría una demanda de la población por una nueva forma de hacer política, una más proclive a un estilo más participativo de política, de relaciones más horizontales y que facilite el recambio en las élites gobernantes. Si ello fuera así, entonces las cifras deberían indicar un cambio valórico en la población.

Una teoría que busca comprender tal cambio, desarrollada por Ronald Inglehart y ampliada junto a Christian Welzel, sugiere que los valores son transmitidos durante la transición a la adultez y por lo tanto, si las generaciones más jóvenes son socializadas en contextos materiales y culturales distintos a los de sus padres, internalizan patrones valóricos diferentes a los de las generaciones anteriores. Así, es posible que los valores de las generaciones más jóvenes entren en conflicto con los valores de las generaciones antiguas, en cuanto a cómo entienden

el funcionamiento de democracia, los estilos de autoridad y las prioridades de la agenda gubernamental, entre otros, si fueron socializados en contextos diferentes. En esta dimensión, el académico Russell Dalton muestra que las generaciones con valores post-materialistas —definidos como aquellos que priorizan objetivos como la calidad de vida, la libertad individual, la libre expresión y participación, por sobre necesidades materiales básicas— son más propensas a creer en la democracia como la mejor forma de gobierno y a apoyarla como ideal, favorecen un estilo participativo de política y son abiertamente escépticos de las autoridades sociales y políticas. Entonces, si existiera una demanda ciudadana por una nueva forma de hacer política, entonces los valores que deberían primar en nuestra sociedad deberían ser post-materialistas. En Chile, sin embargo, las cifras muestran que la diferencia entre los jóvenes (menores de 29 años) y el total poblacional, en cuanto a sus valores post-materiales nunca es mayor de cinco puntos porcentuales, en otras palabras, no se observan las discrepancias generacionales tan marcadas predichas por las teorías de Inglehart, Welzel y Dalton. Por lo tanto, la evidencia de una tendencia de los chilenos hacia el post-materialismo aún es bastante débil hoy. Así, bajo esta perspectiva, no parece haber una demanda por una nueva forma de hacer política, aunque quizás sí pueda haberla en el futuro, cuando las generaciones con valores post-materialistas sean mayoritarias.

Por otra parte, cuando se comparan las percepciones del funcionamiento de la democracia de Chile con otros países, se observa que nuestro país no tiene las peores evaluaciones, pero tampoco las mejores, a pesar del acentuado incremento reciente de la percepción negativa del desempeño de la democracia. Todo lo anterior parece indicar

que la idea de una crisis de la democracia es una exageración de las malas evaluaciones al funcionamiento del sistema político en nuestro país.

La evidencia comparada muestra que Chile presenta niveles de confianza política bajos, pero superiores a los observados en países con un nivel de desarrollo institucional superior al nuestro.

Otra de las supuestas crisis que padecería el sistema político chileno sería la falta de legitimidad producto de un déficit de representatividad de las instituciones. Este diagnóstico surge a partir de la observación de los siguientes síntomas:

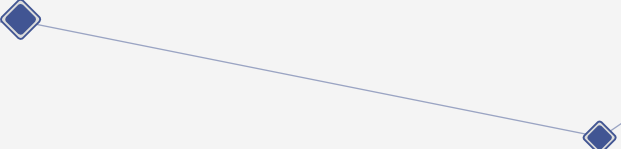
1. Escasa identificación de la ciudadanía con los partidos políticos: tanto en Chile como en las democracias europeas, incluso en aquellas consolidadas y con los más altos niveles de satisfacción institucional, los partidos han ido perdiendo adhesión. Para que la identificación partidaria sea relevante para explicar la pérdida de legitimidad, ésta debería estar relacionada con algún indicador de satisfacción con el funcionamiento del sistema político. En perspectiva comparada, no hay una asociación entre el número de militantes —grupo de ciudadanos identificados y comprometidos con algún partido— y la satisfacción con la democracia de varios países, por lo que parece improbable que exista una crisis de legitimidad asociada a la baja adhesión a los partidos.

2. Bajos niveles de confianza de la población en los partidos políticos: los factores tras la desconfianza están relacionados con la información que los ciudadanos manejan sobre los partidos, los criterios de evaluación de su desempeño, y el funcionamiento mismo de éstos. En Chile, dos de cada diez ciudadanos considera que los partidos son dialogantes y proclives a llegar a acuerdos, una fracción todavía menor considera que los partidos políticos toman en cuenta las opiniones de sus militantes a la hora de tomar sus decisiones y uno de cada diez afirma que los partidos toman decisiones transparentemente. Todo ello refleja un problema de desempeño serio. Sin embargo, cuando se compara con otros países, la creencia de que los partidos políticos le dan al votante una opción real entre políticas públicas —una dimensión del desempeño de los mismos— en Chile no es tan negativa como en Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Finlandia y Australia, pese a que la satisfacción con la democracia en esos países es superior a la nuestra. Así, parece ser que la desconfianza en los partidos puede coexistir con evaluaciones positivas acerca de cómo funciona el sistema político. Por lo tanto, la desconfianza en los partidos no necesariamente tiene relación con la crisis de legitimidad y el malestar con el sistema político.

3. Declive de la participación electoral: el número de votantes ha caído sostenidamente, lo que, equivocadamente, se atribuye exclusivamente a la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario en 2012. Lo cierto es que se observa una tendencia decreciente en la participación electoral desde el retorno de la democracia, desde niveles inusualmente altos —producto



La insatisfacción con el sistema político y la desconfianza no son problemas exclusivos de Chile.



de la importancia de participar en el plebiscito de 1988— hacia cifras que se observan en países en que las elecciones ocurren bajo condiciones similares —las elecciones locales (municipales) bajo esquemas de voto voluntario y cuando no coinciden con elecciones de otras autoridades en simultáneo son adecuadas para la comparación (en elecciones generales incide la forma de gobierno, que usualmente varía bastante entre países)—. Además, la reforma de inscripción automática y voto voluntario redujo el sesgo etario en las elecciones presidenciales de 2013 y no hay evidencia concluyente de que haya aumentado el sesgo de clase en el electorado en las elecciones municipales de 2012 y 2016, por lo tanto, la representatividad no ha empeorado. De esta forma, la teoría de la crisis de legitimidad, derivada del declinante número de votantes, queda en entredicho. De todos modos, las autoridades deberían atender las causas de la abstención electoral y adoptar reformas cuyo objetivo sea reducir los costos de acudir a las urnas.

4. Pocos mecanismos de democracia directa de nuestra institucionalidad actual que no estarían dando cabida a un supuesto deseo mayoritario de participar en la toma de decisiones pública: en Chile, la mayoría de la población no tiene interés en la política, sigue con escasa frecuencia los temas políticos en las diversas plataformas existentes y no participa en agrupaciones políticas ni en otras que persigan otros fines. A menudo, se sostiene que el interés de la ciudadanía crecería si existieran mecanismos para ser parte de la toma de decisiones. Si esta premisa fuera cierta, entonces los chilenos participarían a través de otros mecanismos, por ejemplo, asistiendo a

manifestaciones masivas o expresando una opinión política en los medios tradicionales o en foros de internet. Sin embargo, ello no se observa en los datos. Esto, junto a la baja participación en el proceso constituyente de 2016, pone en tela de juicio la premisa del deseo mayoritario de participar en la toma de decisiones y, por cierto, la idea de que hay una crisis generada asociada a la falta de más mecanismos que permitan tal participación.

Por otro lado, desde 1990, la confianza de las instituciones políticas, las empresas, los medios de comunicación y las iglesias han caído. En contraste, la confianza en Carabineros y las Fuerzas Armadas ha subido durante los últimos trece años, pese a que exhibe una pequeña caída en el pasado reciente. A partir de estas cifras, varios analistas han concluido que existe una crisis de confianza. Algunos han ido más allá al afirmar que existe una crisis institucional.

Sin embargo, la evidencia comparada muestra que Chile presenta niveles de confianza política bajos, pero superiores a los observados en países con un nivel de desarrollo institucional superior al nuestro. En efecto, un 18 por ciento de los chilenos está de acuerdo con que “La mayor parte del tiempo podemos confiar que la gente que está en el gobierno hace lo correcto” —una variable que captura parcialmente confianza política—, muy por debajo del 58 por ciento que sostiene lo mismo en Suiza y del 40 por ciento en Noruega, pero está en un nivel similar a Taiwán, Estados Unidos, Bélgica y Corea del Sur, cerca del 24 por ciento en Alemania y por encima del 17 por ciento en España, 15 por ciento en Francia y el nueve por ciento de Japón.



Por otro lado, los indicadores de un buen funcionamiento de una democracia —variable que aproxima el desempeño de las instituciones en un país—, muestran que Chile, Alemania, España y Estados Unidos, por nombrar algunos, alcanzan el máximo nivel posible, y Francia obtuvo un punto menos que el máximo posible en 2014. Esto significa que la desconfianza en las instituciones puede coexistir con un razonable desempeño institucional, por ende, no es una condición suficiente para hablar de una crisis institucional. A pesar de eso, la desconfianza institucional no es positiva y es necesario tomar medidas orientadas a revertirla. Al final de este resumen volveremos sobre este tema.

Así y todo, parece que la crisis del sistema político ha sido sobre-diagnosticada. La insatisfacción con el sistema político y la desconfianza no son problemas exclusivos de Chile. Ha pasado y está ocurriendo en varios países del mundo desarrollado. Es muy importante aprender de su experiencia tratando de resolver estos problemas. En

países que han seguido un camino reformista se han defendido diversas medidas para abordar el descontento. Por ejemplo, aquellos que favorecen el fortalecimiento de la deliberación colectiva y la participación ciudadana, han propuesto ampliar el uso de asambleas ciudadanas, referéndums populares, auditorías sociales, presupuestos participativos, consultas públicas, reuniones comunitarias y encuestas deliberativas. Quienes favorecen el fortalecimiento de la transparencia y el *accountability*, han impulsado la ampliación de derechos a la información y los procesos de toma de decisiones más abiertos. Otros promueven fortalecer la institucionalidad con la creación de agencias anti-corrupción, *ombudsman* y agencias regulatorias y algunos optan por reformas constitucionales. Sin embargo, a pesar del amplio debate al respecto, y aun cuando las iniciativas puedan ser válidas en su propio mérito, no está claro si alguna de estas estrategias realmente logra, a largo plazo, los objetivos deseados. Como advierte Pippa Norris, académica de la Universidad de Harvard, las reformas fracasarán si el problema de la legitimidad democrática o la llamada crisis de confianza se exagera o se diagnostica mal.

Hoy, Chile es el país con la esperanza de vida al nacer más alta de la región, incluso superior a la de varios países de Europa y al promedio de países miembros de la OCDE.

4. ANTES QUE MALESTAR, EL BIENESTAR PREDOMINA EN CHILE

Hay un área de estudio llamada bienestar subjetivo que se preocupa de determinar cuáles son las cosas necesarias para vivir bien. Entonces, para investigar si hay malestar, bajo este enfoque, revisaremos la evolución del bienestar en Chile durante las últimas tres décadas. Como el enfoque abarca muchas cosas, la discusión sólo se enfocará en los logros económicos y sociales, en especial aquellos relacionados con la satisfacción con la vida —una forma de aproximarse al bienestar subjetivo— y la relación entre ambos.

Chile experimentó una transformación muy exitosa en los últimos treinta años, la que permitió al país alcanzar importantes logros económicos y sociales. El despegue de Chile, en términos de PIB per cápita, comenzó en 1986 y apenas tres años después, ya había superado al resto de las economías latinoamericanas. A partir de entonces, nuestro país avanzó a paso constante y sin retrocesos, en contraste a varios países de la región. De hecho, Chile fue el país de tamaño medio en América del Sur que más redujo su brecha de producto per cápita en relación con los países de la OCDE en los últimos treinta años.


La preocupación temprana por la nutrición y la salud pública, los avances en nutrición infantil, y a la focalización del gasto fiscal en bienes públicos para los más pobres, junto al progreso económico hicieron que el bienestar de los chilenos aumentara. Hoy, Chile es el país con la esperanza de vida al nacer más alta de la región, incluso superior a la de varios países de Europa y al promedio de países miembros de la OCDE.

Hace poco más de cuarenta años Argentina y Venezuela tenían una mortalidad de lactantes inferior a la chilena, hoy, sin embargo, la situación es la opuesta: Chile tiene la tasa de mortalidad de lactantes más baja de América Latina. Lo mismo ocurre con la tasa de mortalidad infantil.

Asociado, además, a estos logros económicos también, la tasa de pobreza de Chile cayó abruptamente, alcanzando hoy el nivel más bajo de toda la región.

Así, al tiempo que el PIB per cápita crecía y los indicadores de progreso social mejoraban, la satisfacción con la vida de los chilenos subía también. En 2015, un 82 por ciento de los chilenos afirmó estar satisfecho o muy satisfecho con su vida en general, cinco puntos porcentuales más que en 2011 —el llamado, por algunos, “año del malestar”— y 20 puntos porcentuales por encima de lo que declaraban en 1995.

Estas afirmaciones suponen que existe una asociación entre el progreso económico y los avances en indicadores sociales y bienestar (subjetivo). ¿Hay evidencia de ello? La literatura internacional muestra que sí. Por un lado, el profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, reconocido experto mundial en desarrollo y pobreza, ha sostenido que, en el mundo, la caída en las tasas de pobreza y de la mortalidad de lactantes e infantil, las mejoras en la nutrición y en la salud, y un aumento significativo en el acceso de la población a bienes y servicios, tanto en cantidad como en calidad, fueron posibles



gracias a una combinación de alto crecimiento económico, avances científicos en el control de las enfermedades, y gobiernos que no sólo han facilitado el crecimiento —a través de una oferta adecuada de bienes públicos e infraestructura— sino que, también, han sido responsables frente a sus ciudadanos. Por otro lado, las investigaciones internacionales recientes muestran que existe una relación positiva y significativa entre la satisfacción con la vida y el crecimiento económico del ingreso per cápita y del ingreso medio de las familias. Además, se ha mostrado también que estas relaciones se dan tanto en los países más ricos como en los más pobres y no se atenúan con el paso de los años.

En conjunto, esta evidencia sugiere que antes que malestar, el bienestar es lo que predomina en Chile y que buena parte de este progreso se explica por el crecimiento de los ingresos de los hogares y del país como un todo.

La satisfacción por la vida personal depende de factores asociados a la experiencia y visiones personales, mientras la satisfacción atribuida al resto del país está relacionada no sólo con ciertas características de las personas sino también con la exposición a los medios de comunicación y su efecto contextual en el proceso de elaboración de imágenes mentales en los individuos.

5. UNA MIRADA DISTINTA DEL MALESTAR SOCIAL

Hasta el momento, se ha podido apreciar que el malestar tiene diferentes aristas —quizás demasiadas— que tratan de darle contenido a un concepto difuso y que hay ciertas incoherencias en los argumentos que vinculan el malestar con la inseguridad subjetiva, la sintomatología depresiva, la desigualdad, el modelo económico y el bienestar subjetivo. En cuanto al sistema político, los síntomas negativos han dado lugar a varios diagnósticos de crisis que, de acuerdo al análisis de este texto, parecen exagerados para explicar el momento actual de Chile.

Una forma palmaria de malestar, como se enunció al principio, fue la que los analistas le atribuían a las manifestaciones sociales, las que desde 2011 se hicieron más visibles

que antes. En efecto, los participantes de las marchas expresaban enojo, rabia e insatisfacción frente a su objeto de reclamo. Para varios observadores, ello era el más claro reflejo del malestar. Esta sensación, de acuerdo a esos mismos analistas, no sólo estaba presente en las personas movilizadas, también tenía que estarlo en la población como un todo. Sin embargo, el malestar atribuido a los chilenos por los críticos no aparecía en las encuestas. Una y otra vez, éstas mostraban que los chilenos estaban muy satisfechos con sus vidas, alcanzando niveles superiores a lo observado veinte años atrás. No solamente los propios consultados estaban satisfechos con sus vidas, también lo estaban sus amigos y familiares. No obstante, la población promedio, al igual que los analistas y observadores críticos,

creía que el resto del país estaba muy insatisfecho.

La discrepancia entre la satisfacción por la vida propia y la del resto del país también se observaba entre la evaluación de la situación económica personal y del país. En este caso, hasta 2011 ambas percepciones siguieron una trayectoria y niveles similares. Sin embargo, a partir de dicho año surge una brecha creciente entre los juicios referidos a las condiciones propias y aquellos referidos a las circunstancias colectivas. Esta disociación entre la visión personal y la colectiva pareciera surgir al mismo tiempo que el llamado “malestar”.

Otro tanto ocurre con la percepción de corrupción de los funcionarios públicos. En 2016, apenas un siete por ciento de la población afirmó que, con frecuencia, le piden coimas para acceder a un servicio público, mientras que tres cuartas partes de los chilenos no se ha enfrentado nunca o casi nunca a esa situación. A pesar de eso, un 70 por ciento cree que bastante o casi todos los funcionarios públicos están inmiscuidos en actos corruptos.

Entonces, la pregunta relevante es ¿cómo podemos entender esa brecha creciente entre el juicio evaluativo referido a la situación personal y a la colectiva? La aproximación desarrollada en este Informe interpreta las declaraciones de los encuestados como procesos cognitivos que aluden no sólo a su experiencia sino que además a sus valores, predisposiciones, e “imágenes mentales” respecto al mundo en el que viven. En el caso de los juicios personales, la experiencia basta. Para los juicios sobre las vidas de los demás, las personas construyen pautas interpretativas de la realidad circundante, a pesar de la ausencia de experiencia personal y de información relevante sobre su entorno, utilizando valores, creencias

y actitudes propias (fuentes estables) y factores contextuales (más dinámicos y algo volátiles). Entre tales factores se destacan las relaciones sociales —muy influyentes en la construcción de “imágenes mentales” que generalmente tienden a ser “sesgadas”, esto es, hace creer a los individuos que ciertas creencias, comportamientos o eventos son más (o menos) frecuentes de lo que son en realidad— y la exposición a medios de comunicación masivos que, dada la tendencia a reportar lo conflictivo y lo controversial, tiende a generar imágenes más bien negativas sobre la situación de los demás.

Un análisis estadístico confirma la teoría delineada en el párrafo anterior. La satisfacción por la vida personal depende de factores asociados a la experiencia y visiones personales, mientras la satisfacción atribuida al resto del país está relacionada no sólo con ciertas características de las personas sino también con la exposición a los medios de comunicación y su efecto contextual en el proceso de elaboración de imágenes mentales en los individuos.

En concreto, las personas más educadas, con mayor acceso a bienes de consumo y más expuestas a los flujos de información

Los datos parecen sugerir que el fenómeno de la corrupción está virtualmente ausente de la vida cotidiana de las personas, pero si está muy presente en las imágenes mentales de la vida colectiva.



política mediatizada, tienden a evaluar de peor manera la situación colectiva cuando los contenidos transmitidos por los medios se vuelven más negativos —por ejemplo, cuando hay más incertidumbre económica—. Si el contexto no es tan negativo —por ejemplo, cuando no hay tanta incertidumbre económica—, entonces el pesimismo respecto a la situación del país se atenúa.

Las percepciones de corrupción funcionan de una manera similar: en 2016, un 70 por ciento de la población pensaba que bastante o casi todos los funcionarios públicos están inmiscuidos en actos corruptos en 2016, 28 puntos porcentuales más que en 2006, no obstante, sólo un siete por ciento de la población afirmaba que, con frecuencia, funcionarios públicos le habían pedido coimas para acceder a un servicio público, fracción que no ha variado significativamente durante la última década. ¿Qué ocurre? Los datos parecen sugerir que el fenómeno de la corrupción está virtualmente ausente de la vida cotidiana de las personas, pero

sí está muy presente en las imágenes mentales de la vida colectiva, las cuales se construyen a partir de la información que emana de las relaciones sociales y de los medios de comunicación masivos. En este caso particular, las noticias sobre casos de corrupción son, en general, de fácil comprensión, con un contenido altamente emocional y, por tanto, más fáciles de retener, lo que contribuiría a generar la percepción de que casi todos los funcionarios públicos son corruptos, aun cuando las respuestas en relación a la experiencia cotidiana de tres cuartas partes de los chilenos no refleja eso.

Con todo, los episodios negativos ocurridos durante los últimos años han generado una imagen mucho más crítica respecto a la situación del país, pero no han reducido la satisfacción de las personas con sus propias vidas. De este modo, pareciera ser que el malestar sería un fenómeno asociado al mundo circundante, al cual sólo es posible acceder a través de información mediatizada, y no a través de la experiencia cotidiana.

Es probable que la evolución más reciente de la desconfianza en las instituciones políticas se explique por las investigaciones judiciales de financiamiento ilegal de la política y corrupción.

6. ¿QUÉ HACER CON LAS INSTITUCIONES EN CHILE?

Hemos visto que las percepciones sobre las instituciones, en particular, la confianza en ellas, se forman a partir de la información que los ciudadanos manejan sobre ellas, los criterios de evaluación de las políticas y del gobierno, y el desempeño mismo de dichas instituciones. Sobre la información, los medios de comunicación masivos juegan un rol crucial. Dada su tendencia a reportar lo conflictivo y lo controversial, es más probable que tienda a generar imágenes negativas sobre el desempeño de las instituciones. No obstante, los medios no lo son todo. También el desempeño de las instituciones mismas afecta esas creencias. Si el funcionamiento de éstas es defectuoso, entonces la cobertura noticiosa será negativa y la realidad estará todavía más alejada de las aspiraciones, en cuyo caso, las percepciones sobre las instituciones se deteriorarán y la confianza que los ciudadanos depositan en ellas caerá.

Así, las visiones negativas sobre las instituciones, que algunos le atribuían exageradamente el carácter de crisis y que otros llamaban malestar, tienen un origen definido. Es probable que la evolución más reciente de la desconfianza en las instituciones políticas se explique por las investigaciones judiciales de financiamiento ilegal de la política y corrupción, y que su tendencia creciente, de las últimas dos décadas, se explique por un desempeño de tales instituciones que no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos esperan de éstas. Aunque están separadas por fines expositivos, ambas apuntan a lo mismo: el funcionamiento de las instituciones. Bajo esta perspectiva es crucial mejorar el desempeño de éstas y así revertir los bajos niveles de confianza y, a su vez, mejorar la percepción del sistema político.

Para ello, por un lado, se requieren reformas que minimicen el riesgo de corrupción, dado el impacto que ésta tiene en la confianza institucional y en todo el sistema político, aun cuando se trate de una percepción de carácter más generalizado que vivencial.

Pero la corrupción es sólo una dimensión de un desempeño defectuoso. Hay otra dimensión que involucra la calidad de las prestaciones del Estado. Las encuestas CEP revelan mucha insatisfacción de la ciudadanía con los servicios que el Estado entrega en diversas áreas, como salud, educación y prevención de la delincuencia. Si consideramos que la mayoría de la población considera que los problemas sociales están resueltos cuando las soluciones tienen un impacto concreto, positivo y personal en la vida cotidiana, entonces, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones también es necesario implementar una reforma profunda a los servicios prestados por el Estado, de modo que los servicios generen tal impacto en la vida cotidiana de los chilenos. En este sentido, por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelandia y Canadá han implementado el uso de tecnologías para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad de la gestión de los servicios públicos. En Chile, hemos dado los primeros pasos con proyectos como ChileAtiende, pero todavía queda mucho por avanzar. La modernización de los servicios públicos puede pensarse buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sin dejar de lado la pregunta acerca de cómo estos servicios pueden hacer una diferencia importante en la vida diaria de las personas.



7. PARA QUE EL BIENESTAR SIGA CRECIENDO

Para seguir avanzando en bienestar, los hallazgos de este Informe apuntan a que el crecimiento de los ingresos y la calidad de la educación deben ser prioridad. El primero está asociado directa y positivamente con la satisfacción con la vida. El segundo está vinculado indirectamente con el bienestar, mediante la relación que tiene con la movilidad social: aquellos que alcanzan niveles de educación superiores que sus padres declaran también alcanzar una posición social más alta y por ello, niveles de satisfacción mayores. Aunque la masificación de la educación ha generado que la mayoría alcance niveles educativos más altos que los padres, todavía hay grupos de la población que no lo logran. Ello, sumado a la mala calidad de la educación de algunos establecimientos, frustra la promesa de ascenso social y reduce el bienestar.

Por una parte, en educación, los especialistas afirman que los problemas son principalmente de gestión, calidad, alineamiento de remuneraciones con el desempeño de los profesores, selección de directores, y financiamiento. En particular, en el nivel escolar municipal y particular-subvencionado existen problemas de calidad en todos los niveles, lo que afecta a los estudiantes de hogares de los tres quintiles de menores ingresos. En tanto, en la educación superior se ha avanzado mucho en acceso, pero hay problemas de costo, gestión y financiamiento en universidades públicas, y de calidad, financiamiento de estudiantes, información y supervisión de calidad en universidades privadas.

Una educación de buena calidad no sólo genera percepciones de movilidad social

y mayor bienestar, también estimula el emprendimiento y la innovación (cruciales para converger al ingreso de países desarrollados) y ayuda a reducir la desigualdad. De todos modos, cualquier reforma en educación rendirá sus frutos en el largo plazo. Por esa razón, hay que resolver el problema lo antes posible.

Por otra parte, para elevar el crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita, en el corto plazo, se requieren políticas que aumenten las tasas de participación laboral, en particular de jóvenes y mujeres. Para ello, es clave mejorar la capacitación y el aprendizaje en el trabajo, y promover políticas que faciliten el empleo y reduzcan la informalidad. Aumentar el crecimiento de largo plazo, en tanto, requiere de una contribución importante de la productividad total de factores, lo que se puede lograr reforzando la competencia, apuntalando la infraestructura pública para reducir los costos de transporte y mejorando la eficiencia del Estado.

Por último, el Informe también muestra que la pérdida en satisfacción con la vida al estar un peldaño más abajo que los padres en la escala de posición social es mayor que la ganancia en bienestar generada por subir un peldaño en la misma escala. Esto significa que la población quiere seguir avanzando y que resiente bastante la desaceleración del progreso. Bajo esta perspectiva, entonces, la prolongación del estancamiento del crecimiento de los últimos tres años podría ser la semilla de un malestar de naturaleza diferente en el futuro, uno asociado efectivamente a la pérdida de bienestar (subjetivo).



Aquellos que alcanzan niveles de educación superiores que sus padres declaran también alcanzar una posición social más alta y por ello, niveles de satisfacción mayores.



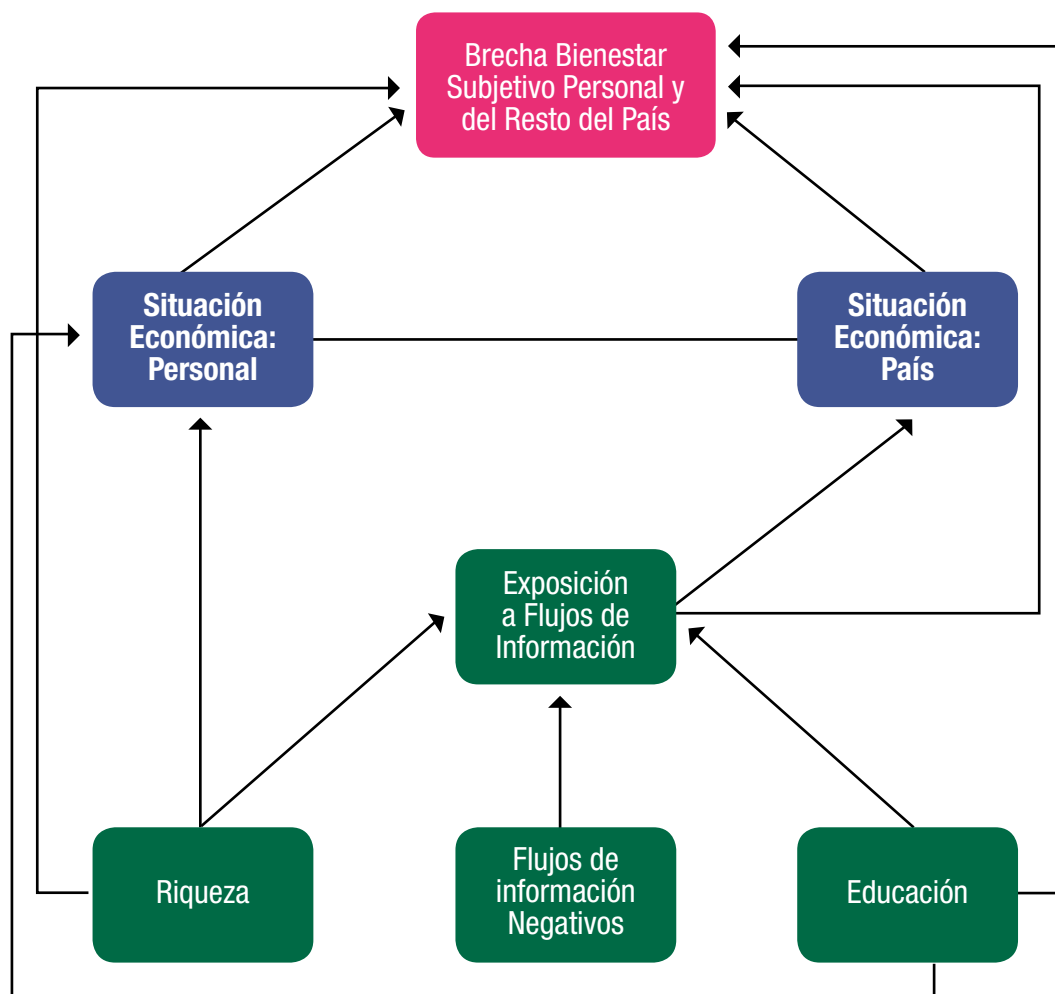


Capítulo 1:

¿DE QUÉ MALESTAR ESTAMOS HABLANDO?



MAPA CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 1



SÍNTESIS

Uno de los aspectos que caracterizó el año 2016 fue el pesimismo respecto de la situación del país, derivado del deterioro de la situación económica y las investigaciones de financiamiento ilegal de la política, entre otras razones. Todo ello alimentó las críticas hacia el modelo de desarrollo chileno seguido durante los últimos treinta años, similares a las surgidas el 2011 tras las masivas movilizaciones sociales. La interpretación fue que tras estas manifestaciones había rabia, la cual los detractores del modelo llamaron “malestar social” al momento de aludir a tal sensación.

Sin embargo, el malestar atribuido a la población no aparecía en las encuestas. Una y otra vez, éstas mostraban que los chilenos estaban muy satisfechos con sus vidas, alcanzando niveles superiores a lo observado veinte años atrás. Más aún, percibían que sus amigos y familiares también estaban muy satisfechos con sus vidas. No obstante, la gente sentía que, en promedio, el resto del país estaba más insatisfecho que ellos mismos y su entorno. En este sentido, los críticos no eran diferentes de los encuestados en cuanto a cómo percibían al resto del país.

La discrepancia observada en cuanto a la satisfacción con la vida propia y con la del resto del país no se limita a las opiniones relacionadas a este ámbito. Existe una brecha parecida entre la evaluación de la situación económica personal y la del país. Hasta 2011 ambas percepciones seguían una trayectoria equivalente. Sin embargo, a partir de dicho año observamos una creciente brecha entre los juicios referidos a las condiciones propias y aquellos referidos a las circunstancias

colectivas. Esta disociación personal-colectiva pareciera ser de una naturaleza similar y surge al mismo tiempo que el llamado “malestar social”.

¿Cómo podemos entender esa brecha creciente entre la evaluación de su situación particular y la colectiva, especialmente, aquella referida a la satisfacción con la vida? La aproximación desarrollada en este capítulo interpreta las declaraciones de los encuestados como procesos cognitivos que aluden no sólo a su experiencia sino que además a sus valores, predisposiciones e “imágenes mentales” respecto al mundo en el que viven. Así, el malestar que muchos creían que yacía en las percepciones acerca de la vida propia, aparece en las creencias sobre las vidas de los demás. Un análisis estadístico revela que estas creencias dependen de ciertas características: las personas más educadas, con mayor acceso a bienes de consumo y más expuestas a los flujos de información política mediatizada tienden a evaluar de peor manera la situación colectiva cuando los contenidos transmitidos por los medios se vuelven más negativos como, por ejemplo, cuando hay más incertidumbre económica.

Los episodios ocurridos durante los últimos años han generado una imagen mucho más negativa respecto a la situación del país, pero no han reducido la satisfacción de las personas con sus propias vidas. De este modo, pareciera que el malestar es un fenómeno asociado al mundo circundante, al cual sólo es posible acceder a través de información mediatizada, y no a través de la experiencia cotidiana.

INTRODUCCIÓN

El año 2016 estuvo marcado por el pesimismo respecto de la situación del país. Razones para ello no faltaban. A la caída de la tasa de crecimiento y al deterioro de las expectativas económicas se sumó el impacto noticioso de las investigaciones de financiamiento ilegal de la política iniciadas en 2014 y 2015 y estafas a consumidores en diversos mercados. Todo ello alimentó las críticas hacia los sistemas económico y político construidos en nuestro país durante los últimos treinta años.

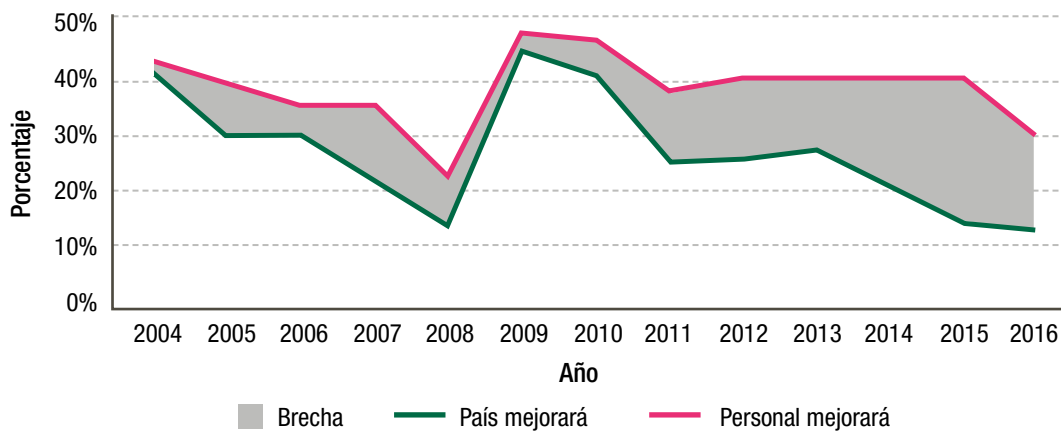
Este cuadro de relativa insatisfacción con el tipo de sociedad construido no estuvo presente únicamente el 2016. Las masivas movilizaciones sociales de 2011 y los años posteriores visibilizaron los cuestionamientos hacia nuestro modelo de desarrollo. Algunos argumentaron que detrás de estas críticas había rabia. Más aún, como cada grupo que protestaba tenía una razón específica para hacerlo, se especuló que se trataba de un fenómeno transversal. Los detractores del modelo hablaban de “malestar” cuando aludían al enojo, la rabia y la insatisfacción de los manifestantes que, de acuerdo a

ellos, también debía sentir la población como un todo. El factor común a todas estas expresiones de molestia, pensaron algunos, era la desigualdad. Por lo tanto, si la desigualdad no se enfrentaba, el enojo crecería generando una posibilidad de desborde institucional.

Había, sin embargo, otros antecedentes que revelaban que no era claro que ese malestar estuviera presente. Los estudios de opinión pública mostraban una y otra vez chilenos muy satisfechos con sus vidas, alcanzando niveles superiores a lo observado veinte años atrás. Antes que malestar, las encuestas registraban que, entre los chilenos, predominaba el bienestar (subjetivo), al igual que en su entorno cercano, amigos y familiares. No obstante lo anterior, al mismo tiempo, los chilenos percibían que, en promedio, el resto del país estaba más insatisfecho que ellos mismos y su entorno. En este sentido, los críticos del modelo no eran diferentes de los encuestados en cuanto a las percepciones respecto del resto de los chilenos.

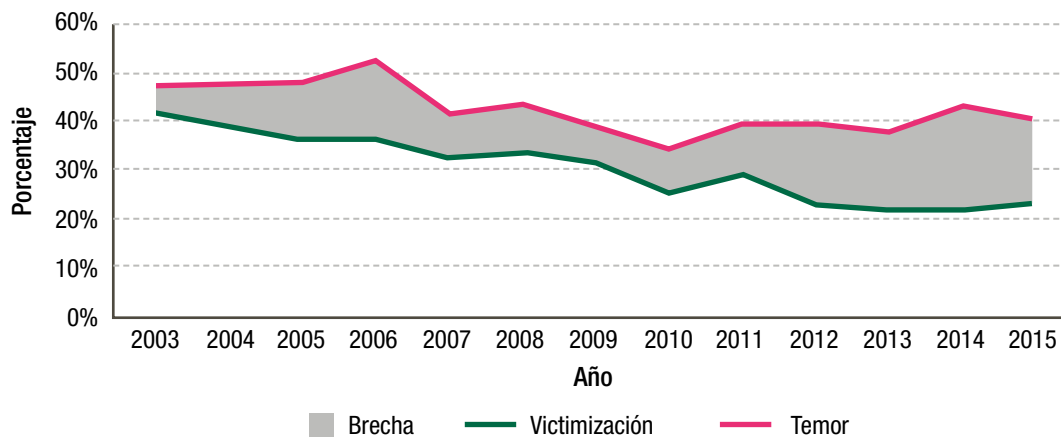
Las personas más educadas, con mayor acceso a bienes de consumo y más expuestas a los flujos de información política mediatizada tienden a evaluar de peor manera la situación colectiva cuando los contenidos transmitidos por los medios se vuelven más negativos como, por ejemplo, cuando hay más incertidumbre económica.

Gráfico 1: Proyecciones de la situación económica personal y del país, 2004-2016



Nota: Porcentajes de personas con proyección positiva de su situación económica y de la situación del país y brecha (diferencia) entre ambos porcentajes, 2004-2015. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP.

Gráfico 2: Victimización y temor a la delincuencia, 2003-2015



Nota: Porcentaje de personas que declaran que alguien ha sido víctima de un delito violento en los últimos 12 meses (i.e. victimización), personas que declaran que creen que serán víctima de un delito violento en los próximos 12 meses, y brecha (diferencia entre ambos porcentajes, 2003-2014). Fuente: elaboración propia a partir de datos de ENUSC (Ministerio de Interior).



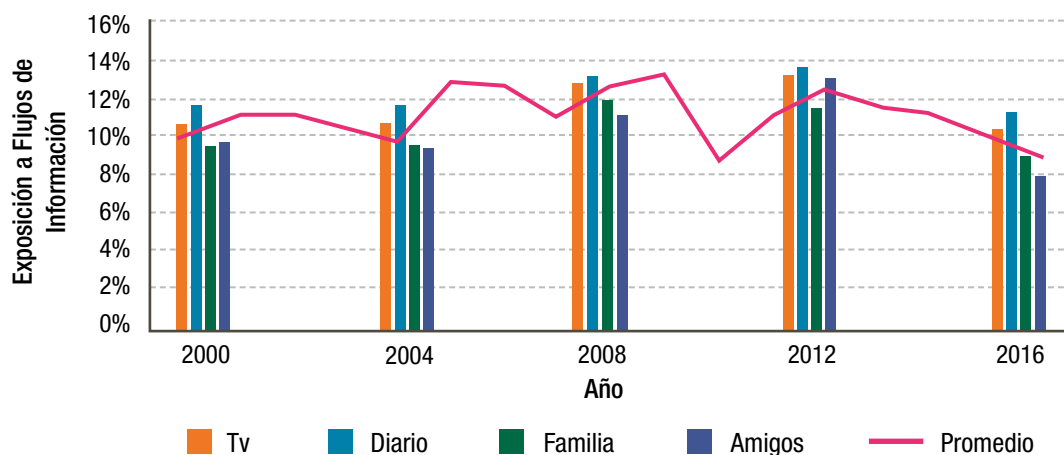
La discrepancia observada no se limita a las opiniones relacionadas a la satisfacción con la vida. El **Gráfico 1** muestra la brecha entre la evaluación de la situación económica del país y la situación económica personal de los encuestados. Como se puede observar de la figura, ambas series suelen moverse aproximadamente en paralelo hasta 2011, año a partir del cual la distancia entre ambas comienza a crecer, alcanzando su máximo histórico en 2015, aunque retrocediendo en 2016.

Este fenómeno de disociación entre la experiencia personal y la percepción generalizada del resto también se aprecia en otras áreas como, por ejemplo, en las cifras de delincuencia. Las Encuestas de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestran que, a pesar de la caída sistemática de la victimización (experiencia personal/vivencial) en los últimos años, el temor a los delitos violentos (percepción generalizada) se ha mantenido elevado, e incluso ha subido en el pasado reciente (ver **Gráfico 2**). En este caso también se observa que a partir del 2011 las brechas comienzan a crecer

llegando a su máximo histórico en 2014, y bajando levemente en 2015.

Las brechas entre las percepciones de la situación personal y general de los chilenos han ido aumentando en los últimos años, a pesar de que no se han producido grandes cambios en la situación económica del país. Por ejemplo, la tasa de desempleo y el ingreso promedio de los hogares se ha mantenido estable, el involucramiento de los chilenos con la política, la frecuencia en que las personas se exponen a temas políticos en la televisión, la prensa, las conversaciones familiares y con amistades también se han mantenido estables, como se puede apreciar en el **Gráfico 3**. Entonces, ¿cómo podemos entender la diferencia creciente entre los juicios evaluativos de los chilenos referidos a su situación particular y los vinculados a la situación colectiva? Creemos que estudiando este distanciamiento entre ambas percepciones podríamos encontrar una explicación plausible al fenómeno bautizado como “malestar social”, y dar cuenta de cómo éste convive con altos niveles de bienestar entre los ciudadanos.

Gráfico 3: Exposición a flujos de información, 2000-2016



Nota: Porcentaje de personas que declaran que frecuentemente sigue o discute noticias políticas en televisión, diarios, con familiares, y con amigos; y promedio entre los anteriores, 2000-2016. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP.

Nuestra intención en este capítulo es explorar las tensiones entre las percepciones de la situación personal de los chilenos y las percepciones referidas al colectivo, en particular, aquellas que dicen relación con la satisfacción con la vida, de modo de aportar una visión alternativa al debate sobre el aparente malestar que afectaría a la sociedad chilena.

satisfacción vital personal y atribuida al resto del país, utilizando datos de las encuestas CEP, enfocando la discusión a posibles diferencias individuales derivadas del nivel socioeconómico y la exposición a flujos de información. La cuarta (4), por último, resume los hallazgos del capítulo y su relación con el debate del malestar en Chile.

El texto que sigue se divide en cuatro partes. La primera (1) revisa la literatura nacional que busca comprender el malestar, exponiendo sus argumentos y su vínculo (si alguno) con la discusión acerca de las tensiones entre las percepciones sobre lo personal y lo colectivo, además de justificar el modo de aproximación seguida en este capítulo para estudiar el malestar. La segunda (2) elabora un marco conceptual que permite asociar el malestar a la diferencia entre el bienestar subjetivo personal y el percibido para el colectivo, a partir del cual se derivan implicancias relevantes para entender el caso chileno. La tercera (3) busca poner a prueba tales implicancias, a través de un análisis empírico de la brecha entre la

En este capítulo se exploran las tensiones entre las percepciones de la situación personal de los chilenos y las percepciones referidas al colectivo, en particular, aquellas que dicen relación con la satisfacción con la vida.

1. LAS TESIS DEL MALESTAR

La literatura que estudia el malestar es diversa, en parte, debido a que el concepto mismo definido como una incomodidad difusa no precisa las dimensiones respecto de dónde se manifestaría tal sensación. Por esta razón, algunos estudiosos del tema han hecho esfuerzos significativos para darle contenido a esta tesis, especificando sus características a partir de marcos teóricos y evidencia empírica. En otros contextos, el discurso político también le ha asignado un significado al malestar.

La tesis del malestar, como concepto para dar cuenta de la realidad de la sociedad chilena, surge con fuerza hacia finales de la década de los 90, con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 1998. Este informe planteaba que el proceso de modernización en Chile, iniciado en dictadura, generó una serie de beneficios, como altas tasas de crecimiento, incrementos de los salarios reales, más empleo, un importante descenso de la tasa de pobreza, inflación baja y estable, y una percepción de que la situación personal de los individuos era mejor que la de sus padres. Pero, al mismo tiempo, aventuraba que tal progreso coexistía con “(...) grados más o menos significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de las personas con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo” (PNUD, 1998, p. 16).

Según este estudio, la desconfianza hacia los individuos surgiría a partir de “tres temores básicos: el temor al otro, el temor a la exclusión social, el temor al sin sentido” (PNUD, 1998, p. 21). La manifestación de este “miedo al otro” reposaría, “más allá de las tasas reales de delitos, sobre la imagen metafórica de un delincuente omnipotente y omnipresente, que condensa un temor generalizado y, por lo mismo, exagerado” (PNUD, 1998, p. 22). Así, por un lado, este fenómeno se explicaría por las deficiencias en el logro de mayor seguridad ciudadana y, por otro lado, por la debilidad de los lazos entre personas, que las instituciones públicas no pueden reforzar debido a la falta

de reconocimiento y representación (PNUD, 1998, p. 23).

La desconfianza asociada a los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo, en tanto, estaría vinculada a la ineffectividad de las instituciones para entregar seguridad en el acceso a los servicios en los ámbitos antes señalados. Según el informe, “el excesivo énfasis en la monetarización de los riesgos, sin considerar el carácter de servicio a las personas” y “la tradicional distribución desigual de las oportunidades y su acceso incierto a ellas” (PNUD, 1998, p. 27) serían las fuentes de esa inseguridad.

Lo que plantea el PNUD es que existiría una brecha entre la “seguridad objetiva”, aquella que las instituciones entregan a través de las políticas públicas, y la “seguridad subjetiva”, aquella que perciben los individuos. La encuesta CEP-PNUD 1997, utilizada por el PNUD para hacer este diagnóstico, registró una gran preocupación de las personas por acontecimientos esperados, como la vejez, y otros inesperados, como enfermedades catastróficas imprevistas, lo que confirmaría que los mecanismos institucionales existentes no entregarían la seguridad que deberían.

Resulta evidente que para quien aspira a una sociedad basada en certezas, tanto la democracia como el mercado representan una amenaza, debido a que ambos sistemas involucran incertidumbre, competencia y cambio (Brunner, 1998).



En respuesta a este marco conceptual, el sociólogo José Joaquín Brunner (1998) señalaba entonces que los “bajos niveles de conflictividad” en la sociedad chilena de ese momento, y “el escaso espíritu de protesta”, sumado al hecho de que la mayoría de la población declaraba ser feliz, contrastaban con el diagnóstico del malestar, que derivaba, según su visión, de “...interpretar el no-voto y la votación nula como una manifestación de descontento y/o protesta contra el modelo de desarrollo y las políticas de Gobierno” en las elecciones del 11 de diciembre de 1997 (Brunner, 1998, p. 183).

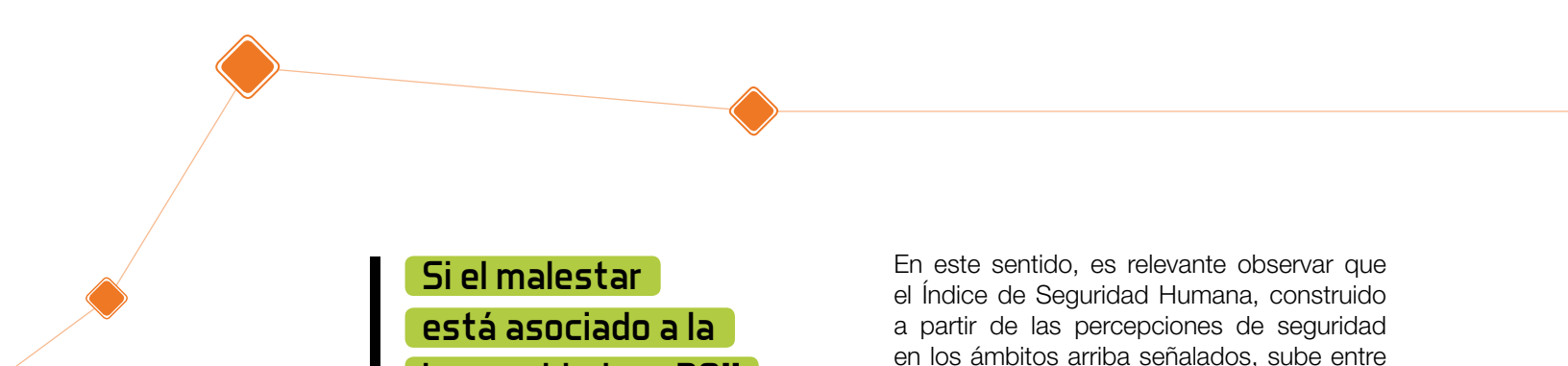
Brunner (1998) esbozaba otra hipótesis para explicar lo que sucedía en Chile a fines de los 90. Afirmaba que “la gente desea seguir mejorando sus condiciones de vida —y de su familia— pero más rápido. Quiere ‘más de lo mismo’ pero en un menor tiempo, de manera de, así, satisfacer sus expectativas.

Está dispuesta a trabajar duro, incluso a endeudarse. Pero, al mismo tiempo, desconfía —por su propia experiencia de las desigualdades— de que el crecimiento vaya a beneficiarlos directa y oportunamente y brindarles acceso a los servicios esenciales que debe proporcionar la sociedad” (Brunner, 1998, p. 187).

Así, Brunner sostenía que lo que ocurría en Chile era “(...) un cuadro matizado y

complejo de percepciones y opiniones, con reconocimiento de progresos que se corresponden con los indicadores objetivos de mejoría en las condiciones de vida de las personas; altas expectativas de mediano y corto plazo; nítida identificación de desigualdades y señalamiento claro y concordante de problemas prioritarios, los cuales tienen que ver, principalmente, con acceso a servicios esenciales y con las condiciones de vida en la esfera privada” (Brunner, 1998, p. 186). Más aún, Brunner (1998) criticaba la teoría que vinculaba el malestar con las inseguridades. Argumentaba que tal teoría “poco tiene que ver con las sociedades modernas y con una visión del orden humano como esencialmente abierto, incierto y desprovisto de garantías fundacionales” (Brunner, 1998, p. 195).

Visto así, resulta evidente que para quien aspira a una sociedad basada en certezas, tanto la democracia como el mercado representan una amenaza, debido a que ambos sistemas involucran incertidumbre, competencia y cambio. De esta forma, estaríamos frente a una paradoja: la misma centro-izquierda que luchó por restablecer la democracia y sostuvo el proceso de modernización, y por lo tanto, la incertidumbre, la competencia y el cambio, añora “restituir un orden de certezas comunitarias, seguridades públicas y valores capaces de refundar una subjetividad colectiva integrada” (Brunner, 1998, p. 196).



**Si el malestar
está asociado a la
inseguridad, en 2011
habría menos malestar
porque los chilenos
percibían mayor
seguridad que en 1997.**

El discurso del malestar volvió con fuerza durante 2011, adaptando parcialmente los mismos argumentos de 1998 a los nuevos tiempos. En particular, el informe PNUD 2012, a través del enfoque de bienestar subjetivo, registró la existencia de una elevada y creciente satisfacción de los chilenos por la vida propia y, al mismo tiempo, insatisfacción, también en aumento, con la sociedad. Esta insatisfacción se midió a través de un indicador de confianza en instituciones políticas y de una evaluación de las oportunidades que el país entregaba en una serie de ámbitos. A través del análisis estadístico, el informe determinó cuáles eran los factores más relevantes detrás de la satisfacción con la vida propia y el malestar social. Entre los primeros, mencionaba “tener buena salud”, “tener las necesidades físicas y materiales básicas cubiertas”, “contar con vínculos significativos con los demás”, “ser reconocido y respetado en dignidad y derechos” y “poseer y desarrollar un proyecto de vida propio”. A su vez, en los aspectos más relacionados con la sociedad estaban “sentirse seguro y libre de amenazas” en ámbitos como la salud, el trabajo, la previsión y la delincuencia y “sentirse respetado en dignidad y derechos”. Como se puede apreciar, la inseguridad aparecía en una serie de áreas que respondían a los tres temores básicos (temor al otro, a la exclusión social y al sin sentido), previamente identificados en el informe PNUD 1998.

En este sentido, es relevante observar que el Índice de Seguridad Humana, construido a partir de las percepciones de seguridad en los ámbitos arriba señalados, sube entre 1997 y 2011, mientras que la satisfacción con la sociedad cae, producto de una creciente desconfianza en las instituciones. Podría interpretarse entonces que, si el malestar está asociado a la inseguridad, en 2011 habría menos malestar porque los chilenos percibían mayor seguridad que en 1997. De ahí que si el malestar con la sociedad está asociado a la desconfianza en las instituciones políticas, entonces la inseguridad no podría ser la causa del malestar porque la primera ha aumentado al mismo tiempo que la segunda ha decaído. Es más, el análisis de regresión del informe PNUD 2012 exhibe la escasa correlación que tiene el Índice de Seguridad Humana (ISH) con indicadores de bienestar subjetivo individual y de la sociedad. Todo ello permite poner en duda la hipótesis de la inseguridad como origen principal del malestar.

Como telón de fondo de la mirada crítica, aparece nuevamente la desigualdad, tanto en la satisfacción de las necesidades materiales básicas, al igual que en 1998, como de vínculos y proyecto de vida, lo que sería un hallazgo del informe de 2012. Más aún, este estudio reporta la existencia de un 28 por ciento de personas en Chile que han percibido una “falta de respeto a la dignidad y los derechos”, aspecto que estaría distribuido igualitariamente por grupos socioeconómicos, pese a que la percepción de que se puede hacer frente a estas situaciones con éxito estaría distribuida desigualmente.

Esta visión del malestar fue adoptada en el discurso político, tal como se aprecia en las palabras de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet, marzo 2013, al momento de aceptar su nominación: “Sabemos que hay un malestar ciudadano bastante transversal. Lo hemos visto en

los estudiantes, en su movilización por una educación gratuita y de calidad. Lo hemos visto también en una clase media que se siente excluida y desprotegida. (...) La enorme desigualdad en Chile es el motivo principal del enojo; un enojo que se manifiesta, además, como desconfianza en las instituciones”.

Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2013, el gobierno que encabeza ha perseverado en este discurso como eje organizador de las reformas propuestas, a pesar de las dificultades y la baja aprobación de la conducción del mismo. En noviembre de 2015, el Ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, se refería al tema: “Hay una interpretación, que algunos sostenemos, es una corriente de malestar que subyace a la sociedad chilena y que tiene que ver con la insatisfacción del tipo de sociedad y el modelo de desarrollo que hemos construido”. Además, el ministro afirmaba la presencia de “una crisis de confianza severa”, que “(...) si se mal administra y no se enfrenta adecuadamente, podría derivar en mayores niveles de inestabilidad política y social e institucional”, señalando también “la desigualdad, los privilegios, los abusos” como una de las fuentes de esa desconfianza.

A partir de las manifestaciones de diversos movimientos sociales en 2011 surgieron otras interpretaciones. Una de ellas fue elaborada por el sociólogo Alberto Mayol (2011), quien se refería al malestar como el “(...) informe carácter de la energía social y activa de una demanda que, sin embargo, trasciende todo texto, todo petitorio y que se relaciona con el todo de la sociedad” (Mayol, 2011, p. 41). Además, afirmaba que “(...) las sociedades desiguales normalmente tienen mucho malestar por eso mismo y que normalmente se politizan por necesidad”.

Concluía, entonces, que los movimientos sociales que proliferaron el 2011 serían una expresión de ese malestar.

Además, Mayol (2011) advertía que el explosivo aumento de la tasa de suicidios desde 1990 y del consumo de antidepresivos tenía relación con el malestar. Otros investigadores como Orchard y Jiménez (2015) observaron que el malestar con la sociedad (definido por el informe PNUD 2012) crecía a un ritmo similar que la tasa de suicidios y el consumo de antidepresivos, lo que le otorgaba cierta plausibilidad a la hipótesis de Mayol, a pesar de que el alza de los indicadores de sintomatología depresiva se podría haber producido por la transición epidemiológica¹ acelerada que está atravesando el país, y no a causa del malestar así definido, o incluso por una mejora en la capacidad de recolección de datos en ambos aspectos.

Orchard y Jiménez, usando los datos del informe PNUD 2012, obtuvieron una correlación positiva entre malestar social y un indicador de sufrimiento síquico, aunque de magnitud cercana a cero. Los autores señalaban que la inseguridad humana subjetiva, la experiencia de maltrato y la percepción de soledad estaban muy relacionadas con el malestar social y con la sintomatología depresiva.

La mayoría de los estudios previos sitúan el origen del malestar en las condiciones materiales y sociales de la vida de los chilenos.

¹ Se refiere al proceso de cambio de la distribución de morbilidad y mortalidad de la población. Generalmente, estos cambios tienen relación con una prevalencia más baja de enfermedades transmisibles y más alta de no transmisibles y una caída de la tasa de mortalidad y morbilidad de los más jóvenes, pero más altas entre los mayores, sólo por nombrar algunos aspectos.



De acuerdo a varios estudios previos, se requieren transformaciones de las condiciones materiales y sociales, generalmente, por la vía de reformas a las instituciones políticas y de mercado para eliminar el malestar.

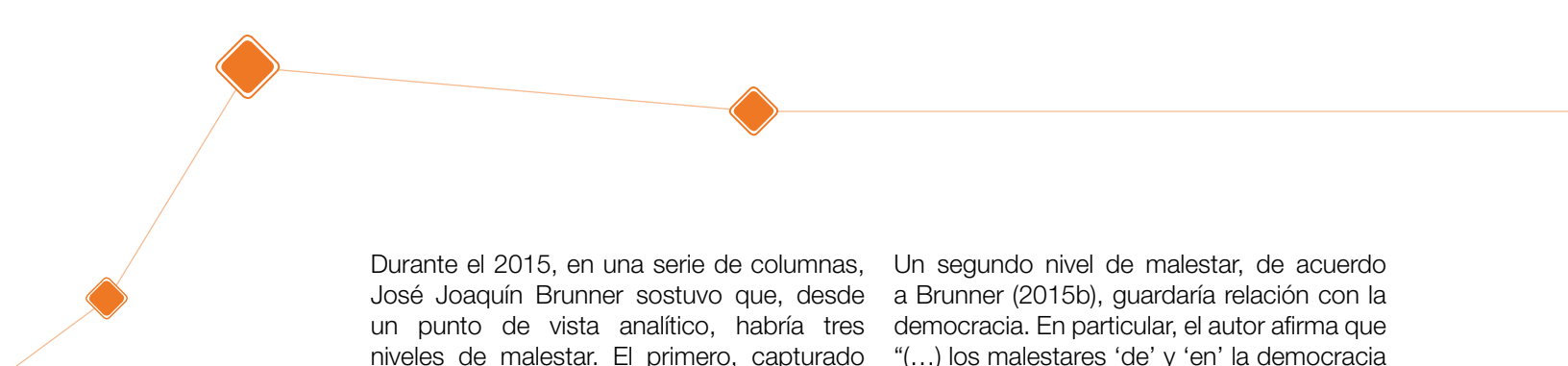
Por lo tanto, si tanto el malestar como el sufrimiento síquico crecían con el paso del tiempo era porque compartían determinantes similares, no porque se tratase del mismo fenómeno. En otras palabras, la casi inexistente correlación entre el malestar social y la sintomatología depresiva no implicaría, necesariamente, que uno sea el origen del otro, como lo planteaba Mayol.

La mayoría de estos estudios sitúan el origen del malestar en las condiciones materiales y sociales de la vida de los chilenos. Por lo tanto, para eliminar el malestar se requieren transformaciones de estas condiciones, generalmente, por la vía de reformas a las instituciones políticas, y especialmente, de mercado. Una prueba adicional de este aspecto se puede apreciar en el libro *El Otro Modelo*, en el que se señala que: “cuando ciertas esferas de la existencia humana (como la salud o la educación) quedan entregadas al individuo y a su familia, el sentimiento de vivir en comunidad se pierde y el malestar aparece” (Atria et al., 2013, p. 25).

Hay, sin embargo, otras interpretaciones de las movilizaciones del 2011, que no involucraban transformaciones radicales a las condiciones materiales y al modelo de desarrollo chileno.

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, por ejemplo, en una entrevista publicada en *La Tercera* en agosto 2012, afirmó que el “descontento y la conflictividad que ha habido en el país” se explicaba por la existencia de “personas secularizadas, con mayores expectativas que sus padres” y por “una inmensa frustración: [...] Hace 30 años, ir a la universidad aseguraba una alta posición en la escala invisible del prestigio y del poder: eso hoy día ya no ocurre y entonces el acceso se experimenta como un engaño” y por “una crisis de legitimidad” en el ámbito político: “de pronto en Chile se descubre que el lugar meritocrático por excelencia, la institución educativa, no hace más que reproducir las diferencias de clase social. En otras palabras, el proceso de modernización capitalista en Chile no tiene instituciones a la altura de los ideales que invoca para justificarse”. Respecto al modelo de desarrollo, Peña afirmaba que “la encuesta CEP muestra que los ideales de una sociedad capitalista —el esfuerzo personal, la distribución de la riqueza en base al esfuerzo, etcétera— están muy vigentes entre los chilenos. Me es difícil creer que esa sociedad esté reñida en el fondo de su alma con el proceso de modernización. Más bien lo que quiere es que esté a la altura de las promesas que formuló, que es distinto” (Peña, 2012).

En una línea similar, Oppliger y Guzmán (2012) aseveraban que las mayores expectativas de la población en una serie de ámbitos corresponden más bien al reflejo de los éxitos del modelo que de sus fracasos. De acuerdo a su interpretación sobre lo acontecido el 2011, lo que los ciudadanos esperaban es que se estudiaran y resolviesen los problemas, pero no una reformulación de las instituciones del sistema económico y político del país. Incluso sostienen que las protestas del 2011 “no fueron tantas, ni tan masivas ni tan diversas como para que se justifique hablar de ‘movilización social’, (sino que) expresaron el empoderamiento de una ciudadanía que busca hacer valer sus derechos” (Oppliger y Guzmán, 2012, p. 155).



Durante el 2015, en una serie de columnas, José Joaquín Brunner sostuvo que, desde un punto de vista analítico, habría tres niveles de malestar. El primero, capturado a través de las encuestas, se expresaría a través de la baja aprobación del gobierno, la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas, las expectativas pesimistas, tanto a nivel económico como político, las inseguridades, preocupaciones e incertidumbre de diversa naturaleza y grados variables de satisfacción e insatisfacción con la “provisión de bienestar” de las organizaciones públicas y privadas. A juicio de Brunner (2015a), todas estas expresiones “no son demostrativos de una ‘incomodidad indefinible’, sino de disgustos, desazones, enfados y fastidios bien precisos”, tesis similar a la planteada por él mismo en 1998. Por esa razón, sostiene que el malestar “viene a ser entonces la combinación intersubjetiva de múltiples cuitas motivadas por fallas bien determinadas en diferentes sectores de la sociedad, provocada (esa combinación) por una sensación más general de pérdida de dirección y control de la sociedad, de falta de gobernanza del sistema en su conjunto, de fallas de conducción que crean incertidumbre y confusión respecto del futuro y sensación de falta de gestión de la polis en el presente”.

El malestar aparece como una tensión entre las percepciones de los individuos acerca de la vida propia y la que ellos (población general y críticos del modelo de desarrollo chileno) le atribuyen al resto.

Un segundo nivel de malestar, de acuerdo a Brunner (2015b), guardaría relación con la democracia. En particular, el autor afirma que “(...) los malestares ‘de’ y ‘en’ la democracia son consecuencia de que sus ideales más altos no pueden cumplirse en plenitud”. Expresiones de este sentimiento serían la apatía política producida por un cierto déficit de representación, la abstención electoral y la desconfianza en los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno, los funcionarios públicos y los Tribunales de Justicia. El autor sostiene que los ideales de la democracia (igualdad, libertad y fraternidad) estarían en constante tensión con el capitalismo, que organiza la producción, la propiedad, distribuye el ingreso y genera jerarquías de clase. “La contradictoria relación de capitalismo y democracia” estaría en el trasfondo del malestar.

El tercer nivel que plantea Brunner (2015c) sería más profundo que los anteriores, vinculándose a la modernización capitalista. En particular, el autor afirma que se refiere a los malestares “(...) que se constituyen en el campo de las relaciones de producción en torno al trabajo asalariado y sus explotaciones, alienaciones y frustraciones y se proyectan hacia variadas dimensiones de la cultura y la subjetividad de las personas, incluso la esfera más íntima del yo”.

En otras palabras, lo que Brunner señala es que la sociedad chilena está cruzada por una serie de malestares, en distintos niveles, que a menudo se confunden en la discusión pública. Además, sostiene que tanto las visiones optimistas como las catastrofistas respecto del fenómeno “(...) terminan con un concepto genérico que poco ayuda al análisis y al entendimiento de los procesos involucrados en la gestación, expresión y comunicación de los malestares”. De este análisis, el autor concluye que una sociedad sin malestares es una utopía, aunque esa no sería razón suficiente para no preocuparse por los niveles de malestar previamente identificados.

Harald Beyer (2015) aporta otra visión del tema al sostener que los elevados y crecientes niveles de satisfacción con la vida que tienen los chilenos, según lo revelan diversos estudios de opinión pública, no serían compatibles con las diversas teorías del malestar que, a pesar de sus matices, confluyen en un punto común: la decepción con el momento actual. Esta mirada crítica, de acuerdo al autor, podría responder “a la falta de conocimiento y cercanía respecto de lo que está pasando en una realidad que es cada vez más compleja”, algo propio de la modernidad y por cierto, débilmente relacionado con una visión alternativa específica al orden social existente. Por esa razón, Beyer invita a dejar de lado la idea de “politización del malestar”, debido a que resulta poco fértil para hacerse cargo de los temores específicos de la población, los cuales se pueden atender sin necesidad de reducir los espacios de libertad.

Visto así, el malestar aparece como una tensión entre las percepciones de los individuos acerca de la vida propia y la que ellos (población general y críticos del modelo de desarrollo chileno) le atribuyen al resto. Creemos que formular el malestar como la diferencia entre la percepción de la realidad personal y colectiva corrige las deficiencias que presentan las interpretaciones del PNUD

y Mayol, entre otras. Por un lado, nuestra definición se construye a partir de juicios directamente relacionados al bienestar de los demás, en vez de recurrir a variables que intermedian –o *proxy*– en este, tales como la confianza en instituciones u otras. Por otro lado, esta interpretación permite conciliar el hecho que el fenómeno que se ha descrito como malestar conviva con altos niveles de satisfacción vital personal, así como con mejoras sustantivas en las condiciones materiales de existencia y acceso a recursos de la gran mayoría de la población durante los últimos treinta años.

Chile es un país que ha enfrentado grandes transformaciones en las décadas pasadas y que por lo tanto, podría estar atravesando un proceso de cambio valórico, a nivel generacional, muy paulatino.

2. ¿CÓMO SE FORMAN LAS PERCEPCIONES?

Si asumimos que el fenómeno empírico del malestar se encuentra en la diferencia entre el bienestar subjetivo personal y el percibido para el colectivo, queda abierta la pregunta sobre cómo hacemos sentido de esta relación. En esta sección intentamos elaborar un marco conceptual para interpretar esta relación, el cual descansa sobre tres pilares teóricos que creemos pueden iluminar los procesos que están detrás de las tensiones ya descritas. Primero, revisaremos las teorías que intentan dar cuenta de cómo los

individuos son capaces de formarse juicios e ideas respecto a objetos abstractos o que trascienden su experiencia personal, apelando a las imágenes mentales, creencias y valores. Segundo, presentaremos las teorías que describen la opinión pública como un proceso evaluativo de respuesta. Tercero, repasaremos las teorías que vinculan la formación de juicios y opiniones con la información a los que están expuestos los individuos en sus vidas cotidianas.

2.1. IMÁGENES MENTALES, CREENCIAS Y VALORES

La pregunta acerca de cómo las personas son capaces de reflexionar y, eventualmente, pronunciarse respecto a temas y objetos que no pueden experimentar directamente ha llamado la atención de los científicos sociales de diversas disciplinas, especialmente la psicología, ciencia política y sociología. Así, se han desarrollado variados enfoques para explicar este fenómeno, y cada uno ha buscado su propio conjunto de conceptos para expresar sus respectivos modelos teóricos.

Uno de los enfoques más populares ha sido la teoría del cambio valórico desarrollada por Ronald Inglehart (1997) y ampliada en conjunto con Christian Welzel (2005). Desde un enfoque de teoría social que mezcla la primacía de la situación material de Marx (2015 [1867]) con la relevancia de los patrones culturales de Weber (2014 [1922]), estos autores (2005) proponen que los valores, entendidos como abstracciones y generalizaciones, son creencias sobre el estado actual y deseable del mundo transmitidos mediante el proceso de socialización a los individuos, es decir, durante la transición a la adultez. Una vez que los valores se estabilizan como condensaciones de sentido y pautas de evaluación en los individuos, éstos difícilmente pueden ser modificados. De acuerdo a este enfoque, los cambios que ocurren en los valores predominantes en una sociedad serán primordialmente intergeneracionales: toda vez que las generaciones más jóvenes son socializadas en contextos materiales y culturales distintos a los de sus padres, internalizan patrones valóricos diferentes a los de las generaciones anteriores.

Si bien el enfoque del cambio valórico es atractivo para explicar transformaciones a largo plazo, como las que hemos visto en Chile las últimas décadas, difícilmente podríamos interpretar la disociación entre la evaluación personal y colectiva con estas herramientas conceptuales porque los cambios de la percepción de la realidad personal y colectiva ocurren en un lapso de cerca de una década, tiempo considerablemente menor al que toma el reemplazo generacional.



Opinión pública es la capacidad que, en mayor o menor medida, poseen las personas para producir un juicio evaluativo de los temas de interés público.

Si bien el enfoque del cambio valórico es atractivo para explicar transformaciones a largo plazo, como las que hemos visto en Chile las últimas décadas debido a que el mecanismo que sugiere es el reemplazo intergeneracional, el cual toma tiempo en concretarse, difícilmente podríamos interpretar la disociación entre la evaluación personal y colectiva con estas herramientas conceptuales porque los cambios de la percepción de la realidad personal y colectiva ocurren en un lapso de cerca de una década, tiempo considerablemente menor al que toma el reemplazo generacional. Por esto, creemos necesario complementar el modelo de Inglehart con otros esquemas teóricos.

Otra teoría que la investigación en opinión pública ha trabajado escasamente es la aproximación fenomenológica, desarrollada principalmente por Alfred Schütz en conjunto con su alumno Thomas Luckmann (2009 [1973]) y su seguidor Peter Berger (2012 [1967]). Tomando el concepto de “mundo de la vida cotidiana” de Husserl (2008 [1936]) —entendido como el acervo de conocimiento experimentado como a—problemático y por consiguiente que permite a los individuos actuar en el mundo a pesar de su relativa ignorancia sobre el mismo— Schütz propone que a partir de una serie de generalizaciones e idealizaciones, las personas construyen pautas interpretativas de la realidad circundante, a pesar de la ausencia de experiencia personal y de información relevante sobre su entorno. Las generalizaciones principales son las de

“y así sucesivamente”, que implica asumir como verdadero para otros casos, lo que se cree cierto para uno (e.g. “Tengo una buena situación económica, el país tiene una buena situación económica”); y la generalización de “puedo volver a hacerlo”, por la cual se puede tomar como válidas suposiciones que resultaron exitosas en el pasado (e.g. “Los demás siempre han estado tan bien como yo, por lo que ahora también deben estarlo”). De este modo, los individuos pueden “hacerse una idea” de una situación relativamente ajena a ellos mismos (e.g. la situación económica del país o el bienestar del resto de la población).

Como señalábamos, el “mundo de la vida cotidiana” suele experimentarse como a—problemático, es decir, como “verdadero hasta nuevo aviso”. Sin embargo, la exposición de los individuos a nuevas experiencias e información puede desafiar los contenidos de este acervo, y por lo tanto, la capacidad del mundo de la vida para ofrecer un esquema interpretativo de la realidad cotidiana de las personas. Es en estos momentos cuando ocurre un proceso de reflexión (o “reflexivización”²), caracterizado por el contraste entre las premisas y creencias (los “y así sucesivamente” y “puedo volver a hacerlo”) con las experiencias del mundo, de modo de seleccionar aquellas que permitan al individuo desenvolverse de mejor manera en su entorno. Estos momentos exigen a los individuos reformular su acervo de conocimiento y posiblemente generar nuevas premisas que les permitan hacer sentido de los cambios en su experiencia cotidiana.

¿Cómo se relaciona la teoría de Schütz con la discusión del malestar, entendido como la tensión entre los juicios sobre la vida propia y la del resto? Primero, esta teoría propone una explicación en la que existe un mayor dinamismo en los marcos interpretativos de las personas respecto a la realidad que los rodea. Este dinamismo no se da sólo a nivel intergeneracional, sino también a nivel individual. Enfrentados a experiencias e

² “Reflexivización” es un concepto propio del marco conceptual, que hace referencia a los procesos por los cuales, al exponerse a información novedosa o contradictoria, los individuos revisan sus predisposiciones presentes en el acervo de conocimiento del mundo de la vida.

información contradictorias con su acervo de conocimiento, los individuos pueden actualizar sus creencias sobre el estado del mundo sin que, necesariamente, alteren sus orientaciones respecto a estos estados (i.e. valores). Por esa razón, la teoría de Schütz complementa el enfoque generacional de Inglehart. De esta manera, ante escenarios de cuestionamiento generalizado de aspectos antes considerados como a-problemáticos, es posible esperar que los individuos atraviesen procesos de reflexión que los lleven a cambios en sus maneras de comprenderse a sí mismos y a su entorno social.

Chile es un país que ha enfrentado grandes transformaciones en las décadas pasadas —y que por lo tanto, podría estar atravesando un proceso de cambio valórico, a nivel generacional, muy paulatino—, pero que a su vez experimenta en la actualidad un proceso de cuestionamiento de las implicancias de estos cambios —proceso de reflexión del entorno social—. Por ambos motivos, creemos que los dos modelos teóricos discutidos explican razonablemente bien el Chile contemporáneo.

2.2. OPINIÓN PÚBLICA COMO JUICIO EVALUATIVO

El concepto de malestar que intenta avanzar este capítulo apela a una tensión entre los juicios sobre la vida propia y la del resto. Tales juicios son capturados cotidianamente por los estudios de opinión pública. Pero, en definitiva, ¿qué es la “opinión pública”? Este concepto suele usarse con frecuencia para referirse a la mera agregación de las opiniones individuales que los ciudadanos tienen respecto a algún tema, como por ejemplo, cuando se señala que la opinión pública respalda (o rechaza) alguna política pública o personaje político. Sin embargo, en este documento entendemos la opinión pública no como un fenómeno agregado, sino como uno que ocurre a un nivel individual: opinión pública es la capacidad que, en mayor o menor medida, poseen las personas para producir un juicio evaluativo de los temas de interés público.

La capacidad de elaborar un juicio evaluativo depende, a su vez, de la aptitud de recurrir a “imágenes mentales” (Lippman, 2012 [1922]) como fuente para elaborarlo. En este sentido, debemos entender las opiniones no como algo que los individuos “poseen”, sino más bien como un proceso que se gatilla cada vez que se requiere, en nuestro caso, toda vez que el participante es enfrentado a una pregunta de encuesta. Es por esto

que la evidencia acumulada en la literatura especializada muestra que muchas veces las opiniones declaradas por los individuos pueden variar sistemáticamente de acuerdo a ligeros cambios en el entorno (e.g. Krosnick y Kinder, 1990) o a diferencias en los métodos y técnicas de medición (e.g. Tourangeau y Smith, 1996; Groves et al., 2011).

Según Zaller las opiniones de los encuestados son producto de fuentes estables, como los valores y las actitudes, y de factores contextuales que varían en el tiempo, como los flujos de información a los cuales las personas se encuentran expuestas.



Si consideramos la opinión pública como un proceso, ¿cómo podemos describir su operación? Uno de los modelos más influyentes es el de John Zaller en su trabajo seminal *The Nature and Origins of Mass Opinion* (1992). En él, este autor plantea que podemos dar cuenta de cómo los individuos producen sus opiniones de acuerdo a cuatro axiomas: (1) *Axioma de Recepción*: mientras más alto el nivel de involucramiento cognitivo de un individuo con un tema, más probable es que ese individuo se encuentre expuesto a flujos de información relacionados con éste; (2) *Axioma de Resistencia*: las personas tienden a resistirse a mensajes contradictorios con sus predisposiciones en la medida en que poseen información suficiente para relacionar el mensaje con sus predisposiciones; (3) *Axioma de Accesibilidad*: mientras más reciente sea una consideración para un individuo, más fácil es para él utilizarla para interpretar un mensaje; y (4) *Axioma de Respuesta*: los individuos producen sus opiniones “promediando” las consideraciones accesibles para ellos en el momento. Según Zaller (1992, p. 49), “este

proceso de cuatro etapas posee un solo paso fundamental: la obtención desde la memoria de una consideración dominante”.

El modelo de Zaller pone de relieve las dos dimensiones temporales: por un lado, las predisposiciones a las que hace referencia proviene de fuentes relativamente estables como los valores y las actitudes y, por otro lado, la prominencia de cuán sobresalientes son éstas varía con el tiempo, de acuerdo a factores contextuales, como los mensajes que circulan por los flujos de información a los cuales las personas se encuentran expuestas.

¿Cómo se aplican estos conceptos a nuestro caso de interés? Pues bien, las fuentes de los juicios sobre la vida propia y la del resto pueden provenir de fuentes estables (i.e. valores), pero también podrían incidir factores contextuales, los cuales podrían otorgar cierta dinámica a tales juicios. ¿Cuáles son esos factores? Los revisaremos a continuación.

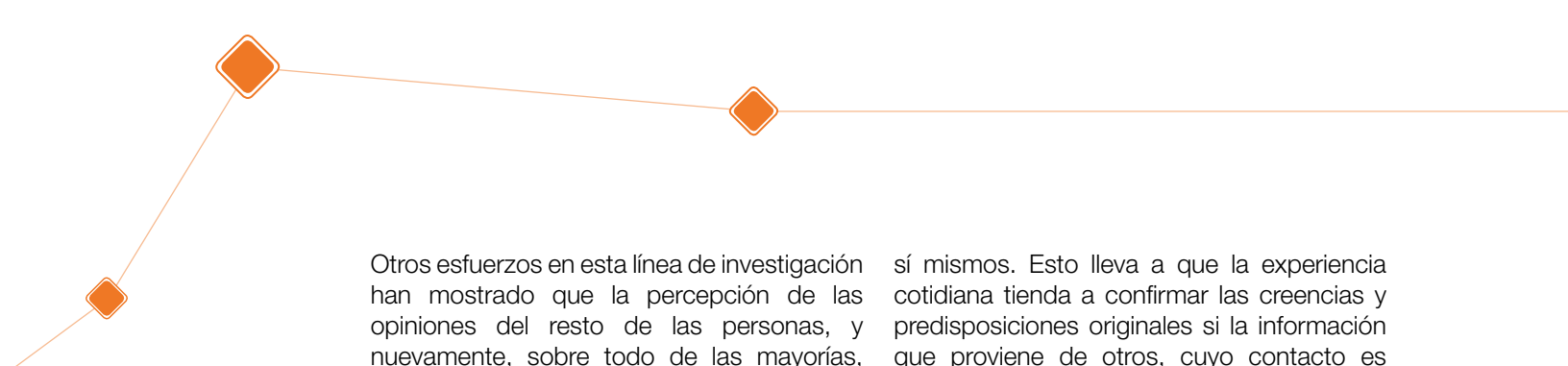
2.3. OPINIÓN PÚBLICA Y FLUJOS DE INFORMACIÓN

Ya Walter Lippman (2012, 59) hace varias décadas sostuvo que: “inevitablemente nuestras opiniones abarcan un espacio más grande, una mayor cantidad de tiempo, y un mayor número de cosas de las que podemos observar directamente. Tienen que ser, por lo tanto, reconstruidas a partir de lo que otros han informado y lo que podemos imaginar”. Lo anterior sugiere que las predisposiciones de los individuos, así como la información respecto de su mundo circundante, provienen en gran medida de juicios elaborados por otros, que las personas deben, de acuerdo al modelo de Zaller (1992), recibir, aceptar, y acceder para poder utilizarlos en el proceso de elaboración de opiniones.

Uno de los primeros intentos de sistematizar la manera en la que los individuos acceden a la información de los medios fue el *Personal Influence* de Elihu Katz y Paul Lazarsfeld (1955). En esta obra, los autores proponen un modelo de comunicación en “dos etapas”, por el cual los mensajes propios del entorno, tales como eventos relevantes y noticias, son intermediados y reinterpretados para los individuos por “líderes de opinión”. Éstos, a su vez, son personas que poseen un grado mayor de conocimiento e involucramiento con estos fenómenos, y por lo mismo, los ayudan interpretar la realidad más allá de la propia experiencia, por lo que las personas que los rodean los consideran como fuentes de información confiable. De este modo, la relación de los individuos con la información de su entorno se vuelve indirecta, valiéndose de estos intermediarios para el proceso de elaboración de opiniones.

Otro desarrollo influyente proviene de la politóloga alemana Elizabeth Noelle-Neumann (2015), quien sugiere que los individuos contrastan sus predisposiciones con sus creencias respecto a las orientaciones de los demás, y por sobre todo, a las opiniones que creen mayoritarias. De esta forma, las personas despliegan una suerte de “sentido cuasi-estadístico” que les permite monitorear, de manera más o menos imprecisa por cierto, lo que piensan los demás y ajustar sus opiniones de manera correspondiente. Esta autora sostiene que los individuos tienden a silenciar opiniones que consideran como minoritarias, lo que a su vez incide en una menor proporción de expresiones contrarias a la opinión percibida como mayoritaria, alimentando así un proceso que ella denomina como “espiral del silencio”.

Los individuos tienden a silenciar opiniones que consideran como minoritarias, lo que a su vez incide en una menor proporción de expresiones contrarias a la opinión percibida como mayoritaria, alimentando así un proceso que ella denomina como “espiral del silencio” (Noelle-Neumann, 2015).



Otros esfuerzos en esta línea de investigación han mostrado que la percepción de las opiniones del resto de las personas, y nuevamente, sobre todo de las mayorías, no sólo lleva a los individuos a “silenciar” opiniones, sino que además a “persuadir” a los ciudadanos de posturas mayoritarias (Mutz, 1998). Por medio de heurísticas cognitivas tales como el efecto “carro de los ganadores”, o la creencia en que “dos cabezas piensan mejor que una” los individuos son influenciados por los colectivos a adoptar creencias que de otro modo no asumirían. ¿Cómo podemos, entonces, dar cuenta del proceso que permite a los individuos producirse una “imagen mental” de lo que piensan los demás? Entre los factores que se asocian a tal proceso destacamos principalmente dos: el rol de las relaciones sociales, por una parte, y el influjo de los medios de comunicación de masas, por la otra.

La investigación en relaciones sociales ha sido un campo que ha experimentado un desarrollo importante en los últimos años. La creciente disponibilidad de datos, así como el perfeccionamiento de las técnicas de análisis, ha permitido demostrar de manera cada vez más consistente las conjeturas de sociólogos clásicos como Durkheim (2001 [1893]) o Simmel (2014 [1908]), poniendo de relieve la importancia de los entornos sociales en variables tan diversas como la obesidad (Christakis y Fowler, 2009) o la participación electoral (Bond et al., 2012).

Desde los desarrollos en medición de relaciones sociales en encuestas (Marsden, 1987), los investigadores han intentado desentrañar las maneras en las que los “otros-cercanos” influyen en las percepciones y creencias de los individuos. Uno de los trabajos más influyentes en esta materia ha sido el de Robert Huckfeldt y sus colegas (1987) quienes investigaron la manera en que las relaciones vinculadas a discusión política se asociaban a las preferencias y comportamientos de la población. Entre sus principales hallazgos, se encuentra la tendencia hacia la homofilia (McPherson et al., 2001), esto es, que los individuos tienden a relacionarse con individuos similares a

sí mismos. Esto lleva a que la experiencia cotidiana tienda a confirmar las creencias y predisposiciones originales si la información que proviene de otros, cuyo contacto es regular, es consistente con la derivada de la propia experiencia. Así, una creencia que se asume como verdadera para el grupo social más cercano recibe constantes refuerzos por medio de la redundancia de la información que circula a través de él y termina de este modo proyectándose hacia el colectivo. Esto puede producir grandes diferencias entre el colectivo “imaginado”, vale decir el proyectado a partir de las relaciones sociales, y el “real” (Baldassarri y Bearman, 2009).

Si exhiben un cierto nivel de consenso respecto a un ámbito de la vida pública, la población tenderá a converger hacia la posición conciliada por tales grupos, con escasas diferencias entre los ciudadanos más y menos informados.

Una segunda fuente de información que las personas utilizan para hacerse una idea de las creencias de los demás son los medios de comunicación de masas (MCM). Normalmente los criterios de masividad son fundamentales a la hora de evaluar el valor noticioso (i.e. *newsworthiness*) de un evento o dato. Esto vuelve a los MCM una fuente natural de información sobre las opiniones de los demás. Sin embargo, no sólo la masividad define la relevancia noticiosa de las eventuales publicaciones, también lo conflictivo y lo controversial (Luhmann, 2007). Según la teoría de Zaller (1992), los flujos de información a los cuales las personas pueden estar expuestas sobre un tema dado dependen del nivel de acuerdo



que existe entre los grupos de interés sobre éste: si exhiben un cierto nivel de consenso respecto a un ámbito de la vida pública, la población tenderá a converger hacia la posición conciliada por tales grupos, con escasas diferencias entre los ciudadanos más y menos informados (i.e. *mainstream effects*). En contraste, si existe una disputa entre estos grupos, la exposición a los medios de comunicación masiva tenderá a polarizar las creencias de la población, acentuando las diferencias entre las personas según sus predisposiciones (i.e. *polarization effects*).

El efecto persuasivo de los MCM no debe ser subestimado: si bien la evidencia acumulada no respalda teorías de influencia de los medios en los imaginarios colectivos, existen ejemplos sistemáticos de la capacidad de éstos para persuadir a los ciudadanos (Ladd & Lenz, 2009), especialmente en el campo de las creencias de una sociedad (Gunther, 1998). La combinación de la primacía de lo masivo y lo conflictivo en los medios ha llevado a varios investigadores a postular una teoría llamada “video-malestar” (*video malaise*): en la medida en que los medios proveen de manera más o menos constante imágenes y contenidos referidos a lo “mal que están los demás” (Norris, 2012), los individuos tienden a considerar que el estado

del colectivo es peor mientras más accedan a esta información, y/o más negativo sea el contenido al que acceden (Kleinnijenhuis et al, 2006).

A la luz de lo discutido, ¿cómo se podría explicar la diferencia entre los juicios referidos a la vida propia y al resto del país? Aquí lo relevante es cómo se construye la percepción acerca del estado del resto de los chilenos. Decíamos que las personas construyen pautas interpretativas de la realidad circundante, a pesar de la ausencia de experiencia personal y de información relevante sobre su entorno, utilizando valores, creencias y actitudes propias (fuentes estables) y factores contextuales (más dinámicos y algo volátiles). Entre tales factores se destacan las relaciones sociales —muy influyentes en la construcción de “imágenes mentales” que generalmente tienden a ser “sesgadas”, esto es, hace creer a los individuos que ciertas creencias, comportamientos o eventos son más (o menos) frecuentes de lo que son en realidad— y la exposición a medios de comunicación masivos que, dada la tendencia a reportar lo conflictivo y lo controversial, tiende a generar imágenes más bien negativas sobre la situación de los demás.

3. ¿QUÉ EXPLICA LA DISOCIACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN POR LA VIDA PROPIA Y LA DEL RESTO DE LOS CHILENOS?

A mayor educación, mayor bienestar personal, menor bienestar declarado para el resto, y por lo tanto, mayor diferencia entre la percepción de la situación individual y social.

En esta sección trataremos de buscar los factores que explican la tensión personal-colectivo, aplicado a la satisfacción por la vida, con el fin de comprender por qué los chilenos se muestran relativamente satisfechos con sus vidas, al mismo tiempo que declaran actitudes mucho más críticas respecto al estado del resto del país. Para estudiar esta disociación estudiaremos cuánto inciden las variables asociadas al cambio valórico y los factores contextuales. Para medir esta discrepancia utilizaremos las respuestas a las preguntas sobre cuán satisfecho está usted con su vida en este momento y “¿cuán satisfechos con sus vidas cree usted que se encuentran el resto de los chilenos?”.³ Para ello, consideraremos los datos de cuatro estudios de opinión pública realizados por el Centro de Estudios Públicos, los únicos que contienen estas preguntas a la fecha. Específicamente, utilizaremos las encuestas n° 72, 74, 75 y 77 de noviembre 2014, agosto 2015, noviembre 2015 y julio-agosto 2016, respectivamente.⁴ Como se puede observar en el **Gráfico 4**, los promedios poblacionales de estas variables⁵ exhiben una importante brecha – que llega hasta a 1.8 puntos en una escala

del uno al diez– entre las satisfacciones con la vida declaradas por los encuestados para sí mismos y las que perciben para el resto.

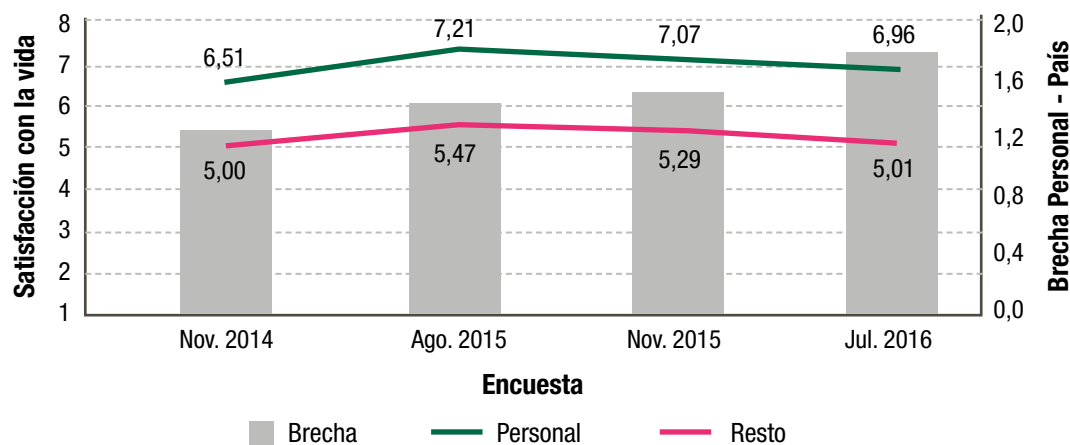
Para contrastar las diferencias entre la percepción respecto a la situación individual y la del resto del país, hemos incluido además un conjunto diverso de factores y variables de control. Basándonos en la literatura especializada en bienestar subjetivo (Diener, 2000; Kahneman y Krueger, 2006; Veenhoven, 2008; Dolan et al., 2008; Graham, 2012) además de investigaciones nacionales en este campo (Calvo y Beytía, 2011; PNUD, 2012; DESUC, 2015). Dentro de este conjunto de variables tuvimos que considerar, adicionalmente, su disponibilidad en las encuestas con las que estamos trabajando, lo que limita nuestro acceso otros indicadores. Con todo, el listado de variables seleccionadas para nuestro análisis, junto con sus respectivos estadísticos descriptivos, se encuentra en el **Anexo**.

Para propósitos de control estadístico, incluimos indicadores socio–demográficos básicos, tales como el sexo, la ruralidad, y la edad. En general, la investigación en bienestar subjetivo ha encontrado evidencia contradictoria respecto al rol de estos factores en las declaraciones de satisfacción vital (e.g. Kunzmann et al., 2000), en tanto la evidencia comparada sugiere que su relación es altamente dependiente del contexto socio-cultural (Graham, 2012). Para el caso chileno, algunos autores encuentran relaciones entre estas variables y el bienestar (e.g. PNUD, 2012), mientras otros sugieren que este efecto sería indirecto, principalmente a través de la mediación de las relaciones sociales (Mackenna y Browne, 2015).

3 Los fraseos exactos de las preguntas fueron: “Considerando todas las cosas, ¿cuán satisfecho está usted con su vida en este momento? Por favor use esta tarjeta en que uno significa que usted está “totalmente insatisfecho” y diez significa que usted está “totalmente satisfecho”; “Y en la misma escala, ¿cuán satisfechos con sus vidas cree usted que se encuentran el resto de los chilenos?”.

4 La selección de estudios se debe a la inclusión de una variable especialmente ideada por los autores para intentar capturar con la mayor precisión posible la disociación entre las percepciones respecto a la situación personal y del resto del país por parte de los chilenos: en conjunto a la pregunta comúnmente utilizada por los estudios para medir el bienestar subjetivo (i.e. satisfacción con la vida) de los encuestados, se agregó un enunciado adicional que preguntaba por el bienestar que el entrevistado le atribuye al resto del país.

Gráfico 4: Disociación entre la satisfacción por la vida propia y la del resto de los chilenos, 2014-2016



Nota: Satisfacción con la vida (bienestar subjetivo) personal del encuestado, percibido para el resto del país y brecha (diferencia) entre ambos indicadores. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.

En uno u otro caso, existe consenso respecto de la menor influencia de estas variables en la satisfacción por la vida.

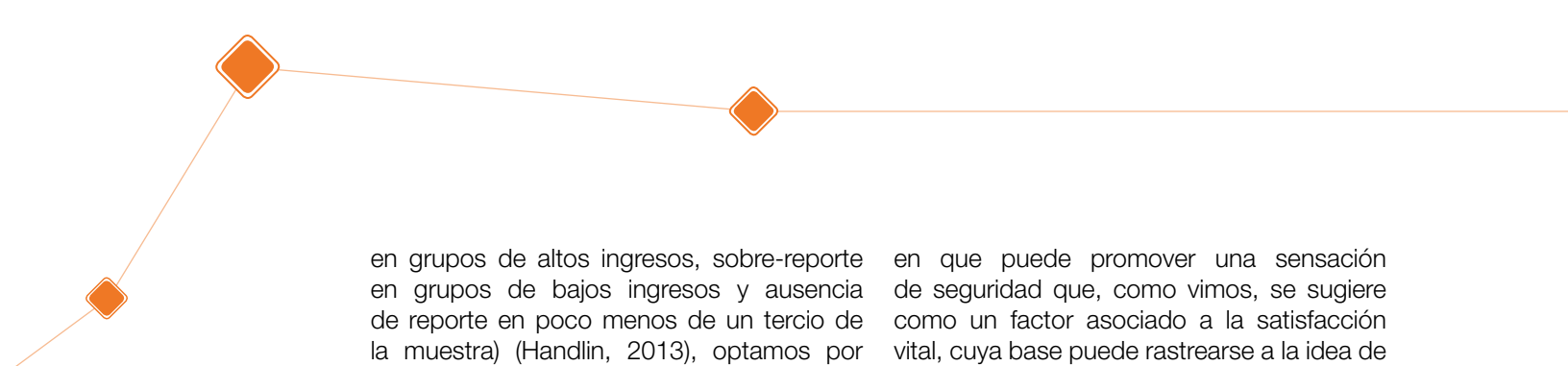
Asimismo incluimos indicadores de religión, tales como la denominación y la intensidad de la práctica religiosa, bajo el supuesto de que las creencias, y sobre todo la intensidad podrían relacionarse tanto con la auto-percepción de bienestar, como con las apreciaciones sobre el bienestar

de los demás. Esta suposición descansa en la comprensión de la religiosidad como un marco interpretativo para la realidad circundante, tanto del entorno cercano como de las creencias respecto a los demás. Tanto esta conceptualización, como sus implicancias empíricas, se encuentran ampliamente documentadas en la literatura especializada (Witter et al., 1985; Ellison, 1991; Lun y Bond, 2013).

Los chilenos se muestran relativamente satisfechos con sus vidas, al mismo tiempo que declaran actitudes mucho más críticas respecto al estado del resto del país.

Con la idea de capturar la dimensión socio-económica, consideramos tres indicadores: nivel educacional alcanzado, riqueza y estatus social subjetivo. Primero, utilizamos el nivel educacional del encuestado, que tal como se recomienda en la bibliografía del área (e.g. Müller et al. 1989; Breen y Karlson, 2013), medimos de acuerdo a los ciclos educacionales iniciados y completados, obteniéndose una escala entre cero (sin estudios) y nueve (postgrado completo). Segundo, considerando los problemas de medición relacionados a los ítems de ingreso en las encuestas de opinión (sub-reporte

5 Es importante notar que los promedios de la encuesta n° 72 son aproximadamente medio punto menores que los de otras encuestas. Creemos, basados en la evidencia internacional (Schmimiak y Oishi, 2005), que en buena parte esto se debe a que en esa encuesta los ítems de bienestar subjetivo se midieron cerca de la mitad del cuestionario, y no al comienzo como es la práctica común en la investigación del área. Sin embargo, la ausencia de evidencia contra-factual del efecto del orden del cuestionario en los niveles declarados de satisfacción vital nos obligan a mantener esta explicación sólo como una conjetura, a ser testada empíricamente en otros estudios en el contexto chileno.



en grupos de altos ingresos, sobre-reporte en grupos de bajos ingresos y ausencia de reporte en poco menos de un tercio de la muestra) (Handlin, 2013), optamos por utilizar una medida de riqueza, basada en la posesión de nueve “bienes de estatus” seleccionados a partir de análisis factoriales y componentes principales (cfr. González y Mackenna, 2015). Además de su mejor calidad de medición (mayor reporte fidedigno por parte de los encuestados), creemos que la tenencia de bienes se relaciona, dada su naturaleza relativamente estable (stock v/s flujo), más directamente al bienestar, tanto personal como social. Tercero, incluimos la pregunta de estatus social subjetivo (Evans y Kelley, 2004, Castillo et al., 2013), como una manera de incorporar la auto-evaluación que los individuos hacen de sí mismos y de su situación socio-económica a nuestro modelo explicativo. Debido al carácter altamente auto-evaluativo de las preguntas de bienestar subjetivo, creemos importante tener en consideración el hecho de que ciertas condiciones materiales “objetivas” (i.e. educación y riqueza) pueden tener distintos efectos en las creencias de los individuos, sobre todo al considerar el alto nivel de desigualdad social del país, y las grandes diferencias intergeneracionales en los estándares de vida de la población (Inglehart y Welzel, 2006).

Junto a la evaluación subjetiva de la posición social del entrevistado, agregamos al listado de variables dos preguntas acerca del estado de la situación económica, tanto para el encuestado como para el país⁶. Estas fueron integradas al modelo con la idea de que la evaluación de la situación económica forma parte importante del bienestar de las personas, en la medida

en que puede promover una sensación de seguridad que, como vimos, se sugiere como un factor asociado a la satisfacción vital, cuya base puede rastrearse a la idea de jerarquía de necesidades de Maslow (1943). Adicionalmente, existe evidencia que apunta a que junto con las relaciones sociales, este indicador sería de los más influyentes en las declaraciones de bienestar de los chilenos (DESUC, 2015).

Hasta acá, las variables que hemos discutido pueden ser conceptualizadas desde los principios propios de las teorías de cambio valórico, así como del conocimiento acumulado a través de la investigación en bienestar subjetivo. Sin embargo, todavía no hemos discutido una variable crucial para nuestra propuesta de estudio: la exposición a flujos mediáticos de comunicación. Creemos que, en la medida en que los medios de comunicación de masas suelen proveer de información más allá de la experiencia personal, a través de esta variable podemos capturar los procesos teóricos de “reflexivización del mundo de la vida”, vale decir, los momentos en que los individuos se cuestionan sus juicios acerca de su entorno, tales como el bienestar del resto del país, o la situación económica nacional. Es importante destacar que los efectos de esta exposición son ambiguos en la medida en que los contenidos y los tonos con los que la prensa cubre los temas de actualidad varían constantemente, lo que puede a su vez tener influencia oscilante entre la población (Inyegar y Kinder, 2010). En términos operativos tomamos el promedio de exposición a discusiones políticas en televisión, radio, diarios, e internet, y debido a diferencias en las escalas de medición, estandarizamos los puntajes.

6 Los fraseos exactos de las preguntas fueron: “¿Cómo calificaría usted su actual situación económica?” y “¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?”, ambas con cinco categorías de respuesta entre “Muy buena” y “Muy mala”. Para las regresiones lineales se agruparon los valores positivos (“muy buena”, “buena”) y negativos, y se dejaron en referencia de las respuestas intermedias y los no sabe / no responde. Para las ecuaciones estructurales se trataron como variables ordinales, excluyendo los no sabe / no responde.

Nuestros primeros análisis consistieron en la estimación de tres modelos de regresión OLS (con errores estándar robustos a heteroscedasticidad), para el conjunto de datos del estudio: uno para el bienestar personal, uno para el bienestar del país y un tercero que modela la brecha entre ambos (ver **Tabla 1**), las cuales obtienen resultados consistentes cuando se replican en cada año particular. Fueron incluidas todas las

variables descritas con anterioridad, además de efectos fijos por región y encuesta, y una interacción entre el efecto de la exposición a medios y la encuesta de origen, de modo de capturar posibles cambios en los flujos mediáticos en el período estudiado. Finalmente, siguiendo las convenciones en el estudio del bienestar se estima un efecto curvilíneo (cuadrático) para la edad.

Tabla 1: Modelos de satisfacción personal, del resto del país, y de la brecha entre ambas

Bienestar: Predictor	Personal		País		Brecha	
	Coef.	EE	Coef.	EE	Coef.	EE
Rural (ref. Urbano)	0.142*	(0.086)	0.182**	(0.072)	0.016	(0.099)
Sexo (ref. Hombre)	-0.005	(0.057)	-0.030	(0.049)	0.028	(0.063)
Edad	-0.044***	(0.008)	-0.028***	(0.007)	-0.020**	(0.009)
Edad2	0.000***	(0.000)	0.000***	(0.000)	0.000*	(0.000)
Religión: Católica (ref. Ninguna)	0.027	(0.078)	0.104	(0.066)	-0.051	(0.088)
Religión: Evangélica (ref. Ninguna)	0.165	(0.112)	-0.003	(0.092)	0.207	(0.126)
Religión: Otra (ref. Ninguna)	0.008	(0.166)	0.124	(0.149)	-0.032	(0.190)
Actividad Religiosa	0.046***	(0.015)	0.010	(0.012)	0.037**	(0.016)
Educación	0.037**	(0.016)	-0.047***	(0.014)	0.089***	(0.018)
Riqueza	0.278**	(0.130)	-0.271**	(0.118)	0.551***	(0.146)
Posición Social Subjetiva	0.203***	(0.023)	0.175***	(0.021)	0.029	(0.026)
Sit. Eco. Personal: Positiva (ref. Neutra)	-0.883***	(0.076)	-0.190***	(0.063)	-0.705***	(0.082)
Sit. Eco. Personal: Negativa (ref. Neutra)	0.695***	(0.068)	-0.071	(0.061)	0.768***	(0.083)
Sit. Eco. País: Negativa (ref. Neutra)	-0.148**	(0.061)	-0.358***	(0.052)	0.205***	(0.068)
Sit. Eco. País: Positiva (ref. Neutra)	0.174**	(0.087)	0.218***	(0.076)	-0.063	(0.102)
Exposición a MCM's	0.054	(0.068)	-0.003	(0.055)	0.031	(0.075)
Encuesta: Ago. 2015 (ref. Nov.2014)	0.664***	(0.078)	0.495***	(0.069)	0.165*	(0.090)
Encuesta: Nov. 2015 (ref. Nov.2014)	0.558***	(0.076)	0.358***	(0.064)	0.203**	(0.083)
Encuesta: J. A. 2016 (ref. Nov.2014)	0.546***	(0.079)	0.124*	(0.065)	0.429***	(0.085)
Exposición a MCM's * Enc. Ago. 2015	0.014	(0.091)	-0.209***	(0.081)	0.262**	(0.105)
Exposición a MCM's * Enc. Nov. 2015	0.043	(0.090)	0.057	(0.073)	0.015	(0.100)
Exposición a MCM's * Enc. J.A. 2016	-0.181*	(0.095)	-0.089	(0.078)	-0.076	(0.100)
Intercepto	6.346***	(0.301)	5.153***	(0.250)	1.222***	(0.325)
N	5,297		5,046		5,037	
R ²	0.169		0.094		0.115	
R ² ajustado	0.163		0.0877		0.109	

Nota: Se reportan coeficientes OLS y errores estándar robustos a heteroscedasticidad entre paréntesis. Se omiten efectos fijos por región. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.

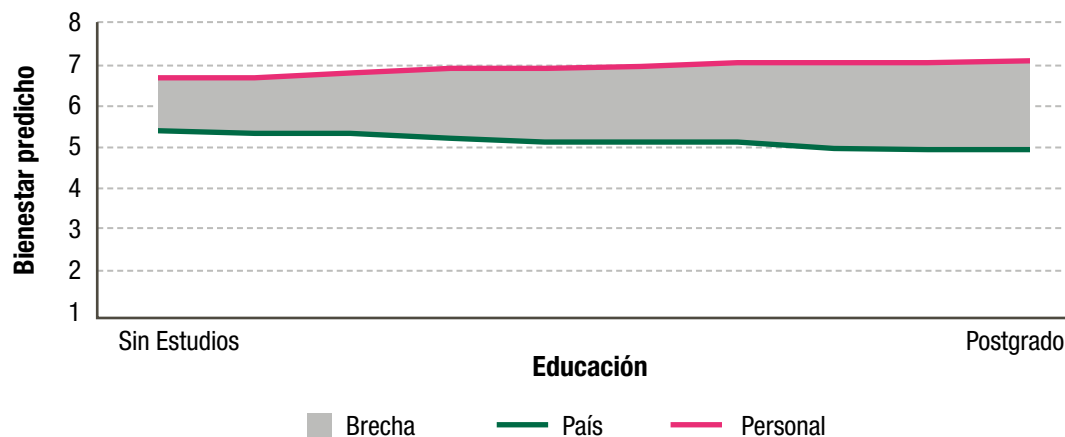
Del primer modelo en la **Tabla 1**, vemos que nuestras estimaciones producen hallazgos consistentes con la literatura especializada: la edad tiene un efecto en forma de “U” en que los jóvenes y los mayores son los más satisfechos con sus vidas, el estatus social tiende a aumentar las declaraciones de bienestar (especialmente la posición social subjetiva), y la evaluación de la situación económica tiene un efecto positivo en el bienestar personal. Ni el género, ni la religión, ni la exposición a medios (incluso considerando la interacción con la encuesta) muestran efectos relevantes sobre el bienestar subjetivo declarado por los individuos. A excepción del resultado en religión, en líneas generales nuestras estimaciones se encuentran alineadas con nuestras expectativas, e incluso el modelo muestra un ajuste satisfactorio.

Al analizar los resultados de las estimaciones para el modelo que toma como variable

dependiente el bienestar atribuido al resto de los chilenos, primero vemos que la edad juega un rol similar que en la satisfacción con la propia vida. Los adultos de edades intermedias son quienes exhiben menores promedios de bienestar atribuido al resto, en contraste con los jóvenes y adultos mayores. Es importante notar que, a pesar de su significancia estadística, la magnitud de las diferencias en ambos casos es pequeña.

La edad tiene un efecto en forma de “U” en que los jóvenes y los mayores son los más satisfechos con sus vidas.

Gráfico 5: Bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según nivel educacional del encuestado

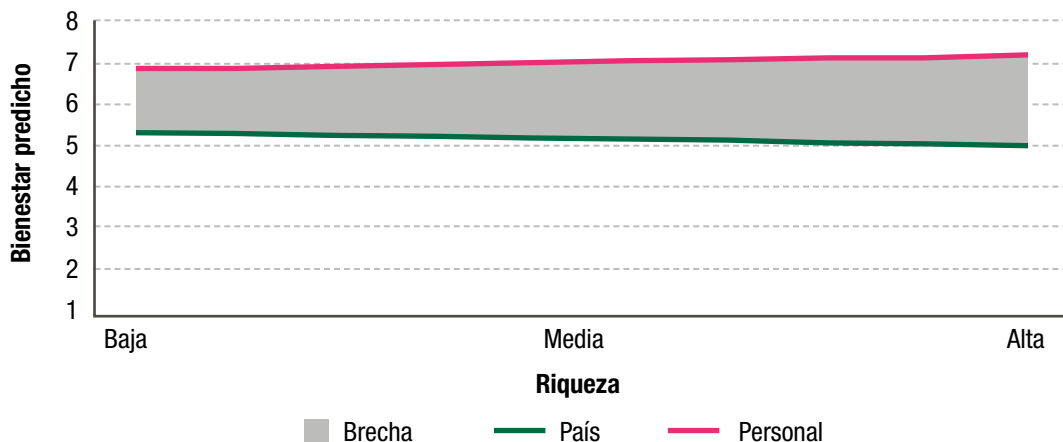


Nota: Valores predichos de bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según nivel educacional del encuestado. Estimaciones obtenidas a partir de los modelos de la **Tabla 1**. Las líneas punteadas representan intervalos de confianza del 95 por ciento, con errores estimados a partir del método delta. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.

La ruralidad aparece como un contexto que favorece creencias más positivas respecto de los demás. En promedio, los habitantes de estas zonas declaran satisfacciones un cuarto de punto mayor que las de sus pares urbanos, resultado de mayor magnitud y significancia que para el bienestar personal. En cambio, la religiosidad no parece estar asociada de manera sistemática al bienestar atribuido a los demás como habíamos planteado inicialmente. Los factores de estatus social presentan diferencias interesantes. Mientras los más educados se sienten más satisfechos con sus vidas que los menos educados, para el bienestar atribuido al resto ocurre lo contrario,

es decir, los individuos con mayores niveles educacionales, en promedio, consideran que el resto del país está en una peor situación respecto a aquellos con menos educación. Esto incide en que mientras más educados son los individuos, existe una mayor brecha (disociación) entre la situación personal y la situación del resto del país, lo que se comprueba en el modelo 3 de la **Tabla 1**. Este resultado se puede apreciar en el **Gráfico 5** que muestra de manera sintética nuestro hallazgo: a mayor educación, mayor bienestar personal, menor bienestar declarado para el resto, y por lo tanto, mayor diferencia entre la percepción de la situación individual y social.

Gráfico 6: Bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según riqueza (acceso a bienes) del encuestado



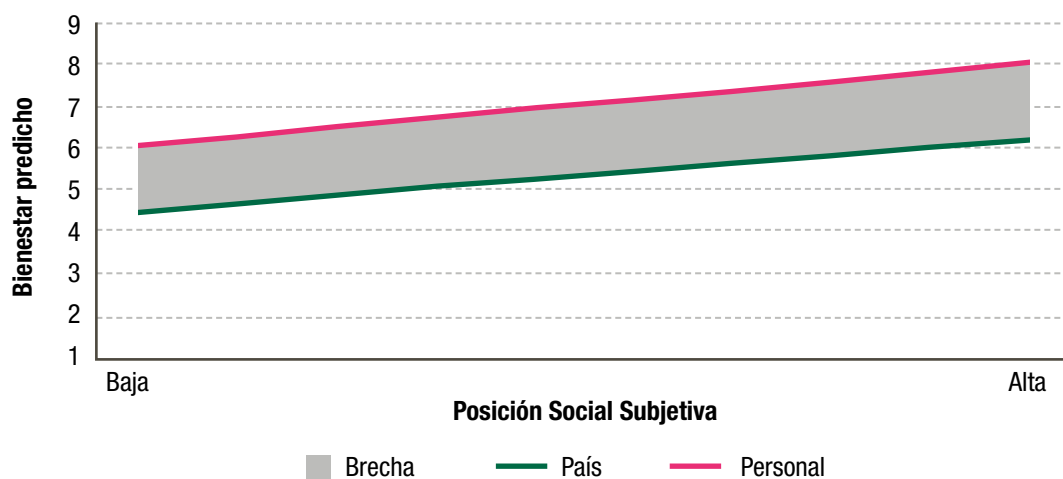
Nota: Valores predichos de bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según riqueza (acceso a bienes) del encuestado. Estimaciones obtenidas a partir de los modelos de la **Tabla 1**. Las líneas punteadas representan intervalos de confianza del 95 por ciento, con errores estimados a partir del método delta. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.

La ruralidad aparece como un contexto que favorece creencias más positivas respecto de los demás. En promedio, los habitantes de estas zonas declaran satisfacciones un cuarto de punto mayor que las de sus pares urbanos, resultado de mayor magnitud y significancia que para el bienestar personal.

Un fenómeno casi idéntico se observa cuando miramos la variable riqueza. A medida que los hogares poseen mayor acceso a bienes de consumo, mejor es la percepción del bienestar propio, al tiempo que es menor aquel que asumen para los demás chilenos. De nuevo, podemos observar que a medida que aumenta la riqueza (acceso a bienes), mayor es la disociación entre la situación individual y colectiva. Esta relación se expresa en el **Gráfico 6**.

Considerando que tanto educación como riqueza exhiben un patrón muy similar, llama la atención que nuestra tercera variable de estatus social, la posición social subjetiva, produce otro resultado. Tanto la satisfacción vital personal como la atribuida al país, no presentan una relación significativa con el estatus subjetivo, lo que sugiere que este factor no contribuiría a la disociación entre lo personal y social (ver franja gris constante en el **Gráfico 7**).

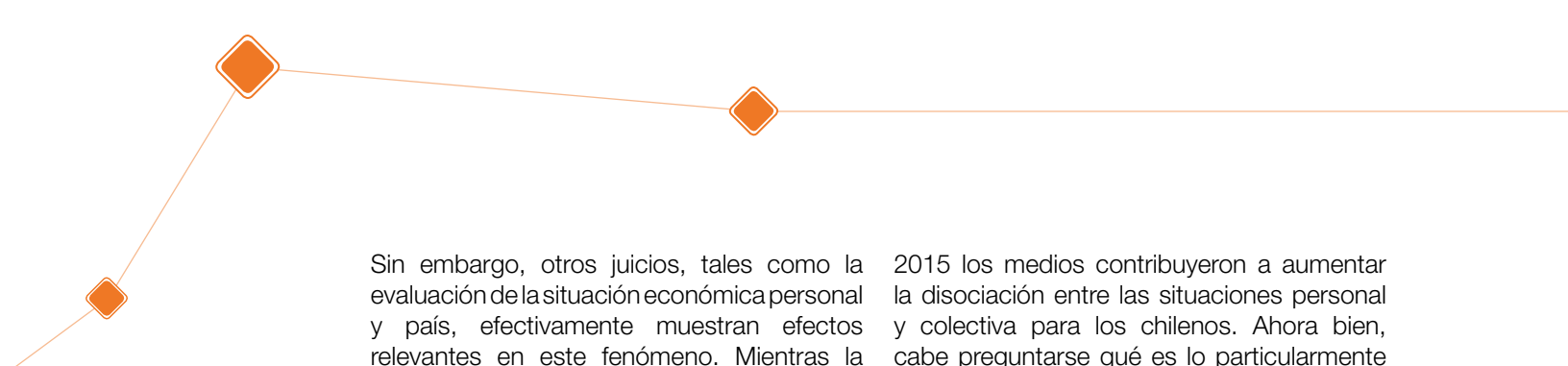
Gráfico 7: Bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según posición social subjetiva del encuestado



Nota: Valores predichos de bienestar subjetivo personal, atribuido al resto del país, y la brecha entre ambos, según posición social subjetiva del encuestado. Estimaciones obtenidas a partir de los modelos de la **Tabla 1**. Las líneas punteadas representan intervalos de confianza del 95 por ciento, con errores estimados a partir del método delta. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.

A medida que los hogares poseen mayor acceso a bienes de consumo, mejor es la percepción del bienestar propio, al tiempo que es menor aquel que asumen para los demás chilenos.





Sin embargo, otros juicios, tales como la evaluación de la situación económica personal y país, efectivamente muestran efectos relevantes en este fenómeno. Mientras la evaluación de la situación económica propia tiene un efecto de magnitud considerable en el bienestar personal, sólo presenta un efecto de igual dirección aunque modesto en tamaño en la atribución de bienestar a los demás, lo que finalmente incide en un aumento de la brecha en la satisfacción vital propia y ajena. De manera recíproca, la evaluación de la situación económica del país se encuentra como uno esperaría mucho más fuertemente asociada al bienestar colectivo que al personal, por lo que también se asocia a un ensanchamiento de las diferencias entre ambos juicios. En otras palabras, existe una asociación entre evaluaciones de bienestar y de la situación económica en cada nivel (i.e. personal y país) y las evaluaciones de la situación económica, particularmente al nivel personal, contribuyen a ensayar la disociación entre bienestar personal y del resto.

Finalmente, al observar el efecto de la exposición a medios de comunicación de masas, encontramos un efecto condicionado al período de medición. Nuestras estimaciones sugieren que sólo en la medición de agosto de 2015 la influencia de los flujos de información mediática resulta relevante para dar cuenta del bienestar subjetivo que los encuestados le atribuyen al resto del país: los entrevistados en ese estudio, mientras más expuestos a la discusión pública en los medios, peor creían que se encontraban el resto de sus compatriotas. En los demás períodos considerados, el efecto de esta misma variable es prácticamente cero. Tomando en consideración que, como vimos, la exposición a MCM no incide en el bienestar personal, vemos que para mediados de

2015 los medios contribuyeron a aumentar la disociación entre las situaciones personal y colectiva para los chilenos. Ahora bien, cabe preguntarse qué es lo particularmente distinto ese período respecto al resto de los considerados. Más adelante mostraremos evidencia que sugiere que el efecto que los medios tuvieron en agosto de 2015 y no en otros períodos puede asociarse a los contenidos cubiertos por los medios mismos.

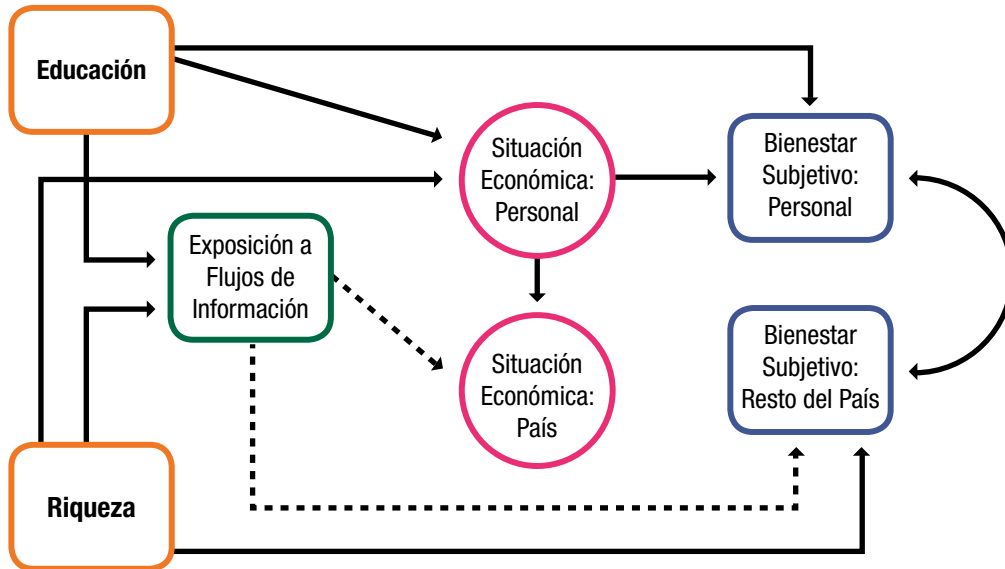
Antes de proveer una interpretación sustantiva a los resultados obtenidos, creemos que es necesario atender ciertas preocupaciones metodológicas que podrían surgir de nuestras estimaciones hasta este minuto. Si bien ninguno de los modelos de **Tabla 1** exhibe problemas significativos de multicolinealidad⁷, es posible cuestionarlos en términos de la estabilidad y especificidad de los efectos estimados: sabemos que la educación además de incidir en el bienestar subjetivo, contribuye a una mejor situación socio-económica, así como a una mayor exposición a las discusiones políticas (Delli Carpini y Keeter, 1997), entonces ¿cómo podemos distinguir estos efectos? Para estos propósitos estimamos dos sets de modelos generalizados de ecuaciones estructurales⁸, con el fin de capturar, siguiendo de cerca la teoría esbozada en la sección anterior, la complejidad de las relaciones entre los principales factores que hemos descrito como asociados al fenómeno de la separación de las percepciones personales y sociales. Un primer set de modelos considera tanto el bienestar personal como el atribuido al país en conjunto con su covarianza, mientras que un segundo conjunto de modelos incluye la brecha entre ambas medidas de bienestar. Ambos sets fueron estimados para cada encuesta, así como para el *pool* de datos. Las relaciones estimadas se resumen en el **Gráfico 8**.

7 Todos los VIF promedio de los modelos son menores a 5, sólo elevándose en factores tales como la edad y su cuadrado y las interacciones. Su exclusión no parece inflar de manera relevante la ineficiencia en la estimación (Wooldridge, 2010).

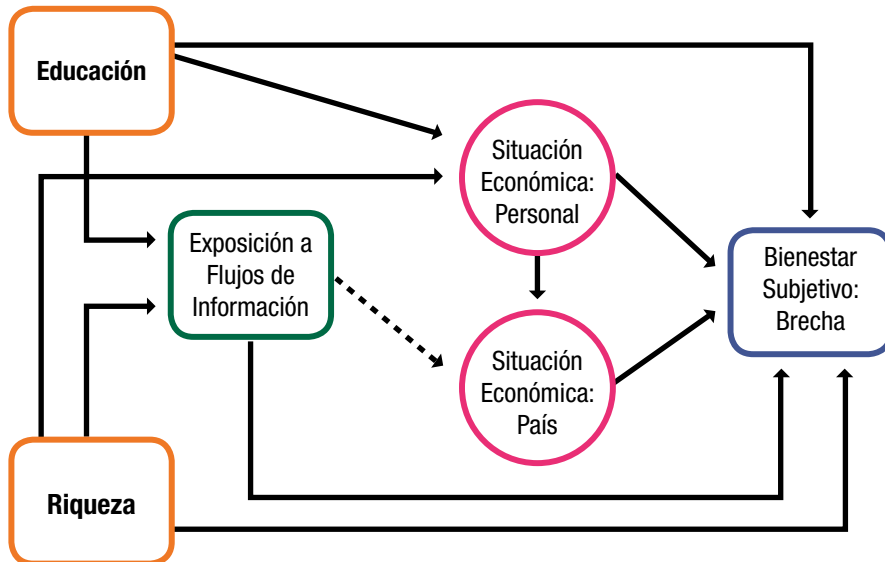
8 GSEM, por sus siglas en inglés (Rabe-Heskett et al, 2004)

Gráfico 8: Esquema gráfico de modelos generalizados de ecuaciones estructurales (GSEM)

GSEM 1: Covarianza



GSEM 2: Brecha



Nota: Las casillas cuadradas representan variables continuas, modeladas con función de enlace de identidad (OLS), y las casillas circulares representan variables ordinales, modeladas con función de enlace logit. Las líneas continuas representan relaciones esperadas positivas y las punteadas negativas. La línea curvilínea del modelo 1 representa la covarianza entre ambos indicadores de bienestar. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2: Modelos generalizados de ecuaciones estructurales, con bienestar personal, país, y brecha entre ambos

Dependiente	Modelo Predictor	1				
		Nov. 2014	Ago. 2015	Nov. 2015	J. A. 2016	Pool
Sit. Eco. Personal	Riqueza	1.636***	1.480***	1.786***	1.434***	1.581***
	Educación	0.151***	0.086**	0.140***	0.139***	0.128***
Logit Ordinal	Intercepto 1	-2.622***	-2.688***	-2.913***	-2.350***	-2.627***
	Intercepto 2	-0.233*	-0.582***	-0.320**	-0.183	-0.334***
	Intercepto 3	2.501***	1.900***	2.370***	2.423***	2.285***
	Intercepto 4	5.810***	5.209***	6.392***	7.192***	5.963***
Sit. Eco. País	Sit. Eco. Personal	1.041***	0.870***	0.754***	0.890***	0.887***
	Expo. A MCM's	0.136*	-0.136*	0.040	0.067	0.023
Logit Ordinal	Intercepto 1	0.201	0.199	-0.717**	0.035	-0.049
	Intercepto 2	2.341***	2.337***	1.941***	2.514***	2.284***
	Intercepto 3	5.084***	4.848***	4.497***	5.266***	4.889***
	Intercepto 4	8.508***	7.736***	8.939***	8.899***	8.303***
Expo. A MCM's	Riqueza	0.376***	0.639***	0.502***	0.513***	0.514***
	Educación	0.126***	0.094***	0.124***	0.127***	0.118***
OLS	Intercepto	-0.563***	-0.488***	-0.599***	-0.601***	-0.562***
Bienestar: Personal	Sit. Eco. Personal	1.067***	0.722***	0.791***	0.769***	0.839***
	Educación	0.063**	0.091***	0.086***	0.063**	0.074***
OLS	Intercepto	3.150***	4.735***	4.398***	4.508***	4.194***
Bienestar: País	Expo. A MCM's	0.000	-0.197**	0.043	-0.142*	-0.078**
	Sit. Eco. País	0.263***	0.392***	0.252***	0.293***	0.304***
OLS	Riqueza	-0.195	-0.568*	-0.242	0.133	-0.196*
	Intercepto	4.340***	4.617***	4.697***	4.248***	4.451***
Bienestar: Brecha	Expo. A MCM's					
	Sit. Eco. Personal					
Logit Ordinal	Sit. Eco. País					
	Riqueza					
	Educación					
	Intercepto					
Varianzas	Bienestar: Personal	4.272***	3.991***	3.793***	4.084***	4.112***
	Bienestar: País	2.586***	3.489***	2.588***	2.845***	2.925***
	Bienestar: Brecha					
	Expo. A MCM's	0.524***	0.588***	0.556***	0.562***	0.559***
Covarianza	B. Personal - B. País	1.186***	0.886***	0.993***	1.102***	1.089***

Nota: Modelos generalizados de ecuaciones estructurales, con bienestar personal, país, y brecha entre ambos, para cada encuesta y para el pool total de datos. Para variables numéricas se estiman funciones de enlace OLS, mientras que para variables dependientes categóricas se estiman funciones de enlace logit ordinal. Se reportan coeficientes (OLS y logit según corresponda), varianzas, covarianzas. Por motivos de espacio, los errores estándar robustos a heteroscedasticidad se reportan en la **Tabla A2** (en **Anexo**). * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77.



A pesar de nuestras preocupaciones de problemas de especificación del modelo lineal debido a endogeneidad, no vemos diferencias sistemáticas entre los resultados de nuestras estimaciones basadas en OLS y en GSEM.

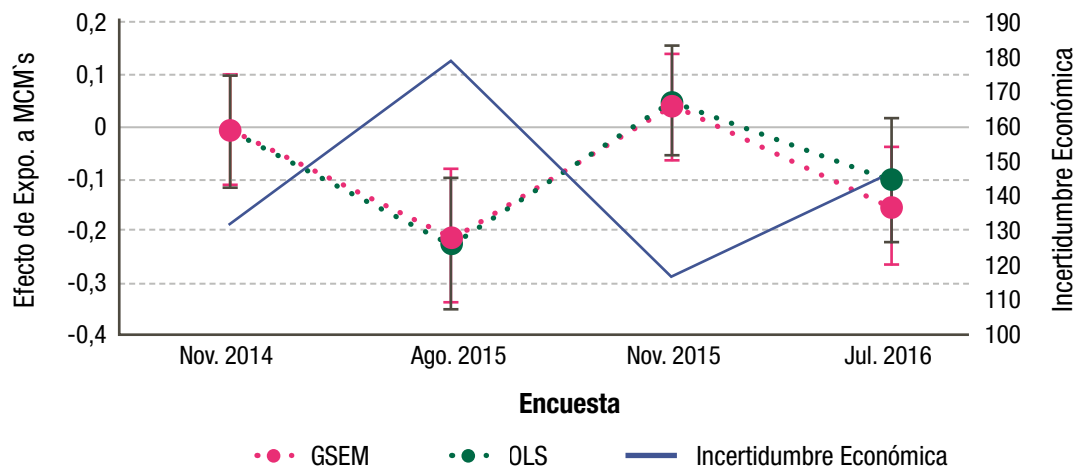
Mientras mejor se percibe la situación económica personal, la diferencia entre el bienestar propio y el atribuido a los demás crece. En contraste, mientras mejor se cree que se encuentra la economía nacional, menor es la diferencia entre la satisfacción personal con la colectiva.

En primera instancia, nuestras expectativas de estructura de relaciones entre los factores observados parecen proporcionar una explicación satisfactoria del patrón de asociaciones entre nuestras variables. Aunque exhiben cambios en sus magnitudes, los coeficientes de riqueza y educación siempre aparecen como predictores significativos de la exposición mediática a temas de política. Más estabilidad muestran las relaciones entre estas mismas variables y la evaluación de la situación económica personal, lo que nos habla de que este juicio se formaría desde la experiencia cotidiana de los individuos, particularmente de acuerdo a su acceso a recursos. Por otra parte, nuestro análisis revela una menguante aunque siempre positiva y significativa asociación entre la evaluación de la situación económica personal y país. Esto nos lleva a pensar que, a pesar de que buena parte de los juicios colectivos se forma a partir de la experiencia personal, la capacidad de proyectar la propia situación al colectivo ha mostrado un deterioro progresivo. En la medida en que la experiencia cotidiana, generalmente positiva, de los individuos se ha distanciado de la situación colectiva, la primera ve debilitada su capacidad de generalizarse (“y así sucesivamente”) hacia la segunda.

Al revisar las relaciones del modelo que atienden al bienestar vemos que, de manera consistente a nuestras estimaciones OLS, la educación del encuestado tiene un efecto positivo y significativo en el bienestar personal, lo que incide en un ensanchamiento de la disociación entre la propia situación y la del colectivo. Algo similar, aunque a partir de la satisfacción con la vida percibida para los demás, ocurre con la riqueza: en promedio, esta variable está asociada a peores juicios respecto al país y a su vez en una mayor brecha con la evaluación personal. Este último efecto, sin embargo, aparece como menos consistente que el relativo a educación. Las evaluaciones de la situación económica, tanto personal como colectiva

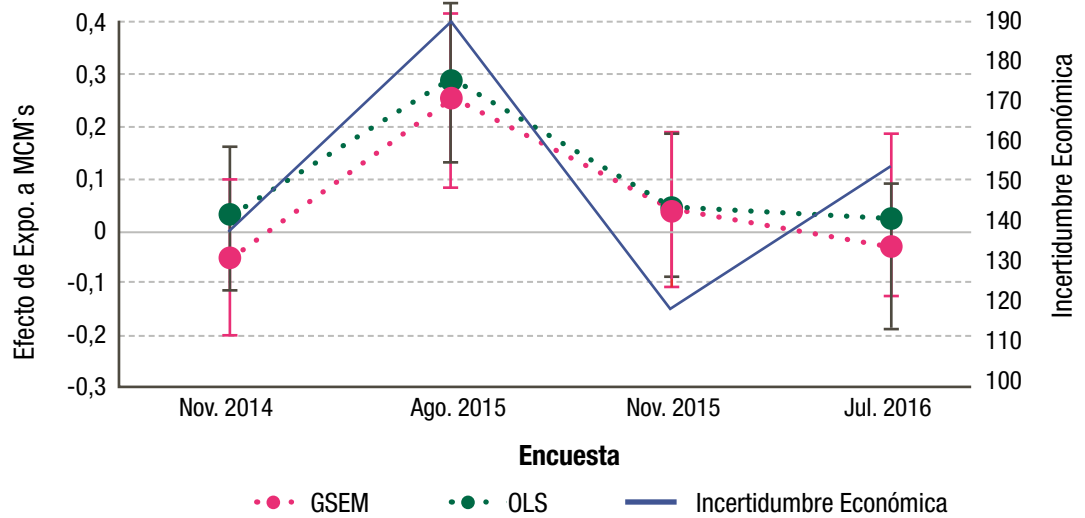
también muestran resultados consistentes con las estimaciones de la **Tabla A1** (en **Anexo**): bienestar y situación económica personal van juntos, del mismo modo que bienestar y situación económica país, aunque la evaluación de la situación propia tiene un mayor efecto en el distanciamiento individual-colectivo que la evaluación de la situación nacional, y de hecho esta última tiende a reducir dicha brecha. En otras palabras, mientras mejor se percibe la situación económica personal, la diferencia entre el bienestar propio y el atribuido a los demás crece. En contraste, mientras mejor se cree que se encuentra la economía nacional, menor es la diferencia entre la satisfacción personal con la colectiva.

Gráfico 9: Efectos de exposición a medios de comunicación en satisfacción percibida en el resto del país y la incertidumbre económica



Nota: Efectos (coeficientes) de exposición a medios de comunicación en satisfacción percibida en el resto del país. Estimaciones obtenidas a partir de modelos OLS y modelos generalizados de ecuaciones estructurales en la **Tabla 1** y la **Tabla 2**. Se agrega el promedio del índice CLAPES UC de Incertidumbre Económica del mes anterior y el mes de levantamiento a cada encuesta. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77; e índice CLAPES UC de Incertidumbre Económica.

Gráfico 10: Efectos de exposición a medios comunicación en brecha de satisfacción personal y percibida para el resto del país y la incertidumbre económica



Nota: Efectos (coeficientes) de exposición a medios de comunicación en brecha de satisfacción personal y percibida para el resto del país. Estimaciones obtenidas a partir de modelos OLS y modelos generalizados de ecuaciones estructurales en la **Tabla 1** y la **Tabla 2**. Se agrega el promedio del índice CLAPES UC de Incertidumbre Económica del mes anterior y el mes de levantamiento a cada encuesta. Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP n° 72, 74, 75 y 77; e índice CLAPES UC de Incertidumbre Económica.

Finalmente, en relación a la exposición a flujos de información política, el **Gráfico 9** ilustra sus efectos (en nuestras estimaciones OLS y GSEM) sobre el bienestar subjetivo declarado para el resto del país y el **Gráfico 10** exhibe los mismos resultados, pero sobre la diferencia entre la satisfacción del encuestado y la que éste le atribuye a los demás. Como adelantábamos, creemos que para poder interpretar el efecto que la exposición a los medios de comunicación tiene en los individuos necesitamos de información contextual del contenido que circula en ellos. Para ello, recurrimos a un Índice de Incertidumbre Económica¹⁰, elaborado por CLAPES UC, que captura la cantidad de noticias de incertidumbre económica cubiertas por los principales medios escritos del país (Cerdeira et al., 2016). Creemos que este indicador es una aproximación a la proporción de noticias negativas que circulan en los flujos de información mediáticos, puesto que en

general la incertidumbre económica se encuentra asociada a resultados y eventos negativos (Baker et al., 2015).

La variación temporal del efecto de la exposición a los medios, tanto sobre el bienestar atribuido al resto y la brecha entre el bienestar personal y colectivo, exhibe un patrón consistente bajo ambas estrategias de estimación: no aparecen efectos significativos salvo en la encuesta de agosto de 2015. Cuando miramos los efectos de los medios de comunicación de masas en relación al contenido que éstos transmiten (capturado por el Índice de Incertidumbre Económica), vemos que a medida que los medios reportan más incertidumbre económica, una exposición más alta a ellos reduce el bienestar atribuido al resto. Asimismo, más exposición a los medios, en un contexto de más reportes de incertidumbre en éstos, aumenta la brecha entre el bienestar personal y colectivo.

¹⁰ Específicamente, el Índice de Incertidumbre Económico Coyuntural, puesto que considera una mayor cantidad de medios (Cerdeira et al. 2016).

Hasta 2009 las evaluaciones de la situación económica personal y del país se movían prácticamente al unísono, pero a partir del 2010 y especialmente en 2011 y 2015 se distanciaron progresivamente. Mientras la evaluación de la situación personal se mantiene estable, la del colectivo (país) empeora sistemáticamente.

Estos resultados apuntan a la existencia de un efecto condicional del consumo de medios en las percepciones de bienestar, pues nuestra evidencia sugiere que éstos se tornan relevantes sólo en la medida que los contenidos que circulen por ellos sean suficientemente negativos.

En síntesis, ambas estimaciones muestran consistentemente que entre los chilenos existe una disociación entre la manera en la que evalúan sus propias vidas y las de los demás. Como señalamos en la introducción, esta tensión pareciera haber aumentado en los últimos años, llegando a sus niveles más altos en la actualidad. De acuerdo a nuestros datos, los chilenos se sienten mayormente satisfechos con sus vidas, pero consideran que sus compatriotas estarían significativamente peor. Creemos que esta

contradicción entre las percepciones de la propia situación y las circunstancias que enfrentan los demás estaría en el centro de la discusión en torno al concepto de “malestar” entre los chilenos. De este modo, el malestar social puede convivir con un bienestar individual en la medida en que crezca la disociación entre ambos y las personas se sientan menos ligadas al destino de los demás. Por un lado, la disociación concilia el hecho de que, al menos en cuanto a sus vidas cotidianas, los chilenos declaran niveles relativamente altos de bienestar en contraste con la desazón que exhiben con la mayoría de los aspectos de la vida colectiva, reflejados en bajos niveles de confianza institucional y política, molestia con las grandes empresas, y manifestaciones de protesta y disgusto respecto a variados ámbitos de la vida social (educación, salud, corrupción, entre otros).

Por otro lado, si bien no contamos con la satisfacción del resto de la población en suficientes mediciones, podemos ver que otros indicadores similares, que están asociados a la diferencia entre los juicios personales y colectivos, han variado en el tiempo de manera relativamente coherente con el desarrollo del fenómeno llamado “malestar”: hasta 2009 las evaluaciones de la situación económica personal y del país se movían prácticamente al unísono, pero a partir del 2010 y especialmente en 2011 y 2015 se distanciaron progresivamente. Mientras la evaluación de la situación personal se mantiene estable, la del colectivo (país) empeora sistemáticamente.

Esta brecha entre la satisfacción vital personal y atribuida al resto del país no se distribuye homogéneamente entre los chilenos. De particular interés parece la relación entre ésta y nuestras variables de estatus social. A través de todas nuestras estimaciones, el nivel educacional¹¹ tiende a aumentar las declaraciones de bienestar personal y disminuir las de bienestar social, lo que incide en un ensanchamiento de la brecha entre ambas opiniones.

11 La inclusión de un efecto de la educación en el bienestar del resto no altera significativamente nuestros resultados y se omite por parsimonia del modelo.



Bajo ciertas condiciones los medios pueden incidir en las opiniones respecto al colectivo (i.e. cuando hay mucha incertidumbre económica en nuestro ejemplo), pero bajo otras no.”

Algo similar ocurre con el acceso a bienes de consumo (riqueza), con la diferencia que su efecto sobre el bienestar personal es menor. Tomadas en su conjunto, vemos que la disponibilidad de recursos y capacidades aumenta la diferencia entre los juicios sobre la vida propia y el colectivo pues, por una parte, entrega a los individuos mayores oportunidades para desarrollar sus vidas en condiciones ventajosas, mientras que, por otra, los pone en una posición privilegiada donde las circunstancias en que los demás desarrollan sus vidas les parecen insuficientes.

Como otros estudios han mostrado (DESUC, 2015; Mackenna y Browne, 2015), la evaluación subjetiva de la situación económica personal es uno de los principales factores asociados al bienestar subjetivo individual. Nuestros datos además sugieren que ocurre algo análogo con el bienestar de los demás: mientras mejor se vea la situación económica del país, mejor se cree que se encuentran los demás. De este modo, la creciente diferencia en la manera en que las personas evalúan su situación económica y la situación del país ha incidido en el ensanchamiento de la brecha entre la satisfacción vital de las personas, y la que ellas le atribuyen a los demás. Esto implica que los chilenos se sienten cada vez más distantes del resto de sus compatriotas, en la medida en que los ven en

un estado, tanto económico como subjetivo, significativamente peor. Creemos que tanto este distanciamiento del colectivo, como la declinante “imagen mental” del estado de los demás es una de las principales fuerzas detrás del fenómeno del malestar.

Finalmente, en busca de los factores que podrían explicar las diferencias entre los juicios evaluativos referidos a lo personal y a lo colectivo, analizamos la manera en que la exposición a flujos de información política a través de los medios de comunicación de masas se relaciona con estas variables. Vimos que, a diferencia de la hipótesis de la politización que sugiere una exposición y un efecto negativo de ésta sobre los juicios creciente, los niveles de exposición se han mantenido relativamente estables. A pesar de esto, encontramos que, en ciertos contextos, estos flujos logran aumentar la brecha entre los juicios personales y tercerizados mediante un empeoramiento de las evaluaciones referidas al colectivo. De este modo, y de manera consistente con la evidencia y teorías de la literatura especializada, nuestros resultados sugieren que la exposición a los medios de comunicación de masas tiene un efecto contextual en el proceso de elaboración de imágenes mentales en los individuos, y por consiguiente en la producción de juicios evaluativos. Esto implica que bajo ciertas condiciones los medios pueden incidir en las opiniones respecto al colectivo (i.e. cuando hay mucha incertidumbre económica en nuestro ejemplo), pero bajo otras no. Asimismo, estos hallazgos sugieren que no es una “politización” masiva la que explicaría este fenómeno, pues la frecuencia en que las personas se exponen a temas políticos en medios de comunicación de masas también se ha mantenido estable, sino que ha habido cambios en el contexto informativo, —por ejemplo, mayor incertidumbre económica en los últimos dos años— y en la capacidad de los ciudadanos para interpretarlo que podrían ayudar a explicar estos cambios recientes. Creemos que el estudio detallado de estas condiciones podría iluminar la manera en que estas fuentes de información se encuentran relacionadas con el fenómeno del malestar.



4. CONCLUSIÓN

En este capítulo, hemos explorado las tensiones entre las percepciones de la situación personal y del colectivo, en particular, aquellas referidas a la satisfacción con la vida, con el fin de entregar una visión alternativa a la discusión sobre el malestar que aquejaría a los chilenos. En contraste a estudios previos, que atribuyen el malestar a la evaluación que los individuos hacen de sus propias vidas o de “la sociedad”, este estudio construye la percepción de malestar a partir de juicios directamente vinculados a la satisfacción con la vida de los demás en vez de recurrir a otras variables como la confianza en las instituciones, y permite conciliar, con relativa simpleza, el fenómeno descrito como malestar con los altos niveles de satisfacción con la vida propia declarados por los chilenos.

La aproximación que desarrollamos en este informe se distancia de esfuerzos similares anteriores por cuanto interpreta las declaraciones de los encuestados como juicios evaluativos elaborados por los individuos a través de procesos cognitivos que aluden no sólo a la experiencia de los encuestados sino que además a sus valores, predisposiciones e “imágenes mentales” respecto al mundo en el que viven. El malestar que muchos han buscado sin éxito en las opiniones acerca de la vida propia, este estudio lo encuentra en las percepciones sobre la vida de los demás. Por cierto, estas creencias dependen de las características particulares de las personas: las personas más educadas, con mayor acceso a bienes de consumo y más expuestas a los flujos de información política mediatizada, cuando los contenidos transmitidos por los medios se vuelven más negativos (i.e. escenarios de más incertidumbre económica), tienden a evaluar de peor manera la situación colectiva.

Los episodios negativos ocurridos durante los últimos años han alimentado, por su parte, una imagen mucho más crítica respecto al estado de las cosas en el país, pero, no obstante, no han reducido la satisfacción de las personas con sus propias vidas. De este modo, describimos el malestar como un fenómeno principalmente asociado al mundo circundante, al cual sólo es posible acceder de manera mediada, antes que a la experiencia personal y cotidiana.

En este punto, cabe preguntarse, ¿qué es lo que impide que los elevados niveles de satisfacción de los chilenos y su entorno más cercano se proyecten hacia al resto de la población? Una explicación es la posible disociación de los individuos con el colectivo, en que ahora su visión acerca de la situación del país está alimentada por la información contextual más que por su experiencia cotidiana. Por un lado, los individuos han experimentado mejoras de bienestar importantes, como se describe en el Capítulo 3, pero, por otro lado, han estado expuestas a visiones críticas respecto del estado de las cosas, principalmente, asociadas a deficiencias en el funcionamiento de la economía y la política. Creemos que sólo una comprensión precisa de los mecanismos que vinculan la experiencia cotidiana de los individuos con sus imágenes mentales respecto de la situación del colectivo podría iluminar el difuso concepto de malestar.



Los episodios negativos ocurridos durante los últimos años han, por su parte, alimentado una imagen mucho más crítica respecto al estado de las cosas en el país, pero, no obstante, no han reducido la satisfacción de las personas con sus propias vidas.



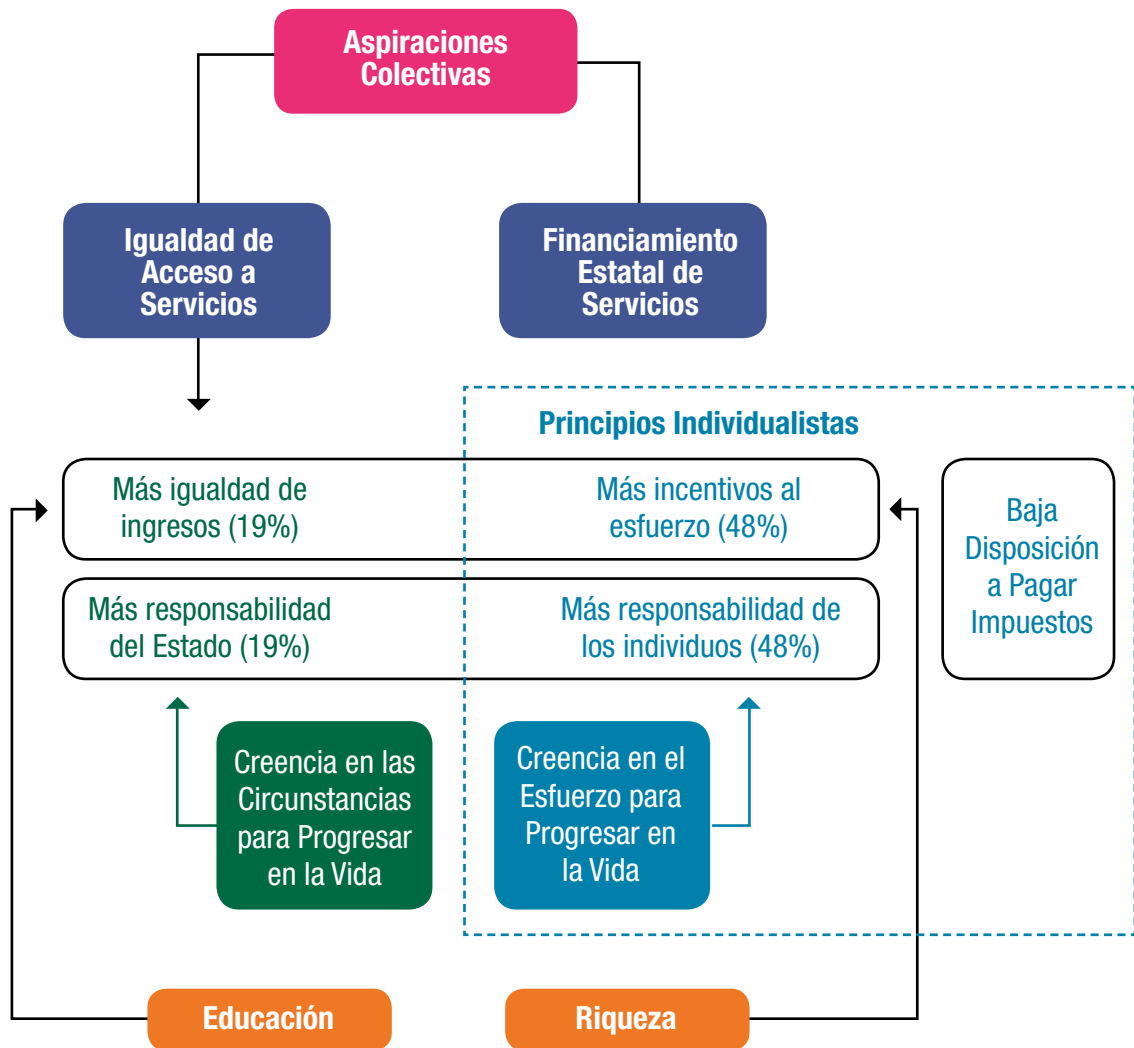


Capítulo 2:

LA TENSIÓN ENTRE INDIVIDUALISMO Y DESIGUALDAD EN EL CHILE ACTUAL



MAPA CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 2



SÍNTESIS

La desigualdad de ingresos ha caído modestamente desde 1990. Apenas un 15 por ciento de los chilenos afirmaba en 2014 que había disminuido. Es más, la mayoría de los chilenos también percibe que el acceso a servicios de calidad es muy inequitativo. Ambas dimensiones de la desigualdad, ¿constituyen una crítica al modelo de soluciones privadas a los problemas públicos, vigente en Chile?

Para responder la pregunta, este capítulo indaga en tres características claves de la sociedad chilena: (i) tener una disposición a aceptar diferencias de ingreso si ellas reflejan un premio al esfuerzo, (ii) otorgar un mayor rol por el sustento económico a las personas mismas —en desmedro del Estado—, y (iii) en creer que el esfuerzo —y no las circunstancias— es el principal determinante para progresar en la vida. En suma, las preferencias y creencias de los chilenos tienden a ser individualistas.

Ya en 1990 se observaban las mismas actitudes individualistas de hoy, cuando la mayoría de los encuestados eran personas de generaciones previas a la irrupción de la dictadura. Si los valores y creencias de los individuos se forman durante el período de socialización y se estabilizan en la adultez temprana, entonces el predominio de la creencia del esfuerzo de 1990 no podría estar asociado a los cambios al modelo ocurridos desde 1973.

Entonces, ¿existe un malestar con el actual modelo de soluciones privadas a problemas públicos? Los hallazgos de este capítulo sugieren que, pese a que se percibe que el acceso a servicios de calidad no es equitativo, no se observa una mayor inclinación por la igualdad de ingresos y a otorgarle más responsabilidad al Estado por el sustento económico de las personas, lo cual evidencia el fuerte carácter individualista de los chilenos. Más bien, el acceso desigual y la insatisfacción asociada a algunos servicios, estatales y privados, reflejan problemas específicos asociados a las diferentes prestaciones, que demandan una solución particular según cada caso.

Igualmente, los resultados indican que el apoyo de los chilenos al financiamiento estatal de los servicios, en desmedro del actual escenario en el que su acceso está mediado por la capacidad de pago, es a lo sumo ambiguo. Entre la población conviven deseos por un mejor acceso a bienes y servicios, con creencias de raigambre individualista, que ponen los logros personales por sobre la redistribución estatal. Creemos que esta tensión requiere de especial atención por parte de los analistas y el público en general, en la medida en que en ella descansan los fundamentos de políticas públicas que respondan a los verdaderos intereses de la ciudadanía.

INTRODUCCIÓN

A menudo, los críticos al modelo de desarrollo seguido por Chile durante los últimos treinta años sostienen que la desigualdad es el motivo principal tras el malestar (ver Capítulo 1). Una de las razones que sustenta tal afirmación es que el coeficiente de Gini, indicador tradicional de la desigualdad de los ingresos, pasó de 0,56 a 0,52 entre 1990 y 2013. Este descenso puede parecer modesto si consideramos que Chile sigue siendo el país con la desigualdad de ingresos más alta de los países miembros de la OCDE. Sin embargo, la comparación es algo más favorable si consideramos que Chile logró reducirla, en contraste al promedio de los países de la OCDE, los cuales experimentaron un aumento del coeficiente de Gini desde un 0,30 a un 0,32 en el mismo lapso de tiempo¹.

Esta pequeña disminución de la desigualdad de ingresos no es reconocida por la mayoría de los chilenos. En efecto, de acuerdo a datos de la encuesta CEP de noviembre 2014, un 42 por ciento declaraba que la desigualdad había aumentado durante los últimos diez años, un 40 por ciento que se había mantenido y sólo un 15 por ciento afirmaba, correctamente, que había disminuido. Pareciera ser que los chilenos juzgan los avances en este aspecto como insuficientes.

Al igual que con los ingresos, los chilenos también perciben mucha desigualdad en el acceso a servicios. El **Gráfico 1** ilustra esta percepción, según datos de la encuesta CEP de noviembre 2015, en el acceso a la salud y la educación de calidad, una vivienda digna o justicia eficaz. A pesar de que, en estricto rigor, la ley permite que cualquier chileno pueda acceder a proveedores públicos o privados de tales servicios, lo que asegura la

igualdad en el acceso, la población percibe mucha desigualdad.

¿Cómo se podría haber generado tal percepción? Puede ser que la explicación radique en que la calidad de las prestaciones recibidas es heterogénea, es decir, existen servicios de buena y mala calidad. Entonces, si el acceso a mejores servicios pudiera conseguirse sólo a través de salarios más altos, entonces la elevada desigualdad del ingreso estaría impidiendo que algunos puedan acceder a mejores prestaciones. Entonces, alguien podría sostener que, para mejorar el acceso a tales servicios, la desigualdad de ingresos debería disminuir bastante o bien que el Estado se transformara en el único proveedor de servicios de buena calidad, en cuyo caso se trataría de un cambio del modelo de desarrollo seguido por Chile durante los últimos treinta años, desde uno basado principalmente en soluciones privadas a problemas públicos hacia uno de soluciones estatales.

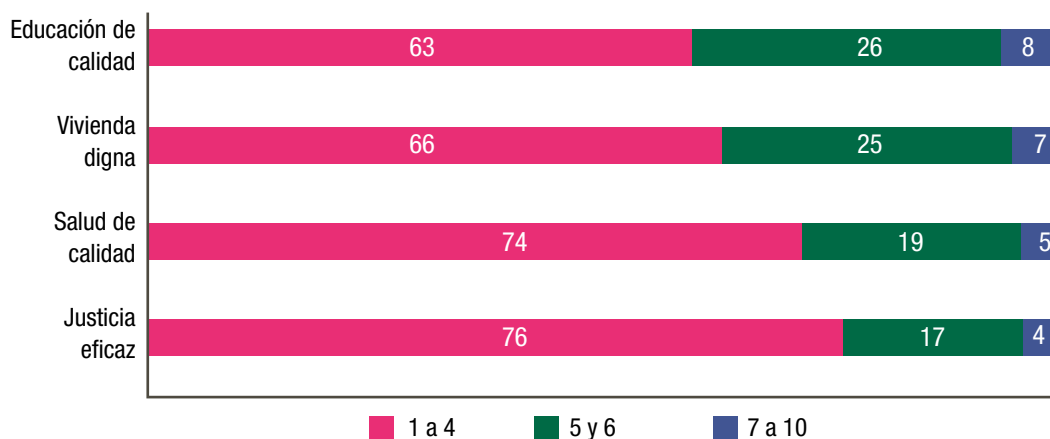
**Un 42 por ciento
declaraba que la
desigualdad había
aumentado durante los
últimos diez años, un 40
por ciento que se había
mantenido y sólo un 15
por ciento afirmaba,
correctamente, que
había disminuido.**

¹ Esta comparación se efectúa sólo con fines ilustrativos, puesto que la OCDE calcula el coeficiente de Gini en base a ingresos por hogar equivalente (ajustado por tamaño del hogar) después de impuestos y transferencias.

Si la conjetura antes mencionada fuera correcta, entonces en la población se observaría una preferencia por mayor igualdad de los ingresos y, al mismo tiempo, por un rol más activo del Estado. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia acumulada desde el año 2008 por las encuestas CEP, la mayoría de los chilenos tiende a privilegiar los premios al esfuerzo, en desmedro de la igualdad de ingresos y tiende a situar la responsabilidad por el sustento económico de las personas en los individuos mismos, en vez del Estado. Ello pone en entredicho la plausibilidad de tal hipótesis.

El objetivo de este capítulo es explorar si la forma de resolver los problemas públicos en Chile, en particular, el acceso a servicios de calidad, es compatible con los principios de sus ciudadanos. En concreto, analizaremos las preferencias por igualdad de ingresos y del rol del Estado en el sustento económico de las personas y las creencias en la importancia del esfuerzo y las circunstancias para progresar en la vida.

Gráfico 1: Percepciones de igualdad de acceso a servicios, 2015



Nota: Respuestas a la pregunta “En una escala de 1 a 10 donde 1 significa “nada de igualdad en el acceso” y 10 significa “mucho igualdad en el acceso”, ¿cómo calificaría la igualdad de acceso que tienen los chilenos a las siguientes cosas?”. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, noviembre 2015.

El texto que sigue se divide en tres partes. La primera (1) estudia las preferencias por igualdad de ingresos (relativo al premio al esfuerzo) y por el rol del Estado en el sustento económico de las personas (relativo a la responsabilidad de los individuos) y las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, como determinantes del progreso en la vida, desde 1990. La segunda (2) analiza

cuantitativamente las relaciones entre las percepciones de desigualdad en el acceso a servicios, con las creencias en el esfuerzo y las circunstancias y las preferencias sobre la igualdad de ingresos y el rol del Estado. La tercera (3), por último, discute los hallazgos de la aproximación empírica y su vínculo con las explicaciones del presunto malestar que aquejaría a nuestra sociedad.

1. PRINCIPIOS INDIVIDUALISTAS

En esta sección se estudian, en primer lugar, las preferencias por igualdad de ingresos y por el rol del Estado en el sustento económico de las personas (relativo a la responsabilidad de los individuos) y luego, en segundo lugar,

las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, como determinantes del progreso en la vida. En ambos casos se discute la trayectoria temporal y sus rasgos individualistas.

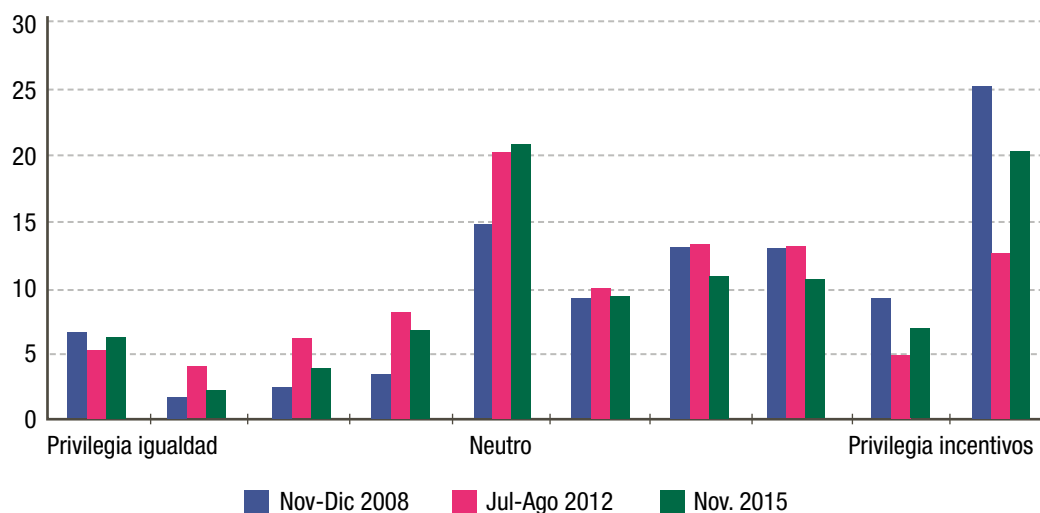
1.1. PERCEPCIONES SOBRE LA IGUALDAD DE INGRESOS Y DEL ROL DEL ESTADO

La demanda por igualdad de ingresos es recogida a través de las respuestas a la siguiente pregunta, que está presente en las encuestas CEP desde 2008:

¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que uno significa “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” y diez significa “debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”?

En adelante nos referiremos a esta pregunta como “igualdad-incentivos”. Ella busca relacionar la preferencia por igualdad de ingresos con las diferencias que podrían generarse producto del esfuerzo individual. De esta manera, personas que se ubican en la parte baja de la escala, apoyarían que su ingreso no estuviese estrechamente correlacionado con su esfuerzo, en pos de una mayor igualdad de ingresos entre las personas. Por otro lado, las personas que se ubican en la parte alta de la escala, preferirían que el ingreso esté altamente correlacionado con el esfuerzo, sin importar si eso acentúa las diferencias de ingresos entre las personas.

Gráfico 2: Evolución de respuestas a la pregunta igualdad-incentivos, 2008-2015



Nota: ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que 1 significa “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” y 10 significa “debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”? Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

La mayoría de los chilenos tiende a privilegiar los incentivos, esto es, elige opciones asociadas al mérito personal, en desmedro de la igualdad de ingresos.

El CEP ha aplicado casi ininterrumpidamente esta pregunta sobre el tema de la igualdad de ingresos desde 2008. El **Gráfico 2** presenta la evolución en el tiempo de la distribución completa de respuestas asociadas a la pregunta de igualdad-incentivos en tres momentos del tiempo: 2008, 2012 y 2015². De todas formas, el mensaje de la figura no cambia si se incluyen todos los años. A partir del gráfico se puede observar que la mayoría de los chilenos tiende a privilegiar los incentivos, esto es, elige opciones asociadas al mérito personal, en desmedro de la igualdad de ingresos. También se revela que la distribución es bimodal, esto es, la mayor cantidad de respuestas se concentran en dos alternativas: la neutra y la opción más extrema, en favor de privilegiar los incentivos, sin importar la desigualdad de ingresos que se podría generar.

Los datos son bastante consistentes en las tres mediciones presentes en la figura, aunque presentan algunas fluctuaciones. El promedio del indicador de igualdad-incentivos fue de siete en 2008; luego, cayó a 6,1 en 2012 para, finalmente, alcanzar un 6,5 durante 2015. Es posible que el descenso en la

importancia relativa de los incentivos, a favor de la igualdad de ingresos, en 2012, tenga su origen en el aumento de las críticas hacia el modelo de desarrollo seguido por Chile durante los últimos treinta años producto de las manifestaciones sociales en ese periodo. Sin embargo, la importancia relativa de los incentivos volvió a subir hacia 2015, aunque ubicándose todavía por debajo de los niveles alcanzados en 2008.

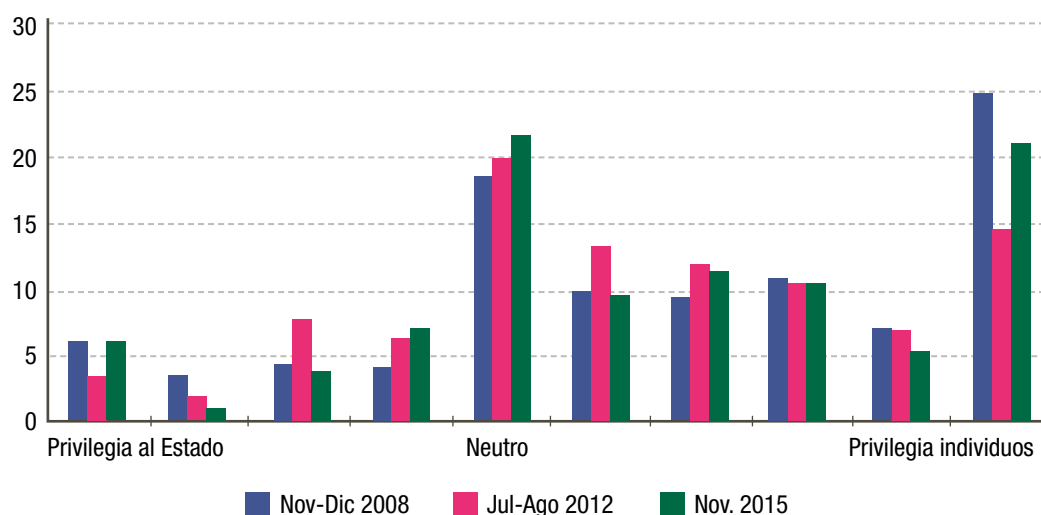
La pregunta que captura la percepción respecto al rol del Estado, también presente en las encuestas CEP desde 2008, intenta capturar las percepciones acerca de si la responsabilidad por el sustento económico de los individuos le corresponde al Estado o a las personas mismas. En otras palabras, busca poner en perspectiva el rol del Estado en cuanto al ingreso de las personas. Específicamente, a los entrevistados se les consulta lo siguiente:

¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que uno significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado” y diez significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas”?

En adelante, nos referiremos a esta pregunta como “Estado-individuo”. Las personas que se ubican en la parte baja de la escala preferirían más involucramiento del Estado en cuanto a los ingresos de las personas, mientras que los individuos cuya preferencia se localiza en la parte alta se inclinarían por que las personas sean más responsables de los ingresos, lo que podría ocurrir si las personas creen más en el esfuerzo y menos en las circunstancias como determinantes de los resultados económicos, hipótesis que exploraremos en las siguientes secciones.

2 Se optó por incluir sólo tres años de datos para no entorpecer la visualización gráfica.

Gráfico 3: Evolución de respuestas a la pregunta Estado-individuo, 2008-2015³



Nota: ¿Dónde se ubicaría Ud. en esta escala, en que uno significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado” y diez significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas”? Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Las distribuciones completas de respuestas asociadas a la pregunta de Estado-individuo en tres momentos del tiempo (2008, 2012 y 2015) están expuestas en el **Gráfico 3**. Ahí se puede observar que la mayoría de los chilenos no cree que exista un papel para el Estado, en relación al sustento económico de las personas, más bien tienden a privilegiar la responsabilidad individual. Al igual que en el caso anterior, las respuestas se concentran en la opción neutra (centro de la escala) y en la opción más extrema, en favor de que la responsabilidad por el sustento económico está en los individuos. De ahí se puede concluir que los chilenos le asignarían un rol secundario al Estado en este aspecto. Las distribuciones de las tres mediciones presentes en la figura son similares, aunque con algunas fluctuaciones. El promedio del indicador de Estado-individuo fue de 6,7 en 2008; luego, cayó a 6,3 en 2012 para, finalmente, alcanzar un 6,5 durante 2015. Tal como en el caso anterior, es posible aventurar que la caída (transitoria) en la importancia relativa de los individuos, a favor de un mayor involucramiento del Estado, se deba a las masivas manifestaciones sociales de ese periodo.

En resumen, entre 2008 y 2015, se puede observar una mayor predisposición a ser más individualistas en cuanto a las preferencias por igualdad de ingresos y al involucramiento del Estado en el sustento de las personas. Esto significa que los chilenos se han mantenido más cerca del polo individualista que del polo colectivista en este lapso, a pesar del discurso de los movimientos sociales contrarios a estos principios.

Los datos revelan que los chilenos se han mantenido más cerca del polo individualista que del polo colectivista durante la última década, a pesar del discurso de los movimientos sociales contrarios a estos principios.

³ Tal como en la pregunta de igualdad-incentivos, el CEP ha aplicado la pregunta de Estado-individuo, casi ininterrumpidamente, desde 2008, sin embargo, por fines ilustrativos, se optó por incluir sólo tres años.



1.2. LAS CREENCIAS EN EL ESFUERZO Y LAS CIRCUNSTANCIAS

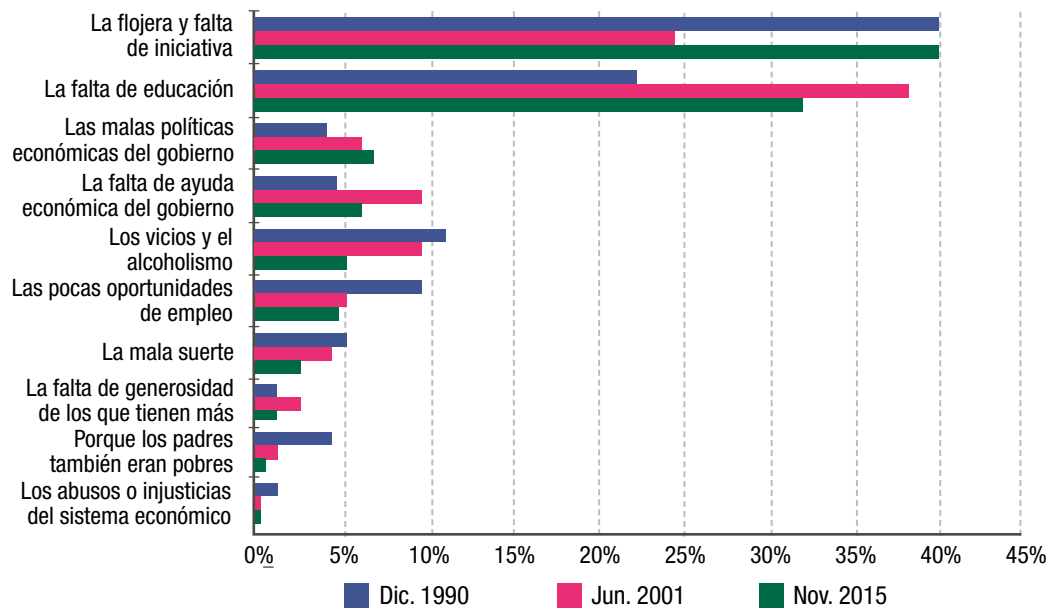
Hace algunos años, el economista y cientista político John Roemer (1998, 71) expuso que en las sociedades occidentales existen dos concepciones acerca de la igualdad de oportunidades, las cuales definen la filosofía política de un país. La primera, tiene relación con la idea de “nivelar la cancha” entre individuos que enfrentan contextos socioeconómicos heterogéneos. La segunda, se basa en el principio del mérito,⁴ el cual se sustenta en la competencia. Ambos fundamentos definen las preferencias por ciertas políticas públicas en desmedro de otras, cuyo objetivo es velar por el bienestar de las personas. En este contexto, es relevante entender qué opinión tiene la sociedad al respecto, puesto que ello permite ayudar a comprender las preferencias por (des)igualdad y responsabilidad por el sustento económico de las personas.

Si los individuos tienden a asociar el bienestar y el éxito económico a las circunstancias –por ejemplo, provenir de una familia rica, los contactos o “pitutos” o, simplemente,

la suerte–, entonces atribuirán los buenos resultados a factores fuera de su control. En contraste, si las personas creen en el esfuerzo como responsable de los resultados obtenidos, entonces tenderán a pensar que el individuo mismo es responsable de su destino. La literatura internacional en este ámbito (Alesina y Angeletos, 2005a; Fong, 2001; Roemer, 1998) muestra que si la creencia predominante es la primera, entonces existirá una mayor demanda por redistribución de recursos, en favor de quienes enfrentaron circunstancias iniciales adversas, privilegiando la igualdad (en vez de los incentivos) y otorgándole una mayor responsabilidad al Estado por el sustento económico de las personas. Si, en cambio, predomina la creencia en el esfuerzo, entonces las diferencias de ingresos serían aceptadas, pues ellas serían una justa recompensa producto del mérito personal y al Estado no le correspondería un rol en esta materia.

⁴ Roemer menciona, en estricto rigor, el principio de no discriminación. Sustenta que en competencia por posiciones en la sociedad, los individuos deben ser juzgados sólo por los atributos relevantes en el desempeño de las tareas de la posición en cuestión.

Gráfico 4: Percepciones sobre las causas de la pobreza 1990-2015



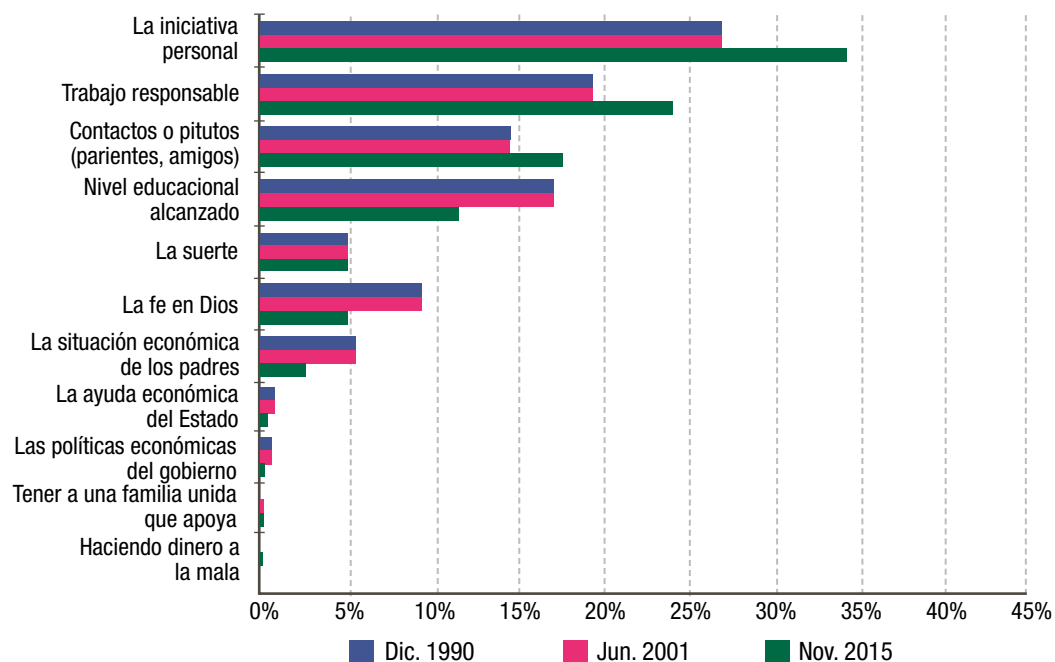
Nota: Referente a la pregunta: “Como Ud. sabe, en Chile hay personas que son pobres. ¿Cuáles de las alternativas de esta lista cree Ud. que son las dos causas más frecuentes de que estas personas sean pobres?”. El gráfico expone la distribución de la primera mención, excluye las alternativas “otros” y “no sabe/no responde” y está ordenado de mayor a menor de acuerdo a los porcentajes del año 2015. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Los **Gráficos 4 y 5** ilustran las percepciones acerca de las causas de la pobreza y de la riqueza, respectivamente, de acuerdo a datos acumulados por la encuesta CEP desde 1990. Su análisis nos dará luces acerca de cómo ponderan los chilenos las variables asociadas al esfuerzo y las circunstancias para justificar los resultados económicos. En el **Gráfico 4** se puede apreciar que existen dos explicaciones para la pobreza, que concentran la mayoría de las menciones. Ellas son: “la falta de educación” y “la flojera y falta de iniciativa”. La primera de las menciones puede asociarse tanto a las circunstancias —ya sea porque la situación económica familiar requería que el individuo trabajara o bien porque no contaba con los recursos económicos necesarios para hacerlo— como al esfuerzo —un individuo no alcanzó las notas adecuadas para alcanzar niveles de estudios superiores—, sin embargo, la segunda sí se puede vincular inequívocamente al mérito. Por otra parte, las injusticias del sistema económico, la falta de ayuda del gobierno, las malas políticas

económicas del gobierno, tener padres pobres, la falta de generosidad de los ricos y la mala suerte se podrían relacionar inequívocamente con las circunstancias, debido a que están fuera del control de las personas. A pesar de que estas alternativas capturan un conjunto amplio y muy variado de situaciones, la suma de estas menciones resulta siempre ser inferior que las asociadas al esfuerzo.

A juicio de los chilenos existen dos explicaciones para la pobreza, que concentran la mayoría de las menciones. Ellas son: “la falta de educación” y “la flojera y falta de iniciativa”.

Gráfico 5: Percepciones sobre las causas del éxito económico, 1990-2015



Nota: Referente a la pregunta: “Como Ud. sabe, también en Chile hay personas que tienen éxito económico, es decir, ganan dinero suficiente para llevar una vida acomodada. ¿Cuál de las alternativas de esta lista cree Ud. que son las dos más importantes en el éxito económico de las personas?”. El gráfico expone la distribución de la primera mención, excluye las alternativas “otros” y “no sabe/no responde” y está ordenado de mayor a menor para los porcentajes del año 2015. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

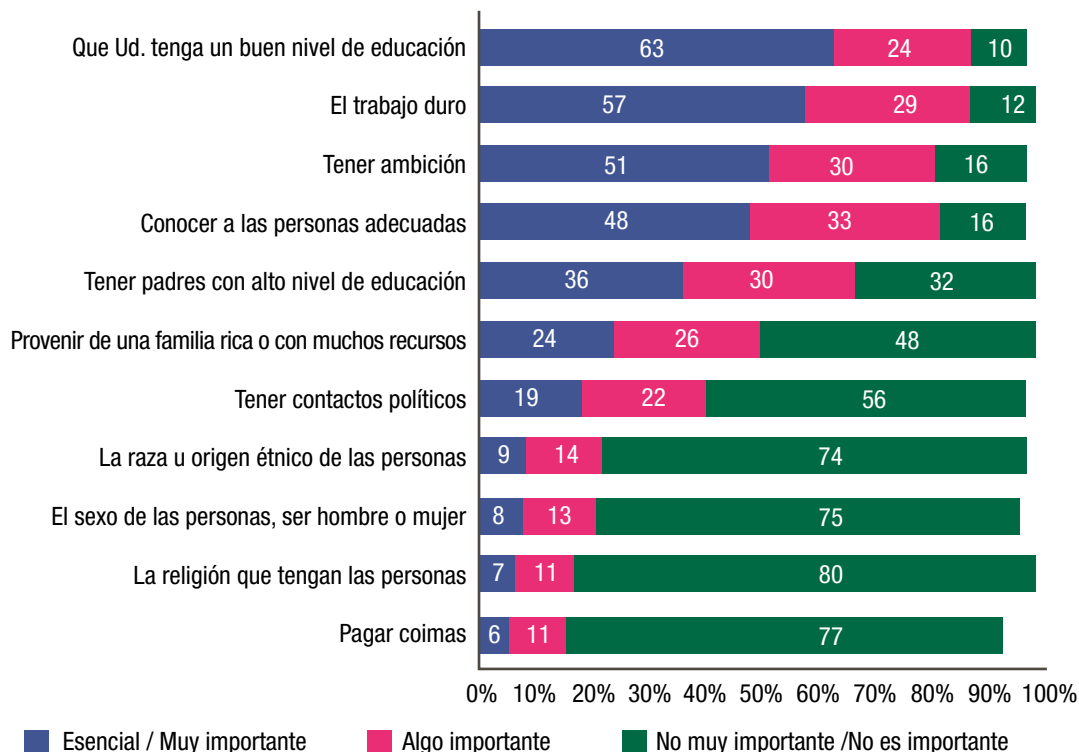
Algo similar ocurre con las percepciones de los chilenos sobre las causas del éxito económico, ilustradas en el **Gráfico 5**: “la iniciativa personal” y “el trabajo responsable” aparecen como las alternativas con mayores menciones, ambas asociadas al mérito y al esfuerzo individual. La primera alcanza casi el 35 por ciento de las menciones, mientras que la segunda llega al 25 por ciento, para el año 2015. Al mismo tiempo, las opciones relacionadas con las circunstancias como contactos, la suerte, aportes de los padres o del gobierno, en conjunto, suman cerca de 25 por ciento en 2015, muy por debajo de las alternativas relacionadas con el mérito personal.

Otro aspecto que salta a la vista de la observación de los **Gráficos 4 y 5** es la estabilidad en el tiempo de las respuestas. Se podría pensar que la expansión de un modelo de desarrollo de soluciones privadas a problemas públicos —enfocado en el esfuerzo y el ingreso como medio para

acceder a servicios de calidad— podría haber modificado sustancialmente las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, como factores explicativos de la pobreza y el éxito económico, sin embargo, no ha sido así.

En estas consideraciones también es relevante mencionar que el encuestado promedio de 1990 es diferente del de 2015. En 1990, la mayoría de los encuestados habían nacido antes de 1970, por lo tanto, crecieron bajo un modelo de desarrollo distinto del vigente post-dictadura. En contraste, en 2015 hay al menos dos generaciones de chilenos que nacieron durante o después de la dictadura y que, por lo tanto, fueron criados bajo el modelo de soluciones privadas. Lo interesante de esta precisión es que, a pesar de estas diferencias, ambos grupos de personas sostienen, en promedio, las mismas creencias respecto del esfuerzo y las circunstancias tras el éxito económico y la pobreza. En la sección de discusión, volveremos sobre este punto.

Gráfico 6: Para progresar en la vida, 2015



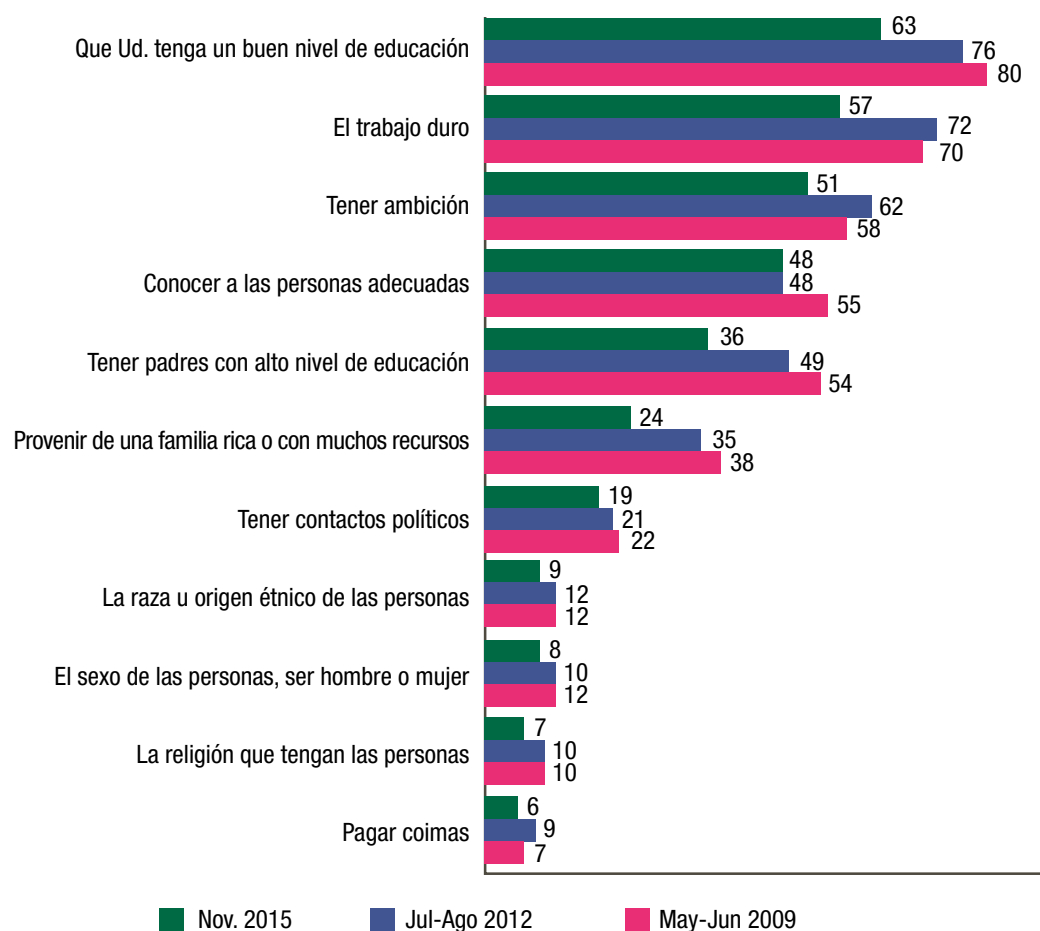
Nota: Respuestas a la pregunta: “Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es...?”, para cada uno de los ítems listados. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, noviembre 2015.

Las variables directamente asociadas al esfuerzo, como el “trabajo duro” y “tener ambición”, siguen siendo las más importantes, en términos relativos, después del factor educación.

Una forma alternativa de analizar las creencias en el esfuerzo y las circunstancias se obtiene al observar las respuestas a las preguntas sobre la importancia de ciertos aspectos para avanzar en la vida. Tal como se aprecia en el **Gráfico 6** las creencias en el esfuerzo están

representadas en los conceptos “trabajo duro” y “tener ambición” como aspectos importantes para progresar. Un 57 por ciento de los chilenos considera que el trabajo duro es esencial o muy importante para surgir en la vida, mientras que un 51 por ciento afirma lo mismo respecto de tener ambición. La respuesta que registra mayores preferencias en esta materia es la de tener un buen nivel de educación (63 por ciento), aspecto que no se puede relacionar inequívocamente al esfuerzo o las circunstancias. Las otras variables vinculadas a las circunstancias son el conocer a las personas adecuadas (48 por ciento), tener padres con altos niveles de educación (36 por ciento), provenir de una familia rica (24 por ciento), tener contactos políticos (19 por ciento), la raza (nueve por ciento), el género (ocho por ciento) y pagar coimas (seis por ciento). Cabe destacar que ninguno de estos ítems supera a alguno de los aspectos asociados al esfuerzo.

Gráfico 7: Evolución de los aspectos para progresar en la vida, 2009-2015



Nota: Porcentajes de personas que responden “Esencial” o “Muy importante” en cada uno de los aspectos señalados ante la pregunta: “Para surgir en la vida, ¿cuán importante cree Ud. que es...?”, para cada uno de los items listados. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

El **Gráfico 7** presenta la evolución de la importancia de diversos factores para surgir en la vida, entre 2009 y 2015. A pesar de que se observa una disminución al comparar 2015 con 2009, tener un buen nivel de educación todavía se encuentra al tope del ranking, aspecto que no se puede relacionar inequívocamente al esfuerzo o las circunstancias. Por otra parte, las variables directamente asociadas al esfuerzo, como el “trabajo duro” y “tener ambición”, siguen siendo las más importantes, en términos relativos, después del factor educación. Al final del listado se encuentran todas aquellas variables relacionadas con la creencia de que las circunstancias son relevantes para surgir en la vida.

En suma, tanto el análisis de las percepciones sobre las causas de la pobreza y la riqueza como de los factores para surgir en la vida tienden a ser individualistas debido a que sitúan variables asociadas al esfuerzo — como la iniciativa y el trabajo duro— como las razones más importantes para explicar los resultados económicos y el progreso individual. Al igual que con las preferencias por igualdad de ingresos y por más involucramiento del Estado, las percepciones respecto de la importancia del esfuerzo se han mantenido estables, a pesar de que el debate público se ha alejado de este aspecto y ha enfatizado a las circunstancias como razones tras el progreso de las personas.

2. ANÁLISIS EMPÍRICO

Esta sección analiza cuantitativamente las relaciones entre las percepciones de desigualdad en el acceso a servicios, las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, y las preferencias sobre la igualdad de ingresos y el rol del Estado. Para eso nos basamos en los datos del estudio n° 75 de opinión pública del CEP de noviembre 2015, el único que incluye todas las variables descritas en las secciones anteriores. Ellas son:

- Las preferencias por igualdad de los ingresos serán medidas utilizando la pregunta igualdad-incentivos, descrita en la sección 1.1 y cuya distribución se ilustra en el **Gráfico 2**.
- Las preferencias por el rol del Estado en cuanto al sustento económico de los individuos serán capturadas utilizando la pregunta Estado-individuo, también descrita en la sección 1.1 y cuya distribución se exhibe en el **Gráfico 3**.
- La percepción de (des)igualdad en el acceso a servicios se construyó a partir de la igualdad percibida en el acceso a educación de calidad, vivienda digna, salud de calidad y justicia eficaz, respuestas que se ilustran en el **Gráfico 1**. Así, la escala resultante toma valores más altos en la medida que el individuo perciba que el acceso a los servicios es más igualitario.
- La creencia en el esfuerzo considera el grado de importancia que el encuestado le asigna al trabajo duro y a tener ambición para surgir en la vida, cuya distribución se exhibe en el **Gráfico 6**. El indicador crece mientras más intensa sea la creencia en el mérito para progresar en la vida.
- La creencia en la suerte se construye a partir del grado de importancia que el encuestado le asigna, para progresar en la vida, a las siguientes categorías: conocer a las personas adecuadas, tener padres con altos niveles de educación, provenir de una familia rica, tener contactos políticos, la raza, el

Los resultados apuntan a que sólo la riqueza incide significativamente, en términos estadísticos, sobre las preferencias por igualdad de ingresos, mientras que el nivel educacional del encuestado y la posición social subjetiva no tienen tal influencia.

género y pagar coimas. Las respuestas a cada uno de estos ítems se encuentran en el **Gráfico 6** también. Así, la escala le asigna valores más altos mientras más intensa sea la creencia en que las circunstancias son más importantes para surgir en la vida.

Por motivos de control estadístico, cada una de las regresiones incluye indicadores sociodemográficos básicos, tales como el sexo, la ruralidad, la edad, la identificación y actividad religiosa, la educación, la riqueza, la posición social subjetiva, la urbanidad y efectos fijos por región.

Los análisis consisten en un set de regresiones OLS (con errores estándar robustos a heterocedasticidad) para las preferencias por igualdad de los ingresos, una con y otra sin las creencias en el esfuerzo y las circunstancias (por razones que explicaremos más adelante), y lo mismo para las preferencias por el rol del Estado en cuanto al sustento económico. Los resultados de las regresiones se presentan en las columnas (1) y (2) de la **Tabla 1** y serán analizados a continuación.

Tabla 1: Regresiones igualdad-incentivos y Estado-individuo

	(1) Igualdad	(2) - incentivos	(3) Estado	(4) - individuo
Igualdad Acceso Servicios	0.122** (0.051)	0.139*** (0.051)	0.085 (0.053)	0.112** (0.053)
Esfuerzo		0.218** (0.099)		0.399*** (0.093)
Circunstancias		-0.427*** (0.112)		-0.562*** (0.107)
Género (ref. Hombre)	-0.124 (0.152)	-0.126 (0.153)	-0.061 (0.151)	-0.057 (0.148)
Edad	-0.003 (0.005)	-0.001 (0.005)	-0.001 (0.004)	0.001 (0.004)
Pareja Estable	0.054 (0.148)	0.052 (0.148)	-0.080 (0.144)	-0.064 (0.144)
Religión: Católica (ref. Ninguna)	0.461** (0.198)	0.472** (0.199)	0.521*** (0.194)	0.507*** (0.191)
Religión: Evangélica (ref. Ninguna)	0.427 (0.309)	0.404 (0.310)	0.505* (0.293)	0.443 (0.291)
Religión: Otra (ref. Ninguna)	0.643 (0.486)	0.626 (0.486)	1.271*** (0.407)	1.220*** (0.380)
Actividad Religiosa	-0.046 (0.040)	-0.050 (0.040)	0.005 (0.038)	0.001 (0.037)
Educación	0.036 (0.042)	0.032 (0.042)	0.097** (0.040)	0.094** (0.040)
Riqueza	0.087** (0.041)	0.082** (0.041)	0.037 (0.040)	0.018 (0.040)
Posición Social Subjetiva	0.094 (0.071)	0.096 (0.070)	-0.001 (0.067)	-0.002 (0.066)
Zona: Urbana (ref. Rural)	0.148 (0.229)	0.083 (0.232)	-0.004 (0.212)	-0.096 (0.211)
Intercepto	5.727*** (0.557)	5.634*** (0.712)	5.830*** (0.499)	5.267*** (0.636)
Observaciones	1,334	1,323	1,338	1,327
R ²	0.047	0.059	0.067	0.096
R ² ajustado	0.028	0.039	0.049	0.076

Nota: En las columnas (1) y (2) la variable dependiente es la escala, entre uno y diez, en que uno significa “los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual” y diez significa “debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos”. En las columnas (3) y (4) la variable dependiente es la escala, entre uno y diez, en que uno significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en el Estado” y diez significa “la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas”. Se reportan coeficientes OLS y errores estándar robustos a heteroscedasticidad entre paréntesis. Se omiten efectos fijos por región. * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta CEP, noviembre 2015.



2.1. ¿MÁS IGUALDAD?

La columna 2 de la **Tabla 1** ilustra una relación positiva y significativa, en términos estadísticos, entre la percepción de igualdad de servicios de calidad y las preferencias por igualdad de ingresos, lo que significa que a mayor percepción de igualdad en el acceso, los chilenos tienen mayor disposición a aceptar diferencias en ingreso como resultado del esfuerzo. La diferencia entre quienes contestan mucha y nada de igualdad en el acceso a servicios es de poco más de un punto, en una escala que va de uno a diez. Esto sugiere que existe una asociación relevante entre la percepción de igualdad y la preferencia por ella: mientras más igualdad en el acceso a servicios se perciba, menos se cree en que debiera privilegiarse la igualdad de ingresos por sobre los incentivos individuales.

La relación entre percepción de igualdad en el acceso a servicios y la disposición a aceptar diferencias de ingreso como resultado del esfuerzo se puede reinterpretar a la luz del enfoque de Sen (1985), si se considera que la educación y salud de calidad, vivienda digna y justicia eficaz son insumos básicos o capacidades. En esta perspectiva, los resultados apuntan a que mientras más igualitario se perciba el acceso a las capacidades, las personas tenderán a

preferir que el ingreso sea un incentivo para el esfuerzo, sin importar las diferencias de ingreso que ello podría ocasionar. Así, se podría inferir que la igualdad relevante es la de capacidades, no la de ingresos; tal como señala Sen (1989).

Los resultados de la columna 2 en la **Tabla 1** también exhiben la relación positiva y estadísticamente significativa entre la creencia en el esfuerzo y las preferencias por igualdad de ingresos. De esta forma podemos destacar que mientras más creen en el esfuerzo para surgir en la vida, más sostienen que el ingreso debería premiar el esfuerzo, sin preocuparse por las desigualdades que se pudieran generar. La diferencia entre quienes creen más y menos en el esfuerzo es de poco menos de un punto en la escala de igualdad-incentivos.

En cuanto a la creencia en las circunstancias, los resultados de la columna 2 en la **Tabla 1** revelan una asociación negativa y significativa, en términos estadísticos, entre ésta y las preferencias por igualdad de ingresos, lo que significa que los chilenos, mientras más consideran que las circunstancias son importantes para surgir en la vida, más tienden a favorecer la igualdad de los ingresos, sin importar si ello desincentiva el

A pesar de que la percepción de desigualdad en el acceso a servicios es extendida, su influencia es muy modesta sobre la disposición a aceptar diferencias de ingreso como resultado del esfuerzo.

esfuerzo. La diferencia entre quienes creen más y menos en las circunstancias es de poco menos de dos puntos en la escala de igualdad-incentivos.

Al igual que en el Capítulo 1, en este texto se captura la dimensión socioeconómica utilizando tres indicadores: (1) el nivel educacional del encuestado, medido a través de una escala entre cero (sin estudios) y nueve (postgrado completo), de acuerdo a los ciclos educacionales iniciados y completados; (2) una medida de riqueza, basada en la posesión de nueve bienes “de estatus”, seleccionados a partir de análisis factoriales y componentes principales, considerando los problemas de medición relacionados al ingreso y al nivel socioeconómico en las encuestas de opinión;⁵ y (3) la posición social subjetiva, como una manera de incorporar la auto-evaluación que los individuos hacen de sí mismos y de su situación socioeconómica.

Los resultados apuntan a que sólo la riqueza incide significativamente, en términos estadísticos, sobre las preferencias por igualdad de ingresos, mientras que el nivel educacional del encuestado y la posición social subjetiva no tienen tal influencia. La

relación entre la riqueza y las preferencias por igualdad de ingresos es positiva, de modo que, quienes poseen más bienes “de estatus” están menos de acuerdo con la idea de la igualdad de ingresos, y más interesados en el ingreso como incentivo al esfuerzo, mientras que quienes poseen menos de tales bienes creen lo opuesto. Este resultado es congruente con las conclusiones de varios modelos de economía política, tales como el de Meltzer-Richard (1981) —en que las preferencias de los individuos se corresponden con sus intereses— o el trabajo de Lipset y Rokkan (1967) —la idea de clivaje propietario-trabajador—.

El resto de las variables sociodemográficas consideradas en los modelos empíricos —género, edad, pareja estable, actividad religiosa y urbanidad— no inciden, en términos estadísticos, sobre las preferencias por igualdad de ingresos. La excepción es la auto-identificación religiosa. Las estimaciones apuntan a que las personas que se auto-identifican con el catolicismo tienden a estar más interesadas en el ingreso como incentivo al esfuerzo, sin importar las diferencias que ello podría generar, pero no ocurre lo mismo con la auto-identificación con la religión evangélica.

En resumen, se puede apreciar que, a pesar de que la percepción de desigualdad en el acceso a servicios es extendida, su influencia es muy modesta sobre la disposición a aceptar diferencias de ingreso como resultado del esfuerzo. Si hubiera disconformidad con el modelo de soluciones privadas a los problemas públicos, debería existir una preferencia más marcada por igualdad de ingresos y así reducir el acceso inequitativo a los servicios. Sin embargo, ello no se observa en los datos. Por el contrario, se observa una cierta tensión entre principios individualistas (creencia en el esfuerzo, en desmedro de las circunstancias, y los premios que derivan de éste, sin importar la igualdad) y una (posible) demanda de carácter colectivista, como podría ser el avance hacia un acceso a los servicios más igualitario.

5 Los resultados son robustos al reemplazo de este índice de riqueza por el grupo socioeconómico al que pertenece el encuestado o por el tramo de ingreso declarado.

2.2. ¿MÁS ESTADO?

En esta sección revisaremos las relaciones estadísticas entre la preferencia por un rol mayor del Estado, en cuanto al sustento económico de los individuos, y la percepción de igualdad en el acceso a servicios, las creencias en el esfuerzo y las circunstancias, como determinantes del progreso en la vida, controlando por la influencia de un conjunto de controles sociodemográficos. Los resultados de las regresiones se presentan en las columnas (3) y (4) de la **Tabla 1**.

La columna 4 de la **Tabla 1** ilustra la relación positiva y significativa, en términos estadísticos, entre la percepción de igualdad de servicios de calidad y la responsabilidad del Estado en cuanto al sustento económico, lo que se puede interpretar como que a mayor percepción de igualdad en el acceso, los chilenos tienden a situar la responsabilidad por el sustento económico en los individuos mismos, en vez del Estado. Tal como en el caso de igualdad-incentivos, la diferencia es de poco más de un punto entre quienes perciben mucha y nada de igualdad en el acceso a servicios.

Como en el caso de la igualdad de ingresos, los resultados se pueden reinterpretar bajo el enfoque de Sen (1985) si pensamos que los servicios equivalen a las capacidades esgrimidas por el autor mencionado. Mientras más igualitario sea percibido el acceso a estas capacidades, entonces los individuos serán más proclives a situar la responsabilidad por el sustento económico en las personas mismas, en vez del Estado. Es importante notar que, en otras palabras, estos resultados apuntan a que si se percibe que “la cancha está nivelada”, entonces las personas se inclinan por que cada quién se esfuerce por sus propios medios, ya que éstos estarían equitativamente asignados, sin importar las diferencias de ingresos que se podrían derivar.

Los resultados de la columna 4 en la **Tabla 1** muestran la relación positiva y estadísticamente significativa entre la creencia en el esfuerzo y la

**Los chilenos,
mientras más creen
en el esfuerzo para
progresar, le atribuyen
más responsabilidad
a las personas por el
sustento económico en
lugar de al Estado.**

preferencia por el rol del Estado en el sustento económico. La relación estimada evidencia que los chilenos, mientras más creen en el esfuerzo para progresar, le atribuyen más responsabilidad a las personas por el sustento económico en lugar de al Estado. La diferencia entre quienes creen más y menos en el esfuerzo es de poco menos de dos puntos en la escala de Estado-individuo.

Por otra parte, la relación entre la creencia en las circunstancias, y el rol del Estado es negativa y significativa, en términos estadísticos, según se muestra en la columna 4 de la **Tabla 1**. Esto quiere decir que las personas, mientras más piensen en que las circunstancias son relevantes para progresar en la vida, más tienden a situar la responsabilidad por el sustento económico en el Estado, en vez de los individuos mismos. La diferencia entre quienes creen más y menos en las circunstancias es de poco más de dos puntos en la escala de Estado-individuo.

En cuanto a la influencia de la dimensión socioeconómica, sólo el nivel educacional del encuestado tiene una relación positiva y significativa, en términos estadísticos, con el rol del Estado. Esto es relevante, ya que indicaría que las personas más educadas tienden a situar la mayor parte de la responsabilidad por el sustento económico



Las personas más educadas tienden a situar la mayor parte de la responsabilidad por el sustento económico en las personas mismas, en vez del Estado.

en las personas mismas, en vez del Estado (tienden a ubicarse cerca de siete, en promedio, en la escala Estado-individuo). En contraste, los menos educados le asignan un menor rol a los individuos en este aspecto (tienden a ubicarse por encima de seis, en promedio, en la escala Estado-individuo). Por su parte, riqueza y la posición social subjetiva no tienen una relación significativa estadísticamente con el índice de Estado-individuo.

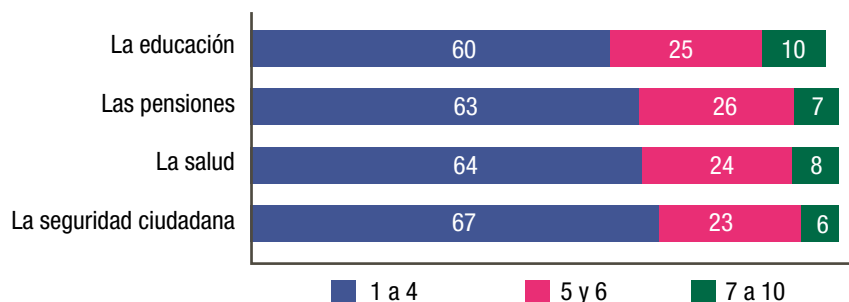
Al igual que con el índice de igualdad-incentivos, el resto de las variables sociodemográficas consideradas en los modelos empíricos —género, edad, pareja estable, actividad religiosa y urbanidad— no inciden, en términos estadísticos, sobre la inclinación por el rol del Estado en cuanto al sustento económico. La excepción, al igual que en el caso anterior, es la auto-identificación religiosa. Las estimaciones apuntan a que las personas que se declaran católicas tienden a situar esta responsabilidad en las personas mismas, en vez del Estado. No hay una asociación estadística entre la auto-identificación con el credo evangélico y el rol del Estado, pero sí la hay con aquellos que se identifican con otras religiones.

Una evidencia adicional respecto del rol del Estado se puede obtener analizando las opiniones sobre quién, el Estado o las personas mismas, debe recaer el costo de los servicios y la disposición a pagar impuestos.

El **Gráfico 8** presenta las preferencias de los chilenos en cuanto al pago por la provisión de ciertos servicios, en una escala de uno a diez donde uno significa “Todos los costos deben ser pagados por el Estado con los impuestos de todos” y diez significa “Todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”. De acuerdo a la encuesta CEP de noviembre 2015, un 60 por ciento de los chilenos responde entre 1 y 4 en cuanto a educación, lo que significa que preferiría que ésta se financiara con cargo a rentas generales. Un 63 por ciento piensa lo mismo en cuanto a las pensiones, un 64 por ciento respecto de salud y un 67 por ciento afirma que la seguridad ciudadana se debería financiar con los impuestos de todos.

La evidencia exhibida señala que la mayoría de los chilenos prefiere que servicios como la educación, las pensiones, la salud y la seguridad ciudadana se financien con cargo a rentas generales. Por un lado, esto podría ser evidencia de que los chilenos demandan provisión estatal de servicios. Pero, por otro lado, estos datos podrían respaldar la idea de que los impuestos de todos se utilicen para cubrir los costos de servicios proporcionados por privados. Se requiere información adicional para discernir con mayor precisión cuál de las dos hipótesis se ajusta mejor al Chile contemporáneo.

Gráfico 8: Financiamiento de los servicios por área, 2015

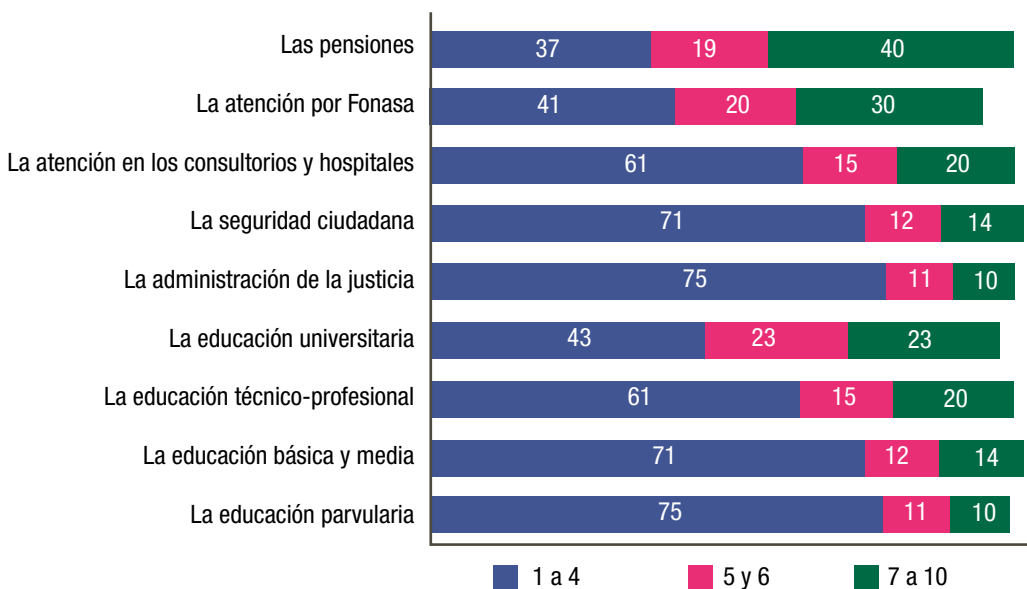


Nota: Respuestas a la pregunta: “En una escala de uno a diez donde uno significa “Todos los costos deben ser pagados por el Estado con los impuestos de todos” y diez significa “Todos los costos deben ser pagados por los usuarios sin los impuestos de todos”, ¿cómo cree usted que se deberían financiar las siguientes áreas en Chile...?”. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, noviembre 2015.

Asimismo, dada la aspiración de los chilenos de que los servicios sean financiados por el Estado, cabría esperar que también estén dispuestos a pagar impuestos para poder costear tales servicios. Sin embargo, la evidencia no apunta de manera incontrovertida en esa dirección. El **Gráfico 9** ilustra las disposiciones a pagar más impuestos para mejorar la provisión de ciertos servicios, en una escala de 1 a 10, en que 1 significa “nada dispuesto” y 10 significa “muy dispuesto”, de acuerdo a los datos de la encuesta CEP de noviembre 2015. Sólo un 40 por ciento de los chilenos responde entre 7 y 10 en cuanto a pensiones, lo que significa que estaría dispuesto a pagar más impuestos para conseguir mejores pensiones. Un 30 por ciento piensa lo mismo

en cuanto a la atención en Fonasa, un 23 por ciento respecto de educación universitaria y un 20 por ciento afirma que estaría dispuesto a pagar más impuestos para mejorar la atención de los consultorios y hospitales y la educación técnico-profesional. Por último, menos de un 20 por ciento de la población estaría dispuesta a pagar más impuestos para mejorar la educación parvularia, básica y media, la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Por lo tanto, las cifras apuntan a la existencia de otra tensión entre una demanda colectivista y un principio individualista, ahora referida a la aspiración de que el financiamiento de los servicios sea con cargo a rentas generales y la baja disposición a pagar impuestos para costear la provisión de tales servicios.

Gráfico 9: Disposición a pagar más impuestos para financiar servicios, 2015

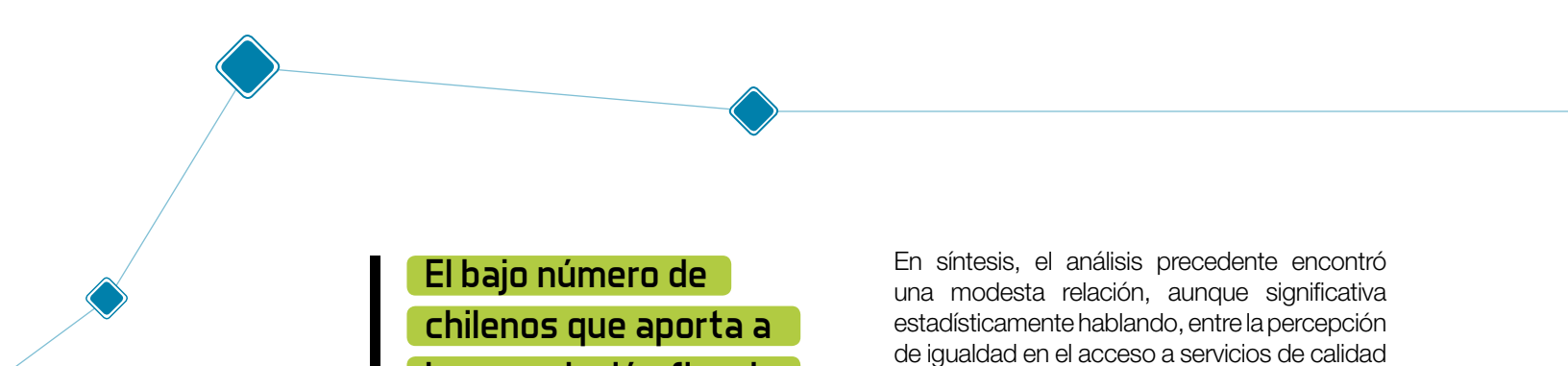


Nota: Respuestas a la pregunta: “En una escala de uno a diez donde uno significa “nada dispuesto” y diez significa “muy dispuesto”, ¿cuál sería su disposición a pagar más impuestos (o a comenzar a pagar si aún no lo hace) si el Estado gastara el dinero en mejorar:...?”. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, noviembre 2015.

Por un lado, la evidencia respecto a la baja disposición a pagar impuestos, por parte de los chilenos, no parece respaldar la idea de la creación de un estado de bienestar, puesto que en la práctica, éstos descansan en una importante contribución impositiva de la renta de toda la población, lo que no se observa en Chile. En efecto, los chilenos pagamos bastante menos impuestos a la renta que otros países como, por ejemplo, los miembros de la OCDE. El año 2011 hubo cerca de ocho millones de contribuyentes que no pagaron impuesto a la renta en Chile, equivalentes al 81 por ciento del total de contribuyentes (Agostini 2013). Otra forma de observar el mismo fenómeno es analizando el sueldo exento de tributación. En Chile, una persona que gana menos de 1,4 veces el sueldo promedio, no paga impuestos; mientras que en los países de la OCDE, la misma cifra llega a cerca de 0,33 veces. De esta forma, una persona que gana el salario promedio esté exenta del pago de

impuesto a la renta en Chile, en contraste a los países de la OCDE, donde este mismo individuo pagaría 14,5 por ciento de impuesto a la renta. Así, el bajo número de chilenos que aporta a la recaudación fiscal, a través del pago del impuesto a la renta, sumado a la baja disposición a pagar más impuestos, parece contradecir la idea del respaldo a un estado de bienestar en Chile.

Es posible que los chilenos esperen que el financiamiento de los servicios provenga de los tributos pagados por sus compatriotas de altos ingresos.



El bajo número de chilenos que aporta a la recaudación fiscal, a través del pago del impuesto a la renta, sumado a la baja disposición a pagar más impuestos, parece contradecir la idea del respaldo a un estado de bienestar en Chile.

Por otro lado, la misma evidencia no contradice el financiamiento de servicios a través de una estructura impositiva progresiva, esto es, que la tasa media de impuesto pagada por los contribuyentes crezca en la medida que el ingreso de las personas sea mayor (Mirrlees et al., 2010). Dicho de otra forma, es posible que los chilenos esperen que el financiamiento de los servicios provenga de los tributos pagados por sus compatriotas de altos ingresos. Lamentablemente, no tenemos evidencia que sustente esa interpretación por lo que, dado la complejidad del concepto de progresividad tributaria, preferimos describir este fenómeno como una tensión entre las declaraciones de los encuestados, en la medida que se manifiestan por expansión de los servicios estatales sin una correspondiente expansión de los ingresos fiscales. No obstante, como las personas de altos ingresos son pocas en nuestro país, dada la elevada asimetría de la distribución del ingreso, parece poco probable que se pueda financiar un estado de bienestar sostenible en Chile.

En síntesis, el análisis precedente encontró una modesta relación, aunque significativa estadísticamente hablando, entre la percepción de igualdad en el acceso a servicios de calidad y una preferencia por más responsabilidad del Estado en cuanto al sustento económico. En particular, mientras más equitativo se percibía el acceso a tales servicios, había una mayor preferencia por más responsabilidad de los propios individuos por el sustento económico. Dicho de otra manera, cuando los chilenos percibían igualdad de oportunidades, entonces estaban más dispuestos a asumir la responsabilidad por su situación económica. Por otro lado, tal como en el caso de la preferencia por igualdad de ingresos, la creencia del esfuerzo está relacionada con una mayor atribución de responsabilidad a las personas por su sustento económico.

De nuevo acá observamos una tensión entre principios individualistas (creencia en el esfuerzo como causante del éxito y la pobreza, y en la responsabilidad individual por el sustento económico) y una aspiración colectiva (más igualdad en el acceso a servicios). Más aún, en este apartado encontramos otra representación de la misma tensión: un principio individualista (baja disposición a pagar más impuestos para financiar mejores servicios) y una aspiración colectiva (que sea el Estado quien se haga cargo de todos los costos de los servicios con impuestos de todos). Con todo, independiente de las tensiones identificadas, la percepción de acceso inequitativo a los servicios no contiene implícitamente una crítica al modelo de soluciones privadas a problemas públicos, tal como se había señalado anteriormente.

3. EL MALESTAR PUESTO A PRUEBA

En esta sección se discutirán los hallazgos de la sección previa, a la luz de algunas de las teorías del malestar que intentan dar cuenta de la realidad de la sociedad chilena.

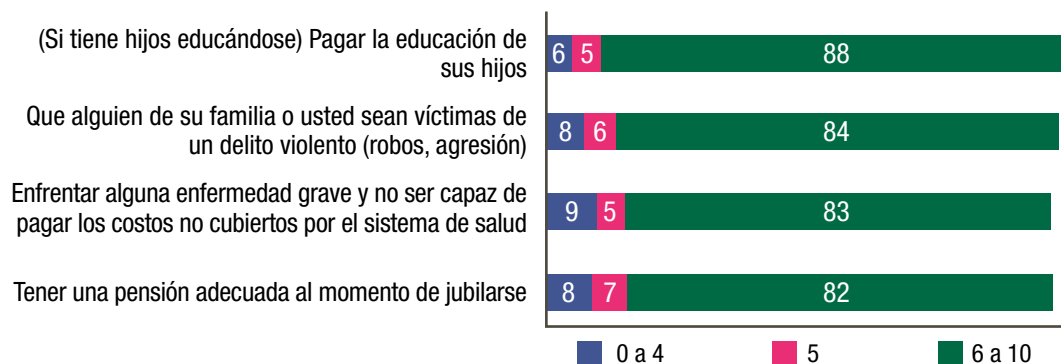
Hacia finales de la década de los 90, el informe del PNUD 1998 puso las preocupaciones de los chilenos en el centro de su teoría del malestar. En efecto, el reporte interpretaba “el malestar como la expresión larvada de situaciones de inseguridad e incertidumbre” (PNUD, 1998, p. 17). En concreto, se proponía la existencia de una brecha entre la “seguridad objetiva” —aquella entregada por el Estado a través de diversas políticas públicas— y la “seguridad subjetiva” —aquella percibida por los individuos—, cuyo origen radicaba en la incapacidad de los mecanismos institucionales existentes orientados a entregar la seguridad que los individuos requieren, a pesar de los avances registrados en cuanto a políticas públicas.

La inseguridad planteada por el PNUD en 1998 se expresaba, en estudios de opinión

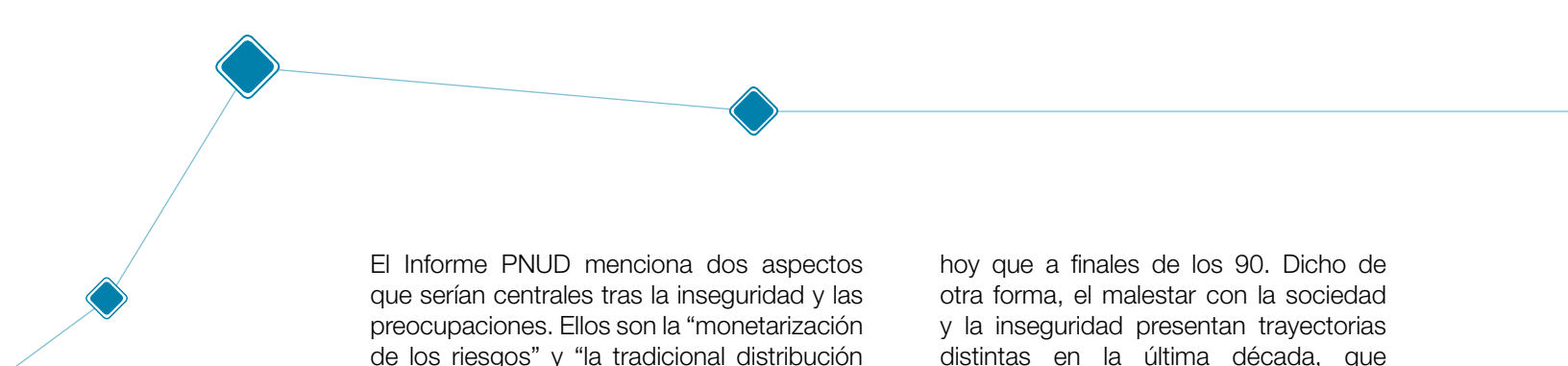
pública, a través de la preocupación que declaraban los chilenos al momento de, por ejemplo, pagar la educación de los hijos, ser víctima de algún delito violento, tener alguna enfermedad grave que el seguro de salud no pueda cubrir o tener una pensión adecuada al momento de jubilarse.

Poco menos de veinte años después, estas preocupaciones se seguirían manifestando entre los chilenos. De acuerdo a datos de la encuesta CEP de agosto 2015, en una escala de cero a diez, donde cero es nada preocupado y diez muy preocupado, más del 80 por ciento de los chilenos se ubica entre seis y diez, es decir, está muy preocupado por pagar la educación de los hijos (si tiene hijos educándose), por si algún miembro de la familia o el mismo sea víctima de algún delito violento, por tener alguna enfermedad grave que el seguro de salud no cubra en plenitud y por tener una pensión adecuada al momento de jubilarse (ver **Gráfico 10**). Por lo tanto, la preocupación sigue siendo una sensación mayoritaria entre los chilenos.

Gráfico 10: Preocupaciones sobre algunos servicios, 2015



Nota: Respuestas a la pregunta “En términos generales, en una escala de cero a diez, donde cero es nada preocupado y diez muy preocupado, ¿cuán preocupado está usted las siguientes situaciones?”. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, agosto 2015.



El Informe PNUD menciona dos aspectos que serían centrales tras la inseguridad y las preocupaciones. Ellos son la “monetarización de los riesgos” y “la tradicional distribución desigual de las oportunidades” (PNUD, 1998, p. 21). En otras palabras, se postula que el acceso a servicios importantes (por ejemplo, salud y educación) dependería del nivel socioeconómico de las personas y, por lo tanto, dado que existe alta desigualdad de los ingresos en Chile, el acceso a ellos resultaría ser inequitativo, lo que generaría preocupación y en consecuencia, malestar. Luego, para solucionar el problema de la desigualdad en el acceso a servicios, y con ello reducir las inseguridades y el malestar, el informe sugiere una “expansión de los planes gubernamentales destinados a enfrentar explícitamente estas desigualdades” (PNUD, 1998, p. 27).

En perspectiva temporal, esta conceptualización presenta algunas deficiencias:

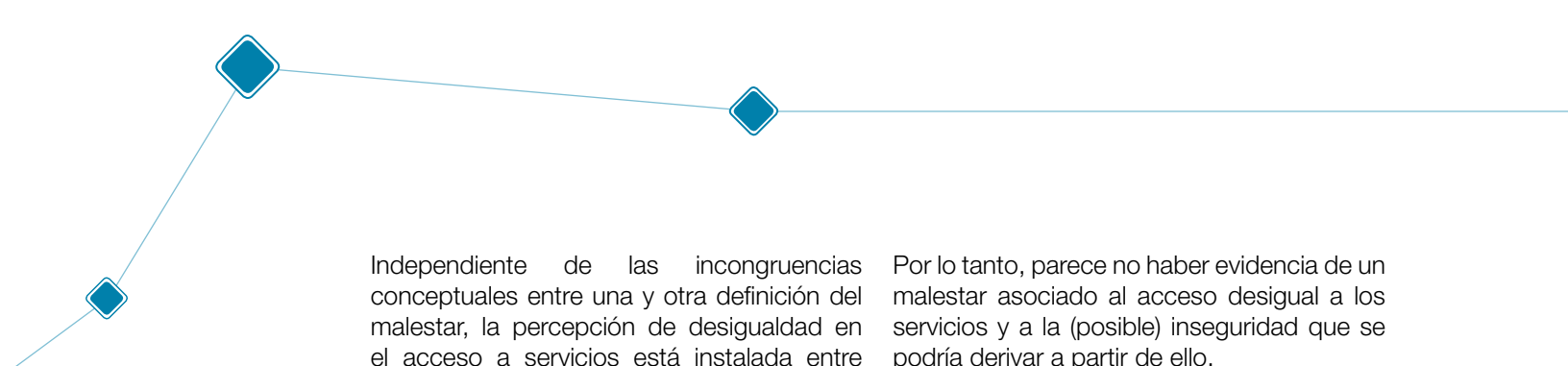
1. Si el malestar corresponde a la inseguridad o las preocupaciones, entonces el malestar hoy debería ser menor al que supuestamente existía a finales de los 90. En efecto, el Índice de Seguridad Humana, elaborado por el PNUD en sus informes de 1998 y 2012 —realizado a partir de preguntas sobre preocupaciones como las esbozadas en el **Gráfico 10**—, crece entre 1997 y 2011, por lo tanto, nuestra sociedad ha avanzado en mayor provisión de seguridad efectiva.
2. El Informe PNUD del año 2012 conceptualiza el malestar de otra forma. En esa oportunidad, se habla del malestar con la sociedad, definido como (i) la evaluación de las oportunidades que el país entrega en una serie de ámbitos y (ii) la confianza en las instituciones políticas. Bajo esta nueva conceptualización, el malestar sube con el paso del tiempo, producto de una mayor desconfianza en las instituciones. No obstante, ese malestar no podría estar asociado a la inseguridad, porque como señalamos, las personas perciben más seguridad

hoy que a finales de los 90. Dicho de otra forma, el malestar con la sociedad y la inseguridad presentan trayectorias distintas en la última década, que dificultan la existencia de una relación entre ambas.

3. Según el análisis del Informe PNUD 2012, el Índice de Seguridad Humana, en sus versiones de funcionamiento objetivo y de evaluación subjetiva, no está correlacionado con la escala de satisfacción con la vida, pero sí está correlacionado con el índice de bienestar con la sociedad solamente cuando se considera la evaluación subjetiva, lo que refleja la escasa robustez de la relación entre inseguridad y malestar.
4. De acuerdo a los análisis de la encuesta CEP de agosto 2015, un índice que agrupa todas las preocupaciones ilustradas en el **Gráfico 10** no se correlaciona con una escala de satisfacción con la vida propia ni con la percepción de satisfacción del resto de los chilenos —controlando por las variables descritas en el **Capítulo 1**—, lo que ratifica la escasa robustez de la relación entre las preocupaciones y el malestar.

Las cifras revelan un fuerte carácter individualista: los chilenos tienen una cierta disposición a aceptar diferencias de ingreso como resultado del esfuerzo y situar mayor responsabilidad por el sustento económico en las personas mismas.





Independiente de las incongruencias conceptuales entre una y otra definición del malestar, la percepción de desigualdad en el acceso a servicios está instalada entre los chilenos, como queda en evidencia en el **Gráfico 1**. Si la elevada desigualdad de ingresos es la responsable del acceso inequitativo a los servicios, entonces deberíamos observar una mayor inclinación de los chilenos por la igualdad de ingresos y una atribución de más responsabilidad al Estado producto de esta situación. No obstante, los datos no avalan tal afirmación. Por el contrario, las cifras revelan un fuerte carácter individualista: los chilenos tienen una cierta disposición a aceptar diferencias de ingreso como resultado del esfuerzo y a situar mayor responsabilidad por el sustento económico en las personas mismas. Otra manifestación de ese individualismo es el predominio de la creencia en el esfuerzo como causa principal tras el progreso económico.

Como en 1990, la mayor parte de los encuestados eran personas de generaciones previas a la irrupción de la dictadura, entonces se podría afirmar que el predominio en la creencia del esfuerzo de 1990 no podría estar asociado a los cambios al modelo de desarrollo de nuestro país ocurridos desde 1973.

Por lo tanto, parece no haber evidencia de un malestar asociado al acceso desigual a los servicios y a la (posible) inseguridad que se podría derivar a partir de ello.

Ahora bien, se podría argumentar que el mismo modelo de soluciones privadas a problemas públicos podría haber generado y extendido las creencias individualistas entre los chilenos, debido a que el acceso a servicios, en este contexto, depende en buena medida del ingreso y del esfuerzo. Sin embargo, la evidencia ilustrada en los **Gráficos 4 y 5**, sobre las causas del éxito económico y de la pobreza, revela que las creencias en el esfuerzo y las circunstancias de los chilenos el año 2015 no son diferentes de las que tenían en 1990 —atribuyendo siempre, en mayor medida, a las variables vinculadas al esfuerzo, las razones tras el éxito económico o de la pobreza—, periodo en que las autoridades de gobierno optaron por la expansión del modelo de soluciones privadas a problemas públicos. De acuerdo a la teoría del cambio valórico de Inglehart (1997), los valores y creencias de los individuos se forman durante el período de socialización y se estabilizan en la adultez temprana. Como en 1990, la mayor parte de los encuestados eran personas de generaciones previas a la irrupción de la dictadura, entonces se podría afirmar que el predominio en la creencia del esfuerzo de 1990 no podría estar asociado a los cambios al modelo de desarrollo de nuestro país ocurridos desde 1973. De esta forma, no se podría asociar al modelo de soluciones privadas un eventual cambio de creencias que, por lo demás, no se observa en 25 años de mediciones.

Por otra parte, la percepción de acceso desigual a los servicios podría conducirnos hacia un diagnóstico, cuyo centro sea que el Estado pase a ser el oferente principal de servicios tales como educación, vivienda y salud para subsanar las deficiencias en la provisión de tales servicios a la población. Más aún, los chilenos favorecen mayoritariamente que los servicios sociales (educación, pensiones, salud, y seguridad) se financien a

La evidencia muestra que la mayoría de los chilenos percibe que el acceso a los servicios es muy inequitativo, lo que podría sugerir también una mayor inclinación por la igualdad de ingresos y otorgarle más responsabilidad al Estado por el sustento económico, sin embargo, ello no se observa en los datos.

través de impuestos, en desmedro de pagos directos por los usuarios. Sin embargo, sólo una minoría estaría dispuesta a pagar más impuestos para financiar estos servicios. Esta evidencia pone de manifiesto otra dimensión de la tensión entre principios individualistas y aspiraciones colectivistas de la ciudadanía chilena: existe un deseo por más y mejores servicios, pero esperan que estos sean financiados por otros. Buena parte de esta aparente contradicción podría vincularse a dos hechos profundamente relacionados entre sí: la desigualdad económica y la distribución del pago de impuestos. En Chile, el impuesto a la renta, tanto a nivel personal como empresarial, es pagado directamente por las personas de más altos ingresos, principalmente, a pesar de que quienes perciben menores rentas suelen destinar mayores proporciones de sus ingresos al pago de impuestos, mediante impuestos indirectos tales como el IVA, cuyo pago no es percibido por la mayoría de los chilenos. De este modo pareciera que lo financiado a

través de impuestos podría ser percibido por la gran mayoría de la población como algo aparentemente gratuito, o al menos mucho más barato, aunque realmente no lo sea. Por lo mismo, el respaldo de los chilenos al financiamiento estatal de los derechos sociales (sin importar la institución a cargo de su provisión) contrasta con su escasa disposición a pagar impuestos.

Con todo, ¿existe un malestar con el actual modelo de soluciones privadas a problemas públicos? Si se piensa que este modelo es el causante de las percepciones de desigualdad en el acceso a los servicios, entonces la respuesta es no. El análisis empírico de este capítulo encuentra que a medida que se percibe más desigualdad en el acceso a servicios de calidad, más se prefiere la igualdad de ingresos y se sitúa más responsabilidad en el Estado. La evidencia muestra que la mayoría de los chilenos percibe que el acceso a los servicios es muy inequitativo, lo que podría sugerir también una mayor inclinación por la igualdad de ingresos y otorgarle más responsabilidad al Estado por el sustento económico, sin embargo, ello no se observa en los datos, quizás producto del fuerte carácter individualista de los chilenos. Por lo tanto, debe destacarse que esta percepción de desigualdad en el acceso a servicios no parece ser evidencia suficiente para afirmar que existe malestar con el modelo de soluciones privadas a problemas públicos por parte de los chilenos.

Sin embargo, una respuesta distinta se podría obtener al analizar la percepción de acceso inequitativo a los servicios junto a la satisfacción con el funcionamiento de los mismos.⁶

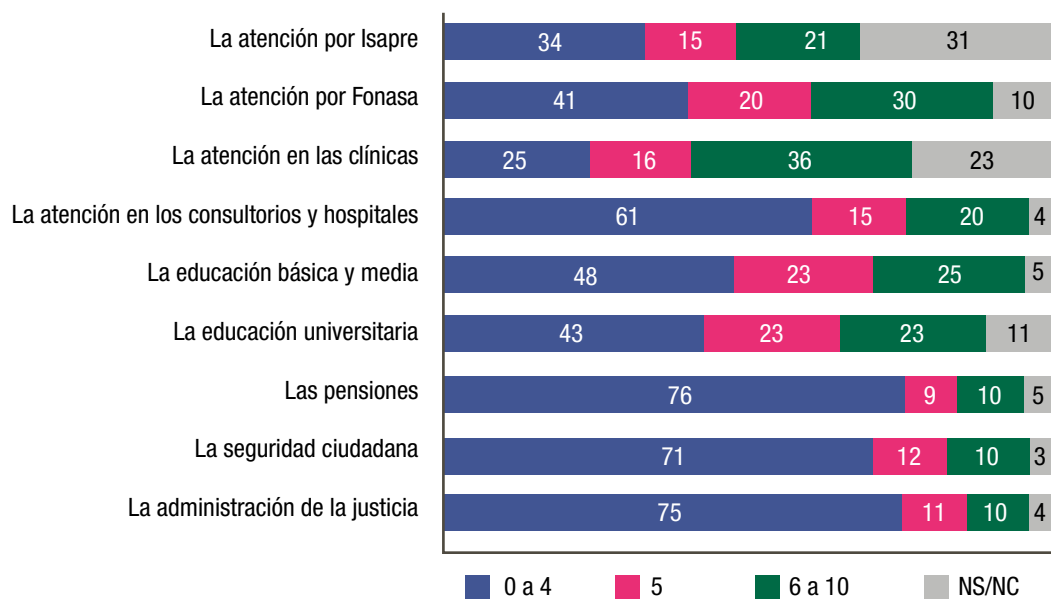
El **Gráfico 11** presenta la satisfacción con una serie de servicios vinculados a educación, salud, pensiones y justicia, de acuerdo a los datos recogidos en la encuesta CEP de agosto 2015. La pregunta considera una escala de cero a diez en que cero significa

⁶ Un cuadro más completo se obtendría si la satisfacción por cada uno de los servicios fuera de los usuarios solamente y no de todos los chilenos. Sin embargo, para efectos de una posible aspiración colectiva de cambio al modelo, la opinión de todos los chilenos, tanto usuarios como aquellos que no lo son, es relevante para el análisis.

“totalmente insatisfecho” y diez significa “totalmente satisfecho”. En cuanto a salud, un 34 por ciento de los chilenos califica a la atención por Isapre entre cero y cuatro, lo que significa que están relativamente insatisfechos con tal servicio. Un 41 por ciento le asigna el mismo rango de calificaciones a la atención por Fonasa. Menor insatisfacción se observa en la atención de las clínicas (25 por ciento), la cual es significativamente inferior a la insatisfacción con la atención en los consultorios y hospitales (61 por ciento), donde las primeras son privadas y los últimos

no. En cuanto a educación, la insatisfacción alcanza un 48 por ciento para el nivel básico y medio y un 43 por ciento en el nivel universitario. Respecto a las pensiones, la insatisfacción alcanza un 76 por ciento. Finalmente, en cuanto a la seguridad ciudadana, un 71 por ciento la califica entre cero y cuatro, esto es, relativamente insatisfecho, mientras que un 75 por ciento de los chilenos le asigna el mismo rango de calificaciones a la administración de justicia.

Gráfico 11: Percepciones de satisfacción con servicios, 2015



Nota: Respuestas a la pregunta: “En general, en una escala de cero a diez donde cero significa “totalmente insatisfecho” y diez significa “totalmente satisfecho” e independientemente de que los utilice o no, ¿cuán satisfecho está usted con el funcionamiento de los siguientes servicios?”. Fuente: Encuesta CEP, agosto 2015.

Algunos podrían sostener que las evaluaciones negativas de algunos servicios y el acceso desigual a varios de ellos podrían ser reflejo de un deseo de cambiar el modelo de soluciones privadas a los problemas públicos, hacia uno más igualitario, garantizado por el Estado. Sin embargo, la ciudadanía privilegia una visión que descansa en mayor medida en los incentivos y la responsabilidad individual, por sobre una de más igualdad y un rol más activo del Estado, lo que no avalaría la tesis del cambio del modelo. Más bien, plantea el reconocimiento, por parte de los chilenos, de que existe acceso desigual y problemas

específicos asociados a las diferentes prestaciones de servicios y que demandan una solución.

Este cuadro es similar al descrito por Brunner en 1998. En su opinión, lo que había en Chile era una “(...) nítida identificación de desigualdades y señalamiento claro y concordante de problemas prioritarios, los cuales tienen que ver, principalmente, con acceso a servicios esenciales y con las condiciones de vida en la esfera privada” (Brunner, 1998, p. 186).



Este autor sostiene que la gente “(...) está dispuesta a trabajar duro, incluso a endeudarse. Pero, al mismo tiempo, desconfía —por su propia experiencia de las desigualdades— de que el crecimiento vaya a beneficiarlos directa y oportunamente y brindarles acceso a los servicios esenciales que debe proporcionar la sociedad” (Brunner, 1998, p. 187). Sobre este último punto, no es claro el vínculo entre crecimiento y acceso a servicios. Por un lado, se podría pensar que el crecimiento no trae consigo un acceso más equitativo a los servicios. Por otro lado, se podría argumentar que el crecimiento no ha sido suficiente para generar un acceso más igualitario y lo que se estaría demandando sería tasas de crecimiento más altas para conseguir más financiamiento estatal, que ayude a igualar el acceso a tales servicios. El estudio de este vínculo (si alguno), sin lugar a dudas, amerita más investigación.

Una mirada alternativa se obtiene si los resultados se interpretan a la luz del concepto de capacidades de Sen (1985). Si los chilenos perciben que no tienen acceso igualitario a las capacidades, es posible que exista en Chile una demanda por igualdad de

oportunidades que, a partir de los hallazgos de este capítulo, no se identifica con una inclinación por mayor igualdad de ingresos. Una forma alternativa de decir lo mismo es que no pareciera existir una gran demanda por igualdad económica, más bien se trata de una demanda por igualdad al iniciar la competencia, a partir de la cual se derivaría la preocupación por el acceso inequitativo a ciertos servicios.

En resumen, los hallazgos de este capítulo sugieren que el apoyo de los chilenos al financiamiento estatal de los servicios, en desmedro del actual escenario en el que su acceso está mediado por la capacidad de pago, es a lo sumo ambiguo. Entre la población conviven deseos por un mejor acceso a bienes y servicios, con creencias de raigambre individualista, que ponen los logros personales por sobre la redistribución estatal. Creemos que esta tensión requiere de especial atención por parte de los analistas y el público en general, en la medida en que en ella descansan los fundamentos de políticas públicas que respondan a los verdaderos intereses de la ciudadanía.



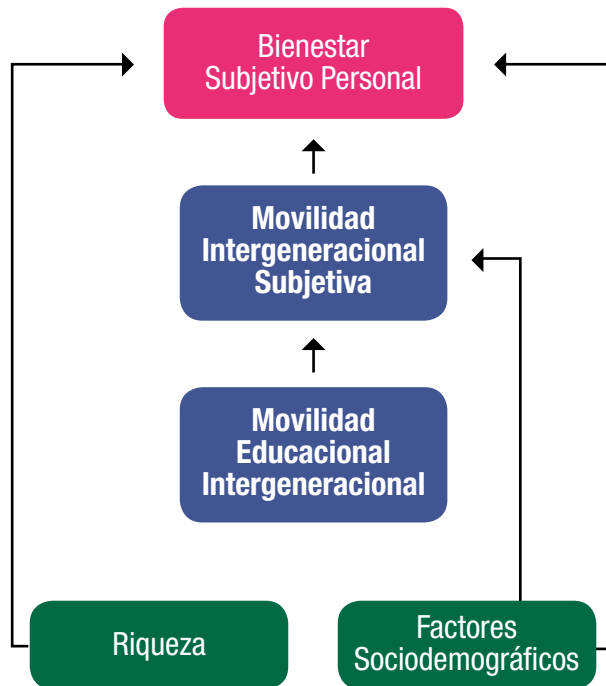


Capítulo 3:

LA IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO Y LA MOVILIDAD SOCIAL EN CHILE



MAPA CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 3



SÍNTESIS

A partir de 1986, Chile comenzó a transitar un camino que enfatizaba el crecimiento económico, lo que le permitió acortar la brecha de PIB per cápita respecto de los países de la OCDE. Al mismo tiempo, la esperanza de vida subía, la mortalidad infantil y de los lactantes caía, al igual que la tasa de pobreza. Todo ello se refleja en el significativo avance del bienestar de los chilenos. De hecho, un 82 por ciento de la población se declaraba satisfecho con su vida en 2015, veinte puntos porcentuales más que en 1995. Antes que malestar, la satisfacción es lo que predomina en Chile.

La literatura académica internacional reciente ha mostrado que tanto el ingreso de los individuos como el PIB per cápita son relevantes para explicar la satisfacción de las personas con la vida. Ello sugiere que el crecimiento económico estaría asociado a los avances de bienestar previamente identificados.

Este capítulo explica que para seguir avanzando en bienestar, el crecimiento de los ingresos y la calidad de la educación deben ser prioridad. El primero, está asociado directa y positivamente con la satisfacción con la vida. El segundo, está vinculado indirectamente con el bienestar, mediante la relación que tiene con la movilidad social: aquellos que alcanzan niveles de educación superiores que sus padres declaran también alcanzar una posición social más alta y por ello, niveles de satisfacción mayores. Aunque la masificación de la educación ha generado que la mayoría alcance niveles educativos más altos que los padres, todavía hay grupos de la población que no lo logran. Ello, sumado

a la mala calidad de la educación que, por lo general, reciben los niños pertenecientes a las familias más pobres de Chile, frustra la promesa de ascenso social y reduce el bienestar.

Igualmente, se muestra que la pérdida en satisfacción con la vida al estar un peldaño más abajo que los padres en la escala de posición social, es mayor que la ganancia en bienestar generada por subir un peldaño en la misma escala. Esto significa que la población quiere seguir avanzando y que resiente bastante la desaceleración del progreso. Bajo esta perspectiva, entonces, la prolongación del estancamiento del crecimiento de los últimos tres años podría ser la semilla del malestar en el futuro.

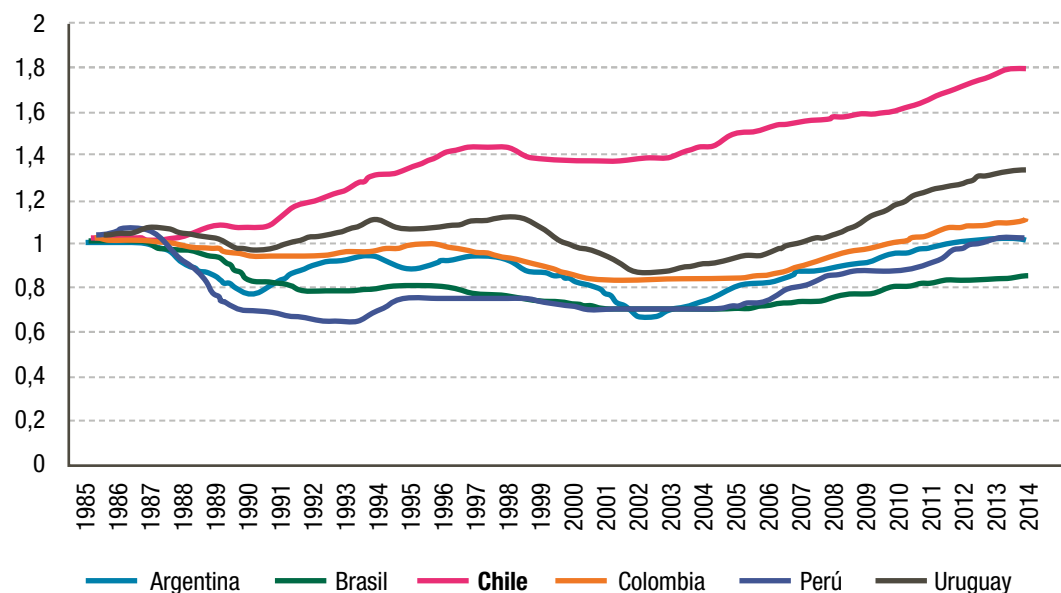
Por último, en el texto se discuten los aspectos relevantes para estimular la calidad de la educación escolar —problemas de gestión, alineamiento de remuneraciones con el desempeño de los profesores, selección de directores y financiamiento— y universitaria —problemas de costo, gestión, financiamiento y supervisión de calidad. También se abordan los factores que permitan aumentar el crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita en el corto plazo —aumentar las tasas de participación laboral de jóvenes y mujeres, mejorar la capacitación y el aprendizaje en el trabajo— y en el largo plazo —elevar la contribución de la productividad, reforzando la competencia, mejorando la calidad de la educación que reciben los niños de las familias más pobres, apuntalando la infraestructura para reducir costos de transporte y mejorando la eficiencia del Estado—.

INTRODUCCIÓN

Chile experimentó una transformación muy exitosa en los últimos treinta años, la que permitió al país alcanzar importantes logros económicos y sociales y, al mismo tiempo, acortar la distancia con el producto per cápita promedio de los países miembros de la OCDE. Las cifras son elocuentes. El **Gráfico 1** ilustra el PIB per cápita (en Paridad de Poder de Compra) de algunos países de Sudamérica relativo al promedio de los países de la OCDE. La figura muestra que el despegue de Chile comenzó en 1986 y tres años después, ya había superado al resto de las economías latinoamericanas, para luego dar paso a un ascenso casi constante y sin retrocesos como los experimentados

por varios países de la región. Excluyendo a Chile, los países que más avanzaron de la región fueron Uruguay y Colombia, los cuales alcanzaron el mismo nivel de PIB per cápita relativo a los países de la OCDE de 1985 recién en 2007 y 2009, respectivamente. En contraste, Brasil exhibe un sostenido estancamiento en este indicador, lo que significa que ha experimentado tasas de crecimiento más bajas que el promedio de la OCDE desde 1985. Así, Chile ha sido el país de tamaño medio en América del Sur que más ha reducido su brecha de producto per cápita en relación con los países de la OCDE en los últimos treinta años.

Gráfico 1: PIB per cápita relativo al de países miembros de la OCDE (1985=1), 1985-2014



Fuentes: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Abril 2016 y OECD.



Estos impresionantes logros han sido el fruto de un conjunto de reformas económicas que apuntaron a restablecer y sostener los equilibrios macroeconómicos, fortalecer la estabilidad financiera y crear una economía de mercado, competitiva y abierta a la economía global. Entre las reformas en el ámbito macro-financiero destacan el fortalecimiento de la solvencia fiscal, la creación de un Banco Central autónomo —con un mandato explícito orientado a lograr la estabilidad de precios y a impulsar la estabilidad del sistema de pagos—, la promoción de un sistema financiero bien regulado y supervisado, la sustitución del sistema de pensiones de reparto —sin financiamiento sostenible y regresivo— por un sistema de capitalización individual. En cuanto a la apertura externa, la eliminación de restricciones cuantitativas, la reducción gradual de los aranceles a un nivel uniforme del seis por ciento y más adelante la firma de numerosos acuerdos preferenciales de comercio contribuyeron a reducir el arancel promedio efectivo a un nivel en torno al uno por ciento y a mejorar significativamente el acceso de los exportadores a nuevas ideas, una mayor variedad de insumos y a los principales mercados del mundo.

El objetivo de este capítulo es discutir los efectos del sostenido progreso de Chile durante los últimos treinta años en cuanto a satisfacción en varios aspectos, tanto a nivel agregado como individual, para luego identificar algunas áreas que podrían estar limitando ganancias adicionales en bienestar, como son la desaceleración del crecimiento económico y la baja movilidad social —y que tendrían relación con el descontento público reciente—, y algunas reformas institucionales orientadas a generar tales mejoras.

El texto que sigue se divide en tres partes. La primera (1) discute las mejoras en las condiciones de vida de los chilenos y cómo ellas se relacionen con el aumento de los ingresos individuales y del país como un todo, de acuerdo a la literatura internacional especializada en el tema. La segunda (2) presenta un análisis cuantitativo sobre cómo la movilidad intergeneracional, educacional y subjetiva, se relaciona con la satisfacción con la vida en Chile. La tercera (3), por último, plantea una mirada alternativa al malestar, a la luz de los hallazgos de este capítulo y discute caminos de reforma para generar ganancias adicionales de bienestar y continuar en la senda del progreso logrado durante los últimos treinta años.



1. MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CHILENOS

El profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, reconocido experto mundial en desarrollo y pobreza, ha sostenido que, en el mundo, la caída en las tasas de pobreza y de la mortalidad de lactantes e infantil, las mejoras en la nutrición y en la salud, y un aumento significativo en el acceso de la población a bienes y servicios, tanto en cantidad como en calidad, fueron posibles gracias a una combinación de alto crecimiento económico, avances científicos en el control de las enfermedades, y gobiernos que no sólo han facilitado el progreso —a través de una oferta adecuada de bienes públicos e infraestructura— sino que, también, han sido responsables frente a sus ciudadanos (Deaton, 2013).

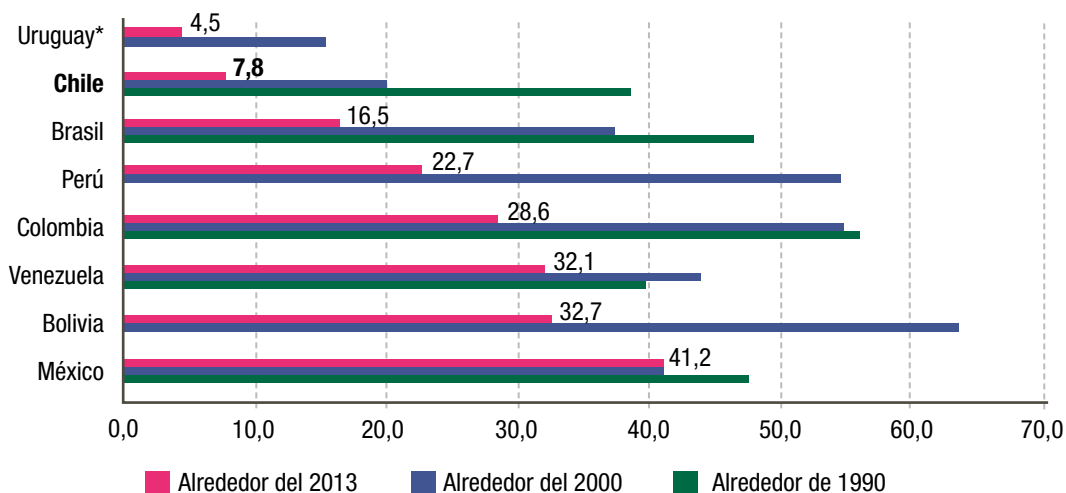
En esta sección, revisaremos si la afirmación anterior aplica para Chile. En otras palabras,

**Chile tiene la tasa de
pobreza más baja
de toda la región.**

analizaremos si las altas tasas de crecimiento entre 1985 y 2013, ilustradas en el **Gráfico 1**, han traído beneficios sociales y ganancias de bienestar para todos los chilenos.

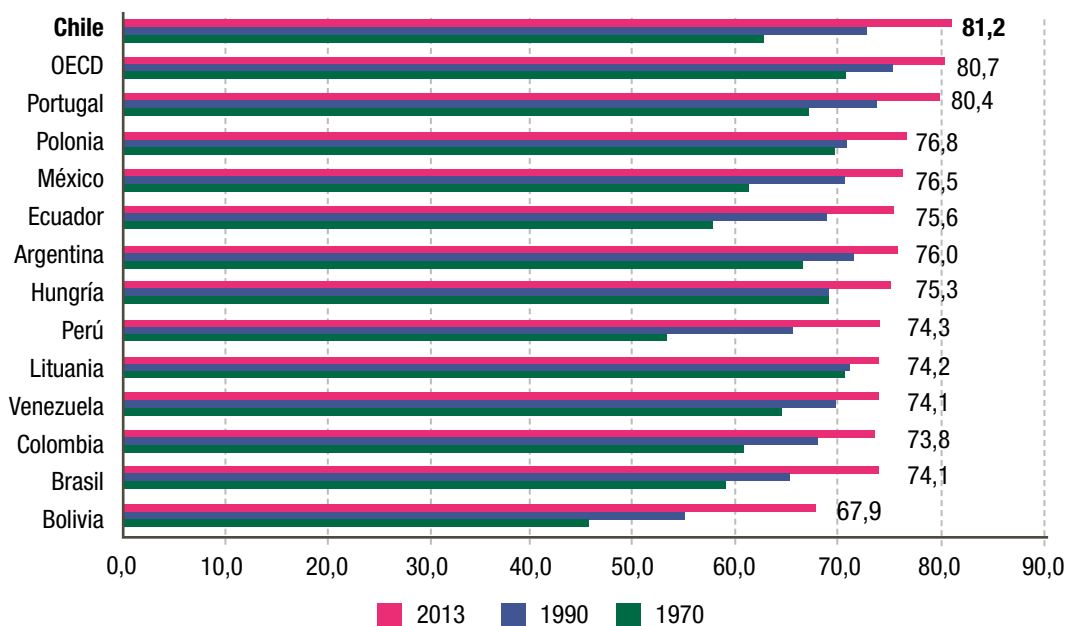
En primer lugar, si se observa la evolución de la tasa de pobreza de Chile, en comparación a los países de la región (ver **Gráfico 2**), ésta alcanza a 7,8 por ciento en 2013 —usando la metodología antigua de medición de la pobreza, que es la utilizada por CEPAL para su estudio comparado en esta materia—, cerca de 30 puntos porcentuales menos que en 1990. Si excluimos a Uruguay —país en que las cifras se refieren sólo a la población urbana—, Chile tiene la tasa de pobreza más baja toda la región. En general, la mayoría de los países de América Latina consiguieron reducir sus niveles de pobreza, aunque sólo Perú y Bolivia lograron disminuirla en una magnitud similar a la chilena —30 puntos porcentuales—. Estos dos países lo hicieron en menos tiempo que Chile, sin embargo, sus tasas de pobreza son todavía entre tres y cuatro veces más altas que la de nuestro país, por lo tanto, aún les queda una ardua tarea por delante para llegar al nivel de pobreza chileno.

Gráfico 2: Personas en situación de pobreza, países de América Latina, 1990-2014




Nota: Porcentaje expresado respecto al total de la población, * incluye sólo a la población urbana, cifra que corresponde al año 2014.
Fuente: CEPAL, 2016.

Gráfico 3: Esperanza de vida al nacer, países seleccionados, 1970-2014



Fuentes: World Development Indicators – Banco Mundial 2016.



Chile es el país con la esperanza de vida al nacer más alta de la región, incluso superior a la de varios países de Europa y al promedio de países miembros de la OCDE.

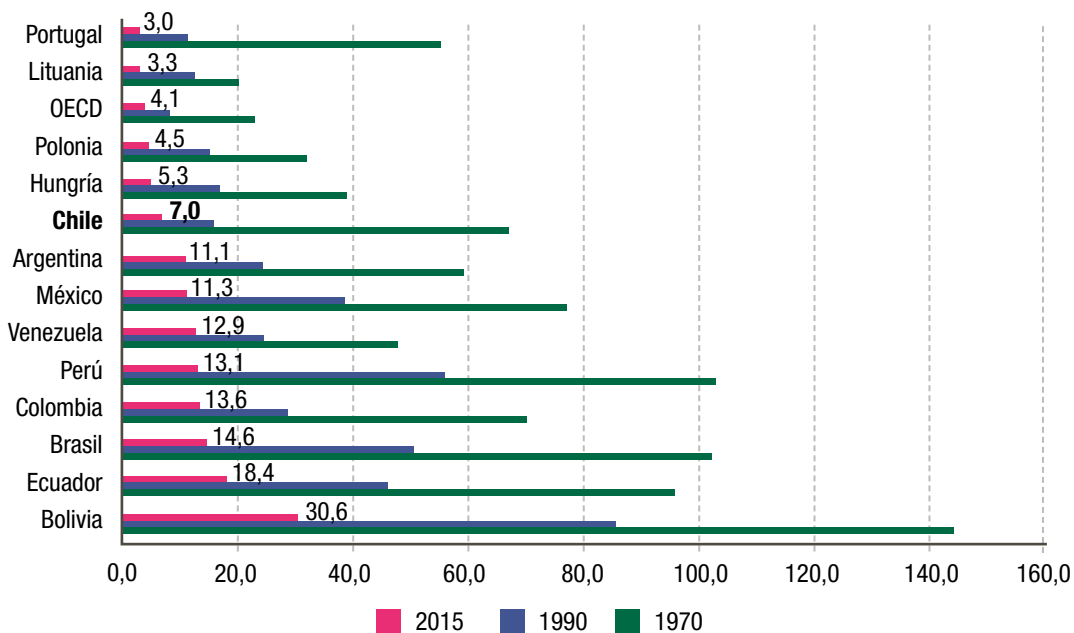
Varios estudios en Chile han encontrado evidencia de que el alto crecimiento fue un factor importante tras la reducción de la pobreza (Larrañaga, 1994). De acuerdo a Libertad y Desarrollo (2015), un 67 por ciento de este descenso se explicaría por el aumento del ingreso y un 25 por ciento por redistribución de los ingresos. Así, el crecimiento ha sido el principal responsable de la caída de la pobreza en Chile.

En segundo lugar, el progreso económico, junto a la preocupación temprana por la nutrición y la salud pública, a los avances en nutrición infantil, y a la focalización del gasto fiscal en bienes públicos para los más pobres, generaron avances en la calidad de vida de los chilenos, reflejados en varios indicadores sociales. Veamos primero la evolución de la esperanza de vida al nacer.

El **Gráfico 3** ilustra la evolución de esta variable en tres momentos del tiempo (1970, 1990 y 2015) para Chile, algunos países de nuestra región y de Europa con un índice de desarrollo humano similar al nuestro. Entre 1970 y 2015, la expectativa de vida al nacer en Chile pasó de 62,8 a 81,8 años, mientras que en el promedio de países de la OCDE, este indicador varió desde 69,5 a 80,2 años en el mismo lapso. En el caso de América Latina, las cifras fluctúan entre 68,7 y 79,6 años (Bolivia y Costa Rica, respectivamente). Ambas comparaciones revelan que Chile es el país con la esperanza de vida al nacer más alta de la región, incluso superior a la de varios países de Europa y al promedio de países miembros de la OCDE.

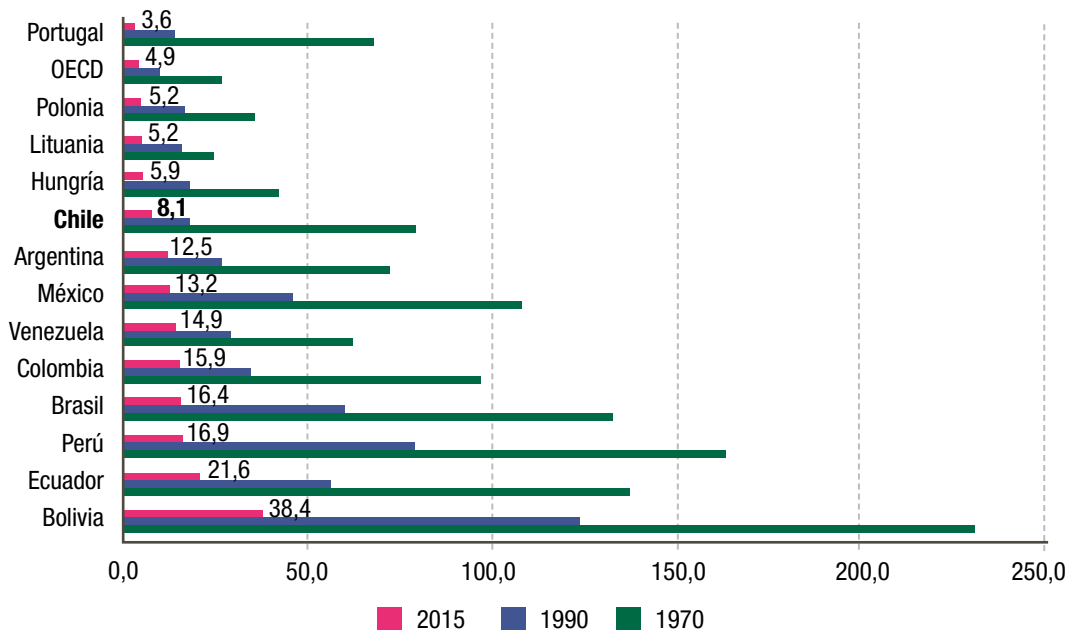
La trayectoria de la mortalidad de lactantes e infantil, ambos indicadores de progreso social, muestran también un comportamiento similar. Esto se observa en los **Gráficos 4 y 5** en los que se comparan las cifras de Chile con países de América Latina, el promedio de la OCDE y algunos países europeos con un índice de desarrollo humano similar al chileno. En 2015, la mortalidad de lactantes en Chile fue de 7,0 por cada mil nacidos vivos, inferior a la del resto de los países de América Latina —cuyas cifras fluctúan entre 8,5 y 30,6 por cada mil en Costa Rica y Bolivia, respectivamente—, aunque superior a los países de Europa y al promedio de la OCDE. Hace poco más de cuarenta años Argentina y Venezuela tenían una mortalidad de lactantes inferior a la chilena, hoy, sin embargo, la situación es la opuesta.

Gráfico 4: Mortalidad de los lactantes (menores de un año por cada mil nacidos vivos), países seleccionados, 1970-2015



Fuentes: World Development Indicators – Banco Mundial 2016.

Gráfico 5: Mortalidad infantil (menores de cinco años por cada mil nacidos vivos), países seleccionados, 1970-2015



Fuentes: World Development Indicators – Banco Mundial 2016.



Otro tanto ocurre con la evolución de la mortalidad infantil. Chile es nuevamente el país con la tasa de mortalidad infantil más baja de la región: 8,1 por cada mil nacidos vivos en 2015. Esta cifra es superior al promedio de los países miembros de la OCDE y a países europeos con un nivel de desarrollo similar. En 1970, la mortalidad infantil en Chile llegaba a 79,6 por cada mil nacidos vivos, superior a la que mostraban Argentina y Venezuela en ese año. Sin embargo, en los siguientes cuarenta años, ambos países avanzaron menos que Chile. En contraste, el resto de los países de América Latina exhibían niveles superiores al chileno en 1970 y lograron avances notables en el mismo lapso, aunque ninguno progresó tanto como Chile en esta materia.

En tercer lugar, al mismo tiempo que el PIB per cápita crecía y los indicadores de progreso social mejoraban, la satisfacción con la vida subía también, tal como lo revela el **Gráfico 6** que ilustra el camino que ha seguido la satisfacción en general y en diversos ámbitos de la vida durante los últimos veinte años, de acuerdo a datos de las encuestas CEP. Un 82 por ciento de los consultados en agosto 2015 afirmó estar satisfecho o muy satisfecho con su vida en general, cinco puntos porcentuales más que en 2011 —el llamado, por algunos, “año del malestar”— y 20 puntos porcentuales sobre lo que declaraban en 1995.

Chile es nuevamente el país con la tasa de mortalidad infantil más baja de la región: 8,1 por cada mil nacidos vivos en 2015.

Esta apreciación general tiene relación con la satisfacción que expresan los chilenos en varios aspectos específicos de la vida. Más de un 80 por ciento declara estar muy satisfecho o satisfecho con sus amistades, con la relación con sus hijos (entre aquellos que declaran tener hijos) y con su pareja (entre quienes están casados o tienen pareja estable) en 2015, cifras superiores a las encontradas veinte años antes. En otras dimensiones de la vida, la satisfacción también es mayoritaria. Un 78 por ciento de los que tienen empleo están muy satisfechos o satisfechos con su trabajo y un 76 por ciento declara lo mismo respecto de sus actividades fuera del trabajo, *hobbies* y entretenimientos. Un 69 por ciento afirma estar muy satisfecho o satisfecho con su salud y con la ciudad, pueblo o lugar donde vive, aunque a diferencia de los casos anteriores, no hay variación estadísticamente significativa respecto de 1995. Por último, un 46 por ciento sostiene estar muy satisfecho o satisfecho con su situación financiera, porcentaje que no es mayoritario, pero

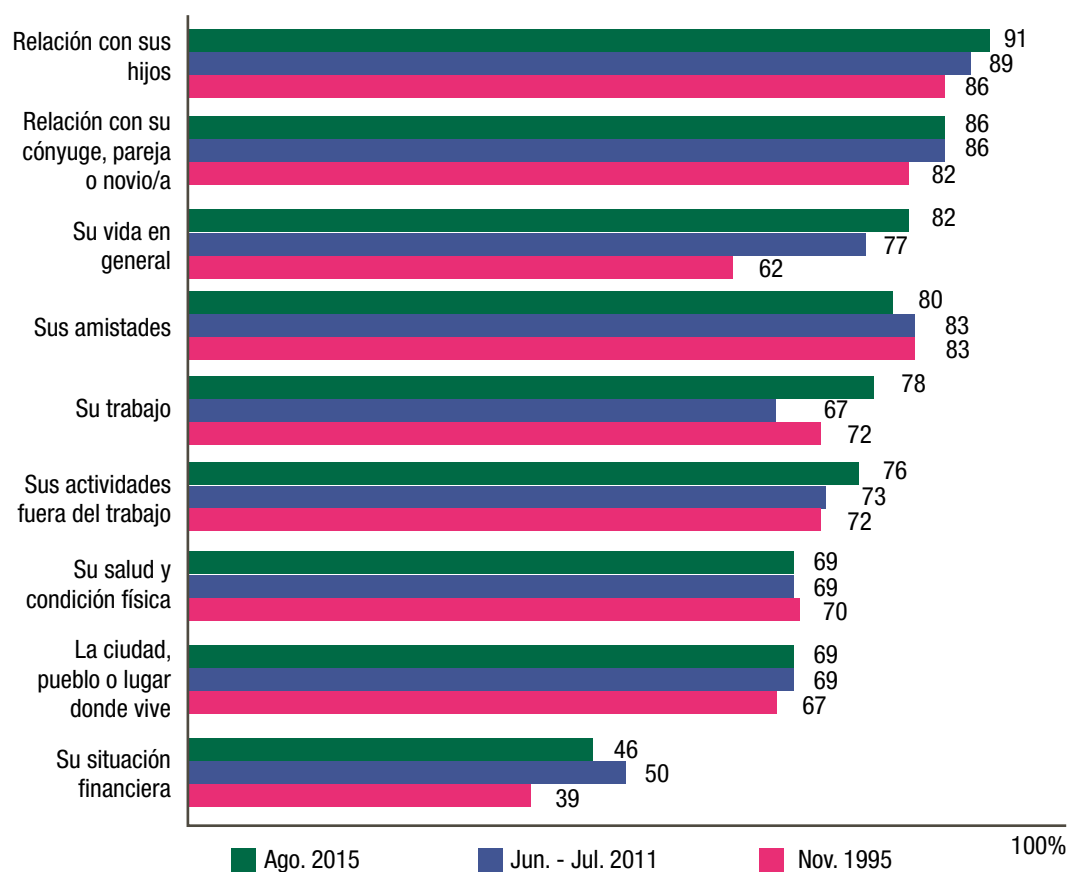
que representa una mejora de siete puntos porcentuales respecto de 1995.¹

Hasta aquí, hemos visto que, en los últimos treinta años, el crecimiento del PIB per cápita en Chile está asociado a una abrupta disminución de la tasa de pobreza y a una progresiva mejora de los indicadores sociales, lo cual parece confirmar la tesis de Deaton (2013). En ese lapso, el porcentaje de chilenos satisfechos con su vida en general alcanzó al 82 por ciento. Tal incremento, ¿estará también relacionado con el crecimiento del PIB per cápita? Para responder evaluaremos críticamente la

literatura internacional que estudia el tema.

La literatura en esta área ha estado enfocada, principalmente, en estudiar los efectos de los aumentos del ingreso, tanto a nivel individual como de países, sobre la satisfacción con la vida y la felicidad. Estudios iniciales indicaron que la relación positiva entre ingreso y satisfacción, observada en estudios de países en un momento del tiempo (corte transversal), tiende a desaparecer cuando se analiza la misma relación, pero a través del tiempo. Esto significa que incrementos del PIB per cápita no conllevarían a un aumento sostenido de la satisfacción con la vida.

Gráfico 6: Avance de las satisfacciones en diversos ámbitos



Nota: Porcentaje de chilenos que se declara “Muy satisfecho” o “Satisfecho” en los aspectos indicados. Los porcentajes excluyen a quienes afirman que el aspecto “No Aplica”. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

¹ La insatisfacción con la situación financiera alcanza un 24 por ciento en 2015, por lo tanto, a pesar de que la satisfacción en este aspecto no es mayoritaria, tampoco es inferior a la fracción de chilenos que se declara insatisfecho en este caso.



Easterlin (1974) fue el primero en documentar empíricamente este fenómeno, que él atribuyó a la importancia del ingreso relativo más que al ingreso absoluto al momento de evaluar la satisfacción con la vida. En otras palabras, a medida que el ingreso de las personas aumenta *pari passu* con el ingreso del país o comunidad que habita, la satisfacción con la vida no se vería afectada porque el ingreso relativo de los individuos no cambiaría. Bajo esta perspectiva, el crecimiento del ingreso relativo importaría y el absoluto (PIB per cápita) no.

Sin embargo, en los últimos años, se han cuestionado los resultados encontrados por Easterlin (Stevenson y Wolfers, 2008; Deaton, 2008; y Diener et al., 2013). En particular, Deaton (2008) planteó que los resultados de Easterlin se debían a que utilizaba una muestra que incluía a países de la ex Unión Soviética (muy insatisfechos por la inseguridad y la situación política que estaban atravesando), excluía a muchas naciones pobres y cuando éstas últimas eran consideradas, se podía apreciar que los encuestados provenían de grupos aventajados.

En contraste, Diener et al. (2013), utilizando la Gallup World Poll —una base de datos que no tiene los inconvenientes descritos—, encuentran lo siguiente: (1) existe una relación positiva y significativa entre satisfacción con la vida y dos medidas de crecimiento económico: el cambio en el ingreso per-cápita y el cambio en el ingreso medio de las familias; (2) estas relaciones se dan tanto en los países más ricos como en los más pobres; y (3) estas relaciones no se atenúan con el paso de los años. El mismo estudio también encuentra que existe una relación entre el ingreso y la satisfacción con la vida, la cual es tan fuerte al interior de los países como entre países. Estos resultados sugieren que los ingresos absolutos también

Existe una relación positiva entre el nivel de satisfacción promedio de un país y su ingreso per cápita (Diener, Tay & Oishi, 2013).

importan, lo que pone en tela de juicio la hipótesis de que el ingreso relativo es lo único relevante para la satisfacción por la vida. Esto no debería sorprender puesto que ingresos mayores le permiten a los individuos acceder a más y mejores bienes y servicios, importantes para lograr una mayor calidad de vida, y al mismo tiempo, posibilitan a la sociedad como un todo financiar una mejor oferta de bienes públicos.

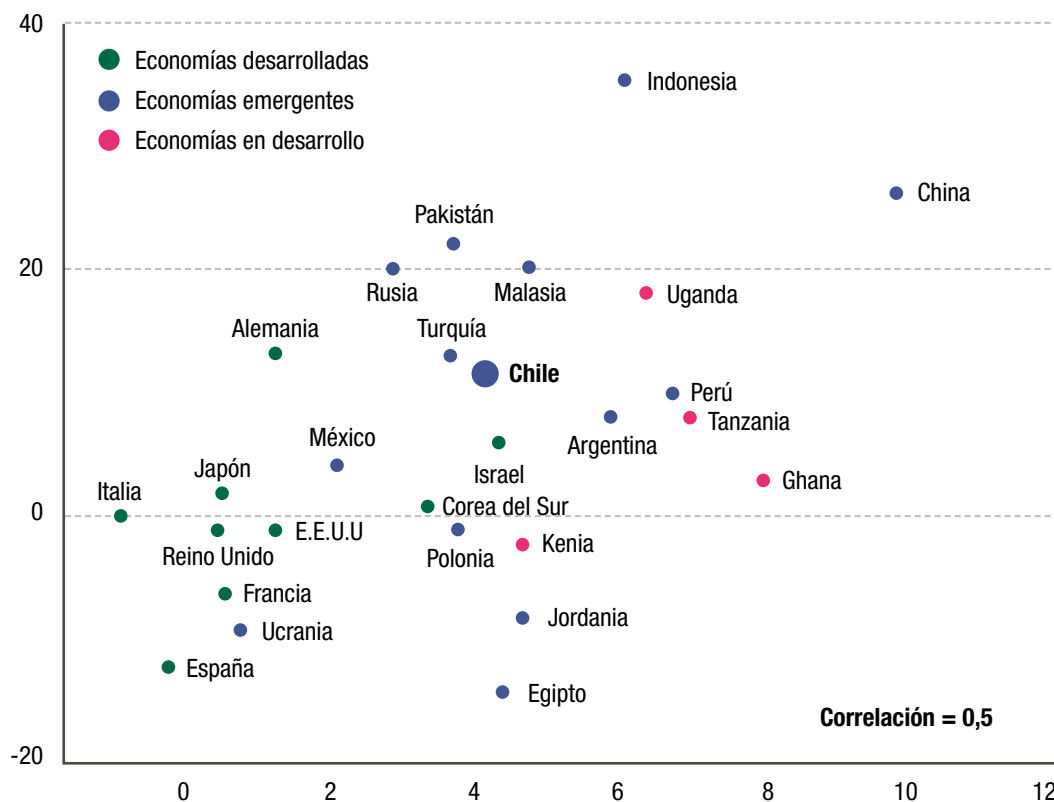
Weimann et al. (2015), utilizando igualmente Gallup World Poll, encuentran una relación positiva entre el nivel de satisfacción promedio de un país y su ingreso per cápita, y que ésta varía de acuerdo al nivel de ingreso, con un quiebre en los US\$20.000. Ellos logran establecer que para naciones con un nivel de ingreso per cápita igual o menor a US\$10.000, un aumento de US\$10.000 en el ingreso per cápita está asociado a un incremento de un punto en la escala de cero a diez de satisfacción con la vida. En contraste, para un nivel de ingreso per cápita sobre los US\$20.000, un alza del PIB per cápita de la misma cuantía está asociado a una subida promedio de 0,2 puntos en la misma escala.² Además, estos autores discuten también que en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, los estudios que comparan la satisfacción del mismo grupo de individuos a través del tiempo muestran que si el ingreso personal (ajustado por inflación) se mantiene constante o crece ligeramente

² De acuerdo a Weimann et al. (2015), se observa una relación similar si en vez de los niveles de PIB per cápita se utiliza el logaritmo de la misma variable, lo que es importante, porque las estimaciones, en tal caso, se pondría interpretar como cambios porcentuales del ingreso, medida relevante para la evaluación subjetiva de los individuos (Diener et al. 2013). Deaton (2008) encuentra que para niveles altos de ingreso, un aumento de cierta magnitud se relacionaría con un aumento de la satisfacción mayor para individuos de bajo ingreso, aunque la diferencia entre ambos grupos es pequeña. Stevenson y Wolfers (2013) encuentran un resultado similar. En ambos casos, se utiliza el logaritmo del producto per cápita en vez del nivel.

de un año a otro, la satisfacción con la vida disminuye para el país como un todo. Más aún, los investigadores estiman que sólo grandes aumentos del ingreso individual generan un incremento de satisfacción para todos. Una explicación posible para este hallazgo involucra el ingreso relativo: si lo que importa para la satisfacción es el ingreso propio y cómo se compara éste con

el del resto, entonces un aumento modesto no sería suficiente para percibir una mejora relativa a los demás y por eso la satisfacción no subiría; si el alza de ingreso es de gran magnitud, entonces los individuos sí podrían percibir una mejora respecto de los demás y por eso, la satisfacción podría subir.

Gráfico 7: Relación entre el cambio en la satisfacción con la vida y crecimiento del PIB, 2007-2013



Nota: Relación entre el cambio porcentual, entre 2007 y 2014, del porcentaje de personas que responden siete, ocho, nueve ó diez a la pregunta “En la escalera de la vida, de cero a diez, ¿en qué peldaño se encuentra usted en este momento?” (eje vertical) y el crecimiento del PIB promedio, entre 2007 y 2013 (eje horizontal). Incluye a los países con datos en 2007 y 2014 solamente. Fuente: Pew Research Center (2014).



La literatura académica reciente ha demostrado que tanto el ingreso individual como el PIB per cápita de su país son relevantes para explicar la satisfacción por la vida de las personas.

Esta relación entre ingreso (individual y PIB per cápita) y satisfacción con la vida, que se observa a nivel individual también se puede apreciar a nivel de países. El **Gráfico 7** ilustra la relación entre el cambio en el porcentaje de personas que se declara muy satisfecho con su vida, según la escala de Cantril³, y el crecimiento del PIB promedio entre 2007 y 2013 para un grupo de países (avanzados, emergentes y en vías de desarrollo). Los datos evidencian una correlación positiva

y significativa, en términos estadísticos, entre el crecimiento del PIB y el aumento de personas que se declaran satisfechas, lo que refleja parcialmente lo descrito por Weimann et al. (2015) con datos longitudinales. Cuando se controla por variables adicionales que inciden sobre la satisfacción por la vida, la correlación entre el PIB per cápita y la satisfacción persiste.

Con todo, la literatura académica reciente ha demostrado que tanto el ingreso individual como el PIB per cápita de su país son relevantes para explicar la satisfacción por la vida de las personas. De esta forma, no sólo el ingreso relativo importa, también lo hace el ingreso absoluto, en contraste a los hallazgos de Easterlin, lo que pone de manifiesto la importancia del crecimiento económico. Éste incide sobre el bienestar de los individuos a través de un mayor acceso a los avances de la medicina y a una mejor alimentación —lo que contribuye a aumentar la esperanza de vida—, y de más recursos para el fisco que permiten financiar la oferta de bienes públicos de calidad e infraestructura y, en general, ayuda a crear mejores condiciones de vida.

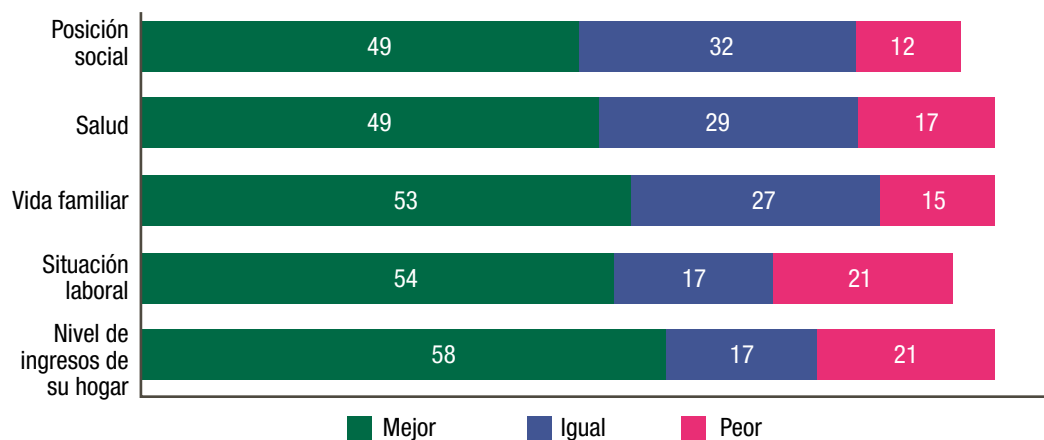
³ La escala de Cantril es una forma de medir satisfacción por la vida, a través de las respuestas a la siguiente pregunta: “En la escalera de la vida, de cero a diez, ¿en qué peldaño se encuentra usted en este momento?”.

2. SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y MOVILIDAD INTERGENERACIONAL

El progreso de Chile descrito en la sección anterior también es reconocido por la población en una comparación intergeneracional. En la encuesta CEP de noviembre 2014, según se exhibe en el **Gráfico 8**, un 58 por ciento de los chilenos declaró que el nivel de ingresos de su hogar es mejor que el de sus padres a la misma edad del encuestado, un 17 por ciento igual que sus padres, y sólo un 21 por ciento afirmó que era peor. Más aún, un 54 por ciento de los encuestados afirmó que su situación laboral era mejor que la de sus padres; un 32 por ciento igual y sólo un 12 por ciento peor. En cuanto a salud, un 49 por ciento consideraba estar en una situación mejor que sus padres, un 29 por ciento, igual y sólo un 17 por ciento, peor. Finalmente, en posición social, un 49 por ciento estimaba que su situación era mejor que la de sus padres; un 32 por ciento, opinaba que igual y un 12 por ciento que peor.

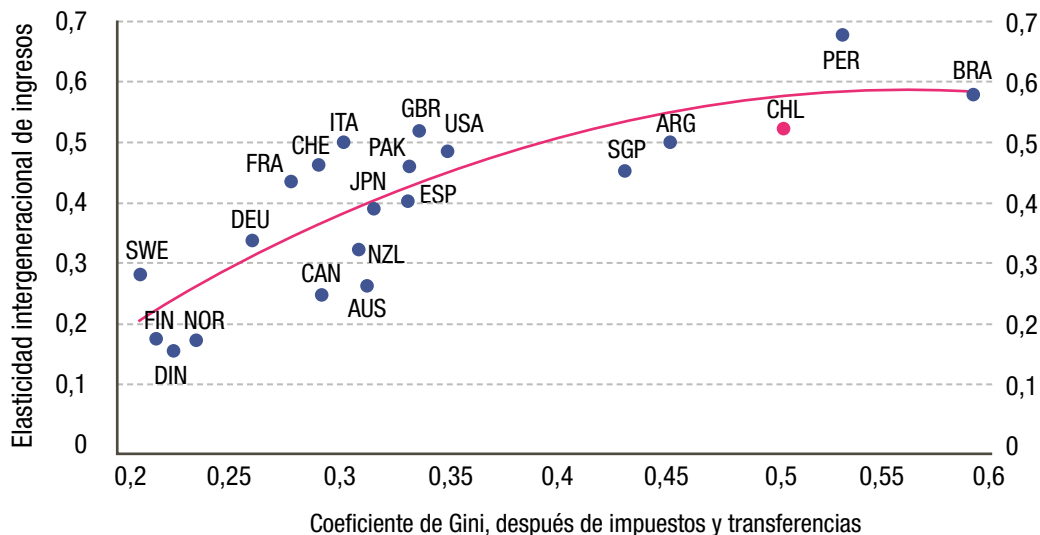
Un 58 por ciento de los chilenos declaró que el nivel de ingresos de su hogar es mejor que el de sus padres a la misma edad del encuestado.

Gráfico 8: Comparación en las condiciones de vida de padres e hijos



Nota: Respuestas a la pregunta “Comparándose con sus padres a la edad que usted tiene ahora, ¿usted diría que sus condiciones en los siguientes aspectos son mejores, iguales o peores que las de sus padres?”. Las cifras no suman 100 porque no están incluidas las alternativas “no sabe” y “no contesta”. Fuente: Encuesta CEP, noviembre 2014.

Gráfico 9: Relación entre desigualdad de ingresos y movilidad intergeneracional de ingresos



Nota: Relación entre la elasticidad intergeneracional de los ingresos de los padres y sus hijos (eje vertical) y el coeficiente de Gini, después de impuestos y transferencias (eje horizontal). Fuente: OCDE (2015).

A pesar de la mayoritaria percepción de que el nivel de ingresos del hogar actual es mejor que el del de los padres, se estima que la movilidad intergeneracional de ingresos —medida como la correlación entre los ingresos de los encuestados y el estimado para sus padres de acuerdo a lo declarado por los propios encuestados— ha sido baja en Chile en relación con otros países de la OCDE. En efecto, de acuerdo a OCDE (2015) y según se ilustra en el **Gráfico 9**, esta movilidad llega a 0.52 en Chile, misma cifra que el Reino Unido, y cercana al nivel de Italia y Argentina (0.50) y Estados Unidos (0.49). Cabe destacar que los países mencionados, a pesar de tener niveles de movilidad de ingresos similares, presentan niveles de desigualdad de ingresos inferiores al chileno. En efecto, el coeficiente de Gini después de impuestos y transferencias —medida de desigualdad de ingresos que va desde cero (todos tienen el mismo ingreso) a uno (una persona se lleva todo el ingreso y el resto se queda sin nada)— es 0.33 en el Reino Unido, 0.30 en Italia, 0.45 en Argentina, 0.35 en Estados Unidos y 0.50 en Chile. Esto podría sugerir que la movilidad

intergeneracional y la desigualdad no están necesariamente relacionadas. Sin embargo, los datos del **Gráfico 9** exhiben una relación positiva entre desigualdad de ingresos y la correlación entre los ingresos de individuos y sus padres, al menos para los países presentes en la figura. En otras palabras, el gráfico sugiere que una alta desigualdad de ingresos estaría relacionada con una menor movilidad socioeconómica, algo que la literatura académica llama la curva del Gran Gatsby.⁴

¿Qué ha ocurrido en Chile? Torche (2005) encuentra que en Chile hay alta desigualdad y alta movilidad, en contraste con lo sugerido por la curva del Gran Gatsby, hecho que se explicaría por la magnitud de los ingresos del diez por ciento más rico de la población. De hecho, la autora muestra que si a los países de América Latina y a Estados Unidos se les excluye el último decil de ingreso, Chile sería el país con la desigualdad de ingreso más baja entre ellos. Por lo tanto, la curva del Gran Gatsby (baja desigualdad y alta movilidad) aplicaría para la mayoría de los grupos socioeconómicos en Chile, salvo para

4 Para más evidencia acerca de la existencia de esta relación, ver Corak (2013).



aqueños que pertenecen al decil de mayores ingresos, en cuyo caso, hay baja movilidad desde y hacia este grupo. Al mismo tiempo, dado que la movilidad se concentra en los grupos socioeconómicos medios y bajos, es posible que no genere mejoras perceptibles, tanto en posición social como en bienestar.

A continuación, analizaremos si la movilidad intergeneracional genera mejoras perceptibles en posición social y en bienestar en Chile. Para ello, en primer lugar, revisaremos evidencia que vincula la movilidad intergeneracional, tanto a la posición social como a la satisfacción con la vida, para luego pasar a la aplicación empírica con datos de las encuestas CEP.

2.1 EVIDENCIA INTERNACIONAL

Uno de los hallazgos más importantes de la literatura de “estratificación subjetiva” hace referencia a la conexión existente entre las condiciones materiales de los individuos (ingreso, ocupación y educación, entre otras) con la posición social, entendida como “la creencia de una persona acerca de su ubicación en un orden de estatus” (Davis, 1956). En particular, la auto-percepción de la ubicación en el ordenamiento de estatus, por parte de los individuos, mejora cuando las condiciones materiales también lo hacen (Evans y Kelley, 2004), elemento que ya estaba presente en las teorías sociológicas más clásicas (Marx, Durkheim y Weber).

Ahora bien, es conocida la tendencia de los individuos a calificarse como de “clase media”, es decir, a ubicarse al medio de la escala de posición social. Esto podría significar que sucesivas expansiones de las condiciones materiales no traerían consigo una mejora en la posición social,

simplemente, por la tendencia a auto-declararse como clase media. Sin embargo, Evans y Kelley (2004) proponen un enfoque en que los avances materiales que traen mejoras en posición social son compatibles con la tendencia de ubicarse en el centro de la escala: más recursos y logros materiales elevan la percepción de estatus social, sin embargo, como los grupos de referencia tienden a ser homogéneos, los individuos tienden a ubicarse al medio de la escala de posición social. Esto significa que el crecimiento de los ingresos puede traer mejoras en la posición social, a pesar de la tendencia de auto-ubicarse en el centro del propio grupo de referencia.

Esta relación entre condiciones materiales y posición también se registra en cuanto a movilidad. Kelley y Kelley (2009) muestran que la propia percepción de movilidad social —en este caso, respecto de los padres— aumenta cuando las condiciones materiales

o recursos mejoran. Además, los autores señalan que en países más desarrollados, las personas tienden a ubicarse más alto en la escala de posición social que individuos que habitan en países menos desarrollados. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos, a nivel individual y general, hace que los individuos perciban una mejora social, comparados consigo mismos —cuando la situación material era más precaria— y con sus padres.

La infelicidad generada por estar un tramo más abajo en la escala de ingresos que los padres es mayor que la felicidad obtenida por estar un tramo más arriba que los padres (Nikolaev y Burns, 2014).

Ahora bien, ¿cómo se relaciona la movilidad socioeconómica, relativa a los padres, con la percepción de bienestar? Por una parte, una mayor movilidad podría estar relacionada con más acceso a bienes y servicios, lo que podría aumentar la satisfacción con la vida. Es más, la auto-percepción de estar mejor que los padres podría traer consigo sensaciones de respeto y admiración entre los pares y percepciones de más control sobre la vida y aceptación social (Anderson et al. 2012), todas ellas relacionadas con un mayor nivel de bienestar. Por otra parte, la pertenencia a un grupo social más alto podría generar expectativas más altas, en cuanto a consumo y a estatus, que de no cumplirse podrían reducir la satisfacción con la vida. Incluso, es posible que la mejora en la posición social no se perciba como tal, una vez que los individuos se acostumbran a ella (Nikolaev y Burns, 2014).

¿Qué dice la evidencia empírica en cuanto a la relación entre movilidad intergeneracional

y bienestar? Usando datos de la General Social Survey (GSS) de Estados Unidos, McBride (2001) encuentra que la movilidad intergeneracional respecto de los niveles de vida incide positivamente sobre la felicidad. Para el Reino Unido, Clark y D'Angelo (2008) establecen que la movilidad ocupacional intergeneracional —esto es, si los individuos perciben que su trabajo es más socialmente deseable y digno de respeto en relación al de sus padres— está relacionada con niveles de satisfacción laboral y con la vida más altos. Dolan y Lordan (2013), también para el Reino Unido, registran que la movilidad de ingresos está relacionada significativamente, en términos estadísticos, con la satisfacción con la vida. Cuando estos autores separan entre movilidad ascendente (mejora relativa a la situación de los padres) y descendente (percepción de una situación peor a la de los padres), hallan que la primera no se relaciona con la satisfacción con la vida, pero la segunda, tiene una relación negativa con ésta.

Nikolaev y Burns (2014), usando datos de la GSS de Estados Unidos, estudian la relación entre movilidad intergeneracional de ingresos (medida a través de la comparación de los estándares de vida propios y de los padres), social (medida a través de la comparación de un indicador que refleja el prestigio y deseabilidad social de la ocupación propia y de los padres) y educacional (comparación del nivel educativo del individuo y sus padres).⁵ Los autores encuentran que la movilidad ascendente, en estos tres aspectos, está relacionada positivamente con la felicidad, y lo contrario ocurre con la movilidad descendente. Otro hallazgo relevante de ese artículo es que el efecto de la movilidad descendente sobre la felicidad es mayor en magnitud que el efecto de la movilidad ascendente, en lo referido a ingresos, lo que no ocurriría en movilidad social y educacional. Esto significa que la infelicidad generada por estar un tramo más abajo en la escala de ingresos que los padres es mayor que la felicidad obtenida por estar un tramo más arriba que los padres.

⁵ De acuerdo a Nikolaev y Burns (2014), su artículo es el único que ha estudiado la relación entre movilidad educacional intergeneracional y satisfacción con la vida a la fecha de su publicación.

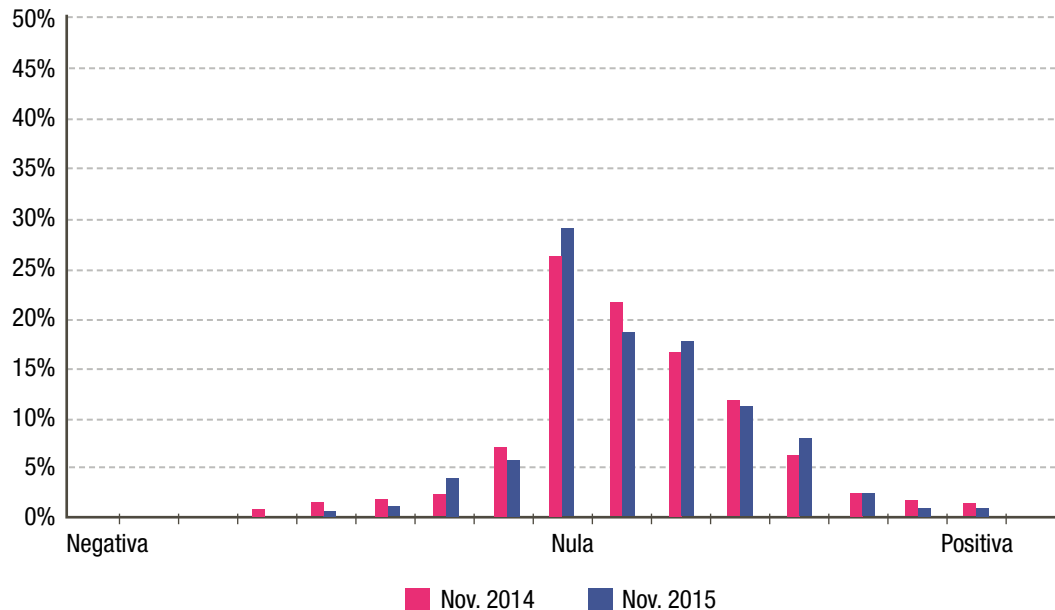
2.2 EVIDENCIA NACIONAL

Los estudios en Chile han considerado diversas medidas de movilidad: ingresos (e.g. Sapelli, 2013), ocupación (Torche y Wormald, 2004) y educación (Nuñez, 2007). Estas tres medidas tienen defectos y virtudes, además de que capturan dimensiones distintas, aunque relacionadas, de la movilidad. El trabajo empírico de esta sección se concentrará en dos medidas de movilidad intergeneracional: educacional y subjetiva. A priori, se podría considerar que la ausencia de indicadores “objetivos”, como los ingresos y la ocupación, podría ser un problema. No obstante, hay evidencia que señala que la evaluación hecha por los individuos, capturada por los indicadores subjetivos, es más compleja y completa que aquellas basadas en los indicadores “objetivos” (como el ingreso, la ocupación

y la educación), debido a que la evaluación subjetiva considera todos los elementos “objetivos” al momento de evaluar su situación (Andersson, 2015).

Para estimar la movilidad intergeneracional, utilizaremos la información declarada por los individuos, en relación a sus padres. En las encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015, los encuestados respondieron preguntas acerca de su nivel educativo, y la posición social propia y de sus padres. De esta forma, la Movilidad Educacional Intergeneracional (MEI) se define como la diferencia entre el nivel educacional alcanzado por el propio encuestado y el máximo nivel educacional de la madre o el padre (se considera el mayor de los dos), sin tomar en cuenta las repeticiones de curso.⁶

Gráfico 10: Movilidad educacional intergeneracional, 2014 y 2015



Nota: Movilidad educacional intergeneracional (diferencia entre logro educacional del encuestado y su padre, medida en ciclos) en la muestra. Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

⁶ La clasificación de los niveles de educación en ambas encuestas fluctúa entre cero y nueve, en que cero representa el nivel educacional más bajo y nueve el más alto. Estos niveles son: (0) no estudió, (1) educación básica incompleta, (2) educación básica completa, (3) educación media incompleta, (4) educación media completa, (5) educación superior no universitaria incompleta, (6) educación superior no universitaria completa, (7) educación universitaria incompleta, (8) educación universitaria completa y (9) estudios de postgrado, master o doctorado.

El **Gráfico 10** ilustra la distribución de la MEI en las encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015. El primer fenómeno que salta a la vista es la similitud de ambas distribuciones. En efecto, en noviembre 2014, un 26 por ciento de los chilenos afirmaba haber alcanzado el mismo nivel educativo que uno o ambos padres y por esa razón su MEI era igual a cero, equivalente, en términos estadísticos, al 29 por ciento que declaraba lo mismo en noviembre 2015. Asimismo, un 12 por ciento de los chilenos decía tener un nivel educativo inferior que sus padres en noviembre 2014 (diez por ciento sostuvo lo mismo en noviembre 2015), mientras que un 62 por ciento declaraba haber conseguido un nivel educacional superior al de sus padres en noviembre 2014, sin diferencia estadísticamente significativa con la cifra de noviembre 2015.

Otra forma de representar la relación entre la educación de los hijos y sus padres es la correlación entre ambos niveles educativos. La **Tabla 1** presenta los resultados de una regresión entre el nivel de escolaridad de los hijos y de los padres usando las encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015. Mientras más alta sea la correlación estimada entre ambos niveles educativos, la MEI resulta ser más baja. La tabla también exhibe la misma correlación, controlando por el nivel de escolaridad de los padres al cuadrado y otra regresión con controles individuales como género, edad, edad al cuadrado, pareja estable, religión, actividad religiosa, riqueza, zona urbana y variables binarias de región. Las regresiones utilizando ambas encuestas recientes exhiben una correlación de 0.681 cuando no se incluye el término cuadrático.⁷

Tabla 1: Relación entre educación propia y de los padres, 2014 y 2015

	(1)	(2)	(3)
Educación de los padres	0.681*** (0.017)	1.137*** (0.051)	0.812*** (0.057)
Educación de los padres al cuadrado		-0.059** (0.006)	-0.039*** (0.007)
Otros controles	No	No	Si
N	2,264	2,264	2,163
R ²	0.398	0.418	0.506
R ² ajustado	0.398	0.417	0.500

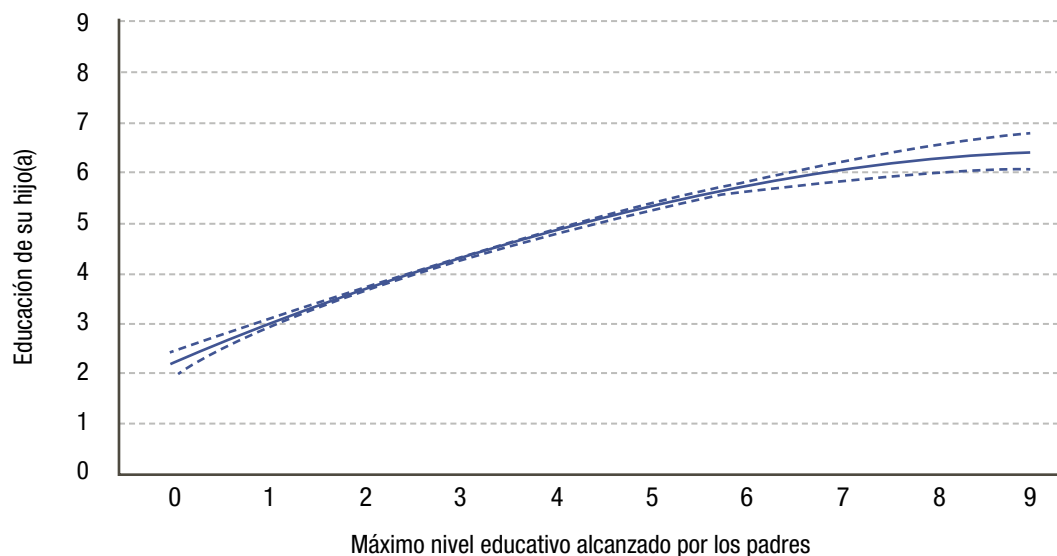
Nota: Modelo de regresión OLS para el nivel de escolaridad. Se reportan errores estándar robustos a heterocedasticidad. Los controles incluidos son: género, edad, edad al cuadrado, pareja estable, religión (ref. Ninguna), actividad religiosa, riqueza, zona urbana (ref. Rural) y variables *dummies* de región. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

7 Rubio (2016), utilizando datos de la Casen 2013 y sin incluir controles (equivalente a la columna 1 de la **Tabla 1**), estimó una correlación entre nivel educativo de padres e hijos de 0,587, algo inferior a la cifra encontrada con los datos de la encuesta CEP, lo que en parte, se debe a que se utilizan cuatro niveles educacionales (sin educación, básica, media, técnica nivel superior y universitaria nivel superior), en vez de los nueve utilizados acá. Entonces, como en este caso se trata de categorías educacionales más finas, la relación entre los niveles educativos del encuestado y sus padres se tienden a acentuar.

Por otra parte, Gaviria (2007), empleando la muestra de países de América Latina incluidos en la encuesta Latinobarómetro del año 2000, estima una regresión equivalente a la columna 1 de la **Tabla 1**, aunque aplicada a la región como un todo. La correlación entre el nivel educativo de padres e hijos es de 0.442, que de acuerdo al autor, sería signo de una MEI baja en comparación a los países desarrollados, cuya correlación fluctuaría entre 0.3 y 0.2. De este modo, una correlación estimada para Chile de 0.681 es significativamente superior a lo calculado para América Latina y países desarrollados en la literatura. En consecuencia, la movilidad educacional intergeneracional en Chile es baja, tanto si se compara con economías desarrolladas como con países de la región.

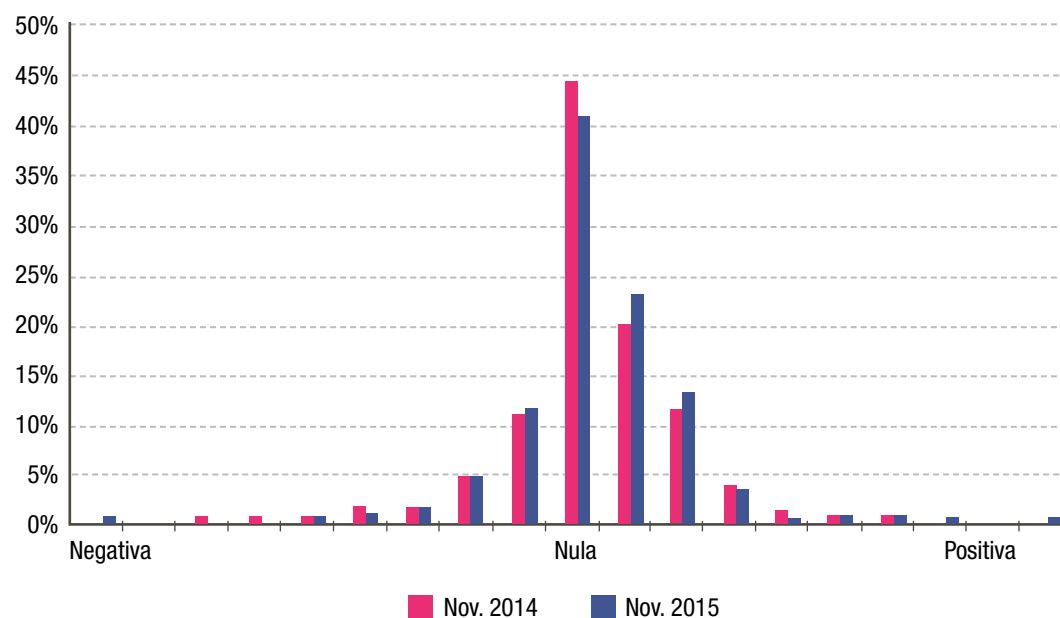
Un 40 por ciento de los chilenos percibe que su posición social es superior a la de sus padres en 2015, cuatro puntos porcentuales más que en 2014, mientras que un 41 por ciento dice que es igual (cuatro puntos porcentuales menos que en 2014) y un 19 por ciento que es más baja que la de sus padres.

Gráfico 11: Correlación entre educación de los padres y sus hijos, 2014 y 2015



Nota: Correlación entre educación de los padres y sus hijos, estimada en la columna (3) de la **Tabla 1**. Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

Gráfico 12: Movilidad intergeneracional subjetiva, 2014 y 2015



Nota: Movilidad social subjetiva intergeneracional (diferencia entre posición social subjetiva declarada por el encuestado y la atribuida a su padre a su edad). Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

Al mismo tiempo, los términos cuadráticos de las especificaciones (2) y (3) en la **Tabla 1** resultaron negativos y significativos, tanto en la especificación que no incluye los controles como en aquella que sí los considera, resultado que también se obtiene en la muestra de países de América Latina utilizada por Gaviria (2007). El **Gráfico 11** ilustra la relación cuadrática estimada entre la educación de los padres y sus hijos. En promedio, los hijos de padres sin educación obtienen educación básica completa, mientras que hijos de padres con educación superior completa obtienen entre educación superior no universitaria completa y educación universitaria incompleta. El estudio de Gaviria (2007) para países de América Latina encuentra que las oportunidades educativas están mucho más concentradas en la región que en Estados Unidos. La evidencia de este capítulo (**Tabla 1**) muestra que, en Chile, esta concentración es todavía mayor.

La movilidad
educacional
intergeneracional
en Chile es baja,
tanto si se compara
con economías
desarrolladas como
con países de
la región.

Tabla 2: Regresiones de movilidad social subjetiva intergeneracional

Movilidad Educacional Intergeneracional	0.124*** (0.018)
Género (ref. Hombre)	-0.143** (0.061)
Edad	0.011 (0.009)
Edad2	-0.000 (0.000)
Pareja Estable	0.206*** (0.064)
Religión: Católica (ref. Ninguna)	-0.021 (0.077)
Religión: Evangélica (ref. Ninguna)	0.177 (0.114)
Actividad Religiosa	0.004 (0.016)
Riqueza	0.072 (0.134)
Zona: Urbana (ref. Rural)	0.078 (0.094)
Intercepto	-0.323 (0.384)
Observaciones	2,113
R ²	0.064
R ² ajustado	0.052

Nota: Modelo de regresión OLS para el nivel de escolaridad. Se reportan errores estándar robustos a heterocedasticidad. Los controles incluidos son: género, edad, edad al cuadrado, pareja estable, religión (ref. Ninguna), actividad religiosa, riqueza, zona urbana (ref. Rural) y variables *dummies* de región. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

La Movilidad Intergeneracional Subjetiva (MIS) busca capturar los avances y retrocesos percibidos por los individuos en cuanto a posición social, comparado con lo que ellos estiman tendrían sus padres a su misma edad. La MIS se obtiene de la diferencia entre la posición social declarada⁸ y la de sus padres⁹. Valores positivos indican una posición social de los hijos superior a la de los padres y, en caso contrario, valores negativos. El **Gráfico 12** ilustra la distribución del indicador en las encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015. Un 40 por ciento de los chilenos percibe que su posición social es superior a la de sus padres en 2015, cuatro puntos porcentuales más que en 2014, mientras que un 41 por ciento dice que es igual (cuatro puntos porcentuales

menos que en 2014) y un 19 por ciento que es más baja que la de sus padres. En su análisis de los países de América Latina de la encuesta Latinobarómetro (2000), Gaviria (2007) encuentra que un 47 por ciento de los encuestados considera estar en la misma posición social que sus padres, al mismo tiempo que un 20 por ciento afirma estar en una posición social más alta que sus padres y un 33 por ciento cree que se ubica por debajo de la de sus padres. Así, parece que los chilenos tienen una apreciación más favorable respecto de la movilidad social, respecto de sus padres, que el resto de los latinoamericanos.

Antes de discutir la posible relación de MIS y MEI con la satisfacción con la vida, revisaremos



Las personas que dicen tener un nivel educacional superior al de sus padres tienden a declarar una posición social más alta que ellos.

los resultados de los determinantes de la MIS, que se exhiben en la **Tabla 2**. Las variables sociodemográficas, el género y la situación de pareja tienen efectos estadísticamente significativos sobre la movilidad subjetiva. Las mujeres observan menos movilidad subjetiva que los hombres y las personas con una pareja estable registran una movilidad subjetiva mayor que aquellas que no tienen pareja (a diferencia de lo encontrado por Kelley y Kelley, 2009). El resto de las variables sociodemográficas (religión, actividad religiosa, vivir en una zona urbana y riqueza) no tienen una relación estadísticamente significativa con la percepción de movilidad subjetiva. Particularmente interesante es que la riqueza, calculada a partir de la tenencia de bienes

de estatus¹⁰, en promedio, no tenga relación con la percepción de una mejor posición social que los padres. Ello podría significar que la percepción de los chilenos acerca del progreso relativo a los padres no se debe estrictamente a la posesión de bienes, lo que evidencia que el proceso de evaluación de la posición social es complejo y posiblemente involucra aspectos materiales de otra índole.

Los resultados también apuntan a una relación positiva y significativa, en términos estadísticos, entre movilidad educacional y movilidad subjetiva, esto es, las personas que dicen tener un nivel educacional superior al de sus padres —otra forma de mejora en los recursos de los individuos— tienden a declarar una posición social más alta que la de sus padres. En ese sentido, el que los incrementos en los recursos aumenten la propia percepción de movilidad social, está en línea con lo encontrado por Kelley y Kelley (2009). Para investigar si la movilidad intergeneracional tiene relación con la satisfacción con la vida en Chile, llevaremos a cabo un ejercicio similar al de Nikolaev y Burns (2014), calculando la relación de la movilidad ascendente y descendente, pero a

8 La posición social del encuestado se obtiene de la respuesta a la siguiente pregunta: “En nuestra sociedad, hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos y grupos que tienden a ubicarse en los niveles más bajos. Usando la siguiente escala que va desde el nivel más alto (igual a diez) al más bajo (igual a uno), ¿dónde se ubica Ud.?”.

9 La posición social de los padres del encuestado se obtiene de la respuesta a la siguiente pregunta: “Y pensando en la familia en la que Ud. creció, ¿dónde se ubicarían ellos en esta escala?”.

10 El nivel de riqueza se calcula a partir de la tenencia de los siguientes bienes en el hogar del encuestado: secadora, congelador, lava-vajilla, teléfono fijo, computador, internet fijo, cámara de video, servicio doméstico y automóvil ($a = 0.80$).

diferencia de estos autores, con la movilidad subjetiva, además de la educacional. Para ello, estimaremos una regresión de satisfacción con la vida, como la explicitada

en el Capítulo 1 de este Informe, añadiendo las variables asociadas a la movilidad ya mencionadas.

Tabla 3: Satisfacción por la vida y movilidad intergeneracional

	(1)	(2)
Género (ref. Hombre)	0.047 (0.083)	0.032 (0.084)
Edad	-0.075*** (0.012)	-0.072*** (0.012)
Edad ²	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)
Pareja Estable	0.521*** (0.087)	0.542*** (0.087)
Religión: Católica (ref. Ninguna)	0.109 (0.106)	0.110 (0.106)
Religión: Evangélica (ref. Ninguna)	0.199 (0.162)	0.214 (0.163)
Actividad Religiosa	0.049** (0.020)	0.051** (0.020)
Riqueza	1.097*** (0.193)	1.109*** (0.193)
Zona: Urbana (ref. Rural)	0.154 (0.125)	0.156 (0.126)
Nivel educacional	0.117*** (0.021)	0.123*** (0.022)
MIS ascendente	0.212** (0.091)	
MIS descendente	-0.305*** (0.115)	
MEI ascendente		-0.093 (0.106)
MEI descendente		-0.032 (0.116)
Intercepto	6.791*** (0.405)	6.756*** (0.410)
Observaciones	2,646	2,646
R ²	0.107	0.101
R ² ajustado	0.0981	0.091

Nota: Modelo de regresión OLS para satisfacción por la vida propia. Se reportan errores estándar robustos a heterocedasticidad. Las regresiones incluyen *dummies* por región y por periodo de encuesta. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CEP de noviembre 2014 y 2015.

La **Tabla 3** presenta los resultados de este ejercicio. En cuanto a las variables sociodemográficas, se destaca la relación cuadrática entre la edad y la satisfacción por la vida, además de la relación positiva y significativa de tener una pareja estable. Al mismo tiempo, la riqueza (medida a través del índice de tenencia de bienes) tiene una relación positiva y significativa sobre la satisfacción, y de una magnitud relevante. Además, la actividad religiosa tiene una relación estadísticamente significativa con la satisfacción por la vida, sin embargo, la identificación con alguna religión en particular no lo tiene. Para este caso, llama la atención que el género no tenga una relación estadísticamente significativa con el bienestar subjetivo debido a que tanto estudios nacionales como internacionales encuentran esta correlación en sus datos.

En este trabajo encontramos que la movilidad intergeneracional social subjetiva está asociada significativamente, en términos estadísticos, con la satisfacción con la vida. En este caso, la movilidad ascendente está relacionada positivamente con el bienestar subjetivo, y lo contrario ocurre con la movilidad descendente. Por el contrario, la movilidad intergeneracional educativa no tiene relación significativa con la satisfacción por la vida, sin importar si es ascendente o descendente. Estos resultados contrastan con lo encontrado por Nikolaev y Burns (2014) para Estados Unidos, quienes encontraban una relación positiva y significativa entre movilidad educativa y felicidad.

Otro resultado interesante de las regresiones de la **Tabla 3** es que la relación entre la movilidad subjetiva descendente y la satisfacción con la vida es mayor en magnitud que el efecto de la movilidad ascendente. De hecho, el coeficiente asociado a la pérdida de posición social, respecto de los padres, es un 44 por ciento superior que las ganancias

de bienestar asociadas a una mejor posición social que los padres. Una explicación posible podría tener relación con la teoría de aversión a la pérdida de Kahneman et al. (1991), esto es, las personas tienen preferencias que se inclinan más por evitar las pérdidas que por obtener ganancias proporcionales. Es posible que, por esa razón, bajar un peldaño en la escala social ocasione un perjuicio mayor en el bienestar que el beneficio de subir un peldaño en la misma escala.

¿Qué significan todos estos resultados? Primero, la percepción de que la posición social propia es mejor que la de los padres está asociada con niveles de satisfacción por la vida más altos. Segundo, alcanzar un nivel educativo más alto que los padres no está relacionado con mayor bienestar subjetivo, pero sí con una percepción de que la posición social es mejor que la de los padres; por esa razón, la movilidad educativa está indirectamente asociada con mayor satisfacción. Tercero, subir y bajar en la escala social, siempre respecto de los padres, está asociado con impactos asimétricos sobre el bienestar, esto es, la ganancia en bienestar de estar un peldaño más arriba que los padres en dicha escala es menor que la pérdida en satisfacción generada por un descenso de un peldaño en la misma escala.

La percepción de que la posición social propia es mejor que la de los padres está asociada con niveles de satisfacción por la vida más altos.

3. UNA MIRADA ALTERNATIVA AL MALESTAR

Este capítulo ha mostrado el significativo avance que ha experimentado el bienestar de los chilenos las últimas tres décadas. En concreto, un 82 por ciento de la población se declaró satisfecho con su vida en general en agosto 2015, 20 puntos porcentuales más que la fracción de la población que lo afirmaba en 1995. Visto de esta manera, antes que malestar, el bienestar predomina en Chile.

Por un lado, los resultados muestran que la movilidad social subjetiva —percepción de que la posición social propia es superior a la de los padres— está relacionada con niveles de satisfacción por la vida más altos. En este caso, el análisis de los datos no sugiere que los ingresos estén asociados a una mejor percepción de posición social, pero sí lo está cuando el individuo ha alcanzado un nivel educativo mayor que los padres. En noviembre 2015, un 61 por ciento afirmó haber conseguido un nivel educativo superior al de sus padres y un diez por ciento declaró lo contrario, es decir, haber obtenido un nivel educativo inferior que sus padres. En este último caso, es probable que la posición social respecto de los padres haya caído y que la satisfacción con la vida sea menor comparado con individuos de similares características. Por esa razón, las políticas públicas deben entregar las herramientas a los grupos de la población que quieren estudiar y no pueden hacerlo.

Para elevar el crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita, en el corto plazo, se requieren políticas que aumenten las tasas de participación laboral, en particular de jóvenes y mujeres.

Junto con esto, la regulación debe estar orientada a asegurar la calidad de los establecimientos educacionales, sobre todo en pre-escolar, básica y media. En 2012, en una entrevista publicada en *La Tercera*, Carlos Peña sostenía la existencia de “una inmensa frustración: [...] Hace 30 años, ir a la universidad aseguraba una alta posición en la escala invisible del prestigio y del poder: eso hoy día ya no ocurre y entonces el acceso se experimenta como un engaño”. Si ello es cierto, entonces tener un nivel educacional superior al de los padres no generará una percepción de mejora en la posición social y mayor satisfacción con la vida. Por eso, una buena regulación de la calidad de la educación podría evitar la frustración de expectativas, estimular la movilidad social de los chilenos y generar ganancias de bienestar adicionales.

Por otro lado, también vimos que la literatura internacional atribuye tanto al crecimiento de los ingresos individuales como del PIB per cápita los incrementos en satisfacción con la vida. Esta evidencia sugiere que la trayectoria ascendente de ambas variables, entre 1985 y 2013, estaría asociada al aumento de personas que se declaran satisfechas con sus vidas en Chile. Sin embargo, en el pasado reciente, los ingresos de los chilenos y del país dejaron de crecer a la velocidad que lo hacían antes. Como se puede apreciar en la **Tabla 3**, una mayor tenencia de bienes de estatus —indicador de nivel socioeconómico— está asociada a un nivel de bienestar subjetivo más alto, por tanto, el estancamiento del ingreso per cápita de los últimos tres años amenaza con limitar avances adicionales en el bienestar de la población en el corto plazo. Estos resultados apuntan en una dirección similar a lo señalado por José Joaquín Brunner en 1998, a saber: “la gente desea seguir mejorando sus condiciones de vida —y de su familia— pero más rápido. Quiere ‘más de lo mismo’ pero en un menor tiempo, de manera de, así, satisfacer sus expectativas” (Brunner, 1998, p. 187).

Quizás lo más importante de los resultados encontrados involucra la asociación asimétrica entre movilidad social y bienestar subjetivo. Este capítulo mostró que la pérdida en satisfacción con la vida de estar un peldaño más abajo que los padres en la escala de posición social es mayor que la ganancia en bienestar generada por subir un peldaño en la misma escala. Esto significa que la población quiere seguir avanzando y que resiente bastante la desaceleración de tal progreso. Bajo esta perspectiva, entonces, la prolongación del estancamiento de los últimos tres años podría ser la semilla del malestar en el futuro, uno de naturaleza diferente del que hablan la mayoría de los observadores.¹¹

Entonces, ¿cómo lograr educación de mejor calidad y más crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita? Primero, reconociendo que no existen recetas mágicas. Por el contrario, hay principios económicos y lecciones históricas relevantes que señalan el camino. En un libro reciente, académicos nacionales y extranjeros identificaron las áreas de acción prioritarias para conseguir estos propósitos (ver Corbo, 2014).

Por una parte, en educación, los especialistas afirman que los problemas son principalmente de gestión, calidad y alineamiento remuneraciones-desempeño de profesores, selección de directores, y financiamiento. En particular, en el nivel escolar municipal y particular-subvencionado existen problemas de calidad en todos los niveles, lo que afecta a los estudiantes de hogares de los tres quintiles de menores ingresos. En tanto, en la educación superior se ha avanzado mucho en acceso, pero hay problemas de costo, gestión y financiamiento en universidades públicas, y de calidad, financiamiento de estudiantes, información y supervisión de calidad en universidades privadas. Una educación de buena calidad no sólo genera percepciones de movilidad social y mayor bienestar, también estimula el emprendimiento y la innovación (cruciales para converger al ingreso de países desarrollados) y ayuda a reducir la desigualdad. De todos modos, cualquier reforma en educación rendirá sus frutos en el

La pérdida en satisfacción con la vida de estar un peldaño más abajo que los padres en la escala de posición social es mayor que la ganancia en bienestar generada por subir un peldaño en la misma escala. Esto significa que la población quiere seguir avanzando y que resiente bastante la desaceleración de tal progreso.

largo plazo. Por esa razón, hay que resolver el problema lo antes posible.

Por otra parte, para elevar el crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita, en el corto plazo, se requieren políticas que aumenten las tasas de participación laboral, en particular de jóvenes y mujeres. Para ello, es clave mejorar la capacitación y el aprendizaje en el trabajo, y promover políticas que faciliten el empleo y reduzcan la informalidad. Aumentar el crecimiento de largo plazo, en tanto, requiere de una contribución importante de la productividad total de factores, lo que se puede lograr reforzando la competencia, apuntalando infraestructura para reducir costos de transporte y mejorando la eficiencia del Estado.

En suma, el avance en la calidad de la educación y el crecimiento de los ingresos individuales y del PIB per cápita pueden contribuir a mejorar las perspectivas de movilidad social y generar más ganancias de bienestar para la población, de modo que el progreso alcance a todos los chilenos.

11 El Capítulo 1 contiene un compendio de diversas teorías que explican el malestar en Chile.



SERIE MP
No 00571629
SERIE MP
No
SERIE MP
No

SERIE MP
No 00571626

SERIE MP
No 00571615

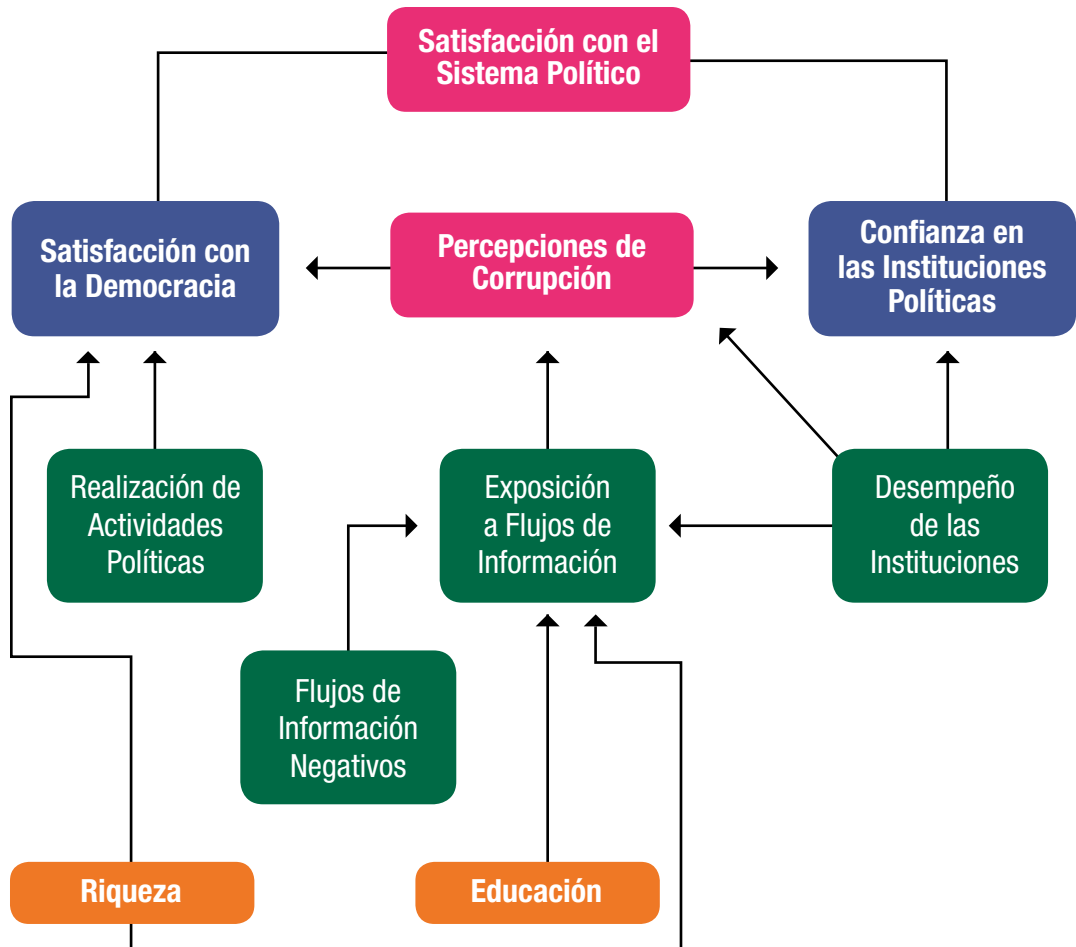


Capítulo 4:

LA SOBRE-DIAGNOSTICADA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO



MAPA CONCEPTUAL DEL CAPÍTULO 4



SÍNTESIS

Una de las áreas donde el malestar sería más evidente, según diversos analistas, es en el sistema político. La relativa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, la baja identificación con los partidos políticos, la escasa confianza en las instituciones políticas, la declinante participación en elecciones y un supuesto deseo mayoritario de participar activamente en la toma de decisiones públicas —no canalizado por la institucionalidad actual— serían sus síntomas. A partir de estos signos han surgido diagnósticos que hablan de crisis política, de la democracia, de confianza, de legitimidad y de las instituciones en nuestro país.

Este capítulo discute estos síntomas, a la luz de las cifras de opinión pública, y los pone en perspectiva comparada con el objeto de analizar si corresponde hablar de crisis y si los calificativos de ésta —política, de la democracia, de confianza, de legitimidad e institucional— son adecuados.

Por un lado, la adhesión a los principios democráticos es hoy más alta que nunca en Chile, lo que sin problemas puede coexistir con una percepción algo negativa de cómo está funcionando; por lo tanto, la idea de la crisis de la democracia parece exagerada. Por otro lado, se afirma que la baja identificación y confianza en los partidos generaría crisis de legitimidad. Sin embargo, el análisis comparado revela que ambas variables no tienen relación con la satisfacción que los ciudadanos expresan sobre sus sistemas

políticos; también se ha dicho que la baja participación en elecciones podría generar una crisis de representatividad, no obstante, ésta es similar a la de otros países cuyas elecciones tienen características similares a las de Chile. Por último, se ha señalado que la ausencia de más mecanismos de democracia directa generaría malestar con el sistema político, puesto que existiría un anhelo mayoritario de los chilenos de participar en la toma de decisiones, pero este deseo tampoco se observa ni en los datos, ni en la práctica, como se vio en el proceso constituyente de 2016. Por estas razones, creemos que la crisis del sistema político ha sido sobre-diagnosticada. Esto es importante, pues, como advierte Pippa Norris, académica de la Universidad de Harvard, cualquier intento reformista fracasará si el problema de la legitimidad democrática o la llamada crisis de confianza se exageran o se diagnostican mal.

Este texto reconoce que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia ha caído, al igual que la confianza en las instituciones en Chile. Es probable que la dinámica reciente se explique principalmente por las investigaciones judiciales de corrupción de funcionarios públicos y parlamentarios, sin embargo, el declive de ambas variables se observa desde hace más de una década, lo que probablemente se explica mejor por la insatisfacción con el desempeño de los servicios prestados por el Estado. Para revertir esta tendencia, el combate a la corrupción y la mejora en la calidad de los servicios públicos parecen cruciales.



INTRODUCCIÓN

La insatisfacción que los chilenos expresan sobre el funcionamiento del sistema político es otro aspecto relacionado con el supuesto malestar de los chilenos. Este descontento se reflejaría a través de malas calificaciones a nuestra democracia, baja identificación con los partidos políticos, escasa confianza en las instituciones políticas, falta de participación en elecciones y un supuesto deseo mayoritario de participar activamente en la toma de decisiones públicas. Varios analistas han tomado estos elementos para elaborar diagnósticos que hablan de crisis política, de la democracia, de confianza, de legitimidad y de las instituciones en nuestro país.

En este capítulo revisaremos los argumentos que sostienen la existencia de algunas de estas crisis en Chile y exploraremos la visión de los chilenos respecto del sistema político —medida a través de estudios de opinión pública— y su significado a la luz de la literatura internacional, y de acuerdo a ambos elementos, estudiaremos si se justifica el tono dramático de los analistas que subrayan

la existencia de alguna crisis. Buena parte del análisis se efectúa en perspectiva comparada, para investigar el carácter global (si alguno) de los fenómenos acontecidos en Chile, con el objeto de mejorar su comprensión, evitar sobredimensionarlos y ajustar las expectativas sobre lo que cualquier intento reformista puede alcanzar en esta materia.

El texto que sigue se divide en cuatro partes. La primera (1) comienza con una discusión sobre los diagnósticos de crisis en el sistema político en Chile. La segunda (2) analiza, de acuerdo a las cifras, la plausibilidad de los diferentes tipos de crisis que los analistas le han diagnosticado a nuestro sistema político. La tercera (3) propone un diagnóstico alternativo a las teorías de las crisis basada en el deterioro en el desempeño de las instituciones, percepción originada por la corrupción y la insatisfacción con los servicios prestados por el Estado. La cuarta (4), en fin, concluye.

1. CUESTIONAMIENTOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN CHILE

En los últimos años, la crisis política que Chile estaría atravesando se ha analizado desde varias perspectivas. A continuación se presenta una selección de los principales diagnósticos sobre la situación de la democracia en nuestro país.

José Joaquín Brunner consigna que uno de los tres niveles del malestar, que afectarían a Chile, tiene relación con la democracia, y en particular, con el hecho de que “sus ideales más altos no pueden cumplirse en plenitud” (Brunner, 2015a). Esta insatisfacción con el funcionamiento de la democracia se manifestaría, a su juicio, a través de la ausencia de identificación con las grandes coaliciones, la abstención electoral y la creciente desconfianza en las instituciones políticas y de quienes las encarnan.

Respecto de la llamada crisis de confianza, Brunner señala que en Chile coexiste un “régimen de baja confianza social con un régimen de baja intensidad en cuanto a la confianza (política) en las élites y las instituciones” y que, salvo momentos excepcionales, en general, el vínculo entre la opinión pública y las élites e instituciones es frío y desconfiado, creando así un entorno político en que “las fallas de los gobernantes son intensamente escrutadas y sus éxitos apenas son registrados en el radar evaluativo” (Brunner, 2015b). En el momento actual, agrega Brunner, a este ambiente de desconfianza, se suman una mala gestión política y un mayor empoderamiento de los medios de comunicación. Además, la coyuntura política pasa a ser una fuente adicional de desconfianza en las instituciones, a raíz de las investigaciones de corrupción, incidiendo en la evaluación que de ellas se hace. Finalmente, para Brunner, la llamada crisis de confianza “parece ser una entidad cambiante y de múltiples rasgos y dimensiones”, que incluye la confianza social y la confianza en las instituciones (Brunner, 2015b).

A raíz de la caída sistemática de los índices de confianza en las instituciones, Eduardo Valenzuela —en un artículo sobre los resultados de la Encuesta Bicentenario elaborada por la PUC— explica que el quiebre de la confianza institucional se caracteriza por afectar a todas las organizaciones, cualquiera sea su carácter (incluyendo las iglesias y las Fuerzas Armadas) y por tener un carácter irreversible. Dado lo anterior, Valenzuela señala que “la sociedad actual está menos dispuesta a entregar confianza a las instituciones que en el pasado, y todas las instituciones están actualmente obligadas a operar en un escenario en que la confianza no sólo no está garantizada, sino que con toda seguridad será tibia y escasa” (Valenzuela, 2014, p. 13). En el terreno de las explicaciones, Valenzuela plantea, entre otros aspectos, que un aumento de la distancia social respecto de la política y de los niveles de educación de los chilenos, sumado a la sobreexposición de la vida institucional y el incremento de la cobertura de información política serían los causantes de la masiva desconfianza en las instituciones, afirmando que “no es la distancia sino la cercanía, ni el hermetismo sino la transparencia, lo que mina la legitimidad de las instituciones, las que paradójicamente intentan resolver su crisis de confianza haciéndose más transparentes todavía” (Valenzuela, 2014, p. 14).

**Todas las instituciones
están actualmente
obligadas a operar en
un escenario en que la
confianza no sólo no
está garantizada, sino
que con toda seguridad
será tibia y escasa
(Valenzuela, 2014, p. 13).**

La confianza hacia las instituciones, sumado a demandas no satisfechas por abrir espacios significativos de participación e incidencia pública, puede terminar mermando la legitimidad de reformas importantes y agudizando los cuestionamientos al funcionamiento del sistema democrático (PNUD, 2014, p. 41).

Analizando lo que ha sucedido en Chile, Harald Beyer, en un artículo del Centro de Estudios Públicos, da cuenta de la pérdida de confianza en las instituciones públicas y privadas que ha acompañado el progreso del último cuarto de siglo. Sostiene que se trata de un fenómeno gradual que ocurre desde mediados de la década de los noventa, con un deterioro más agudo en los últimos años respecto de ciertas instituciones y al que resulta difícil dar una sola explicación, aunque, al menos, una parte tendría relación con un declive en la evaluación de desempeño de las instituciones. Ahora bien, Beyer señala que la disminución de la confianza en las instituciones no es necesariamente negativa, ya que, si bien la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es baja, existe una alta valoración de la misma. El desafío sería, entonces, enfrentar la llamada crisis de confianza en su justa dimensión, ante lo cual sugiere que el desempeño de las instituciones debe mejorar y que el país debe avanzar en el trato igualitario a las personas, y en el reconocimiento de derechos, que permitan el desarrollo de los proyectos personales de vida. (Beyer, 2015).

En su Informe de Desarrollo Humano en Chile 2012, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) incorpora el análisis de la confianza en las instituciones como uno de los factores para medir el bienestar (o malestar) subjetivo con la sociedad. Específicamente, el malestar social es definido como el “estado subjetivo que resulta de la evaluación que hacen los individuos de las oportunidades que les brinda la sociedad para realizar la imagen que tienen de sí” (PNUD, 2012, p. 110). Así, se observa cómo, mientras aumenta el número de personas que dicen sentirse satisfechas o muy satisfechas con su vida, baja el número de personas que tienen mucha o bastante confianza en las instituciones, dándose una coexistencia entre la satisfacción personal y un malestar con la sociedad. El Informe da cuenta que los chilenos mayoritariamente no confían en las instituciones de nuestra sociedad, existiendo una desconfianza generalizada en todos los ámbitos y actores, salvo excepciones (las Fuerzas Armadas y de Orden y medios de comunicación). Sin embargo, el PNUD argumenta que no se trata solo de un fenómeno únicamente nacional ni tampoco reciente. La caída en la confianza en las instituciones se observa sistemáticamente en los últimos veinte años, reafirmando que “el malestar con la sociedad no es solo coyuntural, sino de larga data, y que por lo tanto puede entenderse como un modo de relación de los ciudadanos con la sociedad” (PNUD, 2012, p. 47). El Informe destaca que el bienestar subjetivo no podría alcanzarse sólo de forma individual, existiendo responsabilidad de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. De esta forma, actores sociales e instituciones podrían jugar un rol positivo o negativo en aumentar o disminuir la satisfacción con la vida dependiendo si producen o no confianza (PNUD, 2012, p. 156-157).

El PNUD, en su Informe de Auditoría a la Democracia 2014, presenta como uno de los desafíos para Chile el legitimar la democracia para mantener la gobernabilidad. A pesar de las fortalezas del sistema chileno, este estudio muestra que existen desafíos pendientes incluyendo la desafección y escasa valoración de la política y sus instituciones y la baja participación y asociatividad (PNUD, 2014, p. 39). De esta forma, “Chile, lejos de experimentar un clima político extremadamente polarizado



o violento, ha visto cómo el descontento con la política se extiende y se traslada a un creciente cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones y actores del sistema político, el cual es estable, pero poco reactivo a las transformaciones sociales” (PNUD, 2014, p. 39).

Para reforzar la legitimidad política, señala el PNUD, es necesario abordar no sólo la dimensión institucional sino también que los procesos de toma de decisiones sean percibidos como inclusivos y participativos, donde tanto la forma de diseño de las políticas públicas como su contenido cuenten con legitimidad ciudadana. Como forma de abordar la disconformidad ciudadana con el funcionamiento de las instituciones y aumentar la confianza en ellas, este organismo establece que “se requiere construir agendas con legitimidad social y política”, incluyendo mecanismos para mayor participación ciudadana (PNUD, 2014, p. 40). El PNUD agrega que “esta demanda por mayor participación se torna particularmente relevante en una coyuntura política donde se busca impulsar transformaciones de fondo al modelo de desarrollo y el marco normativo institucional que rige la vida de las personas”, de modo que “la confianza hacia las instituciones, sumado a demandas no satisfechas por abrir espacios significativos de participación e incidencia pública, puede terminar mermando la legitimidad de reformas importantes y agudizando los cuestionamientos al funcionamiento del sistema democrático” (PNUD, 2014, p. 41).

Otra explicación que se encuentra, con frecuencia, en los medios de prensa escrita apela al cambio de la sociedad chilena de los

últimos años. En particular, se argumenta que los estándares exigidos a las instituciones, en general, son más altos y que la población percibe que, en la práctica, las instituciones y sus representantes son ineficaces en alcanzar tales estándares, parcialmente generados por el creciente escrutinio al que están sometidas sus actuaciones y porque es más fácil informarse de sus fallas. Por lo tanto, se sostiene que, si esta brecha de estándares efectivos y exigidos sigue creciendo, la desconfianza hacia las instituciones aumentará.

Finalmente, cabe consignar que este fenómeno parece observarse en distintas latitudes y no se trata de un problema reciente. En los sesentas y setentas, ya se hablaba de la crisis de la democracia en Europa, Estados Unidos y Japón, producto de demandas crecientes de numerosos grupos que podían afectar la gobernabilidad de los países. El diagnóstico para cada región era diferente: en el caso europeo, se hablaba de movimientos sociales cuyas demandas no tenían cauce en las instituciones políticas tradicionales, lo que suponía una pérdida de control por parte de los gobiernos. En Estados Unidos, se discutía entonces sobre una demanda por mayor participación e igualdad, asociada a la percepción de que los partidos políticos y el gobierno eran menos efectivos en la representación de la población y sus nuevos objetivos. En Japón, en tanto, la crisis de las instituciones tradicionales no era percibida como tal, en parte, por los valores de su sociedad (respetuosa de la jerarquía) y porque el crecimiento económico todavía era alto (Putnam, Pharr y Dalton, 2000, p. 3).

Muchos de los elementos mencionados resuenan en el Chile actual. En efecto, los casos de irregularidades en el financiamiento de la actividad política, así como las marchas y protestas del 2011, parecen haber generado

una percepción de disconformidad con el sistema político en Chile, similar a la observada en los países desarrollados hace más de cuarenta años atrás.

2. ¿QUÉ CLASE DE CRISIS (SI ALGUNA) AFECTA A NUESTRO SISTEMA POLÍTICO?

Como se pudo observar en la sección anterior, existen distintas miradas sobre las crisis que estarían afectando al sistema político, lo que, por supuesto, deriva en

diferentes caminos para solucionarlas. A continuación, revisaremos las características y las causas de estas supuestas crisis.

2.1 ¿CRISIS DE LA DEMOCRACIA?

El primer asunto a analizar es si los cuestionamientos al sistema político reflejan una crisis de la democracia, en cuanto forma de gobierno, o si las críticas apuntan más bien al funcionamiento y al desempeño de las instituciones en nuestro país. Para ello, revisaremos cifras de opinión pública y sus interpretaciones de acuerdo a la literatura académica.

En Chile, la adhesión al sistema político democrático ha aumentado en los últimos años (2010-2014), de acuerdo a los datos de las World Value Surveys. El **Gráfico 1** retrata las preferencias de los chilenos por tipos de sistemas políticos. La figura muestra que la democracia, como forma de gobierno, alcanza niveles de apoyo del 90 por ciento en el periodo 2010-2014¹, esto es, 11 puntos porcentuales por sobre lo observado a mediados de los años noventa. Al mismo tiempo, se registra una caída de 11 puntos porcentuales en la adhesión a un gobierno militar, ubicándose en 17 por ciento en 2010-2014. La alternativa de un gobierno de expertos se mantuvo cercana al 40 por ciento de los encuestados durante los últimos veinte años, aunque hubo un salto importante en esta percepción con el inicio del nuevo siglo.

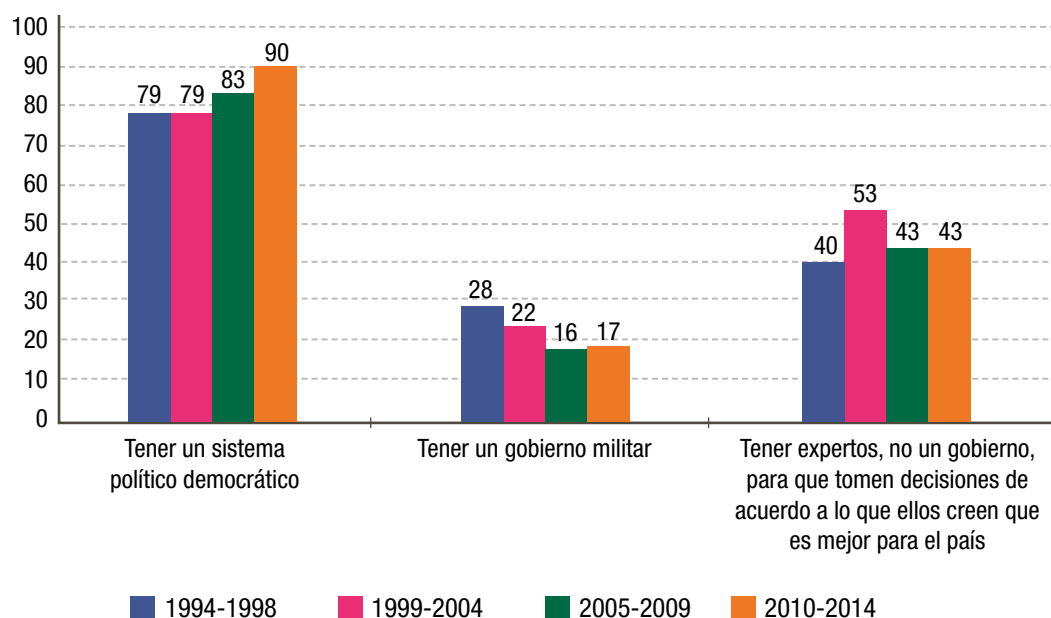
Datos más recientes de una encuesta realizada bajo el programa Auditoría de la

Democracia 2016 del PNUD, reveló que un 59 por ciento de los encuestados prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, muy por sobre el 45 por ciento registrado el año 2008 en el mismo estudio, y por sobre la justificación de un gobierno autoritario en algunas circunstancias (18 por ciento). Además, las personas consideraron que Chile hoy es más democrático que en el pasado y lo será más en diez años. Por lo tanto, parece evidente que no existe una crisis de la democracia y que los chilenos no quieren volver a vivir bajo un gobierno autoritario.

En los 60 y 70, ya se hablaba de la crisis de la democracia en Europa, E.E.U.U y Japón, producto de demandas crecientes de numerosos grupos que podían afectar la gobernabilidad de los países. (Putnam, Pharr & Dalton 2000, 3).

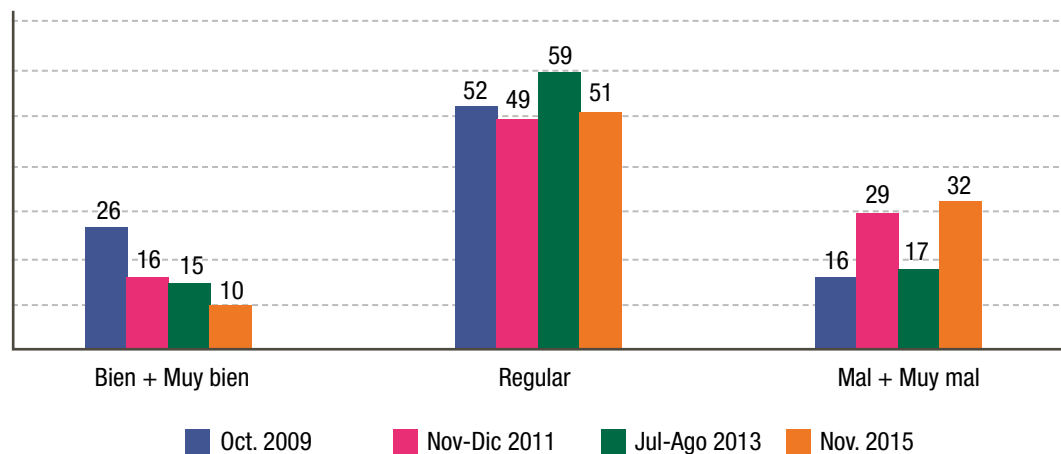
1 Al menos para el caso chileno existe evidencia que el apoyo a los gobiernos no democráticos estaría relacionado no tanto con la desconexión con los valores propios de un gobierno plenamente democrático, si no que más bien como una justificación del apoyo (o "nostalgia") a la dictadura de Pinochet (Huneus y Maldonado 2003).

Gráfico 1: Adhesión a tipos de sistemas políticos en Chile, 1994-2014



Nota: Porcentaje de personas en Chile que responde muy bueno o bueno a la siguiente pregunta: “Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y le preguntaré que piensa sobre cada uno. Por favor dígame si sería muy bueno, bueno, malo o muy malo para el gobierno de este país”. Fuente: World Value Surveys, años respectivos.

Gráfico 2: Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Chile, 2009-2015



Nota: Respuestas a la pregunta “¿Qué tan bien o qué tan mal cree Ud. que funciona la democracia en Chile?”. Se excluyen los “No sabe/ No contesta”. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

La disparidad existente entre el desempeño de las instituciones democráticas y las aspiraciones, que Norris llama déficit democrático, tendría eventuales consecuencias negativas en el actuar político de los ciudadanos. Chile tiene un déficit democrático que lo sitúa bajo el promedio de las democracias liberales más antiguas y más recientes (Norris, 2011).

Ahora bien, ¿se traduce la alta adhesión a la democracia, como forma de gobierno, en una buena evaluación de su funcionamiento? El **Gráfico 2** ilustra las evaluaciones del funcionamiento de la democracia, a partir de las percepciones de los chilenos medidas por las encuestas CEP entre los años 2009 y 2015. La figura exhibe, primero, que la percepción positiva no ha sido mayoritaria en este periodo y que, peor aún, ha ido cayendo constantemente. En el año 2011, en pleno apogeo de las marchas y movimientos sociales, la evaluación positiva (bien/muy bien) del funcionamiento de la democracia pasó de 26 a 16 por ciento, mientras que la negativa (mal/muy mal) creció 13 puntos porcentuales en el mismo lapso. Las opiniones negativas experimentaron un retroceso durante 2013, sin embargo, volvieron a aumentar, esta vez, en 16 puntos porcentuales entre 2013 y 2015, ubicándose en 32 por ciento, nivel incluso superior al alcanzado durante las movilizaciones del año 2011, y superior a la percepción positiva que llega a un magro diez por ciento. A todas luces, la alta adhesión a la democracia, como forma de gobierno, coexiste con una muy mala evaluación de su desempeño.

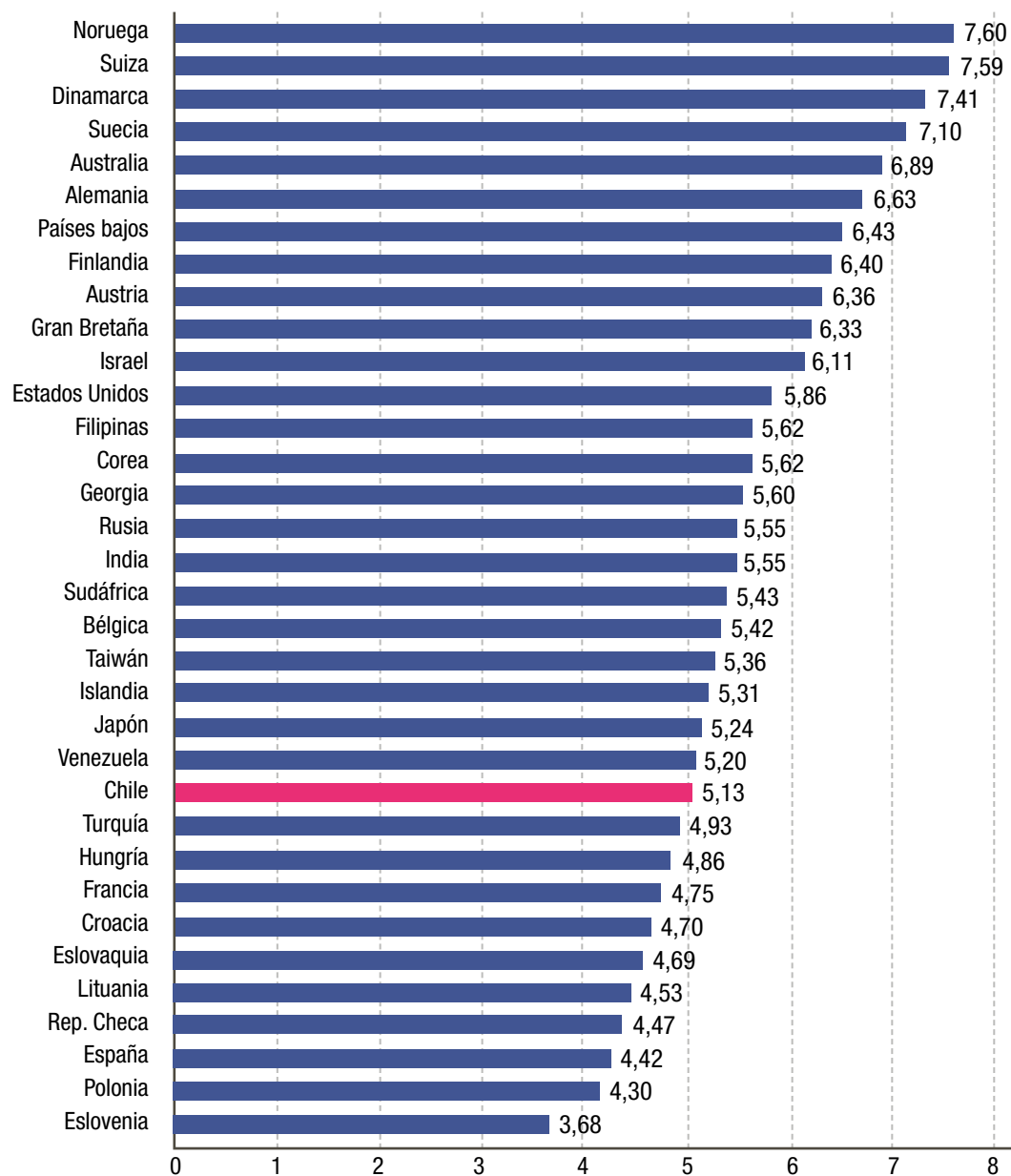
Pippa Norris, investigadora de la Universidad de Harvard, sostiene que la brecha entre la aspiración por la democracia —valoración de la democracia como ideal y el rechazo a las alternativas autocráticas— y la satisfacción con el funcionamiento de ella —desempeño de la democracia— puede explicarse por una progresiva extensión de la cobertura educacional y de adhesión a los valores democráticos —que eleva las aspiraciones—, por la relativa incapacidad de las políticas públicas y de las autoridades de cumplir con las mayores expectativas y por el tono negativo de la cobertura de los medios de comunicación masivos de los temas públicos —que empeora la percepción de desempeño. Por tanto, la disparidad existente entre el desempeño de las instituciones democráticas y las aspiraciones, que Norris llama déficit democrático, tendría eventuales consecuencias negativas en el actuar político de los ciudadanos, el cumplimiento de las políticas del gobierno, el Estado de Derecho y los procesos de democratización (Norris 2011, p. 4-8).

La evidencia exhibida en los **Gráficos 1 y 2** sugiere la existencia de un déficit democrático en Chile, en la línea de lo afirmado por Norris. Sin embargo, este fenómeno no es único en nuestro país, sino que se enmarca en una tendencia observable a nivel mundial, incluso entre democracias consolidadas. En efecto, las democracias liberales más antiguas —Italia, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Suecia por nombrar algunas— registran un déficit democrático mayor al promedio (dos puntos de diferencia, en una escala de uno a diez, entre la valoración de la democracia y su desempeño en la práctica). En tanto, democracias liberales recientes como las de Ucrania, Bulgaria, Polonia, Argentina, Corea del Sur, México, Brasil y Taiwán también presentan un déficit democrático mayor al promedio (dos puntos de diferencia también). Por su parte, Chile tiene un déficit democrático que lo sitúa bajo el promedio de las democracias liberales más antiguas y más recientes (Norris, 2011, p.111).

Durante 2014, los países miembros del International Social Survey Programme (“ISSP”) ² aplicaron el módulo de “Ciudadanía”, que indagó sobre varios aspectos relevantes de la democracia. El **Gráfico 3** exhibe la evaluación de los ciudadanos al funcionamiento de la democracia de cada uno de los países miembros de ISSP. La satisfacción de los

chilenos con la democracia, en promedio, se ubica en un nivel intermedio, sobre lo registrado Francia y cercano a países desarrollados como Islandia y Japón el 2014, a pesar de la creciente percepción negativa del funcionamiento de la democracia en Chile en el pasado reciente (ver **Gráfico 2**).

Gráfico 3: Satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 2014



Nota: Promedio, por país, de respuestas a la pregunta: “En general, en una escala de cero a diez donde cero es muy mal y diez es muy bien. ¿Qué tan bien funciona la democracia en [país] hoy?”. Fuente: Elaboración propia basada en ISSP 2014.

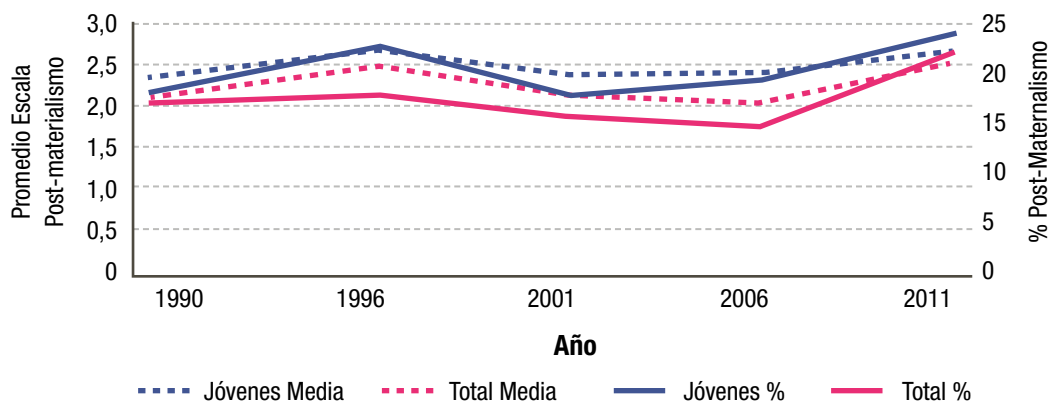
² Programa anual de colaboración internacional de encuestas sobre temas relevantes para la investigación en ciencias sociales, que desarrolla encuestas desde 1988 y en Chile es aplicada por el CEP desde 1998. A la fecha, hay 45 países miembros, localizados en cinco continentes.

Ahora bien, en cuanto a las aspiraciones democráticas, Norris sostiene que niveles educacionales más altos generan una mayor adhesión a los principios de la democracia y un aumento de las expectativas acerca de su funcionamiento. Por tanto, ante las dificultades de hacer realidad tales aspiraciones, los más educados, si bien prefieren la democracia, se muestran menos satisfechos con cómo opera en la práctica (Norris, 2011, p. 140).

Las aspiraciones democráticas también pueden verse afectadas por un eventual cambio valórico de nuestra sociedad. La teoría del cambio valórico, desarrollada por Ronald Inglehart (1997) y ampliada junto a Christian Welzel (2005), sugiere que los valores son transmitidos durante la transición a la adultez y por lo tanto, si las generaciones más jóvenes son socializadas en contextos materiales y culturales distintos a los de sus padres, internalizan patrones valóricos diferentes a los de las generaciones anteriores. Así, es posible que los valores de las generaciones más jóvenes entren en conflicto con los de las generaciones antiguas, en cuanto a cómo entienden el funcionamiento de democracia, los estilos de autoridad y las prioridades de la agenda gubernamental, entre otros.

El académico Russell Dalton muestra que las generaciones con valores post-materialistas —definidos como aquellos que priorizan objetivos como la calidad de vida, la libertad individual, la libre expresión y participación, por sobre necesidades materiales básicas— tienen expectativas distintas respecto de las instituciones democráticas. Las generaciones post-materialistas son más propensas a creer en la democracia como la mejor forma de gobierno y a apoyarla como ideal, favorecer un estilo participativo de política y buscar un cambio en las élites gobernantes. Son, además, abiertamente escépticos de las autoridades sociales y políticas pues no les basta con una legitimación basada en la autoridad jerárquica sino que prefieren una legitimación basada en la inclusión (Dalton, 2000). Ello podría cambiar la forma cómo se lleva a cabo la política, aumentando las expectativas de los ciudadanos sobre sus gobiernos y ampliando los temas imperantes en la agenda —incorporando preocupación por las minorías étnicas y sexuales, medioambiente, derechos de las mujeres, etc.— lo que, a su vez, pone presión en la forma de operar de las instituciones democráticas y en cómo éstas son evaluadas.

Gráfico 4: Post-materialismo en jóvenes y población general en Chile, 1990-2011



Nota: Promedio y porcentaje de personas con puntajes mayores que tres en la escala de 12 ítems de post-materialismo, para jóvenes (hasta 29) y población general en Chile. Fuente: Encuesta Mundial de Valores 1990, 1996, 2001, 2006 y 2011.



El **Gráfico 4** ilustra el promedio de un indicador de post-materialismo, calculado a partir de las cinco olas de la World Value Survey aplicadas en Chile a la fecha, tanto para jóvenes (menores de 29 años) y el total de la población, además, de los porcentajes de jóvenes y adultos con valores post-materialistas (puntajes mayores que tres en la escala estándar de 12 ítems de estas encuestas). La figura muestra que existe una leve tendencia al alza entre 1990 y 2011, sin embargo, no se observan las diferencias generacionales tan marcadas predichas por las teorías de Inglehart, Welzel y Dalton, ya que la diferencia entre los jóvenes y el total poblacional nunca es mayor de cinco puntos. Por lo tanto, la evidencia de una tendencia de los chilenos hacia el post-materialismo — hacia un estilo más participativo en la política, con más recambio en las élites gobernantes y con preferencias por una legitimación basada en la inclusión— aún es bastante débil. Si bien esta evidencia no es definitiva, creemos que, dado que la teoría del cambio valórico sugiere cambios en el largo plazo mediante el reemplazo generacional, este modelo teórico no ofrece una explicación totalmente convincente para el caso chileno contemporáneo. Quizás sí sea un argumento relevante en el futuro, una vez transcurrido el recambio generacional.

Las generaciones post-materialistas son más propensas a creer en la democracia como la mejor forma de gobierno y a apoyarla como ideal (Dalton, 2000).

A la luz de estos argumentos, el diagnóstico de una crisis de la democracia en Chile parece exagerado. La mayoría de los ciudadanos respalda los principios de la democracia como forma de gobierno, pese a que, al mismo tiempo, evalúa mal su desempeño. Hay diferentes hipótesis que podrían explicar esta discrepancia: (1) los grandes avances en cobertura educacional en los últimos treinta años, lo que habría elevado las exigencias al funcionamiento de la democracia, más que por un cambio valórico, que apuntaría hacia una nueva forma de hacer política; (2) por cierta incapacidad de las autoridades y de las políticas públicas de cumplir con las mayores expectativas (volveremos sobre esto en las secciones 2 y 3 de este capítulo); y (3) por el tono negativo de la cobertura de



los medios de comunicación masivos de los temas públicos (como este aspecto fue discutido en extenso en el Capítulo 1, sólo mencionaremos un ejemplo aplicado a este contexto en la sección 3 de este capítulo). Apesar del acentuado declive en la percepción negativa del desempeño de la democracia, Chile no es el país con las evaluaciones de la democracia más bajas ni tampoco de las más altas —se ubica en la mitad y cerca

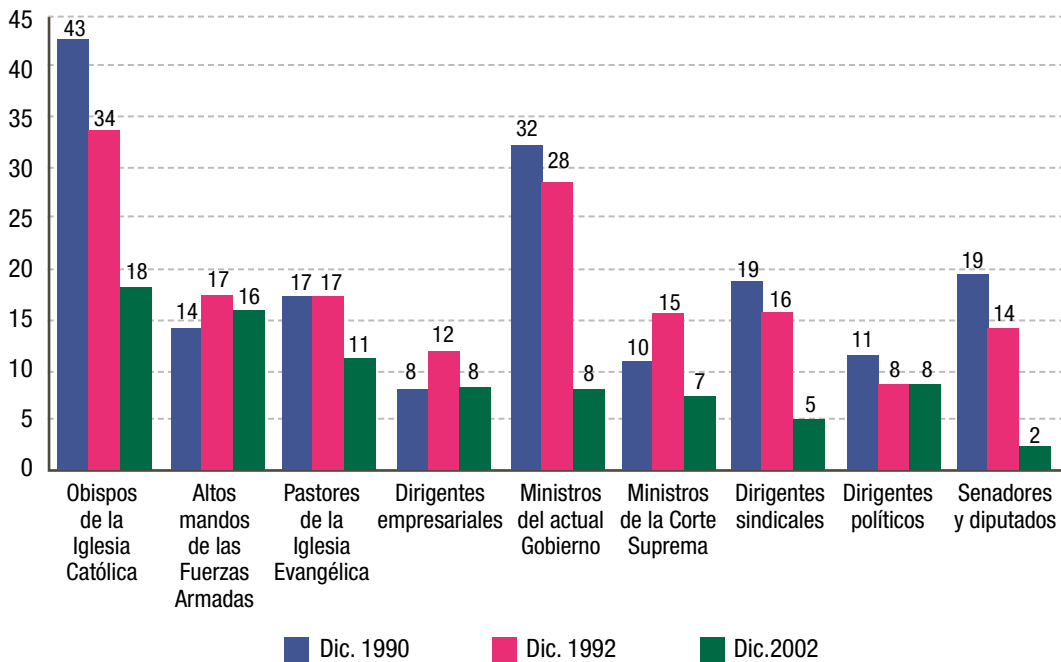
de varios países desarrollados—, además de que su déficit democrático está bajo el promedio. Así, ciudadanos más exigentes con la democracia y una algo favorable comparación internacional de la satisfacción con el funcionamiento de nuestro sistema político son signos de que aun cuando tenemos importantes desafíos por delante, los diagnósticos no deberían ser alarmistas.

2.2 ¿CRISIS DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES?

De acuerdo a los académicos Kenneth Newton y Pippa Norris, una manera de entender la confianza de los ciudadanos en el sistema gubernamental es a través del desempeño de sus instituciones, puesto que los factores asociados a rasgos de la personalidad o a condicionamientos sociales logran explicar una parte muy pequeña de este fenómeno, de acuerdo a resultados empíricos de su investigación. Bajo este enfoque, las instituciones que cuentan con buen desempeño tienen mayor probabilidad de generar confianza en los ciudadanos, y viceversa, dado que el público, en general, tiene la capacidad de reconocer si dichas instituciones están actuando adecuada o inadecuadamente y así reaccionar acordeamente. Esto conlleva, como implicancia de política pública, que los líderes políticos deberían bajar las expectativas de desempeño de ciertas instituciones (prometiendo menos) o mejorar la efectividad de dichas instituciones (entregando más) (Newton y Norris, 2000, p. 60-61).

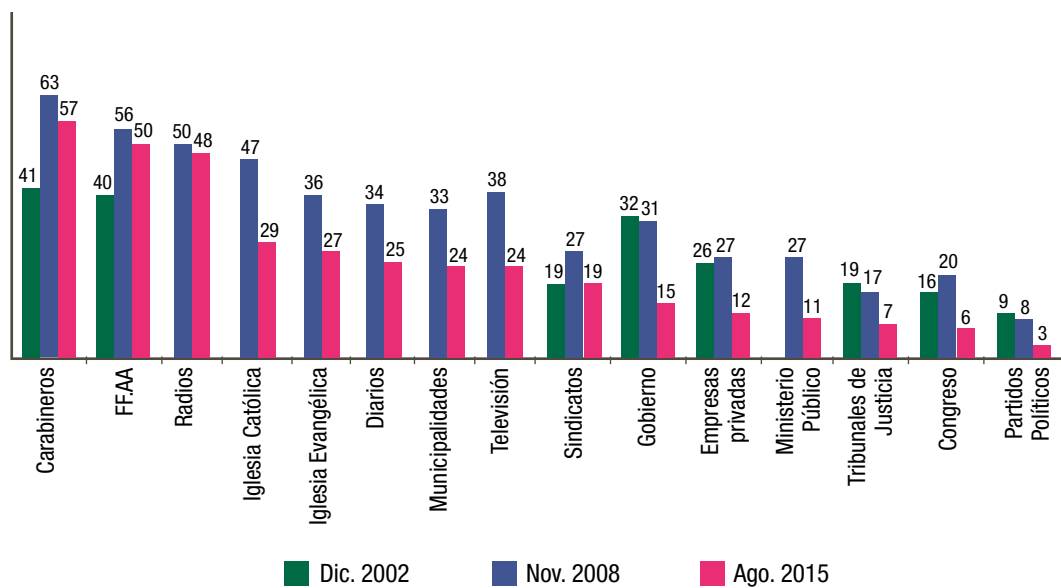
La confianza en las instituciones representativas, al igual que la evaluación del funcionamiento de la democracia, se forma a partir de la información que los ciudadanos manejan sobre ellas, los criterios de evaluación de las políticas y del gobierno, y el desempeño mismo de dichas instituciones. Por ejemplo, una alta desconfianza puede ser resultado de ciudadanos más informados sobre el desempeño del gobierno y el comportamiento de sus líderes políticos (que puede tener un acentuado tono negativo como se verá más adelante), de criterios de evaluación más exigentes (por ende, más difíciles de cumplir) y de una baja capacidad de los agentes políticos de responder a los deseos, cada vez más heterogéneos, de los ciudadanos (Putnam, Pharr y Dalton, 2000, p. 22-27). El descubrimiento de actos de corrupción de líderes políticos, también puede tener efecto sobre la confianza en las instituciones, tal como se podrá apreciar más adelante, puesto que se relaciona con los tres elementos expuestos.

Gráfico 5: Confianza en las personas representantes de instituciones, 1990-2002



Nota: Porcentaje de chilenos que expresan “Mucha confianza” en las personas representantes de las instituciones y organizaciones listadas (sólo sectores urbanos). Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Gráfico 6: Confianza en las instituciones, 2002-2015

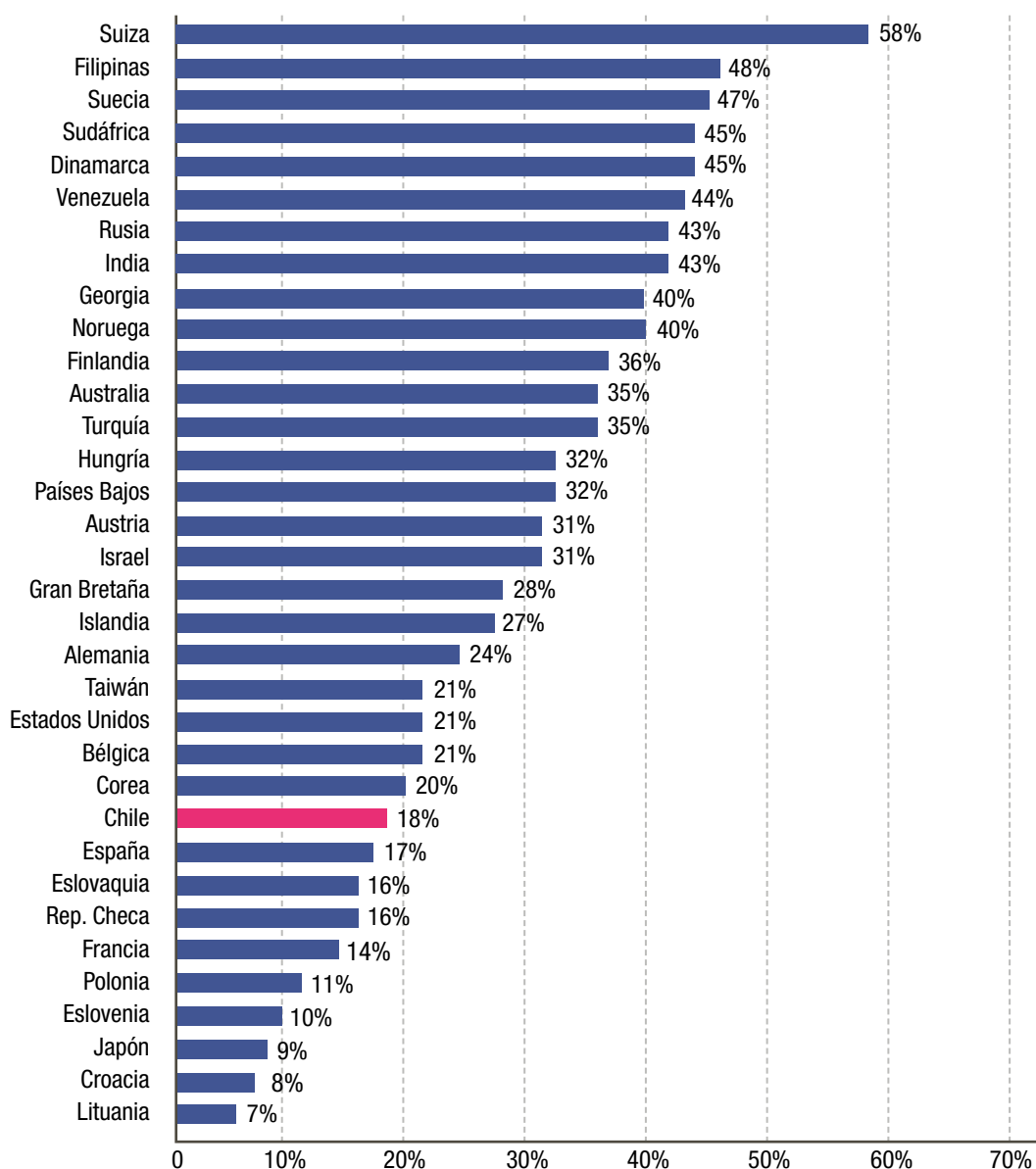


Nota: Porcentaje de chilenos que expresan “Mucha confianza” o “Bastante confianza” en cada una de las instituciones y organizaciones listadas. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Desde 1990, la encuesta CEP ha capturado la confianza en las instituciones en Chile desde dos perspectivas: confianza en las personas representantes de las instituciones, entre 1990 y 2002 (**Gráfico 5**), y confianza en las instituciones mismas, entre 2002 y 2016 (**Gráfico 6**). Sin importar la distinción conceptual, ambos grupos de mediciones revelan la misma tendencia: un declive en la confianza, tanto en las personas a cargo de las instituciones, como en estas últimas.

La caída de la confianza afecta no sólo a las instituciones políticas, también a las empresas, los distintos tipos de medios de comunicación y las iglesias. En contraste, la confianza en Carabineros y las Fuerzas Armadas sube durante los últimos trece años, no obstante exhibe una pequeña caída en el pasado reciente. Por lo tanto, la desconfianza institucional va más allá de los organismos estatales.

Gráfico 7: Confianza en la gente que está en el gobierno, 2014

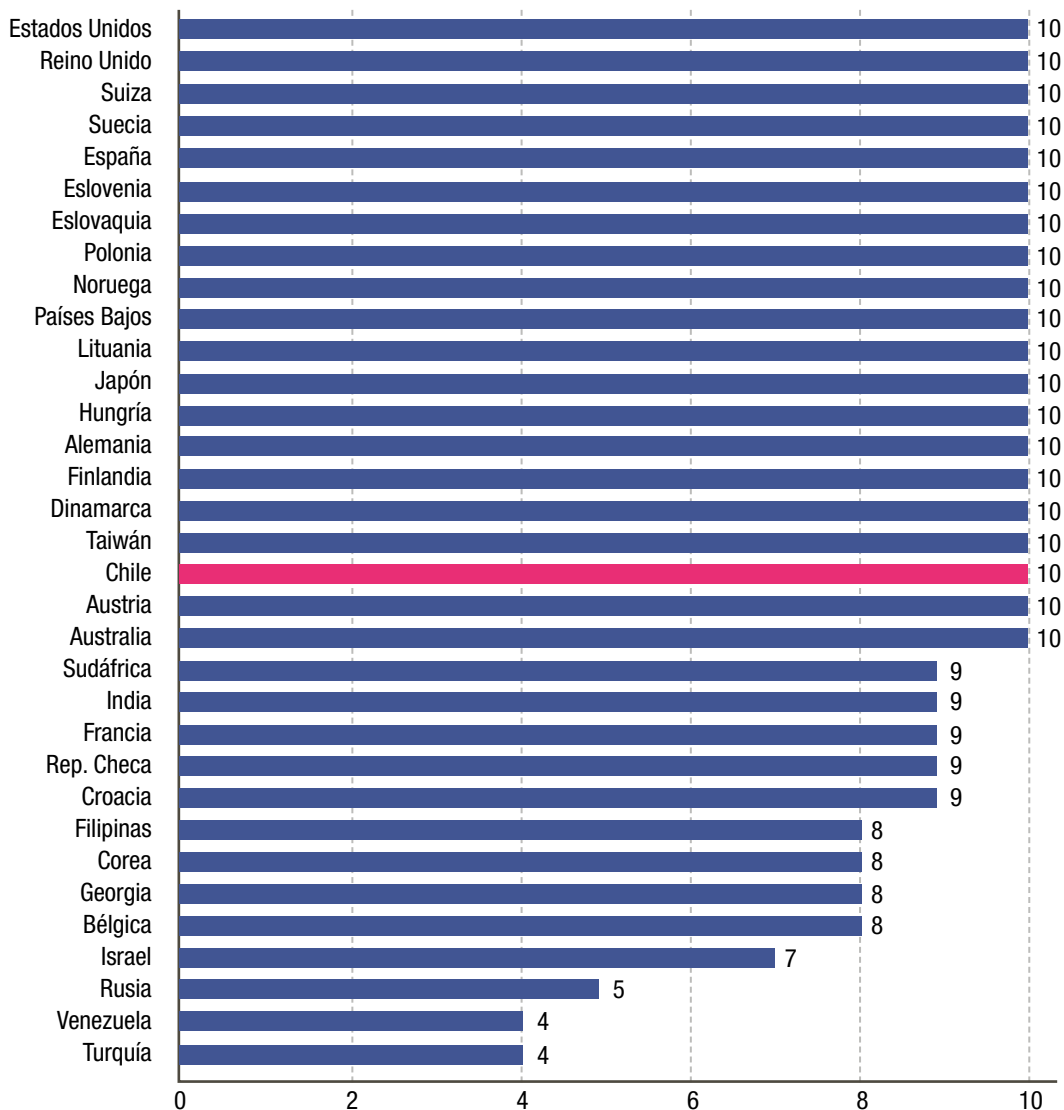


Nota: Porcentaje de encuestados que afirma estar “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” ante la afirmación “La mayor parte del tiempo podemos confiar que la gente que está en el gobierno hace lo correcto”. Fuente: Elaboración propia basada en ISSP 2014.

Ahora bien, cabe preguntarse si los niveles de desconfianza en las instituciones que observamos en Chile permiten catalogar nuestra situación actual como una de crisis institucional, tal como han señalado algunos. Una manera de examinarlo es por la vía de la comparación. Durante el 2014, ISSP indagó sobre varios aspectos relevantes de la democracia entre sus 45 países miembros. Uno de los aspectos analizados fue la confianza política. El **Gráfico 7** presenta el porcentaje de individuos, en cada uno de los países ahí listados, que dice estar de acuerdo con la afirmación “La mayor parte del tiempo

podemos confiar que la gente que está en el gobierno hace lo correcto”, una variable que captura, en parte, confianza política. Los datos muestran que apenas un 18 por ciento de los chilenos está de acuerdo con dicha aseveración, muy por debajo del 58 por ciento que sostiene lo mismo en Suiza y del 40 por ciento en Noruega, pero al mismo nivel, mayor en términos estadísticos, que Taiwán, Estados Unidos, Bélgica y Corea del Sur, cerca del 24 por ciento en Alemania y por encima del 17 por ciento en España, 15 por ciento en Francia y el nueve por ciento de Japón.

Gráfico 8: Desempeño de una democracia, 2014



Fuente: Elaboración propia basada en Polity IV Project, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2015.



Es posible que, en parte, estas diferencias puedan explicarse por los distintos regímenes políticos de cada país. Dejando eso de lado, la confianza en las autoridades públicas de Chile alcanza niveles bajos, pero superiores a los observados en Francia y España y cercano a las cifras de Estados Unidos y Alemania, todos países con un nivel de desarrollo superior al chileno y lejanos de la posibilidad de una crisis institucional. En efecto, de acuerdo a un indicador elaborado por el Polity IV Project³ –que busca medir el buen funcionamiento de una democracia–, Chile, Alemania, España y Estados Unidos obtuvieron un 10, el máximo posible, y Francia obtuvo un 9 el año 2014 (ver **Gráfico 8**).

Las cifras de Chile corresponden a noviembre de 2014, cuando aún pocos casos de financiamiento ilegal de la política habían salido a la luz. Durante el 2015, el número de políticos investigados creció, lo que, sin embargo, no afectó mayormente la confianza en las instituciones políticas porque los niveles ya eran bajísimos, de acuerdo a los datos de las encuestas CEP de ese año. Por esta razón, aunque no contamos con cifras de los otros países en el 2015, parece poco probable que Chile haya retrocedido significativamente en el ranking de confianza relativo a los países mencionados.

En resumen, a pesar de la creciente desconfianza en las instituciones, observada durante los últimos 20 años, y la baja confianza interpersonal, Chile presenta niveles de confianza política superiores a los observados en países con un nivel de desarrollo superior al nuestro, y obtiene una alta calificación en desempeño institucional. Esto no sugiere la existencia de una crisis institucional o de la democracia en ciernes, más bien, tales diagnósticos parecen exagerados. A pesar de eso, la desconfianza institucional no es positiva y es necesario tomar medidas orientadas a revertirla. La sección 3 de este capítulo contiene una discusión al respecto.

Chile presenta niveles de confianza política superiores a los observados en algunos países con un nivel de desarrollo superior al nuestro, y obtiene una alta calificación en desempeño institucional.

³ Este indicador es una escala aditiva ponderada, que varía entre cero y diez, que busca capturar tres aspectos cruciales para el buen funcionamiento de la democracia: (1) instituciones y procedimientos mediante los cuales los ciudadanos puedan expresar sus preferencias; (2) existencia de limitaciones institucionales al Poder Ejecutivo; y (3) garantías a las libertades civiles en la participación política y en la vida cotidiana en general. Se asignan valores numéricos a cada una de estas dimensiones, basándose en el funcionamiento de la democracia en cada país, luego se ponderan y suman para generar el indicador.

2.3 ¿CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES?

Otra de las supuestas crisis derivaría de la falta de legitimidad producto de un déficit de representatividad de las instituciones. Para avalar tal posición, los analistas apuntan a la escasa identificación de la ciudadanía con los partidos políticos, los bajos niveles de confianza de la población en los partidos políticos, al declive de la participación electoral —acentuado por la

entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario en 2012— y a los pocos mecanismos de democracia directa de nuestra institucionalidad actual que no estarían dando cabida a un supuesto deseo mayoritario de participar en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Revisaremos estos antecedentes brevemente.

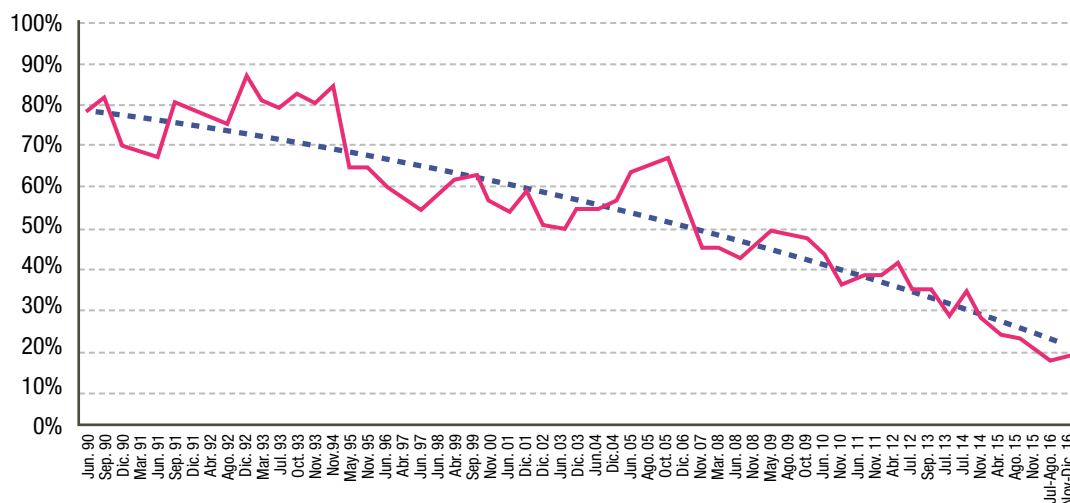
2.3.1 ¿HAY CRISIS DE LEGITIMIDAD SI HAY BAJA IDENTIFICACIÓN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

En una democracia representativa, los partidos políticos cumplen el rol de intermediación entre la sociedad civil y el Estado. En particular, los partidos se articulan en torno a una visión ideológica y doctrinaria de largo plazo, con el objeto de representar los intereses de la sociedad. Esta función de intermediación incluye la agregación y jerarquización de intereses, la orientación y comunicación de tales intereses y, por supuesto, la preparación y selección de las personas que podrían ocupar cargos en las instituciones gubernamentales. De esta forma, en una democracia representativa,

la participación de la ciudadanía en la institucionalidad y su representación de intereses ocurre, preferentemente, a través de los partidos políticos.

La identificación de la ciudadanía con los partidos políticos ha caído persistentemente, desde los altos niveles alcanzados tras el retorno a la democracia: del 80 por ciento que se identificaba con un partido en septiembre de 1990 a un paupérrimo 19 por ciento en noviembre-diciembre 2016, según se ilustra en el **Gráfico 9**.

Gráfico 9: Porcentaje de chilenos que se identifican con un partido político, 1990-2016

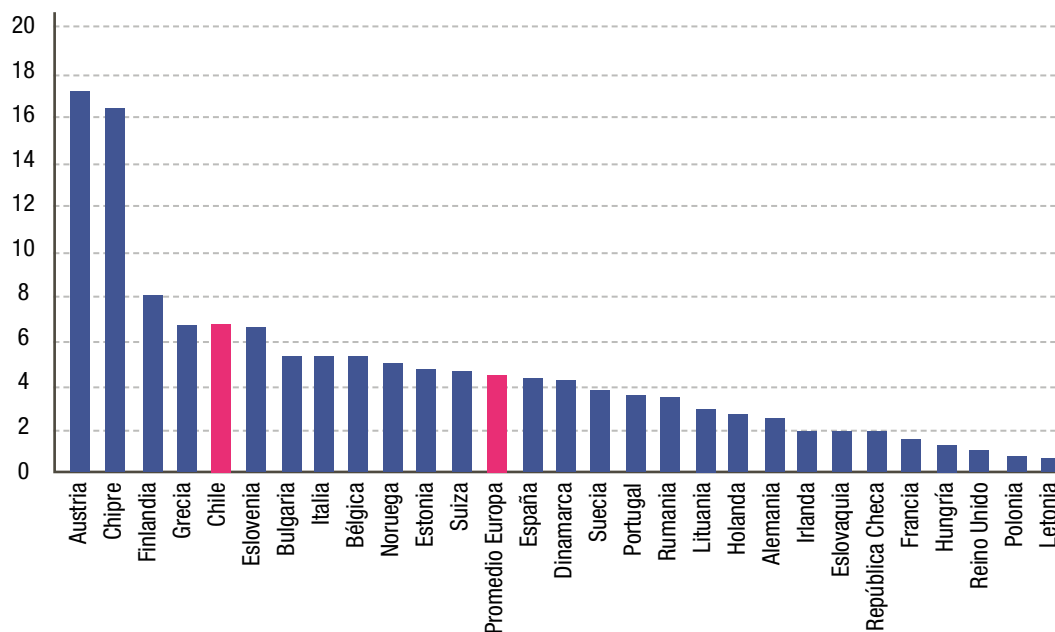


Nota: Porcentaje de chilenos que menciona el nombre de algún partido ante la pregunta “Ahora, de los siguientes partidos políticos que se presentan en esta tarjeta, ¿con cuál de ellos se identifica más o simpatiza más Ud.?” Si el nombre del partido de simpatía no está en la tarjeta, se registra como “Otros” y se anota el nombre. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Sin embargo, este fenómeno parece no estar circunscrito sólo a Chile. En las democracias europeas, incluso aquellas consolidadas y en las que se observan mejores niveles de satisfacción con su desempeño, los partidos políticos también han ido perdiendo adhesión. Una forma de analizar este tema en perspectiva comparada es observar el número de militantes —grupo de ciudadanos identificados y comprometidos con algún partido— de varios países (ver **Gráfico 11**) y su evolución en el tiempo. En 27 democracias europeas, el promedio de militantes como porcentaje de su padrón electoral se ubicaba en 4,7 por ciento durante la década pasada,

según se ilustra en el **Gráfico 10**. En Chile, tal cifra llega a 6,5 por ciento⁴, por encima del promedio de Europa. Más interesante aún es que, como muestra el **Gráfico 11**, en la gran mayoría de los países, incluyendo los nórdicos, se evidencia una pérdida de militantes, que en promedio llega a los diez puntos porcentuales respecto del número existente a comienzos del nuevo siglo. Así, incluso en las democracias europeas consolidadas y en las que se observan los más altos niveles de satisfacción con su desempeño, los partidos políticos también han ido perdiendo adhesión.

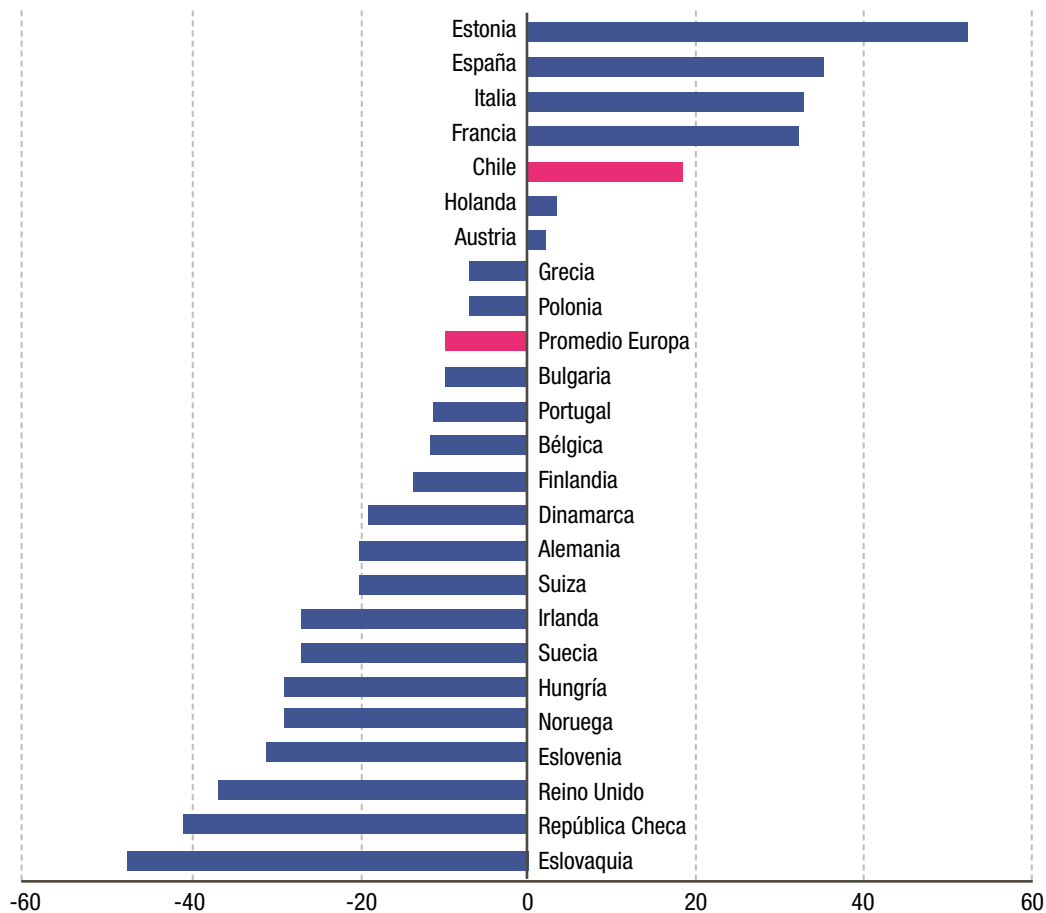
Gráfico 10: Razón de militantes de partidos por número de electores (%), años recientes



Nota: La cifra de Letonia es del año 2004, el resto de los países de Europa entre 2007 y 2009 y Chile 2013. Fuente: van Biezen, Mair y Poguntke (2012).

⁴ Las cifras de militantes son anteriores al proceso de reinscripción que, al momento de impresión de este Informe, todavía no concluye.

Gráfico 11: Cambio porcentual en el número de militantes de partidos en una década, años recientes

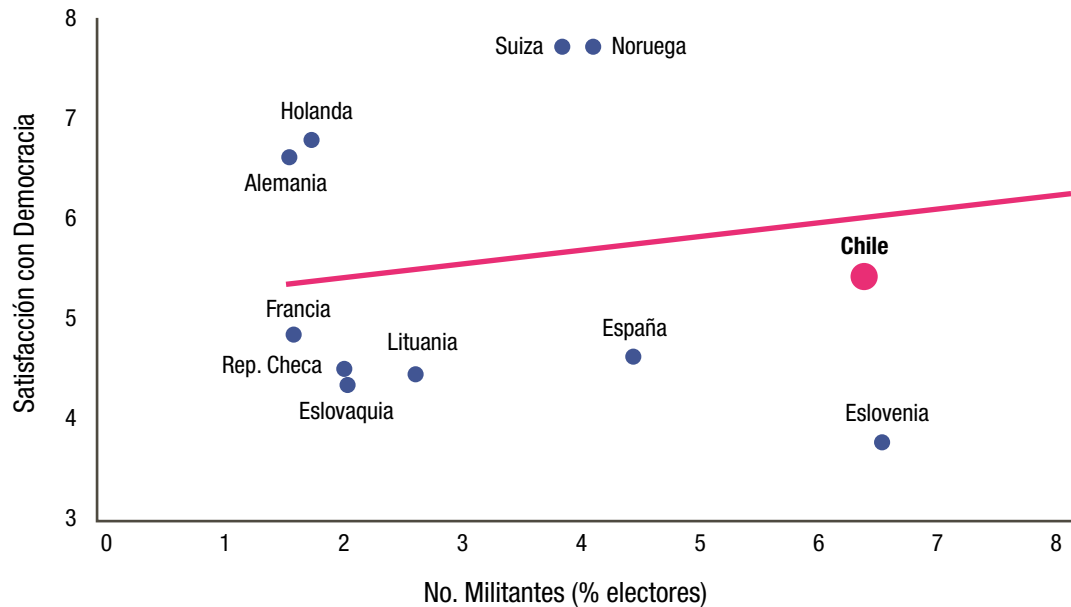


Nota: Cambio porcentual en el número de militantes (por ciento) entre finales de la década de los 90 y finales de la década del 2000 (años variables) para los países europeos. Cambio porcentual entre 2000 y 2009 para Chile. Fuente: van Biezen, Mair y Poguntke (2012).

Para que la identificación partidaria sea relevante como explicación de la pérdida de legitimidad de las instituciones, ésta debería estar relacionada con algún indicador de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. El **Gráfico 12** ilustra la asociación existente en los datos entre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia y el número de militantes en varios países

europeos —democracias avanzadas y otras más recientes— y Chile. La figura no exhibe una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables. Esto significa que no parece que la identificación partidaria, capturada a través del número de militantes, sea relevante para explicar la disconformidad con la democracia.

Gráfico 12: Relación entre satisfacción con la democracia y el ratio de militantes de partidos por número de electores (%), años recientes



Nota: Correlación entre satisfacción con la democracia (promedio por país), año 2014 y el ratio de militantes de partidos por número de electores registrados en el padrón electoral (por ciento), Europa y Chile (la cifra de Letonia es del año 2004, el resto de los países de Europa entre 2007 y 2009 y Chile 2013). Fuente: Elaboración propia basada en ISSP (2014) y van Biezen, Mair y Poguntke (2012), respectivamente.

Si bien es cierto, Chile presenta algunos problemas de registro en los padrones de militantes que datan de mucho tiempo —en proceso de corrección gracias a la reinscripción de militantes—, la cantidad de éstos está creciendo paulatinamente como consecuencia del surgimiento de nuevos partidos, lo que a su vez se debe a los cambios de la regulación que facilitan su creación. Sin embargo, como la cantidad de militantes no tiene relación con la evaluación del desempeño de una democracia —al igual que su variación en la última década—, parece improbable que exista una crisis de legitimidad asociada a la baja adhesión a los partidos.

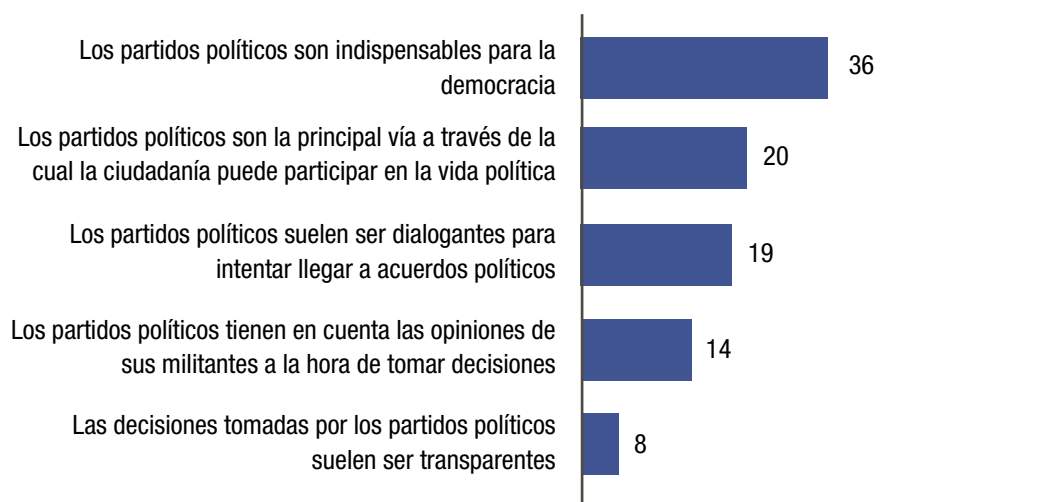
Apenas un 36 por ciento considera que los partidos políticos son indispensables para la democracia y un 20 por ciento los ve como la principal vía de participación en la vida política.

2.3.2 ¿HAY CRISIS DE LEGITIMIDAD SI HAY MUCHA DESCONFIANZA CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

La confianza de los chilenos en los partidos políticos en Chile se encuentran en su nivel más bajo desde que contamos con datos: un cuatro por ciento confiaba en los partidos políticos, según la encuesta CEP de noviembre-diciembre 2016 (ver **Gráfico 6**), cifra que ascendía a más del doble en 2002

(ver **Gráfico 5**). ¿Cómo se podría comprender este retroceso? Apelando a los factores que podrían configurar esta percepción, es decir, a la información que los ciudadanos manejan sobre los partidos, a los criterios de evaluación de su desempeño y a su funcionamiento.

Gráfico 13: Percepciones sobre partidos políticos, 2015

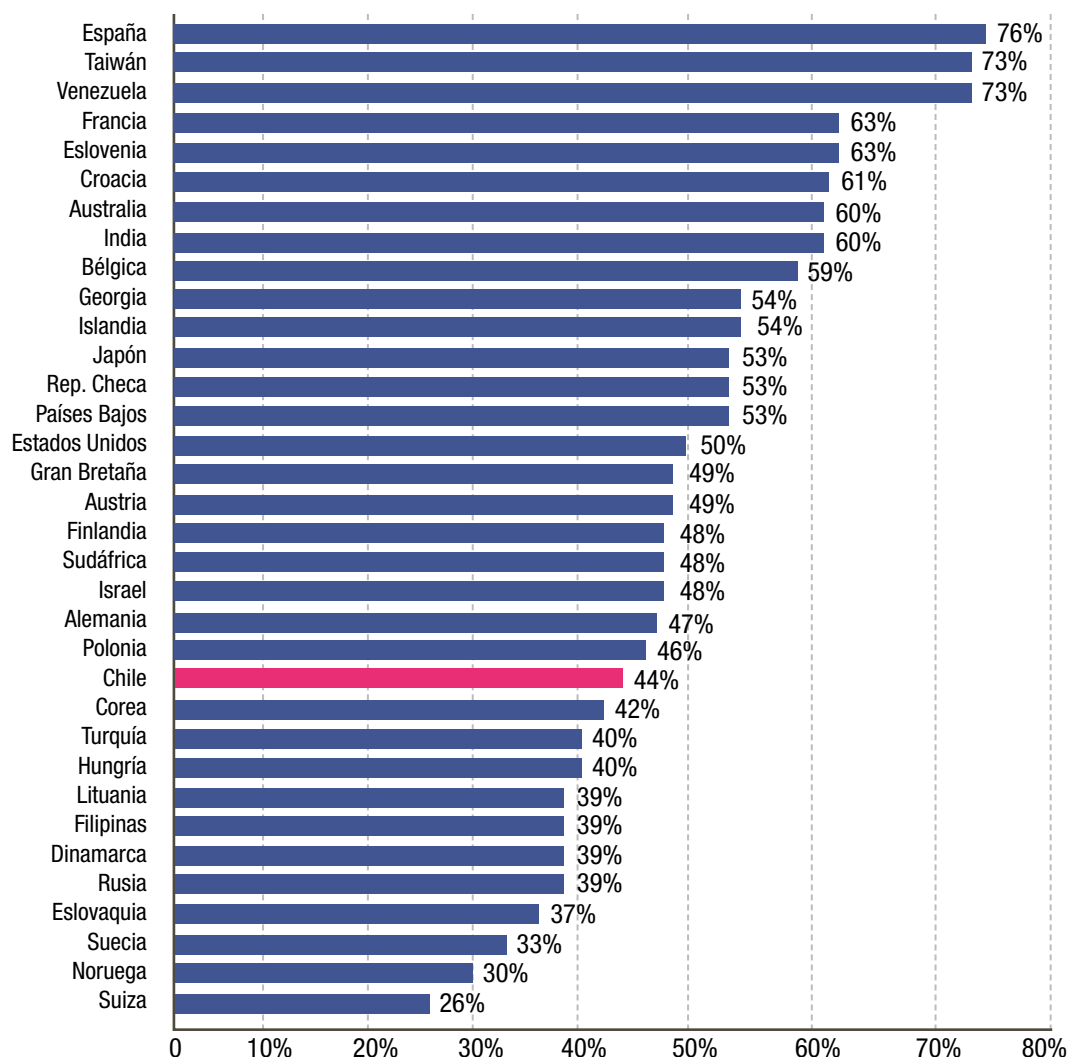


Nota: Porcentaje de chilenos que afirma estar “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” con las afirmaciones enunciadas respecto a los partidos políticos chilenos. Fuente: Encuesta CEP, abril 2015.

El **Gráfico 13** ilustra la percepción de los chilenos sobre el desempeño de los partidos políticos, de acuerdo a datos de la encuesta CEP de abril 2015. Apenas un 36 por ciento considera que los partidos políticos son indispensables para la democracia y un 20 por ciento los ve como la principal vía de participación en la vida política. A esto se suma que un 19 por ciento cree que son dialogantes y proclives a llegar a acuerdos y un ocho por ciento sostiene que los partidos toman decisiones transparentemente. Importante para el argumento de este capítulo es que sólo un 14 por ciento piensa que los partidos políticos consideran las opiniones de sus

militantes a la hora de tomar sus decisiones, lo que podría ser signo de que los partidos no están representando adecuadamente los intereses de la ciudadanía —su principal función— y por eso, algunos analistas hablan de la crisis de legitimidad. Estas malas percepciones tienen su raíz en sus problemas de funcionamiento —se percibe falta de preocupación por lograr soluciones con un impacto concreto, positivo y personal en la vida cotidiana de los chilenos— en los criterios que los chilenos emplean para evaluarlos —cualesquiera que sean éstos— y en la información disponible de su desempeño, la cual es principalmente negativa.

Gráfico 14: ¿Los partidos políticos no le dan al votante una opción real entre políticas públicas alternativas?, 2014



Nota: Porcentaje de personas que afirma estar “Muy de acuerdo” o “De acuerdo” con la afirmación “Los partidos políticos no le dan al votante una opción real entre políticas públicas alternativas”. El porcentaje se calculó excluyendo a quienes no sabían o no respondieron la pregunta. Fuente: Elaboración propia basada en ISSP 2014.

Las percepciones negativas sobre los partidos políticos, ¿ocurren solamente en Chile? El **Gráfico 14** ilustra una dimensión del desempeño de los partidos —la posibilidad de ofrecer diferentes políticas públicas a los votantes— para una serie de países, pertenecientes a ISSP, en 2014. La figura muestra el porcentaje de encuestados que está de acuerdo con que los partidos no ofrecen alternativas de políticas públicas, por lo tanto, cifras bajas representan un mejor desempeño de los partidos. En Chile, un 44 por ciento de la población dice estar de acuerdo con que los partidos políticos no le dan al votante una opción real entre

políticas públicas. En Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Finlandia y Australia, este porcentaje es todavía más alto. En otras palabras, la percepción de que los partidos no funcionan bien en esta dimensión es más alta que en Chile, a pesar de que sus niveles de satisfacción con la democracia son superiores a los observados en nuestro país. En contraste, la percepción de mal funcionamiento de los partidos en este aspecto en Francia y España es mayoritaria, lo que puede estar asociado a la relativa insatisfacción con la democracia —por cierto, mayor que la observada en Chile.



Pareciera ser que las opiniones negativas acerca del funcionamiento de los partidos pueden convivir con satisfacción o insatisfacción con la democracia de un país. Bajo la perspectiva de que el desempeño está relacionado con la confianza, entonces es posible que la desconfianza en los partidos

pueda coexistir con evaluaciones positivas acerca de cómo funciona el sistema político. Ello sugiere que la baja confianza en los partidos no puede ser por sí sola causante de la insatisfacción con la democracia, menos de una crisis de legitimidad.

2.3.3 ¿HAY CRISIS DE LEGITIMIDAD SI HAY BAJA PARTICIPACIÓN ELECTORAL?

El declive de la participación electoral, interpretada como una manifestación del descontento con el sistema político, es otro de los argumentos dados para sostener la existencia de la crisis institucional en Chile. Esta justificación es similar a la utilizada, por otros analistas hacia finales de los noventas, al interpretar el voto blanco o nulo y la baja inscripción de jóvenes en los registros electorales como señales de protesta contra el sistema político y económico, en el contexto de un sistema electoral con inscripción voluntaria y voto obligatorio. Lo cierto es que la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática y voto voluntario en 2012 sólo hizo evidente la tendencia a la baja de los votantes como proporción de la población en edad de votar, que antes se escondía detrás de una participación calculada sobre el total de inscritos.

¿Se podría atribuir pérdida de legitimidad por la baja participación en las elecciones? Probablemente no, por varias razones. Primero, ¿es baja la participación electoral en Chile? En la elección municipal de 2016 votó un 35 por ciento de los inscritos. ¿Cómo se compara esto con las elecciones locales en otros países que tienen voto voluntario? En Estados Unidos, por ejemplo, las elecciones

de alcalde han registrado participaciones muy bajas, sobre todo cuando éstas ocurren en años en que no hay otras elecciones (estatales o federales) en simultáneo. Algunos datos que reflejan este comportamiento: la participación electoral promedio de las 144 ciudades más grandes del país fue 20,9 por ciento en 2011, una caída de 5,7 puntos porcentuales respecto de 2001, pero un alza de 2,6 puntos porcentuales respecto de 2009, todos años donde no hubo otras elecciones simultáneamente. Una investigación reveló que la participación en elecciones locales sería 18,5 puntos más alta si estas elecciones coincidieran con las presidenciales y 8,7 puntos mayor si coincidiera con las *mid-term elections* (ver Holbrook y Weinschenk, 2014). En Inglaterra, en tanto, ocurrió algo similar en el pasado reciente: la participación en las elecciones locales en 2016, año que no coincidió con elecciones generales, fue un 33,7 por ciento, mientras que el 2015, año en que sí hubo coincidencia, la participación fue de 64,6 por ciento. Así, una participación electoral de 35 por ciento en las elecciones municipales está en línea con la participación observada en democracias liberales antiguas, con voto voluntario y en que las elecciones locales no coinciden con elecciones de otras autoridades, estatales o federales.



**La reforma de inscripción
automática y voto
voluntario disminuyó
el sesgo etario en las
elecciones presidenciales
y no hay evidencia
concluyente de que haya
generado sesgo de clase.**

Por otra parte, ¿qué ocurre con la participación en los países de nuestra región? La mayoría tiene voto obligatorio, por lo tanto, la comparación no resulta apropiada, salvo con Colombia que tiene voto voluntario. En 2015, se realizaron elecciones locales en ese país, cuya participación fue de 59,3 por ciento, mucho más alta que el 35 por ciento de Chile, sin embargo, al mismo tiempo que se votaban los alcaldes, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales, también se elegían gobernadores regionales y los diputados de las Asambleas Departamentales. Por lo tanto, la comparación no resulta completamente adecuada. Más aún, a menudo se menciona que la baja participación en Colombia se

ha mantenido constante, en contraste al descenso observado en Chile. Sin embargo, Colombia lleva mucho más tiempo que Chile con un sistema electoral con voto voluntario, por lo tanto, el ajuste en participación electoral que está atravesando nuestro país ya se completó en el caso colombiano.

Segundo, la reforma que estableció en Chile la inscripción automática y el voto voluntario llevó a las urnas a poco más de 1,3 millones de personas, quienes sufragaron por primera vez por un presidente en noviembre 2013. Este grupo estuvo compuesto principalmente por hombres y mujeres entre 18 y 34 años. Al mismo tiempo, más de 2,6 millones de personas que votaban antes de la reforma, no lo hicieron en la primera vuelta de 2013, principalmente, individuos con edades entre 40 y 55 años. Esta caída en el sesgo etario, respecto del padrón antiguo, constituye una mejora importante a la representatividad de la democracia chilena (ver Cox y González, 2016a).

Se ha dicho en repetidas ocasiones que la reforma de inscripción automática y voto voluntario habría generado sesgo de clase⁵, esto es, la idea de que las personas más acomodadas tienen una propensión mayor a participar en las elecciones. Si así fuera, entonces, los intereses de los individuos

⁵ Para un resumen de la literatura nacional sobre el tema, ver Cox y González (2016b).

con más recursos se verían razonablemente representados en el sistema político, en desmedro de aquellos que no votaron, en este caso, el grupo de menos recursos. Claramente, ello perjudica la representatividad. Sin embargo, una lectura cuidadosa de los estudios que se han realizado para Chile, con distintos datos y metodologías, no arroja evidencia concluyente de la presencia de sesgo de clase de la participación electoral, posterior a la reforma (ver Cox y González, 2016b). Por lo tanto, no es posible afirmar que esta reforma, a través de sus efectos en la participación electoral, haya empeorado sustantivamente la representatividad de nuestra democracia.

En resumen, una comparación apropiada de la participación electoral no arroja que ésta haya sido particularmente baja en Chile. Más aún, la reforma de inscripción automática y voto voluntario disminuyó el sesgo etario en las elecciones presidenciales y no hay evidencia concluyente de que haya generado sesgo de clase, por lo tanto, la representatividad no parece haber sufrido un enorme deterioro para calificar la situación actual de crisis. No obstante, el sistema político debería atender las causas de la abstención electoral y adoptar reformas cuyo objetivo sea reducir los costos de acudir a las urnas.

2.3.4 ¿HAY CRISIS DE LEGITIMIDAD DADOS LOS POCOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA?

Según algunos analistas, la ausencia de más mecanismos de democracia directa para canalizar un supuesto deseo mayoritario de los ciudadanos de incidir directamente en la toma de decisiones —más allá de instancias específicas de participación ciudadana⁶— podría estar generando una crisis de legitimidad.

En esta línea, el Informe de Desarrollo Humano 2015 del PNUD sostiene que existe un rechazo a aquellos mecanismos que no incluyen a los ciudadanos en la toma de decisiones y una mayor demanda por participación directa y por horizontalidad en la solución de los problemas. La importancia del involucramiento de los ciudadanos en lo político se debe, según el PNUD, a que en tiempos de politización como el actual, se requiere que no sólo las instituciones y los actores sociales definan los procesos y resultados, sino que “los individuos sean sujetos activos en la construcción de sus propios proyectos y de los soportes sociales en que aquellos se sustentan” (PNUD, 2015, p. 137).

Ahora, ¿existe tal demanda ciudadana por democracia directa?

La encuesta CEP de noviembre 2014 reveló que un 53 por ciento de las personas está de acuerdo con que los plebiscitos son una buena forma de decidir asuntos políticos importantes. La misma pregunta fue considerada en el estudio de Auditoría a la Democracia 2016 del PNUD, el cual arrojó un 71 por ciento de acuerdo con tal afirmación. Visto de esa manera, pareciera que existe una demanda por mayor participación en la toma de decisiones, que la institucionalidad actual no ha considerado, lo que podría derivar en una pérdida de legitimidad.

Un ejemplo que demuestra que el respaldo a mecanismos de participación inclusivos no necesariamente se traduce en una alta participación efectiva es el proceso constituyente.

⁶ Por ejemplo, cabe recordar que la Constitución permite a las municipalidades someter ciertas materias a consultas no vinculantes o a plebiscitos (A. 118).

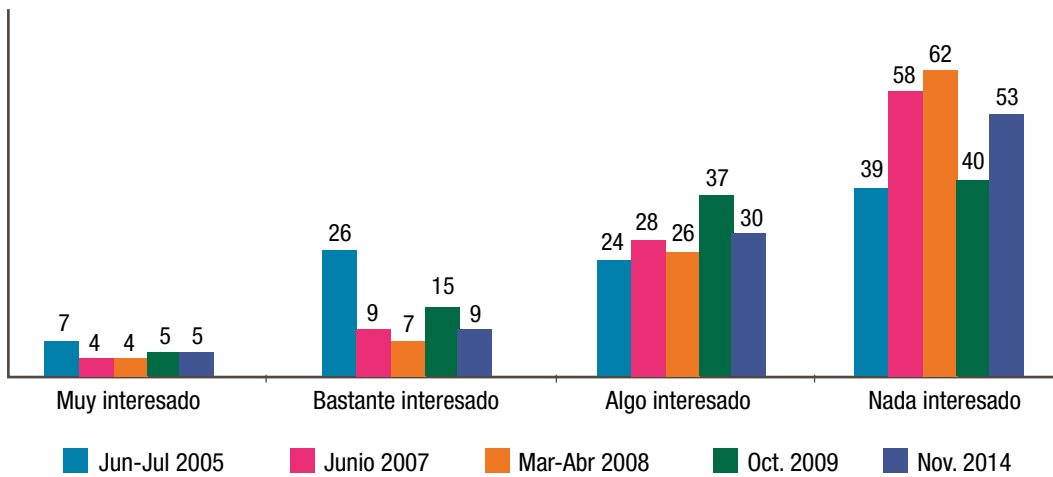
A pesar de que las manifestaciones han sido especialmente notorias desde el 2011, generando la percepción de que muchos compatriotas están involucrados en ellas, lo cierto es que, aproximadamente, el porcentaje de chilenos que participan en ellas no ha variado respecto de la última década.

Sin embargo, la posibilidad de democracia directa no necesariamente se traduciría en mayor participación real. De acuerdo a la encuesta CEP de noviembre 2015, en una escala de uno a siete donde uno significa “nada dispuesto” y siete significa “muy dispuesto”, si en el país surgieran mayores oportunidades de influir en las decisiones públicas a través del voto, un 45 por ciento de los chilenos se ubicaría entre cinco y siete, es decir, estaría dispuesto a votar varias veces, mientras que un 31 por ciento se ubica entre uno y tres, esto es, no estaría dispuesto a participar de esas votaciones. Además, es sabido que los encuestados tienden a sobre-reportar su participación en elecciones, por lo que es muy probable que el 45 por ciento que declara tener la intención de participar en plebiscitos sea la cota superior de la participación efectiva y que las cifras sean más bajas en la práctica. Ahora bien, estas respuestas están influenciadas por los (pocos) mecanismos que existen en la actualidad y quizás podrían ser más altas si éstos crecieran en número. No obstante, el análisis que sigue le resta plausibilidad a esa hipótesis.

Un ejemplo que demuestra que el respaldo a mecanismos de participación inclusivos no necesariamente se traduce en una alta participación efectiva es el proceso constituyente. En la Encuesta Auditoría a la Democracia 2016, un 56 por ciento señala que le parece que es muy importante cambiar la Constitución, siete puntos más que en 2013. Sin embargo, este apoyo no parece haber generado un alto nivel de participación en esta fase del proceso constituyente. En efecto, en los Encuentros Locales Autoconvocados participaron 100.099 personas, tanto a nivel nacional como en los encuentros en el extranjero. En tanto, en los cabildos provinciales participaron 12.852 personas y en los cabildos regionales 8.621 personas. Es posible que la participación no fuese tan alta porque: (1) se requería un par de horas de dedicación y organización, cosa que no ocurriría en un plebiscito en que sólo hay que ir a votar; (2) quizás, lo que estaba en discusión no era tan importante, como sí podría serlo en un plebiscito; y (3) se trató de un ejercicio único, difícil de comparar. Aun tomando en cuenta todas estas consideraciones, la participación efectiva en el proceso constituyente no se condice con el supuesto deseo masivo de participación en la toma de decisiones de la mayoría de los chilenos.

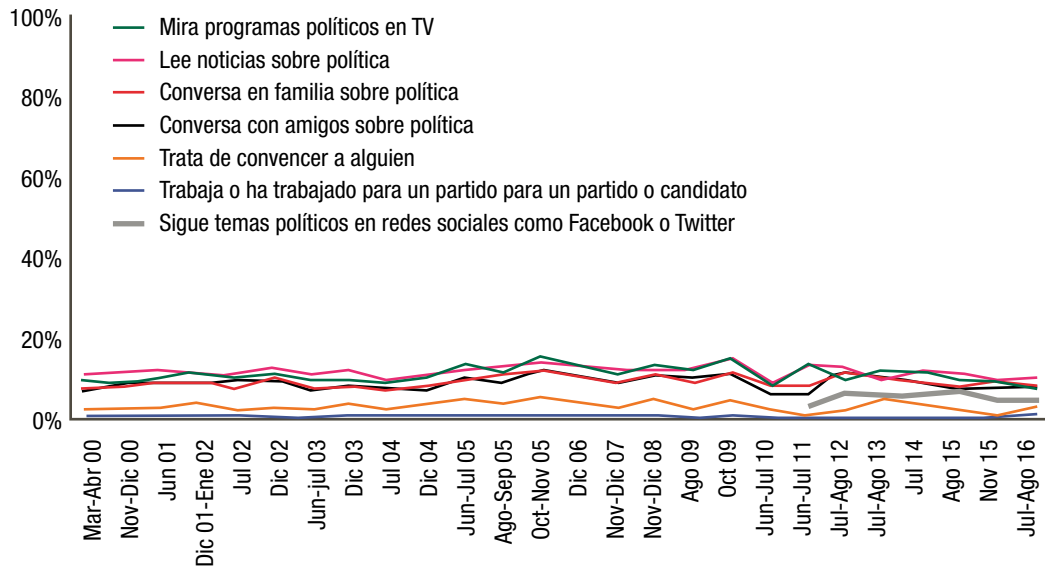
Además de la posible baja participación en mecanismos de democracia directa también hay desinterés en la política. El **Gráfico 15** exhibe la trayectoria del interés que los chilenos manifiestan en la política desde el año 2005 al 2014, según datos de las encuestas CEP. En 2014, un cinco por ciento de los chilenos afirmó estar muy interesado en la política, cifra que no exhibe grandes variaciones en el lapso observado. Por su parte, el desinterés absoluto llega a 53 por ciento, cifra que experimenta algunas fluctuaciones, principalmente en periodos electorales, en los que el interés crece moderadamente, pero no con suficiente persistencia.

Gráfico 15: Interés en la política 2005-2014



Nota: Respuestas a la pregunta “¿Cuán interesado diría usted que está personalmente en la política?”. El gráfico no tiene NS/NC. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Gráfico 16: Frecuencia de realización de actividades políticas, 2000-2016

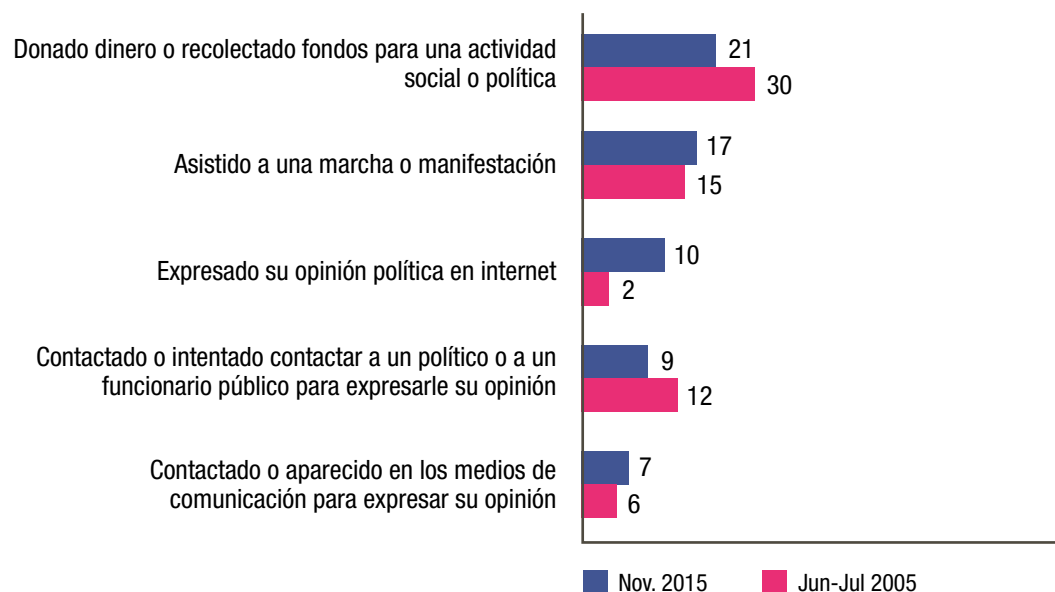


Nota: Porcentaje de personas que declara realizar frecuentemente las actividades respectivas. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

En la misma línea, el **Gráfico 16** ilustra el porcentaje de la población que realiza actividades cotidianas vinculadas a la política con frecuencia y que no requieren mayor compromiso, tales como mirar programas políticos en televisión, conversar en familia o con amigos sobre política y leer noticias sobre el tema. La figura muestra que en torno al diez por ciento de los chilenos realiza tales actividades frecuentemente, proporción que se ha mantenido más o menos estable desde el año 2000. Más aún, la proporción de personas que las practica con frecuencia no alcanza ni siquiera el 20 por ciento en tiempos de elecciones, momento en que podría ser más relevante.

Tal como se mencionaba anteriormente, quienes defienden la tesis de la demanda por mayor participación en la toma de decisiones sostienen que el desinterés por la política podría surgir por la inexistencia de mecanismos en la institucionalidad actual que incentiven la participación y representen el interés de la población. Si existieran tales mecanismos, entonces sí habría interés. Si la premisa fuera cierta, entonces los chilenos participarían a través de otros mecanismos, por ejemplo, asistiendo a manifestaciones masivas o expresando una opinión política en los medios tradicionales o en foros de internet. Sin embargo, la participación a través de estos otros canales también es baja, y no ha subido en el pasado reciente, lo que pone en tela de juicio esta defensa.

Gráfico 17: Realización de actividades sociales y políticas, 2005-2015



Nota: Porcentaje de personas que afirman haber realizado las formas de acción social o política listadas en el último año o en el pasado distante. Fuente: CEP Encuestas Nacionales.

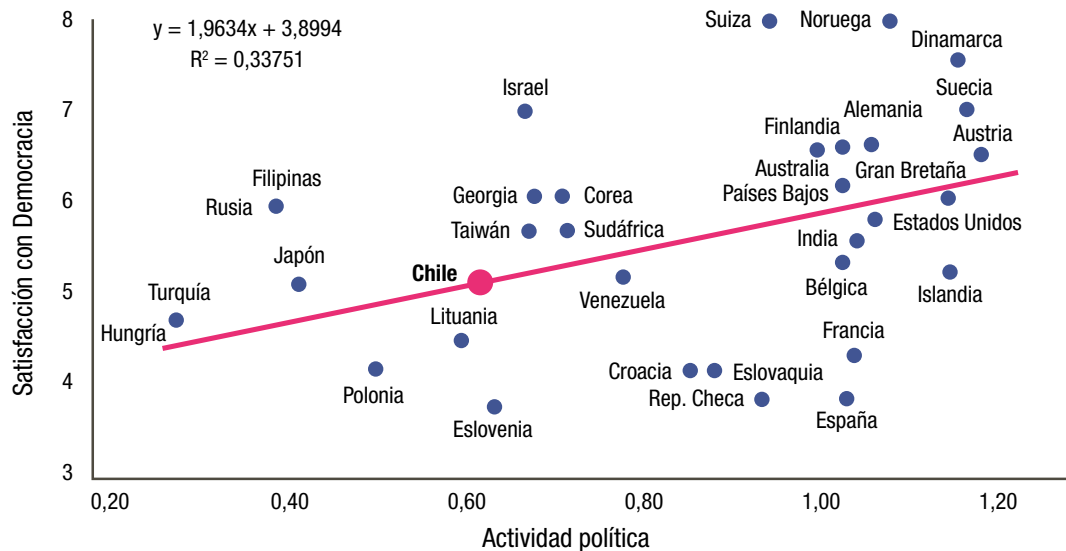


El **Gráfico 17** presenta algunas formas de acción social o política que la gente puede realizar y el porcentaje de chilenos que la ha realizado en el último año o en el pasado distante, de acuerdo a datos de las encuestas CEP. Las cifras muestran que los niveles de participación en diversas acciones políticas son bajos y no han registrado un crecimiento significativo en la última década, salvo la expresión de opiniones políticas en internet, las que han aumentado, probablemente, por la mayor disponibilidad de internet, más que por un genuino crecimiento de la politización. El mayor nivel de participación en 2015 ocurrió por medio de la donación de dinero o recolección de fondos para una actividad política (21 por ciento), la que cayó nueve puntos porcentuales respecto del año 2005, posiblemente debido a que el 2005 fue un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, en contraste al 2015, y por los escándalos de financiamiento político y corrupción que la opinión pública conoció entre 2014 y 2015. Por su parte, la participación en marchas o manifestaciones llegó a 17 por ciento en 2015, sin variaciones significativas, en términos estadísticos, respecto de lo registrado en 2005. Esto significa que, a pesar de que las manifestaciones han sido especialmente notorias desde el 2011, generando la percepción de que muchos compatriotas están involucrados en ellas, lo cierto es que, aproximadamente, el porcentaje de chilenos que participan en ellas no ha variado respecto de la última década.

En suma, hay poco entusiasmo por la política en Chile. Entonces, ¿de dónde proviene la teoría acerca de este deseo de participar en la toma de decisiones del gobierno, a nivel nacional y regional, que no se ve en las cifras de opinión públicas? Creemos que surge de la proliferación de manifestaciones sociales desde el 2011 en adelante, superiores en número a lo observado diez años atrás. Resulta evidente que estos movimientos están interesados en incidir sobre la agenda del gobierno y que, por esa razón, buscan participar del diseño de reformas. Sin embargo, como la cantidad de chilenos involucrados en acciones de protesta es hoy aproximadamente la misma que hace una década, no parece evidente que la ciudadanía quiera participar masivamente de las decisiones que la afectan.

El descontento que exhiben los manifestantes no es con la democracia como sistema político, sino con cómo funciona en ciertos ámbitos (Norris 2011, 224-225).

Gráfico 18: Relación entre un índice de actividad política y satisfacción con la democracia, 2014.



Nota: Correlación entre un índice de actividad política, que varía entre cero (nada de participación) y cuatro (muchísima participación), y que reúne la participación en el último año o en el pasado distante de las siguientes actividades: Contactado o aparecido en los medios de comunicación para expresar su opinión. Contactado o intentado contactar a un político o a un funcionario público para expresarle su opinión. Expresado su opinión política en Internet. Asistido a una marcha o manifestación. Donado dinero o recolectado fondos para una actividad social o política; y el promedio, por país, de respuestas a la pregunta: “En general, en una escala de cero a diez donde cero es muy mal y diez es muy bien. ¿Qué tan bien funciona la democracia en [país] hoy?”. Fuente: Elaboración propia basada en ISSP 2014.

La ausencia de más mecanismos de democracia directa en nuestra institucionalidad no parece estar generando una crisis.

Ahora bien, participar en acciones de protesta, ¿es signo de una crisis de legitimidad? No, por el contrario. Según Norris, mientras más adhiera una persona a los valores democráticos, más probable es que participe en marchas y en actividades de acción política. En esta perspectiva, las marchas pueden ser señal de un robustecimiento de la democracia, en vez de la existencia de una crisis. Más aún, el descontento que exhiben los manifestantes no es con la democracia como sistema político, sino con cómo funciona en ciertos ámbitos. Incluso más, muchas veces se observan fuertes protestas y marchas en países con extensa experiencia democrática porque es ahí donde existen derechos de asociación y reunión bien establecidos (Norris, 2011, p. 224-225).

El **Gráfico 18** exhibe la correlación que existe entre un índice de actividad política, que agrupa la participación en las actividades enunciadas en el **Gráfico 17**, y la satisfacción con la democracia promedio de cada país. Es posible apreciar que la relación es positiva y significativa, inclusive a nivel individual: mientras más personas en un país hayan realizado actividades como asistir a una manifestación, donar dinero a una causa política, opinar en medios de comunicación social y masivos, por nombrar algunas, la satisfacción con la democracia promedio es mayor. A la luz de esta evidencia, las críticas sobre la institucionalidad chilena actual, generadas a partir de las marchas y movimientos ciudadanos que se llevaron a cabo en los últimos años, parecen exageradas.

Todo esto, ¿significa entonces que no hay que avanzar en la implementación de más mecanismos de democracia directa? No necesariamente. La experiencia de mecanismos de democracia directa considerados exitosos (como en Suiza e Italia) ilustra que éstos no debiesen ser

concebidos como una alternativa a la democracia representativa sino que como un complemento para el mejor funcionamiento de las instituciones políticas, y donde el rol que juegan los partidos políticos es aún más fundamental (Soto, 2013, p. 15; p. 32; p. 237-242). Por tanto, es probable que una eventual incorporación de mecanismos de democracia directa no resuelva por sí sola los problemas de desconfianza y desempeño de las instituciones en Chile. Sigue siendo relevante fortalecer a los partidos y al Congreso. Reformas institucionales como la nueva ley de partidos políticos, con el objeto de hacerlos más transparentes y con mayor participación

de sus militantes, parecen iniciativas cruciales para robustecer las instituciones políticas.

En resumen, la ausencia de más mecanismos de democracia directa en nuestra institucionalidad no parece estar generando una crisis de legitimidad, debido al masivo desinterés por los asuntos políticos en general, al escaso seguimiento que los ciudadanos hacen de los asuntos públicos y a que no se involucran en actividades políticas alternativas a las institucionales.

3. DESAFÍOS INSTITUCIONALES

El análisis de la sección precedente analizó los diagnósticos de crisis del sistema político y encontró que éstos parecen exagerados. No obstante, hay signos negativos que, más bien, se tratan de cuestionamientos a aspectos específicos del funcionamiento de este sistema, cuya expresión más palmaria es

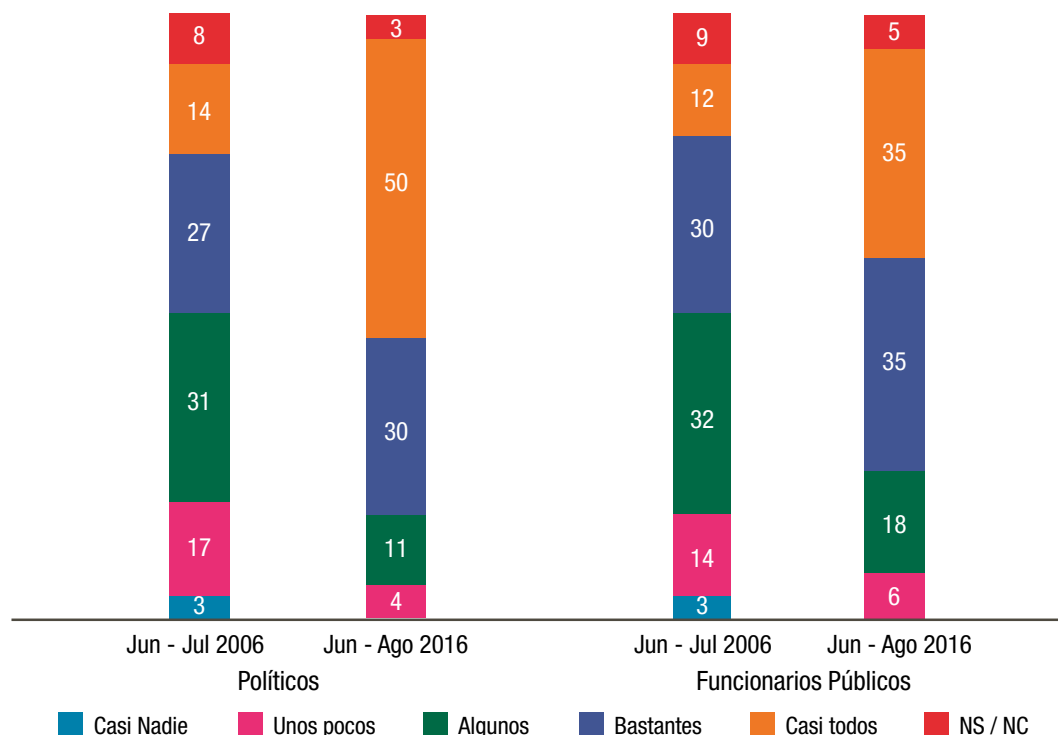
la alta desconfianza de los chilenos hacia las instituciones políticas y las autoridades que las administran. Un diagnóstico razonable debería, entonces, enfocarse en comprender cuáles podrían ser las causas de la insatisfacción con el desempeño de las instituciones y su desconfianza.

Gráfico 19: Motivos de la desconfianza en la política, 2015



Nota: Suma de las dos menciones respondidas antes la pregunta "Pensando en aquellas personas que tienen poca o ninguna confianza en la actividad política, ¿cuál de los siguientes motivos cree usted que es el principal por el que desconfían? ¿Y en segundo lugar?". Total menciones: 200 por ciento. Fuente: Encuesta CEP, agosto 2015.

Gráfico 20: ¿Cuántos políticos y funcionarios públicos en Chile están involucrados en actos de corrupción? 2006 y 2016



Nota: Respuestas a las preguntas: “En su opinión, ¿cuántos políticos en Chile están involucrados en actos de corrupción?” “Y, en su opinión, ¿cuántos funcionarios públicos en Chile están involucrados en actos de corrupción?”. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales junio-julio 2006 y julio-agosto 2016.

Uno de los principales factores que afecta la percepción de desempeño de las instituciones y la confianza en ellas es la corrupción. Si una institución está sujeta a actos de corrupción, entonces no está funcionando bien, porque es incapaz de entregar eficazmente los servicios que los ciudadanos esperan de ella. Esta aseveración tiene asidero en los datos. El **Gráfico 19** consigna los principales motivos por los cuales los chilenos desconfían de la actividad política, de acuerdo a la encuesta CEP de agosto 2015. Los datos muestran que el principal motivo de desconfianza es la corrupción, muy por sobre la clásica consigna de que los políticos no cumplen las cosas que prometen.

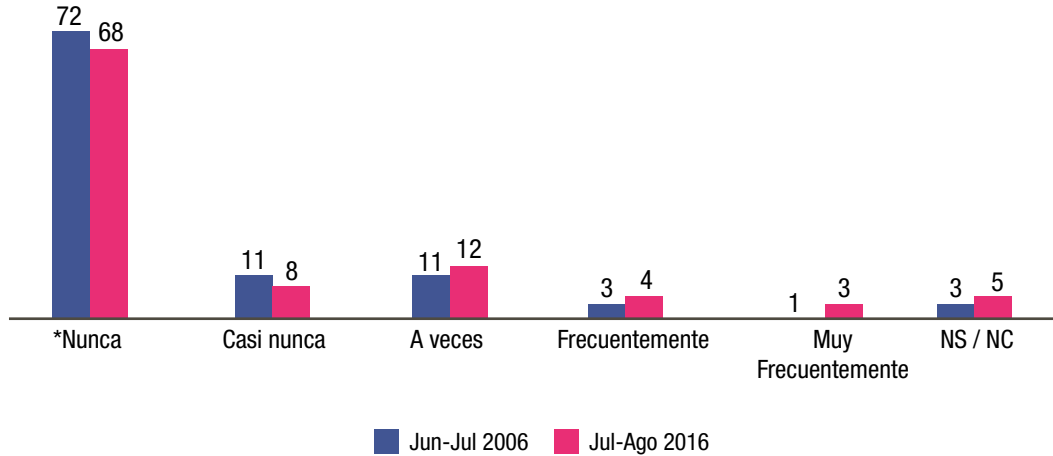
¿Qué ha pasado con las percepciones de corrupción durante la última década? Según las encuestas CEP, ilustradas en el **Gráfico 20**, un 80 por ciento de los chilenos cree que bastante o casi todos los políticos en Chile

están involucrados en actos de corrupción en 2016, casi 40 puntos porcentuales más que en 2006. Respecto de los funcionarios públicos, un 70 por ciento de la población piensa que bastante o casi todos están inmiscuidos en actos corruptos en 2016. Esta cifra llegaba a 42 por ciento en 2006. Lo más probable es que este enorme ascenso en la percepción de corrupción se explique, en buena parte, por los casos de financiamiento ilegal de la política, tráfico de influencias y de asignación de beneficios ilegítimos, que involucran tanto a parlamentarios como a funcionarios del Estado.

La percepción generalizada de corrupción en el servicio público no se condice con la experiencia de los chilenos en la vida cotidiana.



Gráfico 21: Frecuencia con la que ha sido objeto de un acto de corrupción en el servicio público, 2006 y 2016

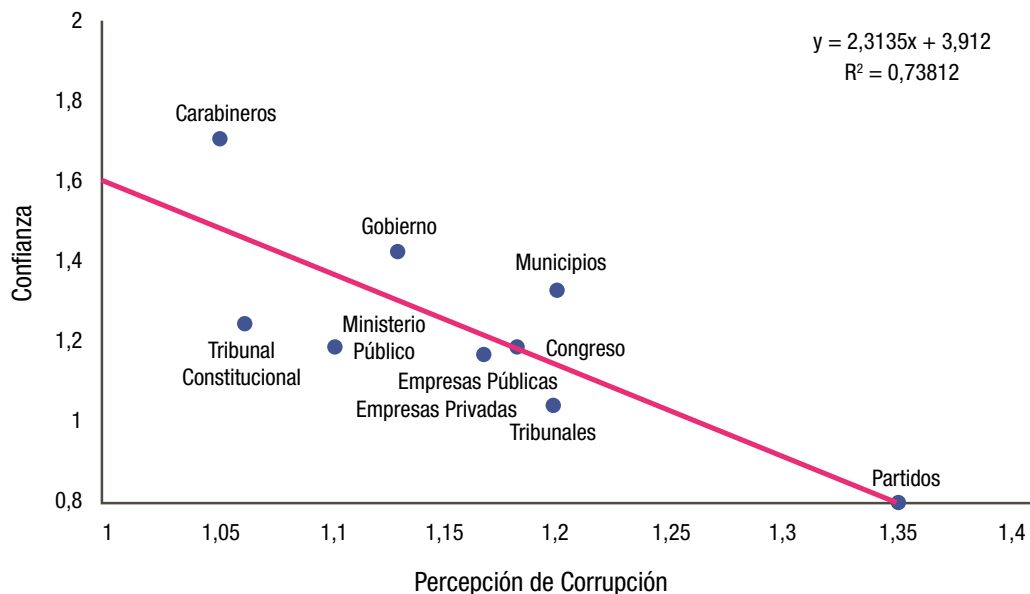


Nota: Respuesta a la pregunta: En los últimos cinco años, ¿qué tan frecuentemente Ud. o alguien de su familia, se ha enfrentado a algún funcionario público que hubiera sugerido o pedido una coima a cambio de la realización de un servicio? * Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de junio-julio 2006 y julio-agosto 2016. Fuente: CEP, Encuestas Nacionales.

Estas cifras pueden generar la impresión de que Chile es un país corrupto. Pero, ¿lo es? No del todo. La percepción generalizada de corrupción en el servicio público no se condice con la experiencia de los chilenos en la vida cotidiana. Según la encuesta CEP de julio-agosto 2016, un siete por ciento de la población afirma que, con frecuencia, le piden coimas para acceder a un servicio público,

mientras que la gran parte de los chilenos (el 76 por ciento) nunca o casi nunca se ha enfrentado a tal situación, como se observa en el **Gráfico 21**. Más aún, esto no parece haber cambiado significativamente durante la última década, a pesar de que la percepción de corrupción en el servicio público casi se duplicó en el mismo lapso (ver **Gráfico 20**).

Gráfico 22: Relación entre confianza y percepción de corrupción en las instituciones, 2010



Nota: Correlación entre el promedio de confianza que declaran los individuos para cada institución y el promedio de percepción de corrupción de la misma. Mientras más alto es el indicador de confianza, más confianza tienen los individuos, en promedio, en alguna institución. Mientras más alto es el indicador de corrupción, más corrupción perciben los individuos, en promedio, en alguna institución. Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Auditoría a la Democracia 2010.

En promedio, cuando los ciudadanos perciben una baja corrupción en alguna institución, confían más en ésta.

¿Qué ocurre? ¿Por qué se produce esta diferencia entre la virtual ausencia de corrupción en la vida cotidiana de los chilenos y la creencia generalizada de que la corrupción es mayoritaria? Para entender mejor qué hay detrás de esta disociación entre el juicio personal (positivo) y el generalizado (negativo) debemos, primero, comprender cómo se forman estas percepciones.⁷ Respecto

a la percepción personal, claramente, la experiencia del día a día resulta suficiente. Pero, ¿qué pasa con el juicio generalizado sobre la corrupción? En la mayoría de los casos, los ciudadanos tenemos una interacción esporádica con los funcionarios públicos, en la medida que necesitemos de algún servicio específico. Por esa razón, es posible que el juicio colectivo (sobre todos los funcionarios públicos) no esté tan basado en la relación con el funcionario público que le prestó un servicio, sino más bien en información que emane de las relaciones sociales —muy influyentes en la construcción de “imágenes mentales” que generalmente tienden a ser “sesgadas”, es decir, que ayudan a pensar que ciertos comportamientos o eventos son más (o menos) frecuentes de lo que son en realidad— y de los medios de comunicación

7 El Capítulo 1 de este informe contiene una discusión teórica completa respecto a los fundamentos tras la formación de percepciones. En esta sección, se aplicará dicha teoría solamente.

8 Se trata de una asociación entre ambas variables, no de una relación causal necesariamente.

9 Los datos descritos muestran la existencia de una asociación a nivel de instituciones, que también se observa a nivel individual.

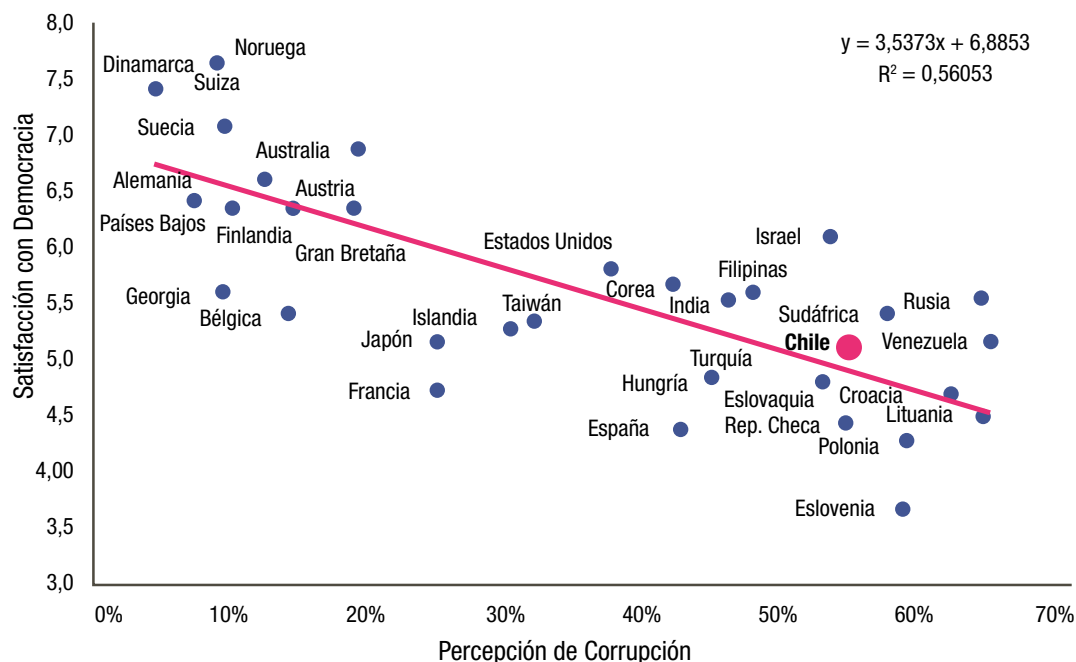
masivos que, dada la tendencia a reportar lo conflictivo y lo controversial, tiende a generar imágenes más bien negativas sobre el comportamiento de los demás. En este caso particular, las noticias sobre casos de corrupción son, en general, de fácil comprensión, con un contenido altamente emocional y, por tanto, más fáciles de retener (Pharr 2000), lo que contribuiría a generar la percepción de que casi todos los funcionarios públicos son corruptos, aun cuando las respuesta en relación a la experiencia cotidiana de tres cuartas partes de los chilenos no refleja eso.

La creciente percepción de corrupción tiene importantes implicancias para la confianza en las instituciones y la valoración de la democracia. En primer lugar, existe correlación entre la percepción de corrupción y la confianza en instituciones.

Bajos niveles de corrupción percibida están asociados con niveles de satisfacción con la democracia más altos.

El **Gráfico 22** exhibe la correlación entre el porcentaje de chilenos que expresan “Mucha confianza” o “Bastante confianza” y el porcentaje que expresa “Hay mucha corrupción” en varias instituciones públicas, utilizando los datos de la Encuesta Auditoría de la Democracia 2010. La correlación entre ambas variables es negativa y significativa estadísticamente.⁸ Esto significa que, en promedio, cuando los ciudadanos perciben una baja corrupción en alguna institución, confían más en ésta.⁹

Gráfico 23: Relación entre satisfacción con la democracia y percepción de corrupción, 2014



Nota: Correlación entre satisfacción con la democracia (promedio por país) y el porcentaje que responde “Mucha gente está involucrada” y “Casi todas las personas están involucradas” ante la pregunta “¿Qué tan extendida piensa usted que está la corrupción en el servicio público de su país?”. Fuente: Elaboración propia basada en ISSP 2014.



Mejorar el desempeño de las instituciones resulta crucial para revertir los bajos niveles de confianza.

En segundo lugar, existe una correlación entre satisfacción con la democracia y la percepción de corrupción. El **Gráfico 23** muestra la correlación existente entre satisfacción con la democracia (promedio por país) y el porcentaje de personas que cree que casi todos o mucha gente del servicio público, del propio país, están involucrados en corrupción. La figura muestra una correlación negativa y estadísticamente significativa entre ambas variables, esto es, bajos niveles de corrupción percibida están asociados con niveles de satisfacción con la democracia más altos.

Con todo, la evidencia revisada sugiere que el aumento de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, observado en el pasado reciente, tiene relación con el incremento de la percepción de corrupción, en buena parte, relacionado con los casos de financiamiento irregular de la política y de tráfico de influencias, actualmente en investigación judicial. Asimismo, la percepción de corrupción en las instituciones afectaría la confianza que los ciudadanos depositan en ellas, tanto por la mala evaluación a la gestión de cada institución como por la resonancia que este negativo desempeño tenga en los medios de comunicación social, dependiendo de cuán expuestos están los individuos a flujos de información.

En esta perspectiva, mejorar el desempeño de las instituciones resulta crucial para revertir los bajos niveles de confianza y, a su vez, mejorar la percepción del funcionamiento de nuestra democracia. Esto incluye, por ejemplo, reformas que minimicen el riesgo de corrupción —que se haga cargo del siete por ciento de la población al que los funcionarios públicos le piden coimas con frecuencia para entregar el servicio—, dado el impacto que ésta tiene en la confianza institucional y en todo el sistema político, aun cuando se trate

de una percepción que no es fruto de su propia experiencia.

Pero la corrupción es sólo una dimensión de un desempeño defectuoso. Hay otra dimensión que involucra la calidad de las prestaciones del Estado. En el Capítulo 2 de este Informe quedaba de manifiesto la insatisfacción de la ciudadanía con los servicios que el Estado entrega en diversas áreas, como salud, educación y prevención de la delincuencia. De acuerdo al Informe del PNUD 2015, la mayoría de la población considera que los problemas sociales están resueltos cuando las soluciones tienen un impacto concreto, positivo y personal en la vida cotidiana. Bajo esta perspectiva, entonces, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones también es necesario implementar una reforma profunda a los servicios prestados por el Estado orientada a conseguir un impacto concreto, positivo y personal en la vida cotidiana de los chilenos.

Por ejemplo, en comparación con otros países, tenemos mucho que progresar en temas de *accountability*, esto es, rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas. Hemos avanzado bastante en transparencia y en la cantidad de información disponible —aunque poco en la entrega de información procesada coherentemente—, pero no así en *accountability*. Existen múltiples mejoras que se pueden implementar para avanzar en la evaluación de resultados y cómo incorporar la satisfacción de los usuarios en los servicios públicos, incluyendo la retroalimentación en la forma, tipo y oportunidad en que los servicios son entregados a los ciudadanos. Por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelandia y Canadá han implementado el uso de tecnologías para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad de la gestión de los servicios públicos. En Chile, hemos dado los primeros pasos con proyectos como ChileAtiende, pero todavía queda mucho por avanzar. La modernización de los servicios públicos puede pensarse buscando mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sin dejar de lado la pregunta acerca de cómo estos servicios pueden hacer una diferencia importante en la vida diaria de las personas.



4. CONCLUSIÓN

Este capítulo ha revisado diversos diagnósticos acerca del supuesto estado terminal del sistema político como lo conocemos en nuestro país, observado a partir de variadas expresiones de descontento hacia el sistema político que algunos calificaron como crisis y le asignaron el nombre de “malestar”. En este texto analizamos tales manifestaciones y concluimos que la idea de una crisis de la democracia o de legitimidad de las instituciones en Chile es exagerada. En efecto, en el primer caso, la adhesión a los principios democráticos es hoy más alta que nunca, lo que sin problemas puede coexistir con una percepción algo negativa de cómo está funcionando en nuestro país. En el segundo caso, se afirma que la baja identificación y confianza en los partidos generaría problemas de legitimidad, sin embargo, el análisis comparado revela que esto no sólo ocurre en varios países del mundo desarrollado —con más o menos intensidad que en Chile—, sino que también no tiene relación con la satisfacción que los ciudadanos reportan de sus sistemas políticos. También se ha dicho que la reforma de inscripción automática y voto voluntario trajo problemas de representatividad, por medio de la baja participación en elecciones, no obstante, ésta es similar a la observada en países cuyas elecciones ocurren en un contexto similar al chileno, el sesgo etario cayó en las elecciones presidenciales y no hay evidencia concluyente de sesgo de clase tras esta reforma, por lo tanto, la representatividad no parece haber sufrido un duro golpe. Por último, se ha sostenido que la ausencia de más mecanismos de democracia directa podría estar generando el malestar con el sistema político, puesto que existiría un anhelo mayoritario de los chilenos de participar en la toma de decisiones, sin embargo, tal deseo que no refleja en las cifras acerca de la disposición a votar varias veces en el año, ni en la práctica —la participación en el proceso constituyente es evidencia de esto—. Por estas razones, consideramos que la crisis del sistema político ha sido sobre-diagnosticada.

Es cierto que en Chile la satisfacción con el funcionamiento de la democracia ha caído, al igual que la confianza en las instituciones. El capítulo sostiene que tanto la insatisfacción y la desconfianza hacia las instituciones tiene relación con problemas de desempeño de las mismas. De modo que, tanto el combate a la corrupción como la mejora en la calidad de los servicios públicos puede hacer que las instituciones generen un impacto concreto, positivo y personal en la vida cotidiana de la gente —que es lo que la población busca en una solución efectiva—, lo que podría revertir la profunda desconfianza de los chilenos hacia ellas.

Como vimos en este capítulo, la insatisfacción con el sistema político y la desconfianza no son problemas exclusivos de Chile. Ha pasado y está ocurriendo en varios países del mundo desarrollado. Es muy importante aprender de sus experiencias tratando de resolver estos problemas. En países que han seguido un camino reformista, se han defendido diversas medidas para abordar el descontento. Por ejemplo, aquellos que favorecen el fortalecimiento de la deliberación colectiva y la participación ciudadana, han propuesto ampliar el uso de asambleas ciudadanas, referéndums populares, auditorías sociales, presupuestos participativos, consultas públicas, reuniones comunitarias y encuestas deliberativas. Quienes favorecen el fortalecimiento de la transparencia y el *accountability*, han impulsado la ampliación de derechos a la información y la apertura de los procesos de toma de decisiones. Algunos promueven el fortalecimiento de la institucionalidad a través de la creación de agencias regulatorias y anti-corrupción, *ombudsman* y otros optan por reformas constitucionales. Sin embargo, a pesar del amplio debate al respecto, y aun cuando las iniciativas puedan ser válidas en su propio mérito, no está claro si alguna de estas estrategias realmente logra, a largo plazo, los objetivos deseados. Como advierte Pippa Norris, académica de la Universidad de Harvard, las reformas fracasarán si el problema de la legitimidad democrática o la llamada crisis de confianza se exagera o se diagnostica mal (Norris, 2011, p. 238).



La adhesión a los principios democráticos es hoy más alta que nunca, lo que sin problemas puede coexistir con una percepción algo negativa de cómo está funcionando en nuestro país.

ANEXOS

CAPÍTULO 1

Tabla A1: Estadísticos descriptivos de variables incluidas en el estudio

Variable	Encuesta		
	Nov. 2014	Ago. 2015	Nov. 2015
Rural (ref. Urbano)	17%	17%	17%
Sexo (ref. Hombre)	61%	61%	61%
Edad	48.77	49.02	48.15
Religión: Católica (ref. Ninguna)	62%	58%	59%
Religión: Evangélica (ref. Ninguna)	15%	20%	15%
Religión: Otra (ref. Ninguna)	4%	3%	4%
Actividad Religiosa	2.36	2.47	2.21
Educación	3.85	3.60	3.94
Riqueza	0.22	0.24	0.24
Posición Social Subjetiva	4.89	4.85	4.82
Exposición a MCM's	0.00	0.00	0.00
Sit. Eco. Personal: Positiva (ref. Neutra)	25%	23%	24%
Sit. Eco. Personal: Negativa (ref. Neutra)	19%	24%	21%
Sit. Eco. País: Negativa (ref. Neutra)	35%	44%	43%
Sit. Eco. País: Positiva (ref. Neutra)	14%	11%	10%
Bienestar: Personal	6.51	7.21	7.07
Bienestar: País	5.00	5.47	5.29

Nota: Se reportan porcentajes de variables categóricas y promedios de variables numéricas, sin utilizar ponderación.
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP N° 72, 74, 75, y 77.

J.A. 2016	Total
17%	17%
62%	61%
49.62	48.89
60%	60%
17%	17%
2%	3%
2.20	2.31
3.83	3.81
0.24	0.23
4.70	4.82
0.00	0.00
27%	25%
18%	21%
49%	43%
7%	10%
6.96	6.94
5.02	5.19

Tabla A2: Errores estándar robustos a la heteroscedasticidad de coeficientes presentados en la Tabla 2

Dependiente	Modelo Predictor	1				
		Nov. 2014	Ago. 2015	Nov. 2015	J. A. 2016	Pool
Sit. Eco. Personal	Riqueza	0.256	0.245	0.241	0.245	0.123
	Educación	0.027	0.028	0.026	0.027	0.013
<i>Logit Ordinal</i>	Intercepto 1	0.167	0.163	0.193	0.147	0.083
	Intercepto 2	0.106	0.105	0.103	0.103	0.052
	Intercepto 3	0.134	0.119	0.128	0.127	0.063
	Intercepto 4	0.294	0.270	0.371	0.584	0.167
Sit. Eco. País	Sit. Eco. Personal	0.089	0.082	0.086	0.087	0.043
	Expo. A MCM's	0.067	0.067	0.070	0.065	0.034
<i>Logit Ordinal</i>	Intercepto 1	0.253	0.231	0.263	0.229	0.121
	Intercepto 2	0.254	0.242	0.255	0.250	0.125
	Intercepto 3	0.293	0.270	0.279	0.286	0.141
	Intercepto 4	0.492	0.406	0.734	0.631	0.251
Expo. A MCM's	Riqueza	0.100	0.099	0.101	0.098	0.050
	Educación	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005
OLS	Intercepto	0.035	0.035	0.036	0.035	0.018
Bienestar: Personal	Sit. Eco. Personal	0.077	0.075	0.074	0.071	0.037
	Educación	0.024	0.024	0.022	0.023	0.012
OLS	Intercepto	0.234	0.238	0.222	0.218	0.115
Bienestar: País	Expo. A MCM's	0.052	0.063	0.051	0.056	0.028
	Sit. Eco. País	0.060	0.063	0.060	0.057	0.030
OLS	Riqueza	0.190	0.223	0.183	0.188	0.099
	Intercepto	0.176	0.186	0.168	0.160	0.087
Bienestar: Brecha	Expo. A MCM's					
	Sit. Eco. Personal					
<i>Logit Ordinal</i>	Sit. Eco. País					
	Riqueza					
	Educación					
	Intercepto					
Varianzas	Bienestar: Personal	0.161	0.158	0.135	0.139	0.075
	Bienestar: País	0.127	0.149	0.122	0.128	0.067
	Bienestar: Brecha					
	Expo. A MCM's	0.021	0.028	0.025	0.024	0.012
Covarianza	B. Personal - B. País	0.121	0.125	0.110	0.112	0.060

Fuente: elaboración propia a partir de los estudios nacionales de opinión pública CEP N° 72, 74, 75, y 77.

2

Nov. 2014	Ago. 2015	Nov. 2015	J. A. 2016	Pool
0.256	0.245	0.241	0.245	0.123
0.027	0.028	0.026	0.027	0.013
0.167	0.163	0.193	0.147	0.083
0.106	0.105	0.103	0.103	0.052
0.134	0.119	0.128	0.127	0.063
0.294	0.270	0.371	0.584	0.167
0.089	0.082	0.086	0.087	0.043
0.067	0.067	0.070	0.065	0.034
0.253	0.231	0.263	0.229	0.121
0.254	0.242	0.255	0.250	0.125
0.293	0.270	0.279	0.286	0.141
0.492	0.406	0.734	0.631	0.251
0.100	0.099	0.101	0.098	0.050
0.010	0.011	0.010	0.010	0.005
0.035	0.035	0.036	0.035	0.018
0.079	0.083	0.076	0.079	0.040
0.093	0.097	0.091	0.087	0.046
0.092	0.090	0.082	0.082	0.043
0.280	0.302	0.272	0.266	0.140
0.031	0.035	0.029	0.032	0.016
0.280	0.323	0.318	0.278	0.150
0.222	0.266	0.214	0.199	0.116
0.021	0.028	0.025	0.024	0.012

REFERENCIAS

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS CAPÍTULO 1

Atria F., Larraín G., Benavente J., Couso J. & Joignant A. (2013) *El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público*. Santiago: Debate.

Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2015). *Measuring economic policy uncertainty* (No. w21633). *National Bureau of Economic Research*.

Baldassarri, D., & Bearman, P. (2007). "Dynamics of political polarization". *American sociological review*, 72(5), 784-811.

Berger, P., & Luckmann, T. (2012) [1967]. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Beyer, H. (2015). "Diagnósticos alternativos sobre la crisis de confianza". *Estudios Públicos*, 140: pp. 107-136.

Beytía, P., & Calvo, E. (2011). *¿Cómo Medir La Felicidad? (How to Measure Happiness?)*. *Claves de Políticas Públicas*, 4.

Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E., & Fowler, J. H. (2012). "A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization". *Nature*, 489(7415), 295-298.

Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: "A resource model of political participation". *American Political Science Review*, 89(02), 271-294.

Breen, R., & Karlson, K. B. (2013). "Education and social mobility: New analytical approaches". *European sociological review*, jct025.

Brunner, J.J. (1998). "Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?" *Estudios Públicos*, 72: 173-198.

Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1997). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.

Castillo, J. C., Miranda, D., & Cabib, I. M. (2013). Todos somos de clase media: Sobre el estatus social subjetivo en Chile. *Latin American Research Review*, 48(1), 155-173.

Cerda, R., Silva, A. & Valente J.T. (2016). *Informe Metodológico. Índice de Incertidumbre Económico: Medición e Impacto*. Documento de Trabajo CLAPES UC.

Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2009). *Connected: The surprising power of our social networks and how they shape our lives*. Little, Brown.

DESUC. (2015). *El bienestar subjetivo de los chilenos: la importancia de nuestros vínculos*. Santiago de Chile.

Diener, E. (2000). "Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index". *American psychologist*, 55(1), 34.

Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). "Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being". *Journal of economic psychology*, 29(1), 94-122.

Durkheim, E. (2001) [1893]. *La división del trabajo social*. Madrid: Akal.

Ellison, C. G. (1991). "Religious involvement and subjective well-being". *Journal of health and social behavior*, 80-99.

Evans, M. D., & Kelley, J. (2004). "Subjective social location: Data from 21 nations". *International Journal of Public Opinion Research*, 16(1), 3-38.

González, R., & Mackenna, B. (2015). Cuando el éxito personal no se traduce en movilidad social: el caso de los "trionfadores frustrados" en Chile. Working paper.

Graham, C. (2012). *The pursuit of happiness: An economy of well-being*. Brookings Institution Press.

Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (Vol. 561). John Wiley & Sons.

Gunther, A. C. (1998). "The persuasive press inference effects of mass media on perceived public opinion". *Communication Research*, 25(5), 486-504.

Handlin, S. (2013). "Survey research and social class in Venezuela: Evaluating alternative measures and their impact on assessments of class voting". *Latin American Politics and Society*, 55(1), 141-167.

Huckfeldt, R., & Sprague, J. (1987). "Networks in context: The social flow of political information". *American Political Science Review*, 81(04), 1197-1216.

Husserl, E. (2008) [1936]. *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies* (Vol. 19). Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.

Iyengar, S., & Kinder, D. R. (2010). *News that matters: Television and American opinion*. University of Chicago Press.

Kahneman, D., & Krueger, A. B. (2006). "Developments in the measurement of subjective well-being". *The journal of economic perspectives*, 20(1), 3-24.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1966). *Personal Influence, The part played by people in the flow of mass communications*. Transaction Publishers.

Kleinnijenhuis, J., Van Hoof, A. M., & Oegema, D. (2006). "Negative news and the sleeper effect of distrust". *The Harvard International Journal of Press/Politics*, 11(2), 86-104.

- Krosnick, J. A., & Kinder, D. R. (1990). "Altering the foundations of support for the president through priming". *American Political Science Review*, 84(02), 497-512.
- Kunzmann, U., Little, T. D., & Smith, J. (2000). "Is age-related stability of subjective well-being a paradox? Cross-sectional and longitudinal evidence from the Berlin Aging Study". *Psychology and aging*, 15(3), 511.
- Ladd, J. M., & Lenz, G. S. (2009). "Exploiting a rare communication shift to document the persuasive power of the news media". *American Journal of Political Science*, 53(2), 394-410.
- Lippmann, W. (1946). *Public opinion*. Transaction Publishers.
- Luhmann, N. (2007). *La realidad de los medios de masas* (Vol. 40). Universidad Iberoamericana.
- Lun, V. M. C., & Bond, M. H. (2013). "Examining the relation of religion and spirituality to subjective well-being across national cultures". *Psychology of Religion and Spirituality*, 5(4), 304.
- Mackenna, B., & Browne, M. (2015). "Is Life Satisfaction the Same for Everyone? The Conditional and Social Nature of Subjective Well-Being". Artículo presentado en LXIX WAPOR Conference, Buenos Aires.
- Marsden, P. V. (1987). "Core discussion networks of Americans". *American Sociological Review*, 122-131.
- Marx, K. (2015) [1867]. "El Capital: crítica de la economía política". Libro 1. México DF: Fondo de cultura económica.
- Maslow, A. H. (1943). "A theory of human motivation". *Psychological review*, 50(4), 370.
- Mayol, A. (2011). "La transición social a la democracia". *Revista Anales*, Séptima Serie, N° 2, pp. 39-54.
- McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). "Birds of a feather: Homophily in social networks". *Annual review of sociology*, 415-444.
- Müller, W., Lüttinger, P., König, W., & Karle, W. (1989). "Class and education in industrial nations". *International Journal of Sociology*, 19(3), 3-39.
- Mutz, D. C. (1998). *Impersonal influence: How perceptions of mass collectives affect political attitudes*. Cambridge University Press.
- Noelle-Neumann, E. (1993). *The spiral of silence: Public opinion, our social skin* (2nd ed., pp. 11-15). Chicago: University of Chicago Press.
- Norris, P. (2012). *The impact of social media on the Arab uprisings: the facebook, twitter, and youtube revolutions*. Joint sessions of the ECPR, Antwerp, Belgium, 10-15.
- Oppliger M. & Guzmán E. (2012) *El malestar de Chile: ¿teoría o diagnóstico?* Santiago: Ril.
- Orchard, M. & Jiménez, A. (2016). "¿Malestar de qué? A propósito de ciertos malentendidos entre malestar social y sufrimiento psíquico en Chile". En E. Radiszcz (comp.), *Malestar y Destinos del Malestar: Políticas de la Desdicha* (Vol. I). Santiago: Social Ediciones.
- PNUD. (1998). *Informe de Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización*. Santiago de Chile.

PNUD. (2012). *Informe de Desarrollo Humano en Chile. Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. Santiago de Chile.

PNUD. (2015). *Informe de Desarrollo Humano en Chile: Los tiempos de la politización*. Santiago de Chile.

Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A., & Pickles, A. (2004). Generalized multilevel structural equation modeling. *Psychometrika*, 69(2), 167-190.

Schimmack, U., & Oishi, S. (2005). The influence of chronically and temporarily accessible information on life satisfaction judgments. *Journal of personality and social psychology*, 89(3), 395.

Schütz, A., & Luckmann, T. (2009) [1973]. *Las estructuras del mundo de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu.

Simmel, G. (2014) [1908]. *Sociología: estudios sobre las formas de socialización*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Veenhoven, R. (2008). Sociological theories of subjective well-being. *The science of subjective well-being*, 9, 44-61.

Weber, M. (2014) [1922]. *Economía y Sociedad*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Witter, R. A., Stock, W. A., Okun, M. A., & Haring, M. J. (1985). Religion and subjective well-being in adulthood: A quantitative synthesis. *Review of Religious Research*, 332-342.

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT press.

Zaller, J. (1992). *The nature and origins of mass opinion*. Cambridge University Press.

Prensa y sitios web

Brunner, J.J. (2015a). El discurso del malestar (1): Opinión pública y privada. *El Líbero*, 23 de septiembre de 2015.

<http://ellibero.cl/opinion/el-discurso-del-malestar-1-opinion-publica-y-privada/>

Brunner, J.J. (2015b). Discurso del malestar (2): De la democracia. *El Líbero*, 30 de septiembre de 2015.

<http://ellibero.cl/opinion/discurso-del-malestar-2-de-la-democracia/>

Brunner, J.J. (2015c). Discurso del malestar (3): Contradicciones culturales del capitalismo y la modernidad. *El Líbero*, 7 de octubre de 2015.

<http://ellibero.cl/opinion/discurso-del-malestar-3-contradicciones-culturales-del-capitalismo-y-la-modernidad/>

Capital, Marcelo Díaz: “La falta de una base común”, 12 de noviembre de 2015.

<http://www.capital.cl/poder/2015/11/12/131157-marcelo-diaz-la-falta-de-una-base-comun>

El País, Bachelet lanza su campaña presidencial y promete grandes reformas en Chile, 28 de marzo de 2013.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/28/actualidad/1364440769_377129.html

La Tercera, Carlos Peña: “El modelo de mercado no está en crisis en Chile”, 25 de agosto de 2012.

<http://diario.latercera.com/2012/08/25/01/contenido/reportajes/25-116804-9-carlos-pena-el-modelo-de-mercado-no-esta-en-crisis-en-chile.shtml>

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS CAPÍTULO 2

Agostini, C. A. (2013). "Una reforma eficiente y equitativa del impuesto al ingreso en Chile". En J.P. Arellano & V. Corbo (eds.), *Tributación para el desarrollo. Estudios para la reforma del sistema chileno*. Santiago: CEP-CIEPLAN.

Alesina, A., & G.-M., A. (2005). Fairness and Redistribution: US Vs. Europe. *American Economic Review*, 95: 913-935.

Brunner, J.J. (1998). "Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?". *Estudios Públicos*, 72: 173-198.

Fong, C. (2001). Social preferences, self-interest, and the demand for redistribution. *Journal of Public Economics*, Volume 82, Issue 2, Pages 225–246.

Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies* (Vol. 19). Princeton: Princeton University Press.

Lipset, S., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, 1-64.

Meltzer, A., & Richard, S. (1981). A rational theory of the size of government. *Journal of Political Economy*, 89, 914-927.

Mirrlees, J. A., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., Gammie, M., Johnson, P., Myles, G. & Poterba, J. (eds.) (2010). *Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review*. Oxford: Oxford University Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1998). *Informe sobre Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización*. Santiago.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2012). *Informe sobre Desarrollo Humano en Chile. Bienestar Subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. Santiago.

Roemer, J. (1998). Igualdad de Oportunidades. *Isegoría*, nº 18: 71-87.

Sen, A. (1985). *Commodities and capabilities*. North-Holland, Amsterdam.

Sen, A. (1989). Development as Capability Expansion. *Journal of Development Planning*, 19: 41-58.

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS CAPÍTULO 3

Anderson, C., M. W. Kraus, A. D. Galinsky & D. Keltner (2012). "The local-ladder effect social status and subjective well-being". *Psychological Science*, 764–771.

Andersson, M. (2015). "How Do We Assign Ourselves Social Status? A Cross Cultural Test of the Cognitive Averaging Principle". *Social Science Research*, 52: pp. 317-329.

Brunner, J.J. (1998). "Malestar en la sociedad chilena: ¿de qué, exactamente, estamos hablando?". *Estudios Públicos*, 72: 173-198.

Clark, A. & E. D'Angelo (2008). "Upward Social Mobility, Well-being and Political Preferences: Evidence from the BHPS". *Working Paper: Paris School of Economics*.

Corak, M. (2013). "Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility". *The Journal of Economic Perspectives*, 79–109.

Corbo, V. (editor) (2014), *Growth Opportunities for Chile*. Santiago: Editorial Universitaria y Centro de Estudios Públicos.

Davis, J. (1956). "Status Symbols and the Measurement of Status Perception". *Sociometry* 19 (3): 154-165.

Deaton, A. (2008). "Income, Health, and Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll". *Journal of Economic Perspectives* 22 (2): 53-72.

Deaton, A. (2013). *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*. Princeton University Press.

Diener, E., L. Tay & S. Oishi (2013), "Rising Income and the Subjective Well-Being of Nations", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 104, nº. 2, 267–276

Dolan, P. & G. Lordan (2013). "Moving up and sliding down: An empirical assessment of the effect of social mobility on subjective wellbeing". *Working Paper*.

Easterlin, R. A. (1974). "Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence". En David, P. A. & Reeder, M. W. (Eds.), *Nations and households in economic growth* (pp. 89 –125). New York, NY: Academic Press

Evans, M. & J. Kelley (2004). "Subjective Social Location: Data from 21 Nations". *International Journal of Public Opinion Research*, 16(1): 3-38.

Gaviria, A. (2007). "Social Mobility and Preferences for Redistribution in Latin America". *Economía*, 8(1): 55-96.

Kahneman, D., J. L. Knetsch & R. H. Thaler (1991). "Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias". *The Journal of Economic Perspectives*, 193–206.

Kelley, S. & C. Kelley (2009). "Subjective Social Mobility: Data from 30 Nations". En Haller, M., Jowell, R. & Smith, T. (Eds.), *Charting the Globe: The International Social Survey Programme*. Londres: Routledge.

Larrañaga, O. (1994). "Pobreza, crecimiento y desigualdad: Chile 1987-92."

Libertad y Desarrollo (2015). "El crecimiento económico hace la diferencia a la hora de reducir la pobreza". *Temas Públicos* n° 1238.

McBride, M. (2001). "Relative-income effects on subjective well-being in the cross-section". *Journal of Economic Behavior & Organization*, 251–278.

Nikolaev, B. & A. Burns (2014). "Intergenerational Mobility and Subjective Well-being-Evidence from the General Social Survey." *Journal of Behavioural and Experimental Economics*, 53: pp. 82-96.

Nuñez, J & L. Miranda (2007). "Recent Findings on Intergenerational Income and Educational Mobility in Chile". *Documentos de Trabajo FEN U. de Chile*.

Rubio, E. (2016). "El diálogo de dos desafíos: Evolución y relación de la desigualdad y la escolaridad en Chile". *Debates de Política Pública* n° 15, CEP.

Sapelli, C. (2013). "Movilidad Intrageneracional del Ingreso en Chile". *Estudios Públicos*, 131: pp. 1-35.

Stevenson, B., & J. Wolfers (2008). "Economic growth and happiness: Reassessing the Easterlin Paradox". *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring, 1– 87.

Stevenson, B., & J. Wolfers (2013). "Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation?" *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 103(3) 598-604.

Torche, F. (2005). "Unequal but Fluid: Social Mobility in Chile in Comparative Perspective". *American Sociological Review*, 70(3): pp. 422-450.

Torche, F. & G. Wormald (2004). "Estratificación y movilidad social en Chile: entre la Adscripción y el Logro". *Documento de Trabajo CEPAL*.

Weimann, J., A. Knabe & R. Schöb (2015). *Measuring Happiness: The Economics of Well-Being*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Prensa y sitios web

La Tercera, *Carlos Peña: "El modelo de mercado no está en crisis en Chile"*, 25 de agosto de 2012.

<http://diario.latercera.com/2012/08/25/01/contenido/reportajes/25-116804-9-carlos-pena-el-modelo-de-mercado-no-esta-en-crisis-en-chile.shtml>

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS CAPÍTULO 4

Beyer, H. (2015). "Diagnósticos alternativos sobre la crisis de confianza". CEP, Puntos de Referencia n° 413, CEP.

http://cepchile.cl/1_6109/doc/diagnosticos_alternativos_sobre_la_crisis_de_confianza.html#VovsLsDhBm8

Brunner, J. J. (2015a). "Discurso del malestar (2): De la democracia". *El Líbero*. <http://ellibero.cl/opinion/discurso-del-malestar-2-de-la-democracia/>

Brunner, J. J. (2015b). "Crisis de confianza: ¿qué salidas hay y hacia dónde?". *El Líbero*. <http://ellibero.cl/opinion/crisis-de-confianza-que-salidas-hay-y-hacia-donde/>

Cox, L. & González, R. (2016a). "Cambios en la participación electoral tras la inscripción automática y el voto voluntario". CEP, Propuestas de Política Pública n° 14: http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160505/asocfile/20160505172224/dpp_014_marzo2016_lcox_rgonzalez.pdf

Cox, L. & González, R. (2016b). "Elecciones municipales en frío. Criterios para dimensionar la participación y los resultados electorales de las elecciones 2016". CEP, Puntos de Referencia n° 441: https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20161013/asocfile/20161013095846/pder441_lcox_rgonzalez.pdf

Dalton, R. J. (2000). "Value Change and Democracy". En *"Disaffected Democracies", What's Troubling the Trilateral Countries?* Editado por Pharr, S. J. & Putnam, R. D. Princeton: Princeton University Press.

Della Porta, D. (2000). "Social Capital, Beliefs in Government, and Political Corruption". En *"Disaffected Democracies, What's Troubling the Trilateral Countries?"* Editado por Pharr, S. J. & Putnam, R. D. Princeton: Princeton University Press.

Holbrook, T. M. & Weinschenk, A. C. (2014). "Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections", *"Political Research Quarterly"* 67:42-55.

Huneus, C. & Maldonado, L. (2003). "Demócratas y nostálgicos del antiguo régimen. Los apoyos a la democracia en Chile". *"Revista Española de Investigaciones Sociológicas"* 10 (3): 9-50.

Inglehart, R. (1997). *"Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies"* (Vol. 19). Princeton: Princeton University Press.

Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *"Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence"*. Cambridge: Cambridge University Press.

Newton, K. & Pippa, N. (2000). "Confidence in Public Institutions: Faith, Culture or Performance?" En *"Disaffected Democracies, What's Troubling the Trilateral Countries?"* Editado por Pharr, S. J. & Putnam, R. D. Princeton: Princeton University Press.

Norris, P. (2011). *"Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited"*. New York: Cambridge University Press.

Pharr, S. J. "Officials' Misconduct and Public Distrust: Japan and the Trilateral Democracies". En *Disaffected Democracies, What's Troubling the Trilateral Countries?* Editado por Pharr, S. J. & Putnam, R. D. Princeton: Princeton University Press.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2012). *Desarrollo Humano en Chile: Bienestar Subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. Santiago: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2014). *Auditoría a la democracia: Más y mejor democracia para un Chile inclusivo*. Santiago: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2015). *Desarrollo Humano en Chile: Los tiempos de la politización*. Santiago: PNUD.

Putnam, R. D., Pharr, S. J & Dalton, R. J. (2000). "Introduction: What's Troubling the Trilateral Democracies?" En *Disaffected Democracies, What's Troubling the Trilateral Countries?* Editado por Pharr, S. J. & Putnam, R. D. Princeton: Princeton University Press.

Soto, F. (2013). *El desafío de la participación: referendo e iniciativa popular en América Latina y Europa*. Santiago: LOM Ediciones.

Valenzuela, E. (2014). "La paradoja de la confianza". En Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark 2013 "Una Mirada al alma de Chile". Temas de la agenda pública Año 9, N° 66. Centro de Políticas Públicas UC.

van Biezen, Ingrid, Peter Mair & Thomas Poguntke. 2012. "Going, going... gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe", *European Journal of Political Research*, 51(1): 24-56.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no hubiese sido posible sin la colaboración de muchas personas a las que hoy, como Coordinador del Informe, quisiera agradecer.

A Isabel Aninat, Vittorio Corbo, Bernardo Mackenna y Estéfano Rubio por hacer espacio en sus ocupadas agendas para participar de este ambicioso proyecto que, por ser el primero en su tipo, fue tomando forma durante el camino y que, por lo mismo, tomó más tiempo en concretarse del originalmente anticipado.

A Harald Beyer y a Loreto Cox por sus excelentes y detallados comentarios a versiones preliminares de cada uno de los capítulos que componen este Informe. Sin lugar a dudas, sus reflexiones contribuyeron a elevar la rigurosidad del análisis expuesto en este texto.

A Magdalena Browne, Juan Carlos Castillo y Nicolás De la Cerda (Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile) por sus comentarios a una versión preliminar del trabajo sobre las tensiones entre la satisfacción con la vida propia y del resto de la población.

A Jon Miller (Universidad de Michigan), Jonathan Kelley y Mariah Evans (Universidad de Reno-Nevada), y Krzysztof Zagorski (Universidad de Kozminski, Varsovia) por sus valiosos comentarios a una ponencia titulada “It’s not Me, It’s the Rest of Us: Bridging the Gap Between Perceptions of the Personal and Collective Situation”, realizada en el LXIX Congreso de la Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública (WAPOR) en Austin-Texas, Estados Unidos, en que se presentaron hallazgos preliminares sobre las diferencias entre los juicios acerca de la vida propia y del colectivo.

Al equipo de investigadores del CEP por sus comentarios efectuados en el marco de un almuerzo de presentación de los hallazgos preliminares.

A Alder Comunicaciones por su excelente trabajo en el diseño y diagramación del texto, por la capacidad de adaptación a los cambios en el enfoque utilizado en este Informe y por la paciencia con las constantes modificaciones.

A Bernardita del Solar por tratar de reducir el carácter técnico del texto, de modo que también pueda ser leído por quienes no tienen instrucción académica en estadística, sociología y ciencia política. Si ello no se logró en varios apartados de este Informe se debió a la tozudez de quien escribe estas palabras.

A Andrea Herrera por su notable trabajo en la revisión del diseño y diagramación del texto, selección de frases destacadas y por su permanente colaboración, perseverancia y entusiasmo.

A Ernesto Ayala por sus comentarios acerca del título de la serie y de este Informe en particular.

Por último, todos los errores y omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores de cada capítulo. En tanto, los errores y omisiones asociados a la selección de temas de este texto son de exclusiva responsabilidad del Coordinador de este Informe.

Ricardo González T.
Coordinador Área de Opinión Pública CEP

